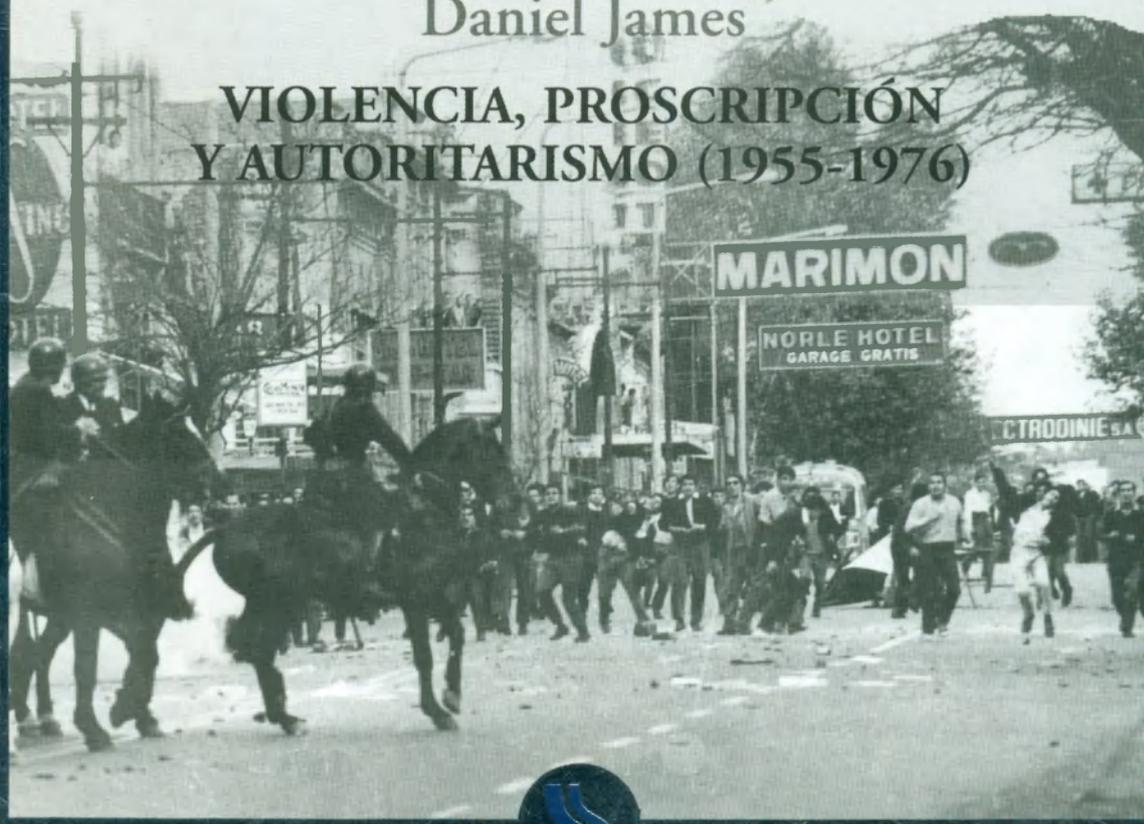


NUEVA HISTORIA ARGENTINA

DIRECCIÓN DE TOMO

Daniel James

VIOLENCIA, PROSCRIPCIÓN
Y AUTORITARISMO (1955-1976)



Editorial Sudamericana

Proyecto editorial: Federico Polotto

Coordinación general de la obra: Juan Suriano

Asesor general: Enrique Tandeter

Investigación iconográfica: Graciela García Romero

Diseño de colección: Isabel Rodríguez

AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN Y AUTORIZACIÓN
(1976-1977)



NUEVA HISTORIA ARGENTINA

TOMO 9

VIOLENCIA, PROSCRIPCIÓN
Y AUTORITARISMO
(1955-1976)

Director de tomo: Daniel James

EDITORIAL SUDAMERICANA
BUENOS AIRES

James, Daniel

Violencia, proscripción y autoritarismo : 1955-1976. - 3ª ed. -
Buenos Aires : Sudamericana, 2007.
448 p. ; 24x17 cm. - (Nueva historia argentina; 9)

ISBN 950-07-2344-1

1. Historia Política Argentina I. Título
CDD 320.982

PRIMERA EDICIÓN

Junio de 2003

TERCERA EDICIÓN

Agosto de 2007

Todos los derechos reservados.

Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en,
o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma
ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico,
por fotocopia o cualquier otro, sin permiso previo por escrito
de la editorial.

IMPRESO EN LA ARGENTINA

*Queda hecho el depósito
que previene la ley 11.723.*

© 2003, Editorial Sudamericana S.A.®,
Humberto I 531, Buenos Aires.

ISBN 10: 950-07-2344-1

ISBN 13: 978-950-07-2344-2

ISBN O.C.: 950-07-1385-3

www.sudamericanalibros.com.ar

COLABORADORES

Ricardo Aroskind
Universidad de Buenos Aires

Javier Auyero
State University of New York at Stony Brook

Mónica B. Gordillo
CONICET - Universidad Nacional de Córdoba

Mark Alan Healey
University of Mississippi

Rodrigo Hobert
Universidad de Buenos Aires

Daniel James
Indiana University

Sergio A. Pujol
CONICET - Universidad Nacional de La Plata

Lucas Rubinich
Universidad de Buenos Aires

Maristella Svampa
Universidad Nacional de General Sarmiento

César Teach
CONICET - Universidad Nacional de Córdoba

ÍNDICE

<i>Capítulo I. Golpes, proscripciones y partidos políticos</i> por César Teach	17
<i>Capítulo II. El país del desarrollo posible</i> por Ricardo Aroskind	63
<i>Capítulo III. Sindicatos, burocratas y movilización</i> por Daniel James	117
<i>Capítulo IV. El interior en disputa: proyectos de desarrollo y movimientos de protesta en las regiones extrapampeanas</i> por Mark Alan Healey	169
<i>Capítulo V. "¿Y esto es Buenos Aires?" Los contrastes del proceso de urbanización</i> por Javier Auyero y Rodrigo Hobert	213
<i>Capítulo VI. La modernización cultural y la incorpación de la sociología</i> por Lucas Rubiniich	245
<i>Capítulo VII. Rebeldes y modernos. Una cultura de los jóvenes</i> por Sergio A. Pujol	281
<i>Capítulo VIII. Protesta, rebelión y movilización: de la resistencia a la lucha armada, 1955-1973</i> por Mónica B. Gordillo	329
<i>Capítulo IX. El populismo imposible y sus actores, 1973-1976</i> por Maristella Svampa	381

INTRODUCCIÓN

Este volumen cubre el período que va desde la caída del gobierno de Juan Domingo Perón en 1955 hasta el golpe militar que puso a fin al tercer gobierno peronista en marzo de 1976. Durante estos años de *violencia, proscripción y autoritarismo*, la historia argentina fue atravesada por diversos problemas que se entrecruzaron permanentemente. En el nivel económico fue visible la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo que intentó superar los límites del modelo populista. En el plano político, la meta principal fue la instauración de un régimen democrático que se basó hasta 1973 en la exclusión y marginación del peronismo. En lo social, el período se caracterizó por la presencia de varios elementos, tales como: el aumento de la población de las grandes ciudades, particularmente de Buenos Aires, como consecuencia de las corrientes migratorias internas y de los países limítrofes, y el creciente aumento de la conflictividad social tanto en la zona litoral como en distintas provincias del interior del país. En el plano cultural, el dato más relevante fue la emergencia de una cultura juvenil que más allá de la formación de nuevos gustos en la moda, la música y el cine estuvo marcada por una fuerte impronta de rebelión.

Los capítulos de este volumen se dedican a explorar todas estas dimensiones enfatizando aquellos elementos relacionados con las movilizaciones obreras y estudiantiles, con el surgimiento de nuevas formas de protesta y de prácticas políticas y con la aparición de nuevos actores políticos y sociales.

El libro se inicia con el análisis de la situación política a partir del golpe militar de 1955 y el impacto de los varios intentos por construir un sistema democrático y representativo con un régimen de partidos políticos sin la participación del peronismo. La Argentina permaneció desde entonces en un callejón sin salida donde se alternaron elecciones cuyos resultados eran inaceptables para una parte importante de la sociedad y la reiteración de golpes militares que buscaban restablecer un orden que se suponía amenazado. Este juego de imposible resolución, donde se alternaban golpes militares y gobiernos civiles ilegítimos, no sólo hizo que los partidos políticos fue-

ran perdiendo legitimidad; también implicó la decadencia de la noción de democracia y favoreció el surgimiento y la consolidación de la violencia como forma de acción política. Esta pérdida de valor de la democracia se extendió al conjunto de la sociedad y se convirtió en la base de las confrontaciones políticas de todo el período.

Las dificultades políticas no fueron las únicas. En el plano económico hubo varios intentos de establecer las bases de una política fundada en los nuevos parámetros del sistema económico internacional: el ingreso de capital extranjero y el desarrollo industrial relacionado con los nuevos avances tecnológicos y, al mismo tiempo, la reorientación de los vínculos entre capital y trabajo produciendo una nueva distribución de la renta nacional. Estas nuevas orientaciones económicas estuvieron dirigidas e impulsadas por el Estado nacional, que desempeñó un papel importante en la promoción de las actividades económicas en las provincias. Fue en esta época cuando las nociones de “economías regionales”, “promoción industrial” y “desarrollo regional” cobraron fuerza.

Las tensiones generadas por los intentos de promover cambios en el modelo económico, en la distribución del ingreso y en los desarrollos regionales dieron lugar al surgimiento de nuevos actores sociales, que respondieron acomodándose a las nuevas situaciones o resistiendo a veces de manera violenta.

En este marco de acomodación y resistencia, los sindicatos de obreros industriales continuaron ejerciendo un papel importante una vez fracasado el intento inicial de desperonizar los sindicatos. Los cambios operados en la industria favorecieron el surgimiento de nuevos sectores dentro de la clase trabajadora que protagonizaron conflictos que superaron los marcos de la protesta obrera tradicional. En el interior del país, particularmente en Córdoba, las manifestaciones obreras se convirtieron en protesta social involucrando a otros sectores de la sociedad como estudiantes, empleados y vecinos así como a las instituciones de la sociedad civil y a la Iglesia. Las transformaciones de las economías regionales tradicionales, en el caso tucumano, hicieron visible la complicada situación de los productores cañeros y de los obreros de los ingenios azucareros, y, en el sur del territorio, la construcción de una represa como El Chocón condensó bastante bien las tensiones entre la construc-

ción de un imaginario sobre la modernización, las realidades asociadas con la injusticia social y el autoritarismo político.

No sólo los actores políticos y sociales urbanos estuvieron involucrados en esta puja de tensiones. En las áreas rurales, las ligas agrarias hicieron más visible la precaria situación socioeconómica de amplias capas de la población de provincias como Chaco y Corrientes.

Las formas que adquirió el conflicto implicaron cambios en las posturas de los sindicatos y de los dirigentes sindicales. Estos últimos se encontraron en una posición en la cual, por un lado, tenían que negociar con los empresarios y el Estado las condiciones de trabajo de sus afiliados y, por otro, como representantes efectivos del peronismo defender los intereses políticos del movimiento peronista frente a otros factores de poder. Esta situación les dio una dosis muy importante de influencia y poder, pero al mismo tiempo fue minando su relación con las bases. El poder sindical quedó prisionero de un juego que, en el largo plazo, no le dio los resultados esperados y lo dejó vulnerable a los opositores dentro del movimiento peronista y del movimiento obrero.

Uno de los hilos principales que subyacen en los capítulos del libro es la idea de que de esta etapa de la historia argentina depende la noción misma de la modernidad, con todas sus implicancias, y también el debate sobre los contenidos y criterios necesarios para organizar una nación moderna. En general el período fue analizado desde una óptica donde predominó el examen de las variables económicas. Sin embargo, para entender mejor el proceso resulta más fructífero desplazar el foco desde la economía hacia la política y la cultura. Desde la perspectiva que privilegia lo económico, el cuadro estadístico revela que la Argentina había alcanzado adecuados niveles de desarrollo en comparación con otros países latinoamericanos. Incluso, en un área tan sensible como la de los niveles salariales, es posible observar que la caída de la participación de los salarios en el producto bruto interno (PBI) es notable, pero no dramática. Entonces lo que llama la atención es que el nivel del conflicto político y social va mucho más allá de lo esperado y, por eso, en este volumen se privilegian las zonas de tensión que articulan el conflicto político, social y cultural.

En el campo de la cultura se manifiestan dos líneas clara-

mente definidas que se complementan y tensionan entre sí y tienen un contenido específico de clase pues están asociadas con la cultura de la clase media principalmente. Es imposible referirse a las décadas del sesenta y setenta sin hacer referencia a una *cultura juvenil*, influida crecientemente por los parámetros que se definen en el campo internacional. Los nuevos códigos sexuales generaron cambios en las relaciones entre los géneros. La música difundió nuevos temas, ritmos y canciones que entraron muchas veces en colisión con las tradiciones musicales autóctonas. Nuevos códigos visuales dieron impulso a la producción cinematográfica, que adquirió mayor presencia en el orden nacional e internacional. Durante toda la época fue adquiriendo forma una cultura masificada y comercializada en la que los medios de comunicación como el cine, la televisión, la prensa, las revistas de moda y de opinión, así como las compañías discográficas internacionales que se desarrollaron y consolidaron por estos años, desempeñaron un papel importante en las transformaciones de las normas y los estilos de vida.

La proyección de las expresiones culturales y políticas internacionales dio paso a la formación de nuevos modelos de acción política. El impacto de la Revolución Cubana y la extensión de los procesos de liberación nacional en diferentes partes del mundo abrieron un espacio para la conformación de grupos que reivindicaron la lucha armada. Libros, revistas, folletos y películas difundieron nociones tales como “liberación nacional”, “guerra de guerrillas”, “lucha armada” y “hombre nuevo”.

Lo más notable en este proceso fue el peso de la juventud, pues fue en este espacio generacional donde se amalgamaron ambas culturas. Fueron los jóvenes los que adoptaron los nuevos estilos, códigos y nociones y conformaron una *cultura de la rebelión* que fue más gestual y simbólica que ideológica.

Las transformaciones estuvieron presentes en toda la sociedad argentina pero fue en el ámbito de la universidad donde los cambios se experimentaron con mayor intensidad. En la universidad la cultura de la rebelión no era sólo gestual y simbólica sino que estaba más claramente asociada a lo político-ideológico. La universidad se convirtió en un campo de batallas por las ideas y ello impactó sobre el desarrollo de las disciplinas, de las que la sociología es el ejemplo paradigmático.

Las tensiones y las ilusiones adquirieron mayor intensidad durante el período 1973-1976. Los diferentes actores políticos y sociales pudieron imaginar que era posible hacer realidad los sueños de transformación y resolver las contradicciones existentes en la sociedad y en sus propios grupos de pertenencia. Juan Domingo Perón, el líder exiliado en España, impulsó esos deseos de transformación, buscó una salida para las tensiones acumuladas y legitimó las nuevas formas de acción política. En el exilio madrileño, Perón no imaginó la magnitud de las dificultades y cuando regresó a la Argentina las contradicciones estallaron de diversas formas. Los escollos para resolver los conflictos se multiplicaron y prepararon el terreno para un nuevo golpe militar.

Aunque el título de este volumen pareciera sugerirlo, el período no fue sólo de *violencia, proscripción y autoritarismo*, fue también una época de sueños e ideales. En esos años, los actores políticos y sociales estaban intentando construir un país moderno y desarrollado, aun inmersos en conflictos y tensiones. El tono de la época es claramente optimista desde la óptica de los protagonistas pues nada (ni nadie) anunciaba el desenlace triste y siniestro de los años por venir.

I

*Golpes, proscripciones y
partidos políticos*

por CÉSAR TCACH



duardo Lonardi, 23-9-1955.



Es difícil encontrar un período de la historia argentina al que se le hayan aplicado tantas metáforas como el iniciado en 1955 con el derrocamiento del presidente Perón. Si para sus protagonistas y las generaciones que los precedieron fue una “revolución libertadora” o “fusiladora”, según el cristal con el que se miraba, para los estudiosos que intentaron comprenderla se abrió un nuevo período histórico que fue descrito en términos de “semidemocracia” por la proscripción del peronismo, “parlamentarismo negro” por el ejercicio de la política fuera de los canales institucionales, “empate” porque cada uno de los actores tenía capacidad para bloquear los proyectos de sus adversarios pero era incapaz de realizar los suyos o “juego imposible” dadas las dificultades de ganar elecciones sin contar con el voto peronista y de conservarse en el gobierno sin el apoyo del Ejército que proscribía al peronismo.

LONARDI PRESIDENTE: LA FICCIÓN NACIONALISTA

En la primavera de 1955, la oposición civil, militar y eclesiástica al gobierno peronista no podía ser más amplia. Ni los militares golpistas, ni la Iglesia Católica, ni las organizaciones corporativas burguesas estaban solas. En contraste con los golpes militares de 1930 y 1943, la revolución de septiembre de 1955 contó con el apoyo del conjunto del arco político partidario. Tras el objetivo de poner fin a la presidencia de Perón, confluyeron radicales intransigentes y unionistas, conservadores y socialistas, demócratas cristianos y grupos nacionalistas. Fue precisamente la presencia de éstos últimos lo que confirió un rasgo distintivo al primer gobierno posperonista. El nuevo presidente, general (RE) Eduardo Lonardi —quien lideró la sublevación en Córdoba—, se había levantado en armas bajo la advocación de

La construcción de la memoria

Para los cultores de la versión más virulentamente antiperonista, el carácter libertador de la revolución de septiembre de 1955 distaba de ser sólo una metáfora. Jorge Luis Borges escribía al mes siguiente para la revista Sur: “Durante los años de oprobio y de bobería, los métodos de propaganda comercial y de la littérature pour concierges fueron aplicados al gobierno de la República. Hubo así dos historias: una, de índole criminal, hecha de cárceles, torturas, prostituciones, robos, muertes e incendios; otra, de carácter escénico, hecha de necedades y fábulas para consumo de patanes”. El revés de esta percepción fue reflejada por Ernesto Sabato, quien recordaba haber seguido por radio desde una casa de Salta el desarrollo del levantamiento militar: mientras los dueños de la casa festejaban en el comedor, sus empleadas domésticas lagrimeaban silenciosamente en la cocina. Seguramente, esa misma impotencia y rabia contenida era la que se advertía en las barriadas obreras. Tras estas imágenes contrapuestas que parecían delinear dos Argentinas, subyacían los problemas centrales que harían de la inestabilidad el atributo más perdurable de la política nacional en los años venideros.

Fuentes: *Sur*, N° 237, año 1955; Ernesto Sabato, *El otro rostro del peronismo. Carta abierta a Mario Amadeo*, Buenos Aires, 1956.

la Virgen de la Merced, arengado a las tropas con el lema “Por Dios y por la Patria” y elegido como contraseña secreta un sugestivo “Dios es justo”.

El universo simbólico que acompañó su levantamiento se reflejó en la elección de muchos de sus colaboradores, caracterizados por su nacionalismo y clericalismo. A despecho de los sectores liberales que participaron en el derrocamiento de Perón, fueron designados figuras de dudosa fe democrática como el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Amadeo; el secretario de Prensa y Actividades Culturales, Juan Carlos Goyeneche (ambos habían sido tildados de nazis en el *Libro azul sobre la Argentina*, de 1946, editado por el Departamento de Estado norteamericano), y el asesor presidencial Clemente Villada Achával, identificado con lo más rancio de la derecha ultramontana cordobesa.

El anverso de la moneda fueron los nombramientos de los terratenientes Alberto Mercier —presidente de Confederaciones Rurales Argentinas—, como ministro de Agricultura, y Eduardo Busso, ex directivo de la Sociedad Rural, en la titularidad del Ministerio del Interior y Justicia. Ambos eran figuras gratas a los sectores políticos y militares liberales.

Pronto, la cuestión peronista se convirtió en el hilo conductor de los enfrentamientos que separaban a los lonardistas de sus adversarios. La raíz de la discordia apareció temprano: en su primer discurso radial, el 17 de septiembre, Lonardi anticipó que defendería los derechos de los “*hermanos trabajadores*”. Una semana más tarde, anunció ante una muchedumbre desde el mismo balcón de Plaza de Mayo que durante una dé-



General Lonardi, como presidente Nación, 1955.

cada ocupó el general Perón que no habría “*ni vencedores ni vencidos*”. Desde su punto de vista, cabía la posibilidad de reeditar —sin Perón— la vieja alianza que en 1943 había encontrado a militares nacionalistas y dirigentes sindicales. Pues, al fin de cuentas, esa fórmula, que en el pasado habría permitido construir un movimiento nacional ajeno a las influencias izquierdistas que marcaron la posguerra europea, podría evitar ahora su propio aislamiento y el de quienes, como él, eran reacios a otorgar vuelo a los partidos políticos tradicionales. Para ello era necesario legitimar la revolución de septiembre ante los ojos de los trabajadores, por lo cual Lonardi enarbó una terminología fraterna para con los vencidos, que repugnaba los fibrosos sentimientos antiperonistas de la Marina, liderada por el contraalmirante y vicepresidente de la Nación Isaac Rojas.

Más influyente que nunca desde su participación en los sucesos de septiembre, Rojas impulsó la formación de una Junta Consultiva Nacional de partidos políticos —el Partido Comunista fue excluido a priori de la misma— a efectos de contrapesar el poder de los lonardistas. En el interior del país, se formaron juntas consultivas provinciales que ayudaron a los interventores federales a ejercer su flamante autoridad respetando los equilibrios interpartidarios, sobre todo, en lo referido a la distribución de puestos ministeriales y en la administración pública. En su significado político más profundo, la creación de estos organismos suponía un reconocimiento al arco político tradicional y reflejaba el reencuentro entre los partidos políticos y las Fuerzas Armadas, cuyas relaciones se habían deteriorado tras los golpes militares de 1930 y 1943.

Las tensiones en el gabinete nacional tuvieron como epicentro el Ministerio de Trabajo y Previsión, en el que su titular, el abogado laboralista Luis Cerruti Costa, se convirtió en una pieza clave de las relaciones entre el gobierno y la CGT. Su renuencia a intervenir la central obrera y, sobre todo, su anuncio de elecciones sindicales que probablemente confirmarían el predominio peronista disiparon las esperanzas de quienes esperaban una pronta restauración de la disciplina laboral, en un contexto en que los incipientes ensayos de resistencia obrera, espontáneos e inorgánicos, tornaban dudoso el rápido restablecimiento de la autoridad patronal en las fábricas.

El general Lonardi y los sindicatos

“Ha de quedar una gran mayoría del pueblo en condiciones de participar en la vida cívica sin inconveniente alguno, a pesar de la adhesión, muchas veces obligada, que algunos prestaron al régimen depuesto. Otros han alzado su voz para protestar contra la lenidad de la política del gobierno en relación con las organizaciones obreras. Mi opinión es más categórica aún. En ningún caso dividir a la clase obrera, para entregarla con defensas debilitadas a las fluctuaciones de nuestra economía y nuestra política. La libertad sindical no es la anarquía de las organizaciones obreras ni la supresión o la desnaturalización de los órganos de derecho públicos indispensables para la integración profesional. No es posible disfrutar tranquilos de la existencia aun para los más acomodados si el cimiento social está constituido por una clase laboriosa en que se ha hecho carne la sensación de la injusticia.”

Fuente: *La Nación*, 12 de noviembre de 1955.

Otro motivo de descontento residía en la creciente influencia que ejercía Clemente Villada Achával. A fines de octubre, Lonardi lo convirtió en “secretario de asesoramiento” con rango de ministro-secretario de Estado y, por consiguiente, con facultades para presentar proyectos de decreto-ley al presidente sin pasar por los ministerios correspondientes. Pocos días después, el intento de desdoblar el Ministerio del Interior y Justicia en dos carteras fue la gota que rebasó el vaso. Implicaba ceder el Ministerio del Interior al doctor De Pablo Pardo, figura proveniente de las filas nacionalistas. Los integrantes de la Junta Consultiva Nacional renunciaron en pleno. Fue el prefacio del fin. Presionado por un grupo de oficiales del Ejército que contaban, además, con el aval de la Marina, Lonardi debió renunciar el 13 de noviembre. Culminaban, así, sesenta días en los que el escenario político se había convertido en un verdadero laboratorio de ensayo, donde distintas fórmulas trabadas en competencia dejaban al desnudo los problemas centrales que afectarían al país durante dieciocho años.

ARAMBURU: ILUSIÓN PEDAGÓGICA, REPRESIÓN E INGENIERÍA INSTITUCIONAL

La asunción del nuevo presidente, general Pedro Eugenio Aramburu —ex agregado militar en los Estados Unidos—, fue recibida con beneplácito por el conjunto del arco político. Radicales, conservadores, socialistas y demócratas cristianos coincidieron en el diagnóstico: se habían echado por tierra los intentos nacionalistas de torcer “desde adentro” el sentido democrático de la revolución de septiembre. Asimismo, la permanencia en la vicepresidencia de Isaac Rojas era percibida como un factor positivo para la transición política que se avecinaba. Ésta, empero, tenía como prerrequisito la reeducación colectiva de las masas peronistas. En otras palabras, requería la disolución de su identidad política y su reabsorción gradual por las sedicentes fuerzas democráticas. La viabilidad de esta tarea se alimentaba de una concepción del peronismo, concebido como mero fruto de un líder demagógico dotado de un eficaz aparato de propaganda.

Por cierto, la consecución de los objetivos mencionados suponía el despliegue de un conjunto de medidas que combinaban la persuasión con la represión. Desde la didáctica ilustración de hechos de corrupción y “traición a la patria” adjudicados al “tirano prófugo” por la Comisión Nacional de Investigaciones, hasta la imposición y el ejercicio de normas de exclusión. El presidente Aramburu intervino por decreto la CGT, disolvió el partido peronista, inhabilitó a sus integrantes para obtener empleos en la administración pública y proscribió de la representación gremial a quienes habían ocupado cargos sindicales a partir de 1952.

En junio de 1956, un grupo de militares retirados apoyados por civiles impulsó un levantamiento que fue encabezado por el general Juan José Valle. Intentaron ocupar, infructuosamente, la Escuela Superior de Mecánica de la Armada y se hicieron fuertes, por breve tiempo, en el Regimiento 7 de Infantería de La Plata. Asimismo, grupos civiles realizaron acciones aisladas como la toma de la radio LT2 de Rosario. El uso de la violencia política por los peronistas estaba en consonancia con las instrucciones emanadas de su líder desde el exilio. Su resultado, empero, fue trágico. El gobierno implantó la ley marcial y

fusiló a seis de los militares sublevados, entre ellos al general Valle. Dieciocho civiles fueron ejecutados en Lanús y un grupo de obreros, al parecer no vinculados de modo directo con la sublevación, en un basurero de José León Suárez. Este último episodio —conocido como “Operación Masacre”— puso al desnudo una nueva dimensión que los argentinos creían haber abandonado en el siglo XIX: la pena de muerte por razones políticas.

El contexto descrito operó como un catalizador de las tensiones internas en la Unión Cívica Radical. En rigor, la lógica que presidía su conflicto endógeno hundía sus raíces en la década peronista. Desde 1951, sabattinistas y unionistas habían coincidido en promover —a contragusto de Frondizi— la abstención electoral como línea oficial del partido. La abstención distaba de ser concebida como un mero instrumento de resistencia pasiva, sino que formaba parte de una estrategia más amplia orientada a estimular el levantamiento armado, cívico-militar contra Perón. En 1954, ambas fracciones cuestionaron la legitimidad de la elección que permitió a Frondizi convertirse en presidente del Comité Nacional. Tras la caída de Perón, la presunta tibieza de Frondizi en la lucha antiperonista era ya una cuestión de las críticas dirigidas contra él. En octubre de 1955, Sabattini le reprochaba haber creído que las soluciones serían dadas por las urnas, por la “libreta de enrolamiento” y por “radioemisiones bajo licencia de la dictadura”, en alusión a su discurso radial autorizado por Perón en julio de ese año.

La reelección de Frondizi como presidente del Comité Nacional, en marzo de 1956, precipitó los acontecimientos. Este propuso que la futura fórmula presidencial del radicalismo surgiera de una encuesta entre las figuras más representativas del Movimiento de Intransigencia y Renovación. Para enfrentar esta iniciativa, sendos congresos del radicalismo bonaerense y cordobés resolvieron propugnar una reforma de la carta orgánica partidaria para que los candidatos a presidente y vicepresidente de la República fuesen elegidos por el voto directo de los afiliados. De este modo, se consumaba una nueva alianza estratégica que confrontaba abiertamente con el sector frondizista.

Ciertamente, la naturaleza de cada procedimiento estaba en

consonancia con los fines propuestos por cada sector para las elecciones del año siguiente. La encuesta daría ganador a Frondizi, el voto directo beneficiaría al distrito más poblado y, en consecuencia, al balbinismo bonaerense. La aprobación del método de la encuesta provocó la renuncia de Ricardo Balbín como integrante de la Junta Nacional del MIR y la consolidación de su alianza con el radicalismo sabattinista, que, sumado al aporte del unionismo metropolitano, sentó las bases materiales y políticas para la ruptura de la unidad orgánica del partido.

Como era previsible, los resultados de la encuesta interna legitimaron la precandidatura de Frondizi. Cuando en noviembre se reunió en Tucumán la Convención Nacional que debía proclamar el binomio presidencial, estaba casi todo dicho. Con el apoyo de 119 delegados —el quórum era de 103— se aprobó la fórmula Frondizi-Gómez. La retirada de todas las delegaciones opositoras antes de consumarse la votación —85 conven-



El presidente Pedro Eugenio Aramburu preside la Convención Constituyente acompañado de Isaac Rojas, 2 de abril de 1957.

cionales— marcaba el epílogo de la unidad radical. Tras el verano, las siglas de UCRI (Unión Cívica Radical Intransigente) y UCRP (Unión Cívica Radical del Pueblo) bautizaron respectivamente a los frondizistas y sus adversarios.

El primer test que permitió medir la correlación de fuerzas entre los dos partidos radicales tuvo lugar en julio de 1957, con motivo de la convocatoria a elecciones constituyentes. La iniciativa gubernamental estuvo inspirada en la necesidad de construir un diseño institucional que facilitase la erradicación del “virus” peronista, por ejemplo, a través de mecanismos electorales de representación proporcional capaces de potenciar la influencia de los partidos minoritarios y fragmentar la oferta de eventuales fuerzas filoperonistas. No en vano, en lugar de aplicarse la Ley Sáenz Peña, los comicios fueron realizados con el sistema D’Hont.

La convocatoria situó a la UCRI en una difícil disyuntiva. Si optaba por competir con la UCRP en la captación del voto radical fiel, debía ser condescendiente con los sentimientos antiperonistas de ese sector del electorado. Si se inclinaba por competir con el voto en blanco ordenado por el general Perón, debía, por el contrario, aproximarse a las expectativas de los votantes peronistas. Frondizi optó por la segunda de estas alternativas, empuñando con firmeza su rechazo a la Convención Constituyente. Acompañado por la influyente revista *Qué*, dirigida por Rogelio Frigerio —su tirada superaba los 150 mil ejemplares—, articuló su campaña en torno a la contraposición pueblo-oligarquía, aseguró que se pretendía imponer una Constitución con aroma a perfumería de moda y calle Santa Fe —en alusión a la coqueta avenida de la Capital Federal— y personalizó su prédica a través de discos que exaltaban su figura. Esta personalización de la campaña implicaba una apuesta que trascendía el tema constitucional para entroncar directamente con el de su candidatura presidencial.

La convención nacional partidaria de la UCRP resolvió —merced a la alianza de balbinistas y unionistas— concurrir a las elecciones e impulsar un programa de 21 puntos de reformas, entre los que se incluían los derechos sociales, la reforma agraria y la enajenabilidad del petróleo argentino.

Ambas fracciones mantenían aceitados lazos con el gobier-

no nacional. Cabe recordar que su ministro del Interior, Carlos Alconada Aramburu, provenía del balbinismo, y que su embajador en los Estados Unidos era Mauricio Yadarola, dirigente histórico del unionismo. Los sabattinistas, en cambio —quienes no habían ahorrado críticas a las políticas económicas oficiales, a las que calificaban de pro oligárquicas y pro imperialistas—, rechazaron la iniciativa gubernamental. Al igual que los frondizistas, consideraban que el gobierno de facto carecía de facultades legítimas para promover una reforma constitucional.

En sentido opuesto del fragmentado arco político antiperonista, el 24% de los electores votó en blanco. En virtud del sistema proporcional adoptado para los comicios, la representación de la UCRI fue ligeramente superior a la de la UCRP (77 frente a 75 convencionales), a pesar de haber obtenido un número menor de votos. Por el mismo motivo, los partidos menores —como demócratas nacionales, demócratas cristianos o socialistas— se vieron sobrerrepresentados con 53 bancas. Cuando el 30 de agosto se iniciaron las deliberaciones, la bancada de la UCRI se retiró tras escuchar un fogoso discurso de Oscar Alende. Unas semanas después, ya consensuadas la anulación de la Constitución de 1949 y la introducción de un artículo que ampliaba los derechos sociales, los convencionales sabattinistas abandonaron la convención. Finalmente, el retiro de la representación conservadora —cuando estaban por tratarse las propuestas económicas y educativas de la UCRP— privó de quórum al cuerpo. El fracaso de la Convención Constituyente de 1957 reveló tanto la incapacidad de los partidos para ponerse de acuerdo en torno a las reglas que debían imperar en el período posperonista, como su impotencia para disolver la identidad peronista reflejada en el voto en blanco.

El 4 de febrero de 1958, el general Perón anunció en una conferencia de prensa realizada en la ciudad de Santo Domingo, donde se hallaba exiliado, su respaldo a la candidatura presidencial de Frondizi. El acuerdo entre ambos dirigentes fue el punto final de una serie de conversaciones que involucraron al director de la revista *Qué*, Rogelio Frigerio, y al delegado personal de Perón, John W. Cooke. En virtud de este acuerdo, Frondizi se comprometía a poner en práctica una amplia amnistía, reconocer legalmente al justicialismo y eliminar las tra-



El general Aramburu (en el centro) reunido, desde la izquierda, con Arturo Frondizi, Laureano Landaburu, Teodoro Hartung, general Arturo Ossorio Arana, Ricardo Balbín y Julio C. Krause.

bas a la consolidación de la CGT. ¿Las promesas de Frondizi eran suficiente garantía para Perón? Seguramente no, dado que era fácil prever que el levantamiento de la proscripción afectaría la estabilidad del gobierno electo. Por eso, es posible suponer que, independientemente del cumplimiento de las promesas, Perón perseguía otros dos objetivos. En primer lugar, después del pacto ya no cabía hablar de la desaparición del peronismo. Este acuerdo lo relegitimó como actor político independiente en la escena nacional. En segundo lugar, el pacto permitió a Perón reafirmar su posición de predominio en el interior del justicialismo. Así, echó por tierra las expectativas de quienes aspiraban a sucederlo, como el gobernador de Catamarca Vicente Leónidas Saadi, jefe del Partido Populista, o el antiguo abogado de los ferroviarios, Atilio Bramuglia, líder del partido Unión Popular. Si para los neoperonistas la deci-

sión era vivida como su propia bancarrota, tampoco era fácil para los combativos militantes de la resistencia peronista. Empero, la decisión del “ausente” se impuso. Pronto, las calles de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y otras ciudades aparecieron pintadas con la leyenda: “*La orden es: Frondizi el 23*”, en alusión a la fecha de los comicios. La mesa coordinadora nacional y los secretarios generales de las 62 Organizaciones llegaron a sostener en un llamativo documento que “*negar a los trabajadores el derecho a votar positivamente es retrotraerlos a la acción directa, etapa netamente superada por la organización obrera*”.

La retórica de Frondizi era *catch all* —amplia e inclusiva—: destacaba el papel de los obreros y empresarios en la modernización del capitalismo argentino, suponía una tímida actitud benevolente con respecto a la Iglesia Católica y auguraba el fin de las discriminaciones ideológicas contra la izquierda. En apariencia estaba destinado, como rezaba su propaganda, a “*veinte millones de argentinos*”. Fue eficaz: apoyado por nacionalistas y comunistas, por ateos de izquierda y católicos fervientes, el 23 de febrero su triunfo fue arrasador. Superó por más de un millón y medio de votos a su principal competidor, Ricardo Balbín. Asimismo, su partido ganó todas las gobernaciones de provincias, obteniendo una amplia mayoría en ambas cámaras del Parlamento.

FRONDIZI: INTEGRACIÓN FRUSTRADA Y PLANTEOS MILITARES

Cuando asumió la presidencia, en mayo de 1958, tenía 49 años. De aspecto profesoral, rostro enjuto y maneras delicadas, su figura fue comparada con la de un parlamentario británico. Para Arturo Jauretche, era la primera vez que un intelectual recibía el apoyo del pueblo. Para la cultura de izquierda era, al decir de David Viñas, la síntesis esperada, libros y realidad. Su acción se inspiraba en un clima de época: los dos grandes proyectos desarrollistas de América del Sur, el suyo y el del presidente brasileño Kubitschek (1956-1961), eran respuestas que se vinculaban al agotamiento de las experiencias populistas sustentadas en el Estado, el mercado interno y las economías

cerradas, que la Segunda Guerra Mundial había contribuido a sostener. En el nuevo contexto internacional, marcado por el patrón dólar y la liberalización económica —en 1956 la Argentina había adherido al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial—, la “*teoría histórica de la transición al desarrollo*”, como orgullosamente la denominaban los frondicistas, suponía la necesidad de conciliar políticas de expansión industrial a través de una capitalización originada en recursos externos con la vigencia de prácticas electorales e instituciones típicas de la democracia representativa. Si por una parte esta fórmula implicaba reconocer la importancia de los capitales extranjeros para desarrollar el país, por la otra suponía también la necesidad de una sociedad integrada en la que el proletariado y sus sindicatos tuvieran su lugar al sol.

Sus primeros cuatro meses de gobierno estuvieron marcados por una fiebre de iniciativas. Hizo aprobar en el Congreso Nacional una ley de amnistía y derogación de las inhabilitaciones gremiales, anuló el decreto que prohibía el uso de símbolos peronistas y concedió un aumento salarial del 60%. Asimismo, la ley 14.455, de asociaciones profesionales, confirmó el poderío de la CGT y el predominio peronista en los sindicatos, al estipular la negociación laboral por industria y la ausencia de minorías en la representación gremial. Como en 1945, autorizaba su control de las obras sociales. Ciertamente, estas medidas estimularon la benevolencia inicial del Consejo Coordinador y Supervisor del peronismo —organismo avalado por el líder exiliado— y de numerosos dirigentes sindicales. Para la UCRP, para los políticos de la derecha liberal antiperonista y para las Fuerzas Armadas, en cambio, se completaba el círculo que se había iniciado con el pacto: Frondizi había roto el “hilo conductor” de la Revolución Libertadora.



Rogelio Frigerio y Arturo Frondizi



Afiche callejero sobre el debate de la enseñanza "Laica o Libre", 1958.

El guiño hacia el movimiento obrero peronista fue acompañado de otro dirigido a la Iglesia Católica. Frondizi y su ministro de Educación, Luis Mac Kay, remitieron al Congreso un proyecto para legitimar y reglamentar el funcionamiento de universidades privadas. Situada a contraviento de la tradición laica de la Reforma Universitaria de 1918, la iniciativa indignó a amplios sectores de la cultura y el movimiento estudiantil. Risieri Frondizi, hermano del presidente y, a la sazón, rector de la Universidad de Buenos Aires, y académicos relevantes como el historiador

José Luis Romero no titubearon en ponerse a la cabeza de los multitudinarios actos públicos impulsados por la FUA (Federación Universitaria Argentina). Las consignas delataban el clima ideológico y político en que se inscribía el conflicto. Si *"Los curas a los templos, la escuela con Sarmiento"* reivindicaba la tradición liberal decimonónica, *"A la lata, al latero, que manden a los curas a los pozos petroleros"* aludía a la lucha de los obreros petroleros de Mendoza que protestaban contra los contratos proyectados por Frondizi. Los sectores católicos, también movilizados, replicaban: *"Laica es Laika"* en referencia a la perra que la Unión Soviética había enviado en un vuelo espacial. La aprobación parlamentaria del proyecto gubernamental tuvo para Frondizi un costo político: liquidó a las agrupaciones estudiantiles del frondizismo universitario.

La política de atracción hacia los "factores de poder" se combinaba con la necesidad de seducir a los inversores extranjeros. En este aspecto fue central la "batalla del petróleo", pomposo nombre con el que se dio a conocer la iniciativa presidencial destinada a permitir al capital extranjero la exploración y explotación de las reservas petrolíferas. Tras el explícito objetivo de alcanzar el autoabastecimiento en materia energética —el petró-

leo y sus derivados constituían el 21% del total de las importaciones argentinas—, se firmaron una serie de contratos, algunos por licitación pública y otros por negociación directa, que el comité nacional de la UCRP se apresuró en desconocer. Del mismo modo, las leyes de radicación de capitales extranjeros y de promoción industrial fueron juzgadas como excesivamente favorables a los inversores: incluían tratos preferenciales en materia impositiva, repatriación de capitales y ganancias. La justificación teórica esgrimida por sus promotores distinguía el “nacionalismo de los fines” del “nacionalismo de los medios”. Desde esta óptica, el objetivo del autoabastecimiento percibido como condición para el desarrollo de una nación industrial moderna primaba sobre los métodos utilizados para alcanzarlo. Para sus adversarios, en cambio, Frondizi sumaba un ítem más a su presunta lista de traiciones: al espíritu del '55, a la Reforma Universitaria, a la soberanía nacional...

El primer semestre de 1959 puso punto final a las expectativas de aquellos sectores que —desde el interior de la UCRI o el peronismo— se habían inclinado por fórmulas de reconciliación política e integración social. En enero, la implementación de un duro plan de estabilización económica y austeridad fue seguida de las renuncias a sus cargos de las figuras que representaban la posibilidad de contemporizar con el peronismo y el movimiento obrero: Rogelio Frigerio (asesor presidencial) y David Blejer (ministro de Trabajo). La pronta incorporación de Álvaro Alsogaray —por entonces dirigente del minúsculo Partido Cívico Independiente— al gabinete nacional, quien llegó a ejercer simultáneamente las carteras de Economía y Trabajo, no fue sino la contrapartida de la creciente dureza que el gobierno nacional comenzó a exhibir en sus relaciones con el peronismo. Con motivo de la renovación parcial de las legislaturas provinciales, el PJ fue excluido de la arena electoral, aun en aquellas provincias —como Mendoza, San Luis o Corrientes— en las que se le había reconocido personería jurídica. El 29 de mayo, el allanamiento efectuado por la Policía Federal en la sede del Consejo Coordinador partidario —en el preciso momento en que se disponía a celebrar una conferencia de prensa— fue el detonante de la ruptura final. El 11 de junio, Perón denunció que Frondizi había traicionado el pacto preelectoral.

El plan de estabilización adoptado por el gobierno nacional —reducción del gasto público, liberación de precios, limitación de los aumentos salariales— profundizó en lo inmediato la brecha recesiva. En este marco, la protesta sindical se desarrolló en condiciones desfavorables. Al temor al desempleo se sumó la militarización de los conflictos, cuya imagen más dramática fue dibujada por las tropas y tanques del Ejército que, en enero de 1959, pusieron fin a la ocupación obrera del frigorífico Lisandro de la Torre. El recrudecimiento de las huelgas y el sabotaje como instrumento de resistencia obrera tuvieron como contrapartida una participación cada vez más franca de las Fuerzas Armadas en la represión. Las huelgas fueron declaradas ilegales y el Partido Comunista fue proscrito. El plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado) permitió al gobierno de Frondizi encarcelar a millares de personas, acusadas de ser izquierdistas o pertenecer a la resistencia peronista. Cabe aclarar, empero, que Frondizi no fue el inventor del plan CONINTES. Éste se instrumentó a partir de la Ley de Organización de la Nación para Tiempos de Guerra (ley 13.234), que el 12 de agosto de 1948 la Cámara de Diputados de la Nación aprobó en alrededor de cinco minutos, sin despacho de comisión ni debate previo. Esta norma otorgaba facultades judiciales al Poder Ejecutivo Nacional y permitía la participación de las Fuerzas Armadas en la represión interna. Había sido aplicada por primera vez en 1951, a raíz de la huelga de los obreros ferroviarios.

Si en sus orígenes la instalación de la idea de “guerra” en las FF.AA. parecía reducirse a un eco del conflicto Este-Oeste (“Guerra Fría”), tras la caída de Perón fue marcada por la impronta específica de la coyuntura histórica argentina: la lucha contra el “*tirano prófugo*” y sus seguidores fue homologada a la lucha contra el comunismo. El libro que el coronel Osiris Villegas comenzó a escribir en 1959 —*Guerra revolucionaria comunista*, publicado luego por la Biblioteca del Círculo Militar Argentino— ilustraba este modo de concebir la realidad argentina: su lista de enemigos incluía bibliotecas barriales, cooperativas, grupos de teatro y revistas literarias.

Esta visión bélica de la política alimentó, durante el período de Frondizi, una fórmula reiterativa y sistemática de presión militar: el “planteo”. Esta modalidad de intervencionismo mi-

litar limitó la autonomía de Frondizi para elegir a sus propios funcionarios, particularmente, en el área de la Secretaría de Guerra. Es necesario aclarar que, por entonces, el gabinete nacional contaba con tres secretarios militares —uno por cada arma— que tenían rango ministerial y, por consiguiente, participaban de sus reuniones en calidad de secretarios de Estado.

El precio de la politización militar —hubo 32 “planteos” entre 1958 y 1962— fue su propio fraccionamiento. Por una parte, se comenzó a percibir que las carreras profesionales de los militares dependían crecientemente de los vaivenes políticos que involucraban a sus cúpulas. Por otra parte, se hizo evidente la contraposición entre dos grandes líneas de opinión internas. Una, conocida pronto como “legalista”, consideraba que las presiones militares eran legítimas pero debían tener un límite, a saber, el del mantenimiento de la legalidad constitucional y el gobierno electo. La otra, acentuadamente antiintegracionista, era proclive a socavar la estabilidad del gobierno y

El ejército contra la “antipatria”

“El 16 de junio de 1959 —unos días después de las declaraciones de Perón que denunciaban la traición de Frondizi y en coincidencia con el cuarto aniversario del bombardeo a Plaza de Mayo— la Guarnición Militar Córdoba exigió a través de un radiograma enviado al Estado Mayor del Ejército la investigación del pacto preelectoral Perón-Frondizi y la remoción del subsecretario de Guerra, coronel Reimúndez, sospechado por sus presuntos contactos con dirigentes sindicales peronistas. El general Arturo Ossorio Arana, figura mítica de la revolución de septiembre, sostuvo en la proclama que estaba en marcha una conspiración promovida por peronistas y comunistas, ‘dos facciones de infames traidores a la patria’. Asimismo, acusaba al presidente de la Nación por ‘el entronizamiento de la mentira como instrumento de gobierno, los pactos inconfesables (...) los reiterados intentos por desorganizar a las Fuerzas Armadas, el agio y la corrupción generalizados’. Exigía también el alejamiento de todos los funcionarios de inclinación ‘marxista, comunista o peronista’.”

Fuente: Diario Córdoba, 23 de junio de 1959.

para ello no renunciaba a las confluencias con los sectores civiles que se distinguían por su furioso antiperonismo.

El significado político de los planteos militares suponía también una seria advertencia para los gobiernos provinciales que continuaban empeñados en políticas integracionistas, especialmente, los de Oscar Alende en Buenos Aires, Celestino Gelsi en Tucumán y Arturo Zanichelli en Córdoba. En febrero de 1960 un brutal atentado terrorista que provocó 9 muertos y más de 20 heridos —se volaron los depósitos de nafta que Shell-Mex tenía en Córdoba— sirvió como detonante. Basándose en un documento de sus servicios de inteligencia conocido como Informe CONINTES, el Ejército acusó a Zanichelli de organizar y armar a las bandas terroristas. Como corolario, la provincia fue intervenida en sus tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El episodio no sólo reafirmaba la injerencia militar en áreas de competencia civil. También ponía al desnudo las características de la UCRI. Una parte sustancial de sus cuadros directivos estaba integrada a la gestión gubernamental. En la Convención Nacional de Chascomús, celebrada en diciembre de

1960, el 60% de sus 208 delegados cumplía funciones electivas en los niveles provinciales y municipales. La débil autonomía del partido con respecto al gobierno tendió a convertirlo en un *partido de funcionarios*. Carente de un sólido aparato burocrático y colonizado en su interior por integrantes del gobierno, su acción tuvo un sesgo instrumental: era el partido del presidente de la República.

En 1961, la aparente consolidación del legalismo militar —expresado en la figura del general Rosendo Fraga como secretario de



Tía Vicenta, 1º de septiembre de 1961.

Guerra— y el buen desempeño de la UCRI en comicios legislativos o municipales realizados en Santa Fe, Catamarca, Misiones y San Luis se conjugaron para alimentar las expectativas de Frondizi acerca de la continuidad de su gestión en un escenario menos turbulento. En ese contexto favorable, Frondizi se animó a exhibir gestos de independencia. Se entrevistó con Ernesto “Che” Guevara, quien había arribado a Montevideo para representar a Cuba en una conferencia convocada por la OEA, y poco después decidió la abstención de la Argentina en la reunión de cancilleres que en Punta del Este resolvió excluir a Cuba de ese organismo. La reacción de la derecha civil y militar fue virulenta. Aún estaba fresca su amargura por la reciente victoria de Alfredo Palacios en los comicios para senador en Capital Federal, quien representaba a una coalición del Partido Socialista Argentino y el Partido Comunista, cuya campaña había estado marcada por las consignas a favor de la Cuba socialista. Finalmente, Frondizi fue obligado a romper relaciones con Cuba.

La prueba de fuego tuvo lugar en marzo de 1962. Con motivo de los comicios para elegir gobernadores y renovar parcialmente las legislaturas, el peronismo fue autorizado por el gobierno a participar en las elecciones. Reunido el Consejo Coordinador y Supervisor del peronismo, presidido por el ingeniero Iturbe, con los dirigentes de Unión Popular, el Partido Laborista, el Partido Populista y otros grupos neoperonistas, se acordó la creación del Frente Justicialista, con listas comunes y únicas. El sindicalismo —y particularmente la Unión Obrera Metalúrgica capitaneada por Augusto Timoteo Vandor— desempeñó un papel central en la campaña electoral. Los resultados electorales evidenciaron su eficacia. Con las excepciones de Córdoba, donde resultó elegido gobernador Arturo Illia; Mendoza, donde venció el Partido Demócrata, y Capital Federal, donde ganó la UCRI, el peronismo impuso su predominio en la mayor parte del país, incluso en la estratégica provincia de Buenos Aires, donde su candidato a gobernador era el dirigente textil Andrés Framini. Presionado por los militares, Frondizi fue obligado a disponer la intervención federal a las provincias en las que ganó el peronismo. El 29 de marzo fue arrestado y recluido en la isla Martín García.

UN PARÉNTESIS OSCURO: INTEGRADORES FRENTISTAS, LUCHAS INTRAMILITARES Y MACARTISMO

La asunción del presidente del Senado, José María Guido, como presidente de la Nación otorgó un marco legalmente decoroso a la caída de Frondizi. Enrolado en la UCRI, su margen de autonomía fue extremadamente reducido. Complaciente con los promotores del levantamiento militar, anuló las elecciones de marzo y dispuso el envío de interventores federales a las provincias. Una segunda nota distintiva de su interregno fue la renovada influencia de la Argentina tradicional, en términos genéricos, liberal en lo económico, conservadora en lo político y reaccionaria en lo cultural. Pese a la inestabilidad que acosó a sus ministros y secretarios, éste fue un rasgo de continuidad. Así, en la Secretaría de Agricultura se sucedieron ganaderos y terratenientes como César Urien y José Alfredo Martínez de Hoz. En el Ministerio de Economía las medidas adoptadas por Álvaro Alsogaray golpearon con dureza al sector industrial. En la administración estatal, parte de los sueldos comenzó a ser percibida en bonos, al igual que las jubilaciones. Como broche de oro, casi al final de su mandato Guido nombró a Martínez de Hoz como ministro de Economía.

La lógica que inspiraba los nombramientos en el área económica también se manifestó en otros espacios de poder como el Ministerio de Educación, en manos del ultraderechista José Mariano Astigueta; el Ministerio del Interior, donde brillaron durante su corta pero febril actividad Rodolfo Martínez y su asesor Mariano Grondona, ambos vinculados a la derecha católica, o las intervenciones federales a las provincias, donde se designaron a miembros de familias tradicionales como Carlos Ramos Mejía en Río Negro y Enrique Nores Martínez en Córdoba.

En el invierno de 1962, varios hechos se conjugaron para acentuar la incertidumbre. Un nuevo estatuto de los partidos políticos declaraba a éstos en estado de asamblea y les prohibía cualquier alusión a la “lucha de clases”. Se prohibió toda propaganda peronista y la represión cobró una nueva víctima: el joven de 22 años Felipe Vallese, delegado de la Unión Obrera Metalúrgica, torturado y asesinado por la policía de la pro-

vincia de Buenos Aires. Asimismo, el Ministerio de Trabajo anunciaba que la CGT carecía de existencia legal en virtud de no haber renovado sus autoridades de acuerdo con los estatutos.

En otros ámbitos también cundía la desazón. La impunidad fue el común denominador de los múltiples atentados contra la comunidad judía, provocados por grupos de extrema derecha como Tacuara y la Guardia Restauradora Nacionalista. Su expresión más impactante en la opinión pública fue el rapto de la estudiante Graciela Sirota, a quien le tatuaron una esvástica en uno de los senos. El jefe de la Policía Federal, capitán de navío (RE) Horacio Green, negó primero la veracidad del hecho y luego condenó las protestas de las instituciones judías por provocar alteraciones del orden público.

En este clima enrarecido, el general Federico Toranzo Montero, comandante del IV Cuerpo de Ejército (Salta), rechazó la designación del general Eduardo Señorans como secretario de Guerra. Su planteo se sustentaba en un argumento que daba cuenta de la creciente autonomía militar: la necesidad de realizar una reunión de generales para que de ella surgiera el nombre del secretario de Guerra. Guido ahora, como Frondizi antes, se inclinó por este requerimiento. Señorans presentó su renuncia y su sucesor, general Cornejo Saravia, fue un mes más tarde la figura central de los festejos que celebraban un nuevo aniversario de la Revolución Libertadora.

Era sólo el prólogo. El 19 de septiembre, el general Onganía exigió desde la Escuela de Logística de Campo de Mayo la destitución de los militares antiintegracionistas Lorio (comandante en jefe del Ejército) y Labayru (jefe de Estado Mayor). Su actitud era respaldada por el comandante de la guarnición de Campo de Mayo, general Julio Alsogaray. Las primeras declaraciones de los rebeldes señalaban su intención de evitar una dictadura militar y manifestaban su compromiso con la realización de elecciones democráticas. Largo eco en el tiempo tuvo el comunicado N° 150, redactado por el periodista Mariano Grondona y el coronel Aguirre, en el que se afirmaba que las Fuerzas Armadas no debían gobernar sino, por el contrario, estar sometidas al poder civil.

Los comunicados rebeldes identificaban, como en los juegos de guerra, a las fuerzas propias como azules y a las enemi-

gas como coloradas. A partir de entonces, los militares “legalistas” fueron identificados con el primer color y los que priorizaban la lucha antiperonista al mantenimiento de la legalidad constitucional con el segundo. Los azules contaban con el firme apoyo de los oficiales de Caballería, los tanques de Magdalena, la 4ª División de Curuzú Cuatiá y la base aérea de Morón. La mayor parte de la Infantería, en cambio, estaba con los colorados. Los integrantes de la Escuela de Tropas Aeroportadas —única unidad de paracaidistas que tenían las Fuerzas Armadas— intentaron infructuosamente saltar sobre Campo de Mayo y lograr la rendición del general Onganía. Favorecidos por la no intervención resuelta por la Marina, tras cuatro días de pequeños combates y hostigamientos mutuos, los azules lograron imponerse. Con el beneplácito de Guido, el general Onganía fue nombrado comandante en jefe del Ejército.

El fracaso de los militares más virulentamente antiperonistas dio lugar a una reorganización ministerial que permitió el retorno de Rodolfo Martínez a la titularidad del Ministerio del Interior. Éste puso en marcha un *esquema de integración subordinada del peronismo* en un frente con participación de frondizistas, demócratas cristianos, nacionalistas, conservadores e, incluso, radicales del pueblo. Desde su óptica, se trataba de una operación a dos puntas: reconocer al peronismo como parte de la realidad política nacional y ofrecer garantías de que éste no tendría en sus manos el control del gobierno siguiente. Creía también que, a partir de ese entendimiento, el general Onganía podía ser el candidato “ideal” a presidente de la República. Martínez se entrevistó con los dirigentes peronistas Iturbe y Vandor, acordando con ellos la posibilidad de canalizar los votos peronistas al frente a través de la estructura de la Unión Popular (UP), el partido originariamente fundado por Atilio Bramuglia. En marzo de 1963, pese a las reticencias de la Marina, la legalización de la UP pareció hacer viable la opción Martínez.

El radicalismo no permaneció impasible. Su comité nacional se solidarizó implícitamente con los militares derrotados y exigió que no hubiera represión en el ámbito castrense. Asimismo, las comisiones “*Arturo Illia presidente — Por la Civilidad y la Democracia Argentina*” comenzaron a multiplicarse, al igual que las comisiones de estudio sobre distintos temas



Soldados rebeldes apostados en la calle Humberto I mientras los tanques avanzan hacia la Plaza Constitución durante los sucesos de Azules y Colorados, septiembre de 1962.

como educación, salud, asuntos agrarios, etc. En rigor, su campaña comenzó temprano. El punto de partida fue un monumental homenaje —realizado en junio de 1962 en Cruz del Eje— al que asistieron cinco mil comensales. El lema del cartel central era por demás elocuente: *“Illia, el pueblo te proclama”*. Había motivos para ello, en los frustrados comicios de marzo Illia había sido elegido gobernador de Córdoba, en rigor el único lugar del país donde la UCRP ganó las elecciones.

En el verano de 1963, empero, los preparativos golpistas estaban en plena marcha. El ex vicepresidente Isaac Rojas llamó a iniciar un movimiento de recuperación de la República y comparó el intento de involucrar a peronistas “decentes” al proceso político con el antiguo pacto Perón-Frondizi. Numerosos dirigentes radicales, conservadores y socialistas se sumaron a la campaña desestabilizadora del gobierno nacional, aunque no siempre contando con el respaldo orgánico de sus comités nacionales. En marzo, cuando Zavala Ortiz denunció —a través de una carta publicada en el diario *La Nación*— que el ministro del Interior, Martínez, le propuso la candidatura de vicepresidente acompañando al general Onganía, los aprestos

golpistas se aceleraron. Cinco oficiales retirados —entre ellos el anciano general Menéndez y el almirante Rial— firmaron un acta que acordaba la creación de una junta militar de gobierno, la ley marcial, la persecución de los grupos totalitarios, la intervención de las universidades y la declaración de estado de asamblea en todos los partidos políticos. En concordancia con sus propósitos, el 2 de abril se levantaron en armas la Escuela Superior de Mecánica de la Armada y las bases navales de Mar del Plata, Río Santiago y Puerto Belgrano. En el Ejército, los rebeldes se hicieron fuertes en numerosas unidades del interior del país, desde la Artillería de Montaña en Jujuy hasta el Batallón de Ingeniería Motorizada de Río Gallegos. En Córdoba, la iniciativa de la Escuela de Tropas Aerotransportadas fue acompañada por la acción de comandos civiles, que ocuparon todas las radios de la ciudad, el correo, la municipalidad y



*El general Osiris Villegas inaugura el Museo de la Casa de Gobierno,
11-10-1963.*

la estación terminal de ómnibus. Sin embargo, los oficiales azules de Campo de Mayo lograron imponerse nuevamente con un saldo de 24 muertos y casi 100 heridos.

Como tantas otras veces en la historia, el fracaso militar no operó en desmedro de la eficacia política del levantamiento. El 10 de abril, un nuevo decreto —N° 2.713— amplió la proscripción del peronismo, extendiéndola a quienes lo elogiasen o accedieran a entrevistas con él. El general Enrique Rauch y su sucesor en el Ministerio del Interior, Osiris Villegas, profundizaron una campaña de acoso a intelectuales y artistas progresistas: la detención de Ernesto Sabato es ilustrativa al respecto.

Finalmente, los decretos-ley 4.046 y 4.784 excluyeron a la Unión Popular y sus eventuales aliados en coaliciones electorales del acceso a cargos ejecutivos tanto a nivel nacional como provincial; se les permitía, en cambio, presentarse a las candidaturas legislativas. Estas medidas pusieron punto final a las posibilidades del binomio presidencial que tenía el visto bueno de Perón, integrado por el conservador popular Vicente Solano Lima y el frondizista de Santa Fe, Carlos Sylvestre Begnis.

En las circunstancias descritas, el Partido Demócrata Cristiano, que el 1° de mayo había proclamado como candidatos al Ejecutivo nacional a Horacio Sueldo y Francisco Cerro, trocó su fórmula por la de Matera presidente, Sueldo vicepresidente. Inmediatamente, el nuevo binomio fue vetado por el gobierno. Estas resoluciones proscriptivas ordenadas por un gobierno controlado por los militares “azules” eran la negación de sus comunicados N° 150 y 200 de septiembre de 1962, que habían prometido restaurar la legalidad democrática. Sus promesas de primavera se desvanecieron antes de comenzar el invierno. El Partido Justicialista y el sindicalismo peronista respondieron, una vez más, con el voto en blanco.

ILLIA PRESIDENTE: SOLEDAD RADICAL Y OPOSICIÓN CORPORATIVA

En 1963 se empleó por primera vez en la historia electoral argentina el sistema de representación proporcional en los comicios presidenciales. Arturo Illia obtuvo cerca del 25% de los

sufragios, Oscar Alende (UCRI) superó el 16%, el ex presidente Aramburu —impulsado por UDELPA (Unión del Pueblo Argentino), un partido derechista de reciente creación— alcanzó el 7% de los votos. Se registró, asimismo, un 19% de votos en blanco. Si bien eran algunos puntos menos con respecto a las constituyentes de 1957 (24%) y a las legislativas de 1960 (25%), representaban un porcentaje lo suficientemente relevante como para recordar el carácter irresoluto de la cuestión peronista. En este marco, dado que la elección del binomio presidencial era indirecta, la UCRP debió lograr el respaldo de la democracia cristiana, el Partido Socialista Democrático y la Federación de Partidos de Centro para consagrar su fórmula en el Colegio Electoral.

El nuevo presidente, de 63 años, originario del tronco sabattinista del partido, pertenecía a la generación de antiguos militantes radicales que se había fogueado en las luchas contra el conservadurismo en la década del 30 y el peronismo después. Habiéndose iniciado como médico de los obreros ferroviarios en Cruz del Eje, recorrió gradualmente todos los escalones de la carrera partidaria. Fue senador provincial, vicegobernador de Córdoba (1940-1943), diputado nacional en la época peronista y gobernador electo en marzo de 1962.

Consecuente con la tradición yrigoyenista reacia a las políticas de alianzas, la presencia de extrapartidarios en su gobierno se redujo a puestos secundarios o cargos diplomáticos. Como contrapartida, su primer gabinete no fue sino el retrato del compromiso interno partidario. Si se incluye al presidente, se puede hablar de una *división tripartita: tres ministros balbinistas, otros tres unionistas y dos sabattinistas*. La misma lógica de compromiso y equilibrio partidario que inspiró los nombramientos en el gabinete se extendió a todos los niveles. Estos datos, lejos de ser anecdóticos, reflejaban un *modo de hacer política* donde la matriz partidaria, en contraste con el gobierno de Frondizi, era central. En un doble sentido: gobierno de partido y no de técnicos, y gobierno de un solo partido. Pero ¿hasta dónde podía ser eficaz la vieja renuencia yrigoyenista a establecer alianzas en un momento que la representación proporcional había hecho posible la presencia de una docena de partidos en el Parlamento? En este punto cabe recordar que la UCRP no contaba con mayoría ni quórum propio en la

Cámara de Diputados y que muchas de las gobernaciones provinciales estaban en manos de sus adversarios.

De acuerdo con lo postulado en su plataforma electoral, el gobierno anuló por decreto los contratos petroleros firmados por el gobierno de Frondizi con empresas extranjeras. Pese a las presiones ejercidas por el embajador norteamericano, Mc Linton, y el delegado del presidente Kennedy, Averel Harri-man, el presidente se mantuvo firme en su postura. Tampoco persuadieron a Illia los argumentos frondizistas que destacaban los grandes avances realizados desde el punto de vista del autoabastecimiento petrolero (cerca de un 95%). Su negativa a ceder se fundaba en motivos ideológicos —defensa de la soberanía nacional—, político-partidarios —cumplir lo prometido en la campaña electoral— y de orden pragmático —al darse por supuesta la viabilidad de un relanzamiento de YPF en colaboración con el ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) de Italia—.

Al desagrado generado por la iniciativa gubernamental en los inversionistas extranjeros, se sumó pronto el de los empresarios nucleados en la Unión Industrial Argentina, quienes criticaron el “intervencionismo estatal”, empeñado en poner límites al aumento del precio de los productos de la canasta familiar. En rigor, en la política económica y social del gobierno se combinaban criterios keynesianos de intervencionismo estatal, la influencia de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina), favorable a una nueva inserción de la periferia en la división internacional del trabajo, y los viejos postulados reformistas —centrados en la distribución y el mercado interno— que los radicales intransigentes habían hecho suyos desde la década del 40. En el verano de 1964, el gobierno dio una nueva señal en esa dirección. Envió al Parlamento un proyecto de ley que congelaba el precio de los medicamentos, a los que describía como “bienes sociales”. La ira de los grandes laboratorios no tardó en hacerse sentir, y al inicial desagrado norteamericano por el tema petrolero se sumó el enojo de Suiza, que al año siguiente puso obstáculos al refinanciamiento de la deuda externa argentina desde el Club de París.

En el ámbito militar, el gobierno obró con prudencia. Mantuvo al general Onganía como comandante en jefe del Ejército. Los integrantes de la Corte Suprema de Justicia permanecieron

en sus cargos. Del mismo modo, la Iglesia Católica pudo respirar tranquila. Un dato es ilustrativo: pese a la indignación de los socialistas y de sectores de la prensa liberal, se eximió a los obispos y arzobispos del juramento de acatamiento a la Constitución Nacional al asumir el gobierno de las diócesis y arquidiócesis, obligación que databa del año 1879.

A principios de 1964, la detección de un incipiente grupo guerrillero en Salta puso a prueba el apego de Illia al esquema republicano de gobierno. Los integrantes del EGP (Ejército Guerrillero del Pueblo) fueron reprimidos sin apelar al Ejército y juzgados de acuerdo con las normas del Código Penal. En rigor, no era esa minúscula juvenil armada —que años más tarde José Aricó comparó con ironía a la cinematográfica “Armada Brancalone”— sino la cuestión sindical el eslabón débil de la política gubernamental. La aprobación del “salario mínimo, vital y móvil” y de una Ley de Abastecimiento —de dudosa efectividad— distó de contentar a la CGT. Es que el gobierno quería modificar la Ley de Asociaciones Profesionales para romper el monolitismo peronista en los sindicatos.

La respuesta de éstos fue un duro plan de lucha que incluyó ocupaciones de fábricas y, en muchos casos, retención de sus directivos. Millones de trabajadores participaron en las protestas y se ocuparon más de once mil establecimientos industriales. Mientras algunos políticos como Oscar Alende y dirigentes demócratas cristianos expresaban su respaldo al plan de lucha, los sectores empresarios exigían que se respetaran el derecho de propiedad y la libertad de trabajo. Para ellos, la renuencia del gobierno a declarar el estado de sitio era una muestra de su pasividad. Por razones inversas, esta misma crítica era esgrimida por los dirigentes sindicales, quienes en el llamado “Operativo Tortugas” abandonaron cien quelonios frente a la Casa Rosada. La condena a la lentitud gubernamental, en la que todos parecían coincidir, tenía un significado más profundo. Era sinónimo de ineficacia para modernizar la Argentina. La eficacia —escribía Mariano Grondona en la revista *Primera Plana*— es el nuevo dios de la política contemporánea, y en aras de ella podría justificarse el desplazamiento de “los órganos normales de poder”.

La riada de conflictos se intensificó en los meses siguientes. En octubre, la visita del presidente francés Charles de Gaulle

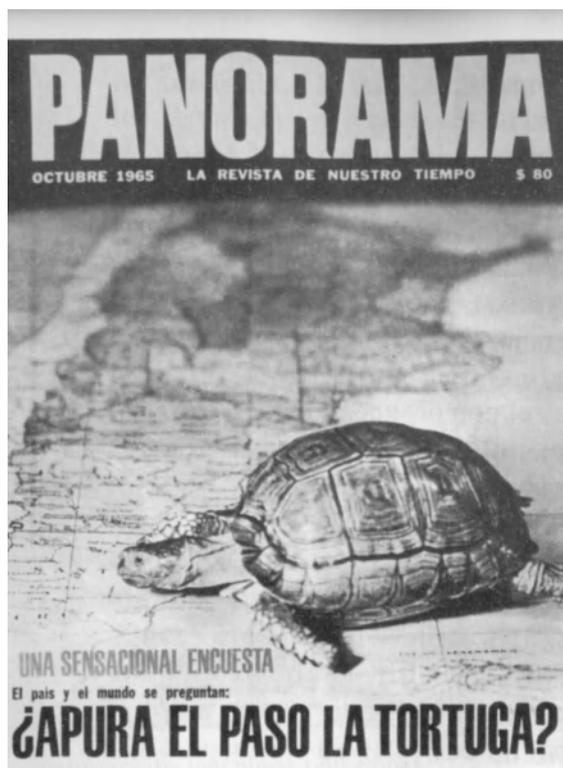
encrespó los ánimos. La movilización sindical acompañó cada uno de los pasos del visitante. El 17 de octubre, Vandor dio un paso más adelante. Desde la plaza Miserere de la Capital Federal anunció, en nombre de la Comisión Nacional Pro Retorno, el regreso de Perón y convocó a los peronistas a prepararse para ofrecer “una recepción apoteótica”.

Como era previsible, la “operación retorno” alentada por Vandor puso entre las cuerdas al gobierno radical, obligándolo a pedir a las autoridades militares brasileñas que impidieran la prosecución del vuelo de Iberia que contaba a Perón entre sus pasajeros, dado que había hecho escala en Río de Janeiro. Su retorno frustrado, al desnudar las limitaciones objetivas de Perón, amplió las expectativas de quienes —como el propio Vandor— alentaban la posibilidad de un peronismo autonomizado de su líder.

En marzo de 1965, la UCRP perdió su mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación. La oposición peronista pasó de 17 bancas —ocupadas por neoperonistas— a 52. La diferencia no era sólo cuantitativa. La composición de los diputados electos reflejaba el peso del sindicalismo vandorista. El dirigente gremial Paulino Niembro fue designado presidente del bloque peronista. A partir de entonces, los conflictos internos en el peronismo adquirieron particular virulencia. Perón intentó diluir el poder de Vandor a través de diversas iniciativas, como la creación de una Junta Coordinadora Nacional, y finalmente envió al país a su esposa, María Estela Martínez, con la finalidad de reorganizar el movimiento. Con su beneplácito, José Alonso rompió con Vandor y creó las 62 Organizaciones de Pie Junto a Perón. Pero el duelo más significativo tuvo lugar en la arena



Arturo Illia según una caricatura Landrú publicada en el Anuario Atlántida de 1965.



Tapa de Panorama, octubre de 1965.

aportaban los datos de la macroeconomía —crecimiento del PBI de un 8% en 1964-1965, aumento de las exportaciones, reducción del desempleo— ocupaban un muy discreto segundo plano en la percepción de la sociedad argentina. Asimismo, desde influyentes revistas —como *Primera Plana* y *Confirmado*— se insinuaba cada vez con mayor vigor que los partidos eran estructuras caducas e ineficientes y sus políticos fáciles presas de la demagogia en una época signada por el dinamismo, el marketing, los ejecutivos jóvenes y exitosos. Desde su óptica, la modernización exigía “superar” al Parlamento, empantanado por la retórica antigua y el dañino populismo. Esta campaña golpista no era ajena a la transición que se experimentaba en las Fuerzas Armadas. Ya no se trataba de reemplazar al peronismo por un sistema de partidos trunco como en 1955, sino de sustituir la política por la administración. Por consiguiente, el antiperonismo trocaba en un antipartidismo generalizado.

electoral. En las elecciones para elegir gobernador en Mendoza compitieron el candidato de Vandor, Alberto Serú García, y el respaldado por Perón y su mujer —popularmente conocida como “Isabelita”—, Ernesto Corvalán Nanclores. Si bien los comicios consagraron al candidato del conservador Partido Demócrata, la ventaja del postulante que respondía al líder exiliado permitió reafirmar su autoridad y mostró la vulnerabilidad electoral del vanderismo.

En el marco que se ha descrito, los auspiciosos indicadores que

El triunfo peronista en las elecciones de marzo y, poco después, la renuencia del presidente Illia a enviar tropas a la República Dominicana aceleraron los aprestos golpistas alentados por los generales Onganía y Julio Alsogaray. El primero ya había formulado en la V Conferencia de Ejércitos Americanos realizada en West Point, Nueva York, su opinión respecto de la legitimación de los golpes militares. Éstos serían legítimos en el caso de que los gobiernos electos usaran su prerrogativas constitucionales para desvirtuar los valores occidentales y cristianos. La teoría de las fronteras ideológicas y su corolario —la noción de “guerra interna”— se afianzaban cada vez más entre los militares argentinos. A la inicial influencia francesa, fruto de su experiencia en Argelia, sucedió la proyectada desde los Estados Unidos. Al respecto cabe recordar que el diputado socialista Juan Carlos Coral presentó, en marzo de 1964, un proyecto por el cual solicitó que se diera a conocer la nómina completa de los militares argentinos que se encontraban en Panamá cursando estudios de “*guerra revolucionaria*” bajo la dirección del Pentágono. El argumento que fundamentaba su pedido era premonitorio: “*No queremos erigir nuestro continente en un vasto escenario de guerra ideológica*”. En nombre de ella, empero, ese mismo año era derrocado el presidente Goulart en Brasil.

En noviembre de 1965, Onganía optó por el pase a retiro, disconforme con la designación del secretario de Guerra, general Castro Sánchez. El 29 de mayo, con motivo de la celebración del Día del Ejército, el general Pistarini fustigó la ineficacia gubernamental. La hora de la espada había sonado una vez más en la Argentina. La dilatada campaña golpista culminó el 28 de junio de 1966 con el derrocamiento de Illia por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas.

DEL ANTIPERONISMO A LA ANTIPOLÍTICA: LA DICTADURA DE ONGANÍA

El acta fundacional de la Revolución Argentina, eufemismo con el que los militares bautizaron su dictadura, no dejaba lugar a dudas. De acuerdo con ella, los comandantes en jefe de las tres Fuerzas Armadas destituyeron al presidente, al Parla-

mento, a la Corte Suprema de Justicia y disolvieron todos los partidos políticos. Al asumir la presidencia, el teniente general (RE) Juan Carlos Onganía juró *“observar fielmente los fines revolucionarios, el Estatuto de la Revolución y la Constitución de la Nación Argentina”*. La novedosa fórmula de juramento suponía, en los hechos, reemplazar la Constitución por el propio estatuto elaborado por los golpistas, cuyo artículo 1º legitimaba la designación del presidente por los militares. Entre los “fines revolucionarios” a los que aludía Onganía se destacaba en primer lugar la necesidad de *“consolidar los valores espirituales y morales”* que eran *“patrimonio de la civilización occidental y cristiana”*. Este objetivo iba acompañado de otro, caro a los deseos de los empresarios que se habían visto afectados por las luchas obreras del período precedente, cual era el de *“alcanzar adecuadas relaciones laborales”*.

Las organizaciones burguesas como la Unión Industrial, las asociaciones de bancos, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Sociedad Rural o las Confederaciones de Asociaciones

Onganía y los partidos políticos

“Los partidos políticos algún día tendrán que ser reemplazados por otras organizaciones, igualmente políticas, basadas en el ideal antes que en el prejuicio, con lealtad primaria y viva a la Nación antes que al grupo y que miren más a la Argentina que hemos de construir que la Argentina que hemos dejado atrás.”

“(…)La desaparición de los partidos políticos, del Congreso Nacional, etc., significa que el país no tolera formas vacías de contenido y que ha sacrificado las apariencias formales para recuperar la verdad íntima con sujeción a la cual aspira a vivir. Por ello ha sido la primera preocupación del gobierno de la Revolución echar las bases de una sana comunidad. La comunidad tiene su célula, en lo que al régimen político atañe, en la municipalidad, que debió constituir siempre la piedra angular de la democracia argentina, no de la democracia hueca, sino de la que nosotros queremos, rica en contenido, construida de abajo hacia arriba.”

Fuente: *La Nación*, 3 de diciembre de 1966.

Rurales de Buenos Aires y La Pampa —y en general todas las instituciones agrupadas en la ACIEL (Asociación Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres)— respaldaron de inmediato al nuevo presidente. Lo mismo hizo gran parte de la prensa, empeñada en justificar la ruptura del orden institucional en virtud del “vacío de poder”. Si los partidos políticos —con la excepción de la UCRP y los partidos de izquierda— omitieron esbozar crítica alguna a las nuevas autoridades, el sindicalismo las observó con crecientes expectativas. La imagen de un Vandor de saco y corbata, sentado en la segunda fila del Salón Blanco de la Casa Rosada en el



Caricatura de Juan Carlos Onganía publicada en Tía Vicenta.

acto de asunción de Onganía, autorizaba todas las conjeturas. Pero no estaba solo. También asistieron a la ceremonia, mezclados entre los oficiales que abarrotaban el salón, Juan José Taccone (Luz y Fuerza), José Alonso (Vestido) y el propio secretario general de la CGT, Francisco Prado.

El movimiento militar que condujo a Onganía al poder no era homogéneo. Mientras el presidente ponía de manifiesto una visión paternalista y corporativista de la política que lo emparentaba con el universo ideológico de Francisco Franco, otros, como el general Julio Alsogaray (hermano de Álvaro, flamante embajador en los Estados Unidos), se identificaban con una postura presuntamente liberal pero carente de fe en las instituciones republicanas y en las libertades individuales. Empero, tanto unos como otros tenía un común denominador: su fascinación por la técnica y la eficacia, elementos clave para la modernización autoritaria del país. Por consiguiente, los “técnicos” fueron percibidos como la encarnación misma de la racionalidad económica y operaron como “punto de im-

bricación” entre el Estado, la gran burguesía y el capital trasnacional. Formados muchos de ellos en el ámbito selecto de las universidades privadas y en la colaboración con grandes empresas, no se caracterizaban por “sentimentalismos” a la hora de imponer disciplina salarial o eliminar protección a industrias ineficientes.

Durante sus primeros meses, el nuevo gobierno se apresuró a adoptar medidas que ilustraban la racionalidad de la que se enorgullecían sus adalides. Se redujo el personal en la administración pública, en los ferrocarriles y en otras empresas estatales. Se impusieron cupos a la producción de azúcar y se intervinieron, cerrando o vendiendo, numerosos ingenios azucareros en Tucumán. Sería erróneo suponer, empero, que el Estado abandonaba su sesgo intervencionista. En rigor, el Estado aportó al sostenimiento selectivo de la empresa privada a través de diversas disposiciones —como la Ley de Rehabilitación de Empresas— que dejaban un amplio margen a la discrecionalidad.

En el plano cultural y educativo, el gobierno procedió con un enfoque quirúrgico. Intervino las universidades nacionales —catalogadas de focos de infiltración marxista— y las puso en la órbita del Ministerio del Interior. La incipiente resistencia estudiantil tuvo un saldo dramático. La policía ocupó las facultades de la UBA, reprimió con brutalidad a estudiantes y docentes —particularmente en la Facultad de Ciencias Exactas, en la conocida como “*noche de los bastones largos*”— y poco después cobró su primera víctima con el asesinato de Santiago Pampillón en Córdoba. La represión fue acompañada de un clima persecutorio que se reflejaba en la vida cotidiana. Las minifaldas, el pelo largo, el uso de pantalones en las mujeres o el besarse en una plaza fueron censurados como síntomas de la desintegración espiritual de la nación. La asfixia cultural favoreció la emigración de científicos y académicos al exterior, fenómeno que fue conocido como “*fuga de cerebros*”. Su lugar fue ocupado por sectores clericales y conservadores.

A contraviento de las expectativas iniciales, en el plano sindical el gobierno obró con dureza. En marzo de 1967, la Unión Obrera Metalúrgica, la Unión Ferroviaria y otros importantes sindicatos perdieron su personería jurídica. La disolución del escenario sobre el cual Vandor construyó su poderío —gobier-

nos débiles y adversarios políticos divididos— operó en detrimento de su capacidad para ejercitar su modalidad de acción predilecta: golpear y negociar.

Ese año, la puesta en práctica del plan del ministro de Economía Krieger Vasena —quien había sido, a la sazón, miembro del directorio de grandes empresas nacionales y transnacionales— permitió congelar los salarios y suspender las negociaciones colectivas hasta fines de 1968. Devaluó el peso en un 40%, pero compensó los efectos mediante retenciones a los exportadores. Durante su gestión los ingresos de capital privado extranjero fueron notables, pero no como inversiones directas sino en carácter de préstamos a corto plazo. En este contexto, el Estado pudo emprender obras de infraestructura de envergadura como la represa hidroeléctrica de El Chocón. Desde esta óptica, erosionar el Estado benefactor no suponía necesariamente limitar el Estado intervencionista.

Los indicadores macroeconómicos eran el retrato de una gestión exitosa —crecimiento del producto bruto nacional, descenso de la inflación, reducción del déficit fiscal y limitación del desempleo—, pero la solidez de esta imagen era socavada por una larga lista de heridos: sectores industriales pequeños y medios, pequeños comerciantes (afectados por la ley que liberaba los alquileres), trabajadores y empresarios de las economías regionales, cooperativas agrarias y de crédito y, por cierto, los obreros industriales cuyas conquistas sociales habían sido anuladas. No contribuían a despejar su desazón las directivas emanadas del ministro del Interior, Guillermo Bordaberry, cuyo alejamiento del ideario democrático era manifiesto. Junto a él, Onganía dividió su revolución en tres tiempos, el económico, el social y el político, pero éste ni siquiera alcanzaba a ser una luz al final del túnel.

En 1968, el nacimiento de la CGT de los Argentinos, liderada por el combativo dirigente gráfico Raimundo Ongaro, evidenció la predisposición de un sector importante del sindicalismo para enfrentar globalmente a la dictadura. Su posición antidictatorial estaba en sintonía con el descontento de las clases medias, cuyos sectores juveniles se izquierdizaban al son de la mítica muerte del Che Guevara en Bolivia, la Conferencia Episcopal de Medellín, el Tlatelolco mexicano y el mayo francés. Tanto el crecimiento de la izquierda —las sucesivas

rupturas de sus partidos tradicionales permitían hablar de una “crisis de crecimiento”, por ejemplo, del Partido Comunista surgiría el PCR y de un núcleo de éste las Fuerzas Argentinas de Liberación (FAL)— como el acercamiento entre el peronismo combativo y los sacerdotes del Tercer Mundo prenunciaban un ciclo de protestas tan amplio como radicalizado.

El 29 de mayo de 1969 en Córdoba la movilización de los trabajadores industriales, acompañados no sólo por estudiantes sino por los más amplios sectores medios, derrotó a la policía, ocupó la ciudad y forzó la intervención del Ejército. Para las organizaciones populares, el Cordobazo marcaba un camino: oponer a la violencia reaccionaria de los explotadores y de la dictadura la violencia revolucionaria y libertadora de los explotados (véase el capítulo VIII). El nacimiento, al año siguiente, del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) —a partir de la división del PRT en dos, El Combatiente y La Verdad—, así como el rápido desarrollo de las organizaciones armadas peronistas, entroncaban con este proceso y demostraban de modo elocuente que la dictadura había agravado los peligros que deseaba conjurar. Convertido en mito político, el Cordobazo fue un punto de inflexión en las luchas sociales. A partir de entonces, el ingenio popular dividió los paros en dos clases, el “paro activo”, cuyo ejemplo cumbre fue el Cordobazo, y el “paro matero”, en el que, en lugar de luchar —decían—, los huelguistas se quedan en casa y toman mate. La suerte de Onganía estaba echada. Su principal capital político, el orden y la eficiencia, se había incinerado en las barricadas cordobesas, pronto imitadas en otras partes del país. El asesinato de Aramburu en mayo de 1970, quien al parecer estaba negociando la búsqueda de una salida política, fue la antesala de su derrocamiento.

LEVINGSTON: EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN ARGENTINA

En junio de 1970, el general Roberto Marcelo Levingston, representante argentino en la Junta Interamericana de Defensa en Washington, fue el hombre elegido por la reconstituida junta de comandantes para ejercer la primera magistratura del

país. A diferencia de su antecesor, obstinado en despolitizar hasta los más recónditos lugares de la sociedad, abrigó la ilusión de configurar una fuerza política que fuera herencia y continuidad del régimen. En función de este interés, su acción operó en dos planos. En el económico-social, promovió medidas de sesgo nacionalista como el “compre argentino”, que obligaba a los organismos estatales a comprar productos generados en el país. El objetivo de atenuar el proceso de desnacionalización de la economía se asociaba a la intención de tutelar políticamente al empresariado nacional y apoyarse en él. Para ello se respaldó en Aldo Ferrer —técnico desarrollista—, quien instrumentó disposiciones proteccionistas como la elevación de los aranceles a la importación y medidas de promoción industrial a través de créditos orientados a las empresas nacionales.

En el orden político, logró atraer al ex gobernador de Buenos Aires Oscar Alende y al antiguo caudillo de la intransigencia radical tucumana —también gobernador de esa provincia durante la presidencia de Frondizi— Celestino Gelsi. Empero, sus actitudes descalificadoras para con los partidos tradicionales lo privaron de conseguir respaldos políticos amplios y perdurables. Obtuvo, en cambio, la enemistad de la UIA, entidad que no tardó en criticar el “estatismo” del elenco gobernante y las presuntas concesiones dadas al movimiento obrero (normalización de la CGT). En noviembre de 1970, radicales y peronistas constituyeron el frente antidictatorial La Hora del Pueblo. Su génesis marcaba un dique de contención al ensayo continuista que presumía de “superar” a los partidos tradicionales. Pero su significado trascendía su sentido coyuntural. El compromiso asumido por sus gestores, Perón y Balbín, implicaba un punto de partida para superar la escisión que había fracturado la política argentina en peronistas y antiperonistas. Suponía comenzar a dejar atrás las prácticas de exclusión recíproca que habían facilitado y propiciado el golpismo crónico.

Paralelamente, el Encuentro Nacional de los Argentinos (ENA), inspirado por el Partido Comunista, agrupó a sectores de izquierda renuentes a la lucha armada, dirigentes sindicales independientes como Agustín Tosco e incluso a algunas figuras del radicalismo. Pese al resurgir de los partidos, Levingston permaneció impertérrito en sus intenciones. Cuando al

mes siguiente dio a conocer sus “Bases para el Plan Político”, documento erizado de críticas a la “vieja política”, el repudio fue unánime. En marzo de 1971, un nuevo levantamiento obrero y popular en Córdoba —conocido como el Viborazo por el empeño de su gobernador, José Uriburu, en identificar al marxismo con una serpiente— echó por tierra con el segundo gobierno de la Revolución Argentina. Pero su efectividad no se asociaba sólo a la movilización popular. Era también el resultado de la creciente virulencia de las contradicciones internas en el seno de las FF.AA. Si conducir a la salida política era un imperativo de orden perentorio, los militares liberales creían que había llegado su hora.

LA ÚLTIMA CARTA: EL GRAN ACUERDO NACIONAL

El nuevo presidente impuesto por los militares, el general Alejandro Agustín Lanusse, tenía —en contraste con sus predecesores— aceitados lazos familiares y amistosos con el distinguido mundo de los negocios de la gran burguesía. Carente de veleidades nacionalistas, se propuso avanzar efectivamente hacia una transición política que tuviese como sustento un compromiso previo entre las FF.AA. y las diversas fuerzas políticas y sociales. Este proyecto, conocido con el nombre de Gran Acuerdo Nacional, implicaba el repudio a la subversión, el reconocimiento de la inserción de las Fuerzas Armadas en el futuro esquema institucional y, sobre todo, el acuerdo en torno a la candidatura presidencial. El primer punto implicaba la legitimación de la doctrina de la seguridad nacional en virtud del reconocimiento de la noción de “enemigo interno”, así como el alejamiento de Perón de cualquier coqueteo con los grupos guerrilleros. El segundo punto reflejaba el deseo de que los comandantes en jefe del próximo gobierno tuvieran rango de ministros de gabinete. El tercero suponía la necesidad de una renuncia del líder exiliado a su postulación presidencial. En su apuesta de máxima suponía, en cambio, la posibilidad de la propia candidatura de Lanusse.

A efectos de viabilizar el GAN, Lanusse desarrolló una política de apertura hacia la UCR a través del ministro del Interior, el radical Arturo Mor Roig. Sin embargo, la creciente presen-

El general Lanusse y la apertura política

“Será necesario modernizar la actual estructura política, para adecuarla al objetivo perseguido: garantizar el ejercicio de los derechos y libertades individuales y mantener el pluralismo político, respaldado por una activa participación de la población y su representación legítima y auténtica en el Congreso, a través de los partidos políticos.”

Fuente: *La Nación*, 8 de abril de 1970.

cia del alfonsinismo, apoyado en sectores juveniles, condicionaba su margen de maniobra. Alfonsín llegó a obtener el 42% de los votos en las elecciones internas, que se realizaron en 1972. La apertura hacia el peronismo fue implementada a través de enviados a Madrid, como el coronel Cornicelli, y de contactos con Paladino, el delegado de Perón. Empero, nada más lejos de los deseos de Perón que admitir la candidatura de aquel viejo golpista que se había rebelado contra su gobierno en 1951. La Juventud Peronista y los Montoneros, por su parte, exigían comicios “con Perón en la Patria y como candidato”.

En el bienio 1971-1972, Perón desarrolló una táctica pendular. Alentó a las organizaciones armadas peronistas, a las que llamó “formaciones especiales”, y creó con agrupaciones políticas moderadas —entre las que se contaban el Movimiento de Integración y Desarrollo que respondía a Frondizi, la democracia cristiana, los conservadores populares y los intransigentes de Alende— el FRECILINA (Frente Cívico de Liberación Nacional). Creado en febrero de 1972, fue el prefacio de la constitución, en noviembre de ese mismo año, del FREJULI (Frente Justicialista de Liberación Nacional), que a diferencia del anterior no contaba con la adhesión ni de Oscar Alende ni de los demócratas cristianos que respondían a Horacio Sueldo. Contó, en cambio, con la adhesión de la totalidad de los políticos neoperonistas de las provincias.

El 22 de agosto la credibilidad del gobierno nacional terminó de desmoronarse. La ejecución de 16 presos políticos en Trelew —en represalia por la cinematográfica fuga del penal

de Rawson de un grupo de sus compañeros, entre los que se contaban Mario Roberto Santucho y Fernando Vaca Narvaja—pareció llevar la situación a sus límites. A la noche, las explicaciones dadas por televisión a todo el país, con el uso de un pizarrón, por el militar Hermes Quijada no convencieron a nadie y enervaron por su cinismo a las organizaciones de la juventud, izquierdistas y peronistas. La consigna que comenzó a recorrer las manifestaciones populares, “*Ya van a ver, ya van a ver, cuando vengamos a los muertos de Trelew*”, era síntoma elocuente de un clima político poco propicio para las concesiones a los militares.

Favorecido por la continuidad de las luchas populares y por el accionar de las organizaciones armadas contra el gobierno militar, Perón fue renuente a establecer compromisos. En noviembre, respondió al desafío lanzado por Lanusse —poco antes éste había sostenido que Perón no volvía “*porque no le da el cuero para venir*”— y retornó al país. El 17, día de su arribo, el gobierno decretó feriado nacional. ¿Podía haber recono-

cimiento mayor a su posición de alfa y omega de la política argentina? A ese reconocimiento no escapaban los sectores representativos del capitalismo argentino, azorados por la oleada izquierdista —peronista o marxista en sus más diversas variantes— que no cesaba desde 1969. Dos días después, su encuentro con Ricardo Balbín pareció abrir un nuevo ciclo en la política nacional que estaría marcado por el respeto recíproco tanto en la transición hacia los comicios como en las futuras relaciones entre gobierno y oposición.



Regreso de Juan D. Perón a la Argentina, a su lado José Ignacio Rucci, 17-11-1972.



Alejandro Agustín Lanusse y el ministro del Interior, Arturo Mor Roig, revisan los cómputos electorales de las elecciones de 1973.

Finalmente, Perón retornó a España y designó como candidato presidencial a su delegado personal, Héctor Cámpora, con el apoyo entusiasta de los sectores juveniles, aspecto clave en un país donde más del 50% de la población no alcanzaba los 30 años. La UCR proclamó, una vez más, la candidatura de Ricardo Balbín, esta vez acompañado del cordobés Eduardo Gamond. La centroizquierdista Alianza Popular Revolucionaria (APR) postuló —con el apoyo del PC— la fórmula Alende-Sueldo, los federalistas a Francisco Manrique, quien había ganado popularidad entre los jubilados en su condición de ministro de Bienestar Social del gobierno militar. También presentaron candidatos partidos menores como Nueva Fuerza, inspirado por Álvaro Alsogaray; el Frente de Izquierda Popular, que respondía a Abelardo Ramos; las dos fracciones del socialismo —Ghioldi y Coral—, y la derecha republicana del brigadier Ezequiel Martínez. La izquierda revolucionaria, por

su parte, diluyó su peso entre el voto en blanco, el voto “programático” (que se anulaba dado que consistía en introducir un “programa” en la urna) y el voto “crítico” al FREJULI.

La ingeniería electoral diseñada para los comicios estaba destinada a facilitar la formación de coaliciones antiperonistas. La combinación de la fórmula de doble turno electoral y sistema de representación proporcional podría fraccionar a los peronistas en el primer turno y facilitar la unión de los antiperonistas en la segunda vuelta. Empero, los resultados electorales superaron las previsiones de las autoridades militares. El FREJULI obtuvo el 49,5% de los votos y, a gran distancia, la UCR sumó el 21% de las adhesiones. La contundencia del triunfo peronista, en un clima de franca movilización popular, tornó aconsejable no realizar la segunda vuelta. Las consignas de “Perón-Evita/La Patria Socialista”, “Cámpora al gobierno/Perón al poder”, retumbaban en las calles. El 25 de mayo la asunción de Cámpora, que contó con la presencia de los presidentes de Cuba, Osvaldo Dorticós, y de Chile, Salvador Allende, parecía coronar el fin de la pesadilla dictatorial. Esa noche, la multitud liberó a los presos políticos recluidos en Villa Devoto. Mientras el protagonismo popular se hacía dueño de las ciudades, las clases dominantes, la jerarquía eclesiástica y los propios militares percibían en el otrora “tirano prófugo” el último dique de contención a la oleada de radicalización política.

La reeducación cívica de los cultores del '55 y las diversas fórmulas integracionistas ensayadas durante los gobiernos de Frondizi, Guido e Illia quedaban relegadas al rincón de los recuerdos. Para los viejos militantes peronistas, culminaban dieciocho años de exilio y proscripciones; para los Montoneros, se cumplía una etapa de un camino inexorable que los habría de conducir “*con los votos al gobierno, con las armas al poder*”; y para los jóvenes militantes de la izquierda revolucionaria era la confirmación de un designio que parecía latir junto al Che, “*El presente es lucha, el futuro es nuestro*”.

BIBLIOGRAFÍA

- Altamirano, Carlos, *Frondizi*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1998.
- Cavarozzi, Marcelo, *El capitalismo político tardío y su crisis en América Latina*, Rosario, Homo Sapiens, 1996.
- Halperin Donghi, Tulio, "El frondizismo en el espejo de la historia", en *Argentina en el callejón*, Buenos Aires, Ariel, 1995.
- James, Daniel, *Resistencia e integración. El peronismo y la clase obrera, 1946-1976*, Buenos Aires, Sudamericana, 1990.
- Kvaternik, Eugenio, *Crisis sin salvataje: la crisis político-militar de 1962-63*, Buenos Aires, Ediciones del IDES, 1987.
- Mazzei, Daniel, "Periodismo y política en los años '60: Primera Plana y el golpe militar de 1966", en *Entrepasados*, N° 7, Buenos Aires, 1994.
- O'Donnell, Guillermo, *El Estado burocrático autoritario 1966-1973*, Buenos Aires, Ed. de Belgrano, 1982.
- Portantiero, Juan Carlos, "Economía y política en la crisis argentina 1958-1973", en *Revista Mexicana de Sociología*, N° 2, México, 1977.
- Potash, Robert, *El Ejército y la política en la Argentina 1962-1973*, Buenos Aires, Sudamericana, 1994.
- Pucciarelli, Alfredo (ed.), *La primacía de la política. Lanuse, Perón y la Nueva Izquierda en tiempos del GAN*, Buenos Aires, Eudeba, 1979.
- Riz, Liliana de, *La política en suspenso 1966/1976*, Buenos Aires, Paidós, 2000.
- Romero, Luis Alberto, *Breve historia contemporánea de la Argentina*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1994.
- Rouquié, Alain, *Poder militar y sociedad política en la Argentina*, vol. 2, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986.
- Sigal, Silvia, *Intelectuales y poder en Argentina. La década del sesenta*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002.
- Smulovitz, Catalina, "En busca de la fórmula perdida, 1955-1966", en *Desarrollo Económico*, vol. 31, N° 121, Buenos Aires, 1991.

———, “La eficacia como crítica y utopía. Notas sobre la caída de Illia”, en *Desarrollo Económico*, vol. 33, N° 131, Buenos Aires, 1993.

Spinelli, Estela, “La Revolución Libertadora. Proyección política. Un análisis sobre su lugar en la historiografía”, en Spinelli-Servetto-Ferrari-Closa (comp.), *La conformación de las identidades políticas en la Argentina del siglo XX*, Córdoba, Ed. Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional del Centro (Tandil), Universidad Nacional de Mar del Plata, 2000.

———, “Radicalismo y Fuerzas Armadas (1962-1963). Observaciones desde Córdoba”, en *Desarrollo Económico*, vol. 40, N° 157, Buenos Aires, 2000.

Teach, César, *Amadeo Sabattini*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1999.

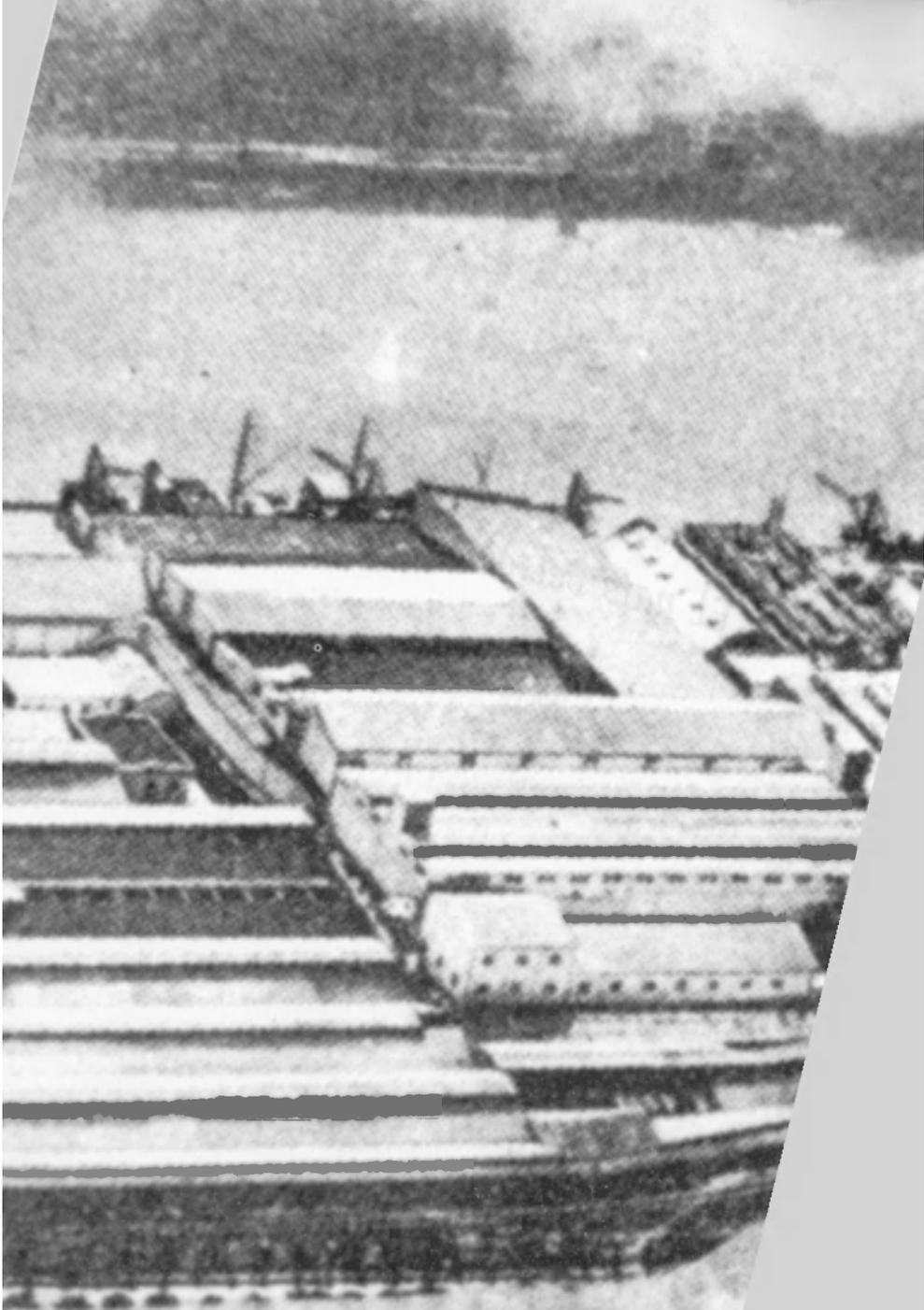
Terán, Oscar, *Nuestros años sesenta*, Buenos Aires, El Cielo por Asalto, 1993.

Torre, Juan Carlos, *Los sindicatos en el gobierno 1973-1976*, Buenos Aires, CEAL, 1983.

II

El país del desarrollo posible

por RICARDO AROSKIND





EL TRABAJOSO DESPLIEGUE DE UNA ECONOMÍA SEMIINDUSTRIAL

Las dos décadas transcurridas entre el derrocamiento del primer gobierno peronista y el derrocamiento del segundo fueron sumamente intensas y complejas. La Argentina continuó un proceso de crecimiento y modernización, surcado por numerosos conflictos económicos, sociales y políticos. Una considerable inestabilidad institucional truncó diversos proyectos cuya meta era acelerar la marcha de la economía hacia el desarrollo.

Mientras el país continuaba y profundizaba su industrialización, la gran mayoría de la población se concentraba en las ciudades, tenía acceso a los servicios de salud y educación y estaba integrada formal o informalmente al circuito de producción de bienes y servicios. La Argentina mostraba niveles considerablemente más elevados que el resto de América Latina en los indicadores de salud, educación, mortalidad infantil, esperanza de vida, y había acumulado un impor-

tante acervo de capacidades científicas, técnicas y culturales. Su tasa de crecimiento demográfico se acercaba más a la de los países industrializados que a los de su región.

El contexto económico internacional de posguerra era optimista y expansivo, las corporaciones multinacionales —especialmente norteamericanas— se extendían hacia la periferia, acelerando la interrelación entre las economías. En el mundo capitalista existía un amplio consenso en torno a las bondades de la economía mixta, la utilización de aranceles altos —aunque decrecientes—, el establecimiento de controles cambiarios y monetarios, la construcción de empresas estatales “estratégicas”, la regulación de los mercados en función de prioridades políticas y las formas intermedias de planificación económica.

La Guerra Fría, en Occidente, creaba tentaciones autoritarias orientadas a la contención del “comunismo” en los países atrasados. Pero estas tendencias no estaban desvinculadas de cierta preocupación por elevar los estándares de vida de las masas pauperizadas, especialmente campesinas. Eran los tiempos en los que un organismo internacional poco afecto al populismo, como el Banco Mundial, reclamaba reformas agrarias en América Latina, que eran ignoradas por las clases dirigentes latinoamericanas.

La confianza en el progreso y en la capacidad de las políticas públicas para lograr los cambios deseados recorría casi todo el espectro ideológico. Las mayores tasas de crecimiento en la periferia con relación al mundo desarrollado daban pie a expectativas en cuanto a “cerrar la brecha” que separaba a los países “en vías de desarrollo” de aquellos que ya lo habían logrado.

Se perfilaba una nueva división del trabajo, en la cual los países periféricos más avanzados incorporarían actividades industriales maduras, en tanto los países avanzados continuarían profundizando sus capacidades científico-tecnológicas y su presencia en los mercados de productos diferenciados. La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) lanzada en 1961 fue un intento de profundizar la integración regional con discretos resultados, ya que un nacionalismo localista impregnaba la visión de las dirigencias latinoamericanas.

A pesar de las mejoras logradas en la Argentina en los nive-

les de ingresos y en la integración social, el crecimiento económico parecía no producirse a la velocidad deseada, según los parámetros de la época. La distribución de la riqueza creada era menos inequitativa que en el entorno latinoamericano, pero no satisfacía las expectativas de sectores del empresariado y de los trabajadores por razones contrapuestas. A pesar del malestar, el ascenso social, considerado una característica “natural” de la economía argentina, continuó verificándose a lo largo de estos veinte años.

Cuadro 1: Tasa de crecimiento del consumo y la inversión

Año	Consumo	Inversión
1956	1,4	-5,8
1957	4,6	12,6
1958	5,6	9,6
1959	-7,4	-11,3
1960	3,2	47,3
1961	10,0	9,6
1962	-4,2	-8,0
1963	-2,0	-18,0
1964	10,2	26,0
1965	8,2	7,3
1966	0,8	-7,2
1967	2,5	4,5
1968	3,9	10,6
1969	6,0	21,4
1970	3,8	17,0
1971	6,9	11,1
1972	2,5	-0,6
1973	5,4	-2,3
1974	8,2	4,4
1975	1,9	-2,1

Fuente: Ricardo Ferrucci, *Política económica argentina contemporánea*.

Los sectores que impulsaban la modernización económica la entendían como una incorporación de conocimientos, bienes y formas de vida producidos en los países “más avanzados”. A pesar de que personalidades de gran prestigio señalaron las desventajas de encarar una modernización “imitativa” de los estilos de consumo de los países centrales, prevaleció en las dirigencias políticas y empresariales esa visión superficial del “progreso”. Quizás esa visión derivó en el descuido del desarrollo de capacidades tecnológicas locales y en el abandono de los esfuerzos de largo plazo para impulsarlas.

El consumo y la inversión se expandieron considerablemente durante el período, en el que pareció funcionar un círculo virtuoso en el cual ambos agregados —más allá de contingencias de momento— se potenciaban mutuamente.

Durante esos veinte años se observó una sucesión de expansiones y contracciones económicas mientras se producían cambios considerables en la estructura productiva y social. La magnitud de las transformaciones no siempre era advertida por los actores económicos, e incluso por los hacedores de política económica. Muchas políticas fracasaron por no evaluar correctamente la magnitud de las fuerzas puestas en juego a partir de decisiones técnicas o “administrativas”.

El punto de partida para la comprensión de nuestro período es la economía peronista. Así como ésta no surgió repentinamente, sino que fue largamente preparada por las transformaciones que se precipitaron en el país a partir del colapso de su inserción internacional debido a la crisis de 1930, la economía posperonista prolongó muchos de los rasgos específicos que introdujo el período 1946-1955.

Si bien se atenuaron sus características más intervencionistas y estatistas, era indudable que se habían sentado las bases para un modelo económico diferente:

- La distribución del ingreso mostró una participación de los asalariados relativamente estable, que osciló en torno al 40% del PBI.
- La participación del Estado continuó siendo decisiva en muchas áreas, aun cuando se redujo la presencia directa del mismo para incidir en la regulación de algunas variables importantes.
- El estancamiento de la producción agropecuaria continuó

siendo una grave restricción y requirió esfuerzos considerables desde el sector público para ser superado; por otra parte, el Estado, mediante diversos mecanismos cambiarios e impositivos, continuó captando recursos del sector para financiar otras prioridades de política económica.

- El retraso en materia tecnológica y de bienes de capital, acumulado desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, fue sólo parcialmente superado recurriendo a la inversión extranjera, pero continuó siendo aguda la dependencia del aprovisionamiento externo de dichos bienes.
- La industria liviana, productora de bienes de consumo durables levantada durante los '40 y '50, mostró sus limitaciones en materia de expansión (limitada al mercado interno) y obligó a ensayar pasos adicionales para reducir su dependencia de insumos y combustibles importados.
- El crecimiento del sector público como proveedor de bienes y servicios continuó prácticamente hasta el final del período.
- El funcionamiento deficitario del Estado (administración central, empresas públicas, provincias, entes autárquicos) fue una práctica aceptada, aunque se hicieron esfuerzos por racionalizar el Estado y las empresas públicas.
- En materia financiera, a pesar de diversos cambios institucionales, el sector empresarial siguió contando con crédito a tasa subsidiada y existieron escasos incentivos para el ahorro en el sistema bancario.
- La inflación, un fenómeno relativamente nuevo en los años '50, continuó siendo una característica distintiva del nuevo esquema económico y un dato con el que contaron las sucesivas administraciones.
- Las bajas tasas de desempleo, producto de la expansión económica y la industrialización, generaron integración social y capacidad de negociación gremial; en ese contexto económico propicio, el movimiento sindical mostró capacidad para defender conquistas y derechos, incidiendo indirectamente en la orientación de las políticas económicas.



Exposición de la Sociedad Rural, 1970.

UNA ESTRUCTURA PRODUCTIVA CRECIENTEMENTE SOFISTICADA

La movilización del sector agropecuario

El estancamiento de la producción del sector agropecuario se constituyó en uno de los principales problemas en los años posteriores al peronismo. La obtención de volúmenes de producción similares año tras año, sumada a la tendencia decreciente de los precios internacionales, pusieron en la mira de las sucesivas autoridades económicas al sector primario, dada la importancia de éste como fuente de divisas para la economía argentina.

Diversas corrientes de pensamiento confrontaron en torno a las soluciones para dinamizar el sector. Desde el liberalismo tradicional y desde las fracciones más poderosas de los terratenientes, se insistía en la necesidad de ofrecerle al sector un tipo de cambio elevado, que lo estimulara a ampliar su producción. Paralelamente, se proponía una reducción de impuestos y gravámenes a las exportaciones, como forma de alentar al sec-

tor “eficiente” de la economía, a costa de reducir el apoyo público al sector industrial.

En cambio, los sectores reformistas y de izquierda entendían que el estancamiento agrario se debía a la mala distribución de la tierra en latifundios, que por su extensión garantizaban altas ganancias sin obligar a sus dueños a realizar inversiones significativas. También se le imputaba al latifundio la incapacidad de absorber una mayor población dedicada a las tareas agrícolas y su escasa disposición a constituirse en un mercado que estimulara la producción industrial de maquinaria e insumos para el sector. La conclusión de este razonamiento era que debían fraccionarse las grandes propiedades mediante una reforma agraria, lo que daría lugar a numerosas unidades productivas más eficientes.

Sin embargo, la situación del sector se empezó a dinamizar a partir de políticas públicas que no eran las previstas por las corrientes mencionadas. La acumulación de estímulos para la tecnificación, incorporación de maquinarias y tractores, de nuevas semillas y técnicas de laboreo y de productos agroquímicos —fertilizantes e insecticidas—, llevó progresivamente a un despegue que se vio con claridad en la segunda mitad de los '60. La participación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) constituyó un aporte significativo al incremento de la producción, transfiriendo gratuitamente al sector conocimientos y técnicas que movilizaron el potencial productivo. El crecimiento constante de la producción llevó a algunos sectores tradicionales, luego de la crisis petrolera de 1973, a adherir a la idea del “agro-power” de la Argentina. Nuevamente el país podría constituirse en “granero del mundo”, estimulado por la mejora —circunstancial— de los precios de los granos y otros subproductos. Sin embargo, las restricciones comerciales enfrentadas por el país a partir de 1974 pusieron en duda proyecciones de exagerado optimismo.

Importante crecimiento industrial

En el período se continuaron y profundizaron las políticas pro industriales, a partir de la convicción casi general de la importancia de la industria para la proyección del país hacia el desarrollo económico y la integración social.

Si bien el sector nunca contó con una representación corporativa unificada, fuerte y coherente, los gobiernos favorecieron la expansión industrial y el proceso sustitutivo de importaciones, salvo en los ambiguos períodos 1956-1957 y 1962-1963. El producto de la industria, que equivalía a 1,7 veces el del agro en 1956, pasó a representar 2,2 veces el mismo en 1966. Este porcentaje se mantuvo hasta 1976. Los cambios reflejan el notable crecimiento industrial ocurrido en la primera década del período, frente al débil desempeño agrícola. En la segunda década, ambos sectores evolucionan en una forma similar.

Se intentó continuar la industrialización, avanzando hacia tramos manufactureros más sofisticados, como la industria pesada, destinada a proveer insumos tanto a otras actividades manufactureras como al agro. Durante el gobierno desarrollista de Arturo Frondizi (1958-1962), primó la apelación al capital multinacional como fuente de aprovisionamiento de tecnología y bienes de capital modernos, tratando de orientarlo hacia las ramas que



Obreras en la industria textil, 1965.

debían complementar el tejido industrial existente. En cambio, durante la Revolución Argentina, no hubo un intento de orientar al capital extranjero hacia actividades específicas, pero se realizó una fuerte presión eficientista y se impulsaron algunos sectores productores de bienes de capital.

Luego de la caída del ministro Krieger Vasena, creció una tendencia hacia el estímulo prioritario al capital industrial nacional. Esta orientación llevó a impulsar la construcción de un grupo de grandes plantas productivas (petroquímicas, papel, celulosa, aluminio) para avanzar en el proceso de sustitución de importaciones. También se lanzaron medidas tales como la conformación de un Banco Nacional de Desarrollo, la ley de “compre nacional” para utilizar el gasto del sector público a favor de las empresas nacionales. Ya durante el gobierno peronista (1973-1976), se promulgó una ley de promoción regional y sectorial para estimular la instalación de establecimientos fabriles en zonas de bajo desarrollo del interior del país.

Las limitaciones del proceso industrializador argentino se expresaban en la renovada dependencia de tecnología e insumos importados, lo que requería un continuo flujo de divisas que el sector no era capaz de proveer. También la desconexión entre el sector y el sistema científico local fue un elemento que empobreció las posibilidades de generar sinergias entre ambos. La orientación exclusiva hacia el mercado interno —fuertemente protegido— disminuyó las presiones dirigidas a mejorar la calidad y el precio de los productos. Recién cuando comenzaron a madurar políticas públicas —parciales e inestables— para fomentar las ventas industriales al exterior, se observó una reacción exportadora en el sector.

Cuadro 2: Composición de las exportaciones argentinas

Sector	Año	
	1966	1974
Productos primarios	72,5	48,2
Manufacturas de origen agropecuario	17,1	25,7
Manufacturas de origen industrial	4,8	23,4
Otros	5,6	2,7

Fuente: Banco Central de la República Argentina.

En el cuadro precedente se observa el significativo cambio expresado por la reducción de 24 puntos en la presencia de productos primarios, por el aumento de casi 9 en manufacturas de origen agropecuario y, especialmente, por el importante salto en manufacturas de origen industrial (que eran llamadas “exportaciones no tradicionales”) de casi 19 puntos.

El mercado local no era suficiente para sostener plantas capaces de proyectarse hacia el mercado mundial, y los procesos de integración regional necesarios para viabilizarlas estaban detenidos básicamente por la desconfianza mutua entre la Argentina y el Brasil. Hacia el final del período, no se había logrado resolver el problema de la competitividad industrial, elaborando un esquema que le permitiera un crecimiento sustentable, sin depender de las divisas provistas por el agro.

La inversión productiva

El desarrollismo impactó fuertemente en la tasa de inversión: pasó de un promedio cercano al 16% del PBI en la década previa a 1960 a niveles próximos al 22%, pero que fueron declinando hasta llegar al 18% en 1966. Durante el gobierno de la Revolución Argentina se revirtió la tendencia, que mostró un crecimiento sostenido, aunque desacelerándose hacia 1974. En los primeros años de la década del 70, la inversión equivalía al 23% del PBI, mostrando el impacto combinado de la fuerte presencia pública y del comportamiento del sector privado que confiaba en una dinámica de crecimiento que se extendía desde 1964.

A medida que la economía argentina crecía, debió enfrentar una serie de cuellos de botella que le impedían una expansión sin contratiempos. Al final de la gestión peronista, el sector industrial mostraba un notable envejecimiento de su dotación de maquinarias y equipos de producción, que las políticas aperturistas del gobierno de la Revolución Libertadora y el desarrollismo intentaron superar. En cuanto a la energía, tanto la proveniente de hidrocarburos como la hidroeléctrica demandaban rápidas respuestas, ya que el ritmo de crecimiento se vería restringido por la limitada provisión de las mismas. El país gastaba una fracción considerable de sus divisas importando petróleo y derivados (en 1958 éstos representaban el 28,4% de las

importaciones), mientras contaba con valiosas reservas propias que no eran explotadas. El desarrollismo produjo un fuerte incremento de la producción de petróleo local incorporando el capital extranjero a la extracción, pero generó fuertes controversias que derivaron en la anulación de los contratos petroleros durante la gestión de Arturo Illia (1963-1966). Durante este gobierno y los sucesivos, se impulsaron obras hidroeléctricas que permitieron expandir la capacidad de producción energética. Esto se completó con las tareas realizadas por la Comisión Nacional de Energía Atómica, que permitieron la instalación de una planta de generación de energía nuclear eléctrica.

En cuanto a una serie de insumos ampliamente utilizados en la producción industrial, se lograron importantes avances durante el período, aunque la pretensión de construir una economía plenamente autoabastecida se volvió cada vez más utópica, a partir de la incesante evolución científica y tecnológica internacional, que establecía nuevos estándares en cuanto a productos y procesos productivos, niveles superiores de productividad y reducción de costos unitarios.

El desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas no tuvo un carácter prioritario para los principales actores sociales. El tema no fue tomado por el peronismo ni por sus vertientes sindicales, tampoco por buena parte del sector industrial, acostumbrado a maximizar sus beneficios sobre la base de un conjunto de resguardos y transferencias obtenidos desde el Estado. Sectores intelectuales ponían el énfasis en políticas distributivas a la hora de discutir mejoras en la vida social. Para buena parte de la sociedad la tecnología, en todo caso, se importaba o la traían las filiales de empresas multinacionales.

Las economías regionales

El proceso de incorporación de capital multinacional en la economía tendió a modificar la configuración territorial, impulsando el crecimiento de determinadas provincias o regiones, en tanto otras se rezagaban considerablemente. Así, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la Patagonia crecieron al ritmo de la expansión industrial, en tanto las provincias del Norte del país y de Cuyo (excepto Mendoza) vivieron una situación de

relativo estancamiento, que quiso ser reparada a través de la Ley de Promoción Regional y Sectorial promulgada por el Congreso Nacional en 1973.

Las economías regionales sufrieron especialmente la falta de crédito, las elevadas tasas de interés y los vaivenes macroeconómicos generales, incluidos los altibajos cambiarios.

Los procesos de industrialización y modernización llegaron con lentitud a regiones apartadas del territorio, que mostraron velocidades de crecimiento muy inferiores a las zonas metropolitanas. Estas disparidades impulsaron aún más el proceso de urbanización y despoblamiento rural.

Las empresas públicas fueron un importante motor de desarrollo y representaron un alto porcentaje de la inversión total. En 1956, un 30% de la inversión bruta fija era efectuado por el sector estatal. Este porcentaje sólo se redujo en los momentos de auge de la inversión privada estimulada por políticas públicas específicas a niveles que, de todas formas, superaban el 20% del total. Al mismo tiempo, la falta de énfasis en la calidad de la gestión y la manipulación desaprensiva de los recursos de las empresas públicas llevaban a fuertes déficit que debían ser cubiertos por el Estado. Estos déficit explicaban más de la mitad del desequilibrio público total.

El desempeño de las empresas públicas tuvo características heterogéneas, mostrando niveles de eficiencia y calidad de las prestaciones muy diversos. El sector estuvo afectado por la persistente crisis política, que introdujo discontinuidad en la conducción de empresas que por su considerable magnitud hubieran requerido un gerenciamiento altamente profesionalizado y estable. Otro problema que afectó a estos organismos fue su utilización como instrumentos de política económica más allá de sus funciones específicas. Así, se fijaron las tarifas de las empresas públicas con criterios de subsidio a consumidores y usuarios, o para estabilizar los precios, o para aumentar la recaudación general del Estado, según los distintos momentos. Y se utilizó el gasto de las empresas para mejorar la rentabilidad de los proveedores, desarrollar obras en zonas atrasadas fomentando el desarrollo regional o generando puestos de trabajo allí donde la actividad privada no tenía presencia significativa.

El caso más negativo en el período lo constituyeron los ferrocarriles del Estado, cuyo déficit equivalía al 25% del déficit total

del Estado en el año. La empresa fue sometida a diversos procesos de saneamiento y achicamiento, no sólo por razones presupuestarias, sino para ampliar la fracción del mercado de transporte correspondiente a la producción automotriz y petrolera, en auge luego del impulso del desarrollismo. La única privatización importante se efectuó durante la gestión frondizista, en la que se transfirió a manos privadas el transporte urbano de pasajeros.

Por otra parte, a partir de la Revolución Argentina, se incrementaron los nexos entre el sector público y el privado, lo que aumentó fuertemente la tendencia a diseñar las acciones de las empresas públicas en función de diversas conveniencias de las grandes empresas privadas que operaban en el mercado local.

El sector privado contó para su desarrollo de un contexto favorable, aunque afectado por los vaivenes sociopolíticos. A una fuerte protección arancelaria, se le sumaba una política crediticia que minimizaba el costo del crédito. Los ingresos en permanente crecimiento de la población creaban certidumbre sobre la futura ampliación del mercado local y el Estado proveía de una fuente adicional de demanda y de negocios. Las empresas privadas que alcanzaron un mayor desarrollo tecnológico fueron los laboratorios farmacéuticos, empresas electrónicas y metal-mecánicas, plantas de máquinas herramienta y de equipos y establecimientos proveedores de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Entre las grandes empresas que surgieron a partir de una fuerte inversión estatal figuraron: Aluar (aluminio), Papel de Tucumán (papel de diario), Celulosa Puerto Piray (celulosa), Papel Misionero (papel kraft), Petroquímica General Mosconi, el polo vinculado a Petroquímica Bahía Blanca (etileno), Petroquímica Río Tercero, y se contribuyó fuertemente a la modernización de SOMISA (acería estatal) y de Acindar y Siderca (acerías privadas). La mayor parte de estos proyectos insumió sustanciales recursos del Estado, no sólo en materia de inversión directa, sino en el desarrollo de proyectos de infraestructura necesarios para viabilizar los proyectos. El caso más destacado fue el de la empresa Aluar, cuya puesta en marcha requirió la construcción de una represa hidroeléctrica, dado el consumo intensivo de energía eléctrica necesario para el proceso de producción de aluminio.



Avenida Nueve de Julio con el edificio Fiat, 1976.

LA COMPLEJA RELACIÓN CON LOS MERCADOS EXTERNOS

La relación con el capital extranjero

La Argentina fue ampliando y profundizando sus relaciones con las empresas, bancos y organismos multilaterales de crédito, aunque oscilando entre posturas de franca aceptación de las demandas de estos actores y otras de desconfianza y rechazo a los aspectos más negativos de dichas influencias.

El país se convirtió en miembro del Fondo Monetario Internacional en 1956 y también estableció relaciones con el Club de París y el BIRF (luego Banco Mundial). Rápidamente accedió a un crédito para superar una situación transitoria de iliquidez externa, lo que se repitió en diversas oportunidades

en el período. En general, los créditos del FMI estuvieron condicionados a la aplicación de medidas de contracción monetaria y fiscal, tendientes a reducir el ritmo de la actividad económica y mejorar los saldos comerciales. Estas recomendaciones coincidieron por lo común con el pensamiento de los sectores conservadores y agroexportadores, que estuvieron ampliamente representados en diversos gobiernos argentinos.

Las multinacionales

Un fenómeno de creciente importancia fue la aparición de un número significativo de empresas multinacionales en la economía local, especialmente a partir de la política desarrollista, y que tuvieron un segundo gran impulso durante la dictadura militar iniciada a mediados de 1966 (Revolución Argentina). El origen de estas compañías era mayoritariamente norteamericano, pero también había una importante presencia europea. Las multinacionales se instalaron en actividades dinámicas como la química y petroquímica, industria automotriz, maquinaria agrícola, incorporando tecnología avanzada en términos locales. Las plantas instaladas eran de dimensiones mucho menores que las establecidas en sus países de origen y no contaban con la escala adecuada para alcanzar costos competitivos internacionalmente. No obstante, permitieron dinamizar diversas regiones del país y tuvieron efectos potenciadores sobre otros emprendimientos de origen local. Tendieron a generar menos empleo que las industrias domésticas, pero los puestos de trabajo creados, en promedio, estuvieron mejor remunerados que en las empresas nacionales.

Desde 1967 se observó un proceso de compra de empresas nacionales por el capital extranjero, que incrementó su presencia en una serie de actividades muy significativas, aunque sin aportar capacidad productiva adicional en la misma medida que durante la gestión de Frondizi. Las multinacionales se integraron a la cúpula del empresariado local, favoreciendo en general las posturas más liberales en materia económica, aunque acompañaron el proteccionismo vigente, ya que sus actividades también se orientaron exclusivamente hacia el mercado doméstico.

A comienzos de los años '70, las 400 mayores empresas industriales producían aproximadamente el 50% del producto del sector. De ellas, el 25% eran de propiedad extranjera. En el sector bancario, 19 bancos extranjeros controlaban el 40% de los depósitos. Aún más importante era la presencia de las multinacionales en el comercio exterior, ya que cuatro empresas cerealeras controlaban casi el 100% de la exportación de trigo, sorgo y maíz. Esto significó una complicación adicional para la balanza de pagos del país, ya que las multinacionales reforzaron las importaciones de bienes de capital, piezas y otros insumos, los pagos de *royalties* por utilización de patentes y los envíos de utilidades al exterior. Mientras que en 1956 el país no realizaba pagos de servicios financieros y regalías, en 1974 éstos alcanzaron 440 millones de dólares, lo que equivalía al 12% de las importaciones.

A medida que se recomponía a nivel internacional un mercado de capitales privado, el país utilizó gradualmente este recurso. Desde el gobierno de la Revolución Argentina se recurrió en mayor medida al financiamiento bancario privado externo, y la deuda externa comenzó un sostenido incremento desde niveles bajos. También se liberalizó el envío de utilidades al exterior. En las experiencias económicas de 1960-1962 y de 1967-1969 se observó una tendencia al endeudamiento externo de corto plazo. Finalmente, en el año 1975, producto del deterioro acelerado del sector externo, se tomaron créditos de corto plazo, que elevaron la deuda externa a 7.000 millones de dólares.

Cuadro 3: Resultados en divisas de las inversiones extranjeras en la Argentina (acumulado por períodos en millones de dólares corrientes)

Período	Años	Nuevas inversiones (1)	Beneficios reinvertidos (2)	Beneficios remitidos (3)	Inversión neta en divisas (1) - (3)
1959-62	4	469	146	103	366
1963-66	4	236	178	231	5
1967-70	4	246	77	374	-128
1971-72	2	110	31	130	-20

Fuente: Jorge Schvarzer, *La industria que supimos conseguir*.

En el cuadro precedente se puede observar el impacto de las inversiones extranjeras en materia de aporte de divisas a la economía nacional. Luego de un momento inicial de aporte positivo, el flujo se revierte, generando una salida constante de moneda extranjera.

Los términos de intercambio

Sufrieron altibajos a lo largo del período, con una leve tendencia creciente que se interrumpió abruptamente luego de la crisis petrolera mundial de 1973. Las alzas y bajas de los precios internacionales, combinadas con las diferentes alternativas climáticas que influían significativamente en el resultado productivo final en el agro local, impactaban marcadamente en los niveles de actividad interna, que adquirían de esa forma cierto nivel de imprevisibilidad.

La relación con los organismos financieros internacionales: la Argentina suscribió los acuerdos de Bretton Woods a mediados de 1956, pasando a participar en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en el Banco Mundial. Los primeros acuerdos con el FMI se realizaron en diciembre de 1958.

En general los gobiernos del período no tendieron a reclamar la ayuda de estos organismos. La Argentina recurrió al crédito público internacional en pocos pero cruciales momentos. En estos casos —1958, 1963, 1975— se trató de situaciones de desequilibrio comercial que derivaron en caída de las reservas internacionales del país. El proveedor de estos fondos fue el FMI, que presionó para la implementación de planes de estabilización monetaria, de fuertes características contractivas. La tendencia de dicho organismo reforzaba las posiciones de los sectores minoritarios del espectro político local, que veían con enorme desconfianza las políticas industrialistas y distribucionistas. En general, los planes de estabilización terminaron en fracasos y provocaron crisis políticas y sociales considerables.

Débil impulso hacia la integración regional

La visión “cepalina” de un mercado ampliado latinoamericano, que permitiera ganar capacidades competitivas internacionales, no avanzó significativamente durante estos años. En la Argentina, por diversos motivos, se miraba con desconfianza un proceso de integración regional. El desarrollismo establecía como prioridad la integración del mercado nacional, antes de avanzar hacia un mercado ampliado. Los militares argentinos, que constituyeron parte del poder político en toda la época, veían con recelo la capacidad militar del Brasil y sus designios geopolíticos. Los industriales temían la competencia del país vecino, debido al bajo costo de su mano de obra. Por lo tanto, el eje a partir del cual podía estructurarse un mercado regional de importantes dimensiones no se constituyó hasta mucho después de la década del 70.

Las dificultades en el comercio exterior

En la primera década (1957-1966), la preocupación central fue impulsar la industrialización y reforzar el entramado productivo orientado hacia el mercado interno, por lo cual la principal actividad exportadora siguió centrada en el sector agrario, a pesar de las graves limitaciones productivas mencionadas antes. Recién en la segunda década comienzan a aparecer políticas explícitas que buscan acelerar la expansión de las exportaciones industriales. De hecho, desde 1963 hasta 1974 (con la excepción de 1971) no se registran saldos comerciales negativos y no fueron necesarios los créditos internacionales para “desequilibrios transitorios de la balanza de pagos”.

Se produjo una transformación muy significativa en cuanto al tipo de importaciones, cayendo sustancialmente aquellas de productos terminados, a favor de insumos, repuestos y maquinarias. Los impuestos al comercio exterior, tanto los aranceles a las importaciones como las retenciones a las exportaciones agropecuarias, fueron una fuente de recursos para el Estado.

A fines del período, el 75% de las exportaciones eran primarias o de origen agropecuario con algún grado de elaboración. Las exportaciones netamente industriales, a pesar de su menor importancia, habían crecido considerablemente desde mediados de los '60.

El shock petrolero de 1973 y su impacto local

El impacto económico internacional provocado por la decisión del cartel petrolero formado por la OPEP de triplicar el precio del barril de petróleo a fines de 1973 tuvo repercusiones considerables en la Argentina. El país, que no se autoabastecía y estaba pasando por un momento de alta ocupación industrial, requería el insumo en cantidades considerables. Por otra parte, la elevación del crudo aceleró la inflación en los países industrializados, que transfirieron estos costos a los bienes exportados al mercado mundial, lo que afectó nuevamente a la Argentina. Si bien diversos productos primarios exportados también incrementaron su precio, el efecto sobre la balanza comercial local fue negativo, lo mismo que el impulso que dio a las tendencias inflacionarias que estaban presentes en la economía. El shock fue desestabilizante del esquema económico peronista y aceleró los conflictos sociales y políticos.

El cierre del mercado europeo a las carnes argentinas

Otro elemento que incidió en la crisis que se precipitó en 1975 fue la decisión del Mercado Común Europeo durante 1974 de impedir el ingreso de carne vacuna argentina debido a la existencia de aftosa. Si bien el problema sanitario existía, es probable que el principal motivo haya tenido que ver con la política agraria europea y con las tendencias proteccionistas que desató la crisis petrolera iniciada el año anterior. De todas formas, la Argentina se vio repentinamente privada de un mercado importante y de una fuente de divisas necesaria en un momento de fuerte incremento de las importaciones.

LA DINÁMICA DE LA ECONOMÍA

El “stop and go”

Desde comienzos de los años '50, se manifestaron una serie de problemas en cuanto al crecimiento sostenido de la economía y a la evolución del comercio exterior, que se conocieron

en la literatura económica como proceso de “stop and go”. La imagen de frenar y arrancar buscaba transmitir la sensación de una economía que por su propia dinámica no podía avanzar en forma continua, sino que debía ser “frenada” para poner en orden los desequilibrios engendrados en ese movimiento.

Sintéticamente, se solía representar a la producción argentina separada en dos sectores: el agrario, de bajo crecimiento, pero capaz de exportar competitivamente y obtener divisas, y el sector industrial, de alto crecimiento, pero claramente deficitario en materia de comercio exterior y “gastador” de divisas. Como el sector más dinámico era el que consumía las divisas obtenidas por el sector que no mostraba mejoras en su capacidad de producirlas, la economía arribaba reiteradamente a cuellos de botella en el comercio exterior. Es decir, agotaba sus reservas de moneda extranjera y debía tomar medidas de emergencia para volver al equilibrio entre ingreso y egreso de divisas. Las políticas aplicadas por los ministros de Economía ligados al liberalismo, apoyados por los organismos internacionales de crédito,



Supermercado “Gigante”.

tendían a contraer la actividad económica —a través de la caída de los salarios, el consumo, la inversión y el gasto público— para que el sector industrial redujera su demanda de divisas. Se pensaba que mediante la devaluación de la moneda, se estimularía al sector agrario exportador y se encarecerían los bienes importados. El “stop and go” se tornaba en proceso circular en la medida en que, superado el estrangulamiento externo, se impulsaba la reactivación económica, que aceleraba el crecimiento de la industria, el incremento de las importaciones y nuevamente aparecía la escasez de divisas.

No cabe duda de que el “stop and go” era expresión de las limitaciones productivas, tecnológicas, organizativas y políticas internas. Reflejaba las dificultades inherentes a un proceso de industrialización en un país con una base agraria de alta productividad en términos internacionales, con escasa tradición empresarial moderna y con un Estado insuficientemente preparado para impulsar el cambio estructural de la economía.

Las controversias en torno a la solución del problema tomaron la forma de diversas propuestas: profundizar la sustitución de importaciones; incrementar las exportaciones agrarias o industriales; reducir la actividad industrial “sobreexpandida” hasta niveles compatibles con las posibilidades exportadoras del sector rural.

Las reiteradas devaluaciones potenciaron otro problema, que se volvería crecientemente preocupante en los '60 y '70: la inflación, llamada popularmente “carestía de la vida”. Los índices inflacionarios oscilaron en torno al 20-30% anual, aunque hubo picos más elevados y más bajos. El movimiento constante de precios reflejaba una pugna social en cuanto a la forma de repartir la riqueza generada, ya que existía un profundo desacuerdo con respecto a la porción del ingreso nacional que le correspondía a cada sector productivo. En ese sentido, la inflación era realimentada por los diversos intentos de redireccionar la economía de cada una de las administraciones políticas. El intento más serio de estabilización se realizó durante la gestión Krieger Vasena, que logró reducir los índices significativamente (a menos del 10% anual). Pero en ese proceso de desaceleración de precios también se produjeron modificaciones en la distribución de la riqueza, que alimentaron la conflictividad social.

Así, hacia el final de la Revolución Argentina, el último tra-

mo liderado por el general Lanusse dejó a un lado todo objetivo antiinflacionario, para dedicarse a reducir la tensión política, mediante una expansión desordenada del gasto público y la emisión monetaria.

El peronismo nuevamente en el gobierno intentó reducir los altos niveles de inflación y lo logró momentáneamente mediante medidas administrativas de congelamiento o control de precios. Pero el incremento excesivo del gasto público y la debilidad frente a diversas presiones sectoriales diluyeron el plan antiinflacionario. Los últimos meses de la gestión presenciaron la elevación de la inflación a niveles desconocidos en el país, creando condiciones de intranquilidad que fueron utilizados para favorecer el golpe militar de marzo de 1976.

El problema de la inflación tampoco contó con un consenso generalizado, ni en la explicación de sus causas, ni en las estrategias adecuadas para su control. Mientras las visiones más liberales diagnosticaban en cualquier circunstancia la existencia de “inflación de demanda”, provocada por un exceso de gasto público, inversión o consumo popular, otras corrientes más industrialistas entendían que existía “inflación de costos”, que no requería para su tratamiento la contracción de la actividad productiva. Finalmente, las corrientes estructuralistas señalaban la “inflación estructural”, provocada por los estrangulamientos existentes en el comercio exterior, en la provisión de insumos y energía o en el mercado de la carne como responsables del alza de precios.

En todo caso, la inflación no era un problema exclusivamente local: Brasil y Chile registraban en aquellos años niveles similares o superiores al caso argentino.

Cuadro 4: Inflación en precios minoristas

Período	Argentina (promedio anual)	América latina (promedio anual)
1955-1959	34,5	17,2
1960-1964	23,0	25,2
1965-1969	22,3	18,9
1970-1974	38,3	23,0

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

Las devaluaciones, que provocaban oleadas inflacionarias, eran continuadas por políticas que tendían a frenar el tipo de cambio como forma indirecta de incidir en el movimiento de los precios internos. La utilización exagerada de esta estrategia estabilizadora terminaba generando nuevas expectativas de devaluación. En muchos casos, estas expectativas se generaban debido a rumores de cambio de autoridades políticas o económicas. Las “corridas cambiarias”, o compra desproporcionada de divisas con fines especulativos, eran seguidas por procesos de “fuga de capitales”, es decir, el retiro de esos fondos del circuito económico con destino general al exterior. Esto se reflejaba en la caída de las reservas del Banco Central y forzaba a dicha entidad a realizar finalmente una devaluación para reducir la pérdida de divisas.

Al mismo tiempo las devaluaciones tenían efectos redistributivos precisos. El primer impacto hacia el alza lo mostraban los precios de los bienes exportados (mayoritariamente agropecuarios); también sufrían incrementos los insumos importados, que incidían sobre los costos industriales. Las empresas manufactureras trasladaban esos incrementos a los precios de sus productos finales, lo que reforzaba el incremento de la “carrestía de la vida”. Finalmente, los asalariados comenzaban un movimiento reivindicativo, solicitando compensaciones por el poder adquisitivo perdido en el proceso inflacionario. El bajo desempleo y la fortaleza del movimiento sindical lograban obtener reajustes que les permitían recuperar —y ocasionalmente superar— el nivel salarial previo a la oleada de incrementos de precios. En algún momento de este reajuste generalizado de precios, el Estado procedía a aumentar las tarifas de los servicios públicos para equilibrar las cuentas de las empresas del Estado, lo que alimentaba el proceso inflacionario.

Entre otros resultados, la inflación eliminaba rápidamente los efectos que debía tener la devaluación sobre la competitividad y rentabilidad de los exportadores. Por otra parte, provocaba una reducción real de las deudas de las empresas con el sistema financiero, con su contraparte de pérdida del valor de los ahorros por parte de los depositantes.

Entre las corrientes que establecían como prioridad económica la estabilidad de precios, algunos consideraban que el círculo inflacionario debía cortarse logrando que los salarios

quedaran inmóviles luego de una devaluación, absorbiendo el incremento generalizado de los precios. Como la reacción natural de los asalariados era la resistencia a la caída del salario real, estos sectores tendían a apelar crecientemente a formas autoritarias que eliminaran las libertades constitucionales para neutralizar la acción reivindicativa sindical.

Sin embargo, dado que la casi totalidad de la producción industrial se orientaba hacia el mercado interno —incluida la de las empresas multinacionales—, las empresas manufactureras estaban interesadas en que el salario real y, por lo tanto, la capacidad de consumo de la mayoría de la población no se deterioraran significativamente.

La economía semicerrada, estructurada en torno a un mercado interno con poder adquisitivo, pero pequeño en términos internacionales, con una fuerte dependencia tecnológica y de divisas, establecía un conjunto de “reglas de juego” que restringían la capacidad de maniobra de los actores. La discusión sobre la forma de resolver las limitaciones estructurales de ese modelo de funcionamiento era opacada por los acalorados debates y las pasiones desatadas por las coyunturas políticas y sociales.

El sistema financiero contó con una fuerte presencia reguladora del Estado durante todo el período, a través de diversos mecanismos. Uno de los efectos de esta intervención fue la existencia de una tasa de interés permanentemente negativa para los tomadores de crédito (el único año cuando se registró una tasa de interés positiva en las dos décadas fue 1969). Esta forma de funcionamiento equivalía a un subsidio indirecto a las empresas, cuyas deudas se reducían en términos reales por el solo paso del tiempo, ya que la inflación depreciaba su valor. En dicho esquema, los ahorristas resultaban perjudicados y esto incidía en la baja propensión a canalizar fondos al circuito crediticio oficial. Los escasos estímulos al ahorro en el sistema bancario oficial provocaron la aparición de formas de ahorro informal en circuitos irregulares e incluso colocaciones inmobiliarias —en tierras productivas, en construcción de edificios para vivienda o vacaciones— con un carácter de inversión financiera.

En materia cambiaria se realizaron todo tipo de experiencias que alternaron sucesivamente políticas más restrictivas y más liberales. Se adoptaron periódicamente tipos de cambio únicos y desdoblamientos cambiarios. Hubo prohibición y también liber-

tad para transferencia de fondos al exterior. Los controles cambiarios provocaban el surgimiento de mercados paralelos, con brechas fluctuantes con la cotización oficial, mientras que en los momentos de tipo de cambio libre la cotización "paralela" desaparecía. Se estableció en ciertos períodos la obligación de liquidar divisas de exportación en plazos determinados, y luego dichas obligaciones fueron eliminadas. En cuanto a la administración cambiaria, se pasó por momentos de grandes devaluaciones (1959, 1962, 1967, 1975), en algunos casos para adoptar posteriormente tipos de cambio fijos de considerable rigidez (con Frondizi 1960-1961, con Onganía 1967-1969) o para controlar

las presiones inflacionarias previas (peronismo 1973-1975). En otros momentos se usaron sistemas de minidevaluaciones para evitar acumular desequilibrios cambiarios.

Asimismo se controlaron en forma selectiva las importaciones, de acuerdo con prioridades públicas, y también se liberó totalmente de controles dicha actividad, lo que por lo general producía fuertes alzas en el gasto de divisas. Se usaron cupos y permisos de importación, que luego fueron derogados.

LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

El período se caracterizó por una puja distributiva permanente entre los distintos sectores de la sociedad, alimentada también por factores políticos y por abruptos cambios económicos. No sólo pudo observarse la disputa también entre el ca-



Zona bancaria y de agencias de cambio de Buenos Aires, década del 70.

pital y el trabajo, sino entre el sector agrario y el industrial, entre las fracciones más concentradas y más débiles de los industriales, entre el sector privado y el sector público y entre el gobierno central y las provincias.

Durante el desarrollismo, se produjo una brusca caída de la participación de los asalariados en la riqueza (del 45% al 39% del PBI). Posteriormente, se fue verificando una recuperación que continuó a lo largo del gobierno radical y el de la Revolución Argentina. El peronismo dio un nuevo impulso a este proceso, pero no creó las condiciones para que fuera sustentable. En 1975, la participación de los asalariados comenzó a reducirse en el segundo semestre del año.

Cuadro 5: Cambios en la distribución del ingreso durante el período

Año	Estratos poblacionales ordenados por nivel de ingresos		
	40% inferior	40% medio	20% superior
1959	16,3	29,4	54,3
1970	16,5	36,1	47,4

Fuente: Salvador Treber, *La economía argentina*.

En el cuadro precedente se observa la evolución de la distribución del ingreso hacia una mayor equidad. Especialmente significativo es el incremento de la participación de los estratos medios.

Los salarios

Luego de 1955, el salario real no decreció significativamente, hasta 1959, año en el que se implementaron las principales políticas desarrollistas. Luego de un retroceso cercano al 20%, comenzó una continua mejoría, que sólo se quebró en 1975, debido a la crisis del gobierno peronista. Hasta ese momento, el salario real no sólo se había recuperado de la caída de 1959, sino que mostraba un aumento acumulado cercano al 30% en relación con el final de la anterior gestión peronista.

Las luchas sociales impactaban en la economía, afectando el

ingreso de los empresarios, que incorporaban los aumentos salariales a los precios finales de los productos. En el caso de los empleados públicos, que eran aproximadamente el 24% de los asalariados en 1960 (y el 20% en 1970), sus remuneraciones afectaban considerablemente el nivel del gasto público y los resultados de la Tesorería. Las políticas de estabilización de precios y de contención del gasto chocaron inevitablemente con un sector sindical con capacidad de reacción.

A pesar de los altibajos económicos, especialmente en la primera década del período, las tasas de desempleo fueron relativamente bajas, oscilando en torno al 4% anual, según el momento económico y las políticas vigentes. El momento más crítico en materia de desempleo fue en 1963, cuando alcanzó el 9%, y el que registra una tasa récord de empleo fue el primer semestre de 1975, con sólo el 2,3% de desocupación.

Las políticas económicas con objetivos estabilizadores realizaron diversos intentos para lograr caídas salariales de importancia. En 1962-1963, se apeló al desempleo para debilitar la acción reivindicativa sindical; a partir de la dictadura iniciada en 1966, se apeló al congelamiento salarial y a la represión de la acción gremial; en 1973, luego de otorgar un aumento salarial, el gobierno peronista intentó frenar las presiones laborales mediante un pacto social que congelaba las remuneraciones hasta su revisión futura.

La conflictividad social se expresó a través de huelgas, tomas de fábrica y levantamientos populares, que en los años posteriores al peronismo —en los que se produjeron recortes salariales y de empleo importantes— tuvieron un carácter más defensivo y que luego cobraron fuerza a partir de la profundización del proceso de industrialización y concentración de importantes masas de trabajadores en torno a importantes centros urbanos.

UN ESTADO GRANDE CON BAJA CAPACIDAD DE GESTIÓN

Debilidad estructural del Estado

A pesar de la importancia de la estructura estatal en la economía nacional, el Estado no mostró capacidad para incidir

con eficacia (salvo en tramos muy limitados de los años '60) sobre la evolución económica de país. Algunas de las características de su accionar fueron el despilfarro de recursos, la discontinuidad de las políticas, la incapacidad para acumular experiencia y conocimiento, el enfoque clientelístico del tratamiento de la burocracia. No tuvo capacidad para formular y administrar eficientemente políticas específicas, y muchas de las actividades de fomento o estímulo se transformaron en meras transferencias de recursos que no afectaban la realidad en el sentido buscado.

Si bien hubo iniciativas importantes, como la creación del CONADE (Consejo Nacional de Desarrollo), destinado a realizar estudios y formular planes de largo aliento para impulsar el desarrollo, éstas se diluyeron en la vorágine de las coyunturas políticas. El Estado no fue dotado de un cuerpo burocrático que le otorgara consistencia y capacidad de ejecutar con eficacia las acciones establecidas por las autoridades políticas. Sus limitaciones en materia de planificación y regulación afectaron negativamente no sólo al importante sector estatal, sino también al sector privado, cuyo comportamiento se fue adaptando a la escasa previsibilidad y transparencia del accionar público.

Relación con el sector privado

El Estado argentino mostró grados de autonomía fluctuantes en relación con el mundo empresarial. En los períodos militares (o de fuerte influencia militar sobre gobiernos civiles débiles), gozaron de acceso preferencial al gobierno figuras del "establishment" económico, ligadas a sectores agropecuarios, financieros, de grandes industrias o dedicadas al comercio exterior. Desde la dictadura inaugurada en 1966, se profundizaron los vínculos entre el Estado y los conglomerados industriales, involucrando las políticas impositivas, crediticias, los regímenes de inversión extranjera y repatriación de utilidades y las políticas de las empresas públicas. En este caso, las grandes empresas estatales de bienes y servicios comenzaron a establecer lazos crecientemente estrechos con los proveedores privados, que ganaron influencia en la determinación de las

características de las compras efectuadas por los entes públicos e incluso sobre el tipo de inversiones o estrategias de crecimiento por realizar.

Gasto público

Las erogaciones del Estado, que habían equivalido aproximadamente al 30% del producto durante el último quinquenio justicialista, cayeron durante el desarrollismo a un nuevo piso del 25%, que a su vez sufrió una nueva reducción durante los recesivos años 1962-1963. Durante la gestión de Illia comenzaron su recuperación hacia el 26% y durante el gobierno de la Revolución Argentina mostraron un descenso paulatino hasta el 23%. Finalmente, durante la gestión peronista de 1973-1976 muestra un abrupto incremento que las colocó en el 30% en 1975. Durante las dos décadas, el déficit total del Estado osciló en torno al 3% anual del producto, aunque con matices importantes según la gestión considerada.

El empleo público

Para analizar la evolución a lo largo del período se debe distinguir entre el Estado central, las provincias y las empresas públicas. El primero no mostró un incremento significativo de agentes, pasando incluso por procesos de racionalización administrativa y descentralización como durante el desarrollismo y la Revolución Argentina. En cambio, el gran incremento del empleo se produjo en las provincias, donde es probable que el Estado local haya tendido a atenuar el desempleo provocado por la baja dinámica productiva y haya utilizado este recurso como instrumento electoral de caudillos locales. Un incremento excepcional se produjo entre 1973 y 1975, que contribuyó a acelerar la crisis fiscal del Estado.

Cuadro 6: Déficit de Tesorería como porcentaje del PBI

Año	Déficit (% PBI)
1958	4,10
1959	4,14
1960	1,45
1961	0,49
1962	2,14
1963	2,45
1964	4,46
1965	1,32
1966	3,56
1967	2,14
1968	1,44
1969	0,72
1970	0,63
1971	1,96
1972	2,43
1973	5,96
1974	4,12
1975	15,10

Fuente: Ricardo Ferrucci, *Política económica argentina contemporánea*.

En el cuadro precedente se observan las considerables fluctuaciones del déficit fiscal en el período, notándose las políticas de “racionalización del gasto” de las gestiones frondizista y de Onganía y el fuerte desequilibrio del año 1975.

La moneda

El grado de monetización de la economía, luego de una caída provocada por la elevada inflación generada por las medidas desarrollistas (se pasó del 30% al 20% del PBI), mostró una tendencia declinante de largo plazo hasta 1972 (en que alcanzó el 15%), producto de la continua inflación. Luego de una breve recuperación, la crisis inflacionaria provocada por el Rodrigazo provocó una nueva caída del coeficiente de monetización.

La paulatina reducción de la cantidad de moneda en relación con el producto reflejaba la reacción de la población frente a la erosión que la inflación provocaba en el poder adquisitivo del dinero en circulación.

Las empresas públicas constituyeron un indudable factor de crecimiento, tanto a través de la inversión directa como del impacto que ejercieron sobre amplios sectores de la actividad económica privada. El sector público realizó anualmente compras al sector privado —entre 1961 y 1975— por importes equivalentes al 14% del producto. Sin embargo, fueron utilizadas para apuntalar diversos experimentos económicos, a costa de la eficiencia, la rentabilidad y su propia función específica, lo que las fue debilitando en el largo plazo. Se ha estimado que la productividad media del capital en las empresas públicas cayó entre 1960 y 1975 un 35%.

La universidad pública vivió sus años de esplendor entre 1956 y 1966, año en el que sufrió un severo ataque por parte del régimen militar entrante. En dicho período, realizó notables avances en los diversos campos científicos y se constituyó en un elemento valioso para una estrategia de desarrollo integral del país. A fines de los años '50, se creó un conjunto de instituciones centrales para impulsar el avance científico y tecnológico: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Estas instituciones tuvieron dispares efectos sobre la actividad productiva económica, destacándose el INTA que logró reconocidos méritos en la dinamización del sector agropecuario. La CNEA obtuvo importantes avances en el campo de la energía nuclear y otras disciplinas, desarrollando empresas proveedoras de alto nivel técnico. El CONICET sostuvo un importante plantel de especialistas en numerosas disciplinas, que mereció reconocimiento internacional, pero que no logró articularse suficientemente con el sector público y privado de producción de bienes y servicios.

Reportaje a Rogelio Julio Frigerio, secretario de Estado de la Nación y asesor de la Presidencia durante la gestión de Arturo Frondizi

Pregunta: ¿Hubo un proceso de aprendizaje desde el momento en el cual plantean la cuestión electoral hasta que llegan al gobierno? (Ejemplo: el tan mentado caso de Política y Petróleo versus la política petrolera.)

Frigerio: (...) *Nosotros nos preguntábamos: ¿nos hace más nación comprar combustible en el exterior y obtener el aporte de capital y de actividad empresaria extranjeros para sustituir esas importaciones por producción nacional? Nos hacemos nación, infinitamente más soberanos, independientes, produciéndolo acá. Por eso, en menos de cuatro años, la Argentina vivió un proceso verdaderamente espectacular: llevamos la producción de petróleo de 4.600.000 m³ a casi 15.000.000 m³, con lo que cumplimos un objetivo que la República Argentina se había propuesto vanamente durante medio siglo. Y en esto no es cuestión de hacer responsabilidades partidistas, porque en dicho lapso desfilaron por el poder todas las tendencias y todas las doctrinas económicas, sociales y políticas, y ninguna pudo romper un techo que estaba, paradójicamente, rígido en aproximadamente el 30% del consumo. Lo que excedía esta proporción se importaba. (...)*

Pregunta: Ustedes insisten en la necesidad de establecer prioridades. ¿Cómo se fijaron, concretamente, esas prioridades durante el gobierno?

Frigerio: *Excelente pregunta. La discriminación se hizo, ante todo, en función de separar lo que es estructural y básico para el desarrollo de lo que no lo es. Ante la necesidad de definir la actitud del Estado con relación a una fábrica de galletitas o una acería, una fábrica de petroquímica, la extracción de petróleo o la infraestructura de comunicaciones, asignamos la prioridad a estos rubros y de ninguna manera a otros, aun de mucha significación social y económica. Porque estas industrias pesadas son madres de industrias: una acería puede respaldar la producción de utensilios de cocina y también de barcos, ferrocarriles, construcciones, puentes y plantas industriales. Pero más allá de las priori-*

dades básicas, el Estado tiene el deber de garantizar internamente la mayor cantidad de elementos competitivos, tiene la obligación política (como instrumento jurídico de la comunidad nacional) de garantizar la competencia interna, incluso por razones morales. Pero tiene también la obligación, en función justamente de ser la cabeza jurídica de esa comunidad, de defender el mercado y el trabajo nacional, el proceso productivo de la nación, respecto de los factores externos; porque estos elementos exógenos, en las condiciones que crean las corporaciones multinacionales contemporáneas, tienden a entrar en conflicto con los intereses nacionales. Considero que las corporaciones multinacionales tienen la aptitud para cumplir funciones valiosas en una sociedad y son, además, una realidad insoslayable. Pero una cosa es hacer una política económica de directo beneficio de esas corporaciones y otra cosa es garantizarles la posibilidad de actuar en el mercado interno, sobre la base de privilegiar los intereses de la comunidad nacional al diagramar esa política.

Pregunta: ¿Cómo se podía, en la práctica, proteger el trabajo nacional, según usted dice, y a la vez abrir de par en par las puertas a los capitales externos?

Frigerio: *La descripción que se me pide en la estrictez de tiempo que tenemos sería prácticamente inabordable. Me atrevo a decir cuál fue la fórmula general que aplicamos, el marco teórico, si se quiere. La fórmula fue ésta: cerrar herméticamente las puertas a todo lo que el país está en condiciones de producir y abrirlas de par en par a los capitales y a las técnicas que estén dispuestos a venir a colaborar con nosotros en el proceso de desarrollo nacional. Esto, quizá, nos evita la pormenorización. Estimular la producción de lo que podemos producir en el país, garantizando la competencia interna que es, repito, una obligación moral y política del Estado nacional. Y simultáneamente una apertura hacia las técnicas y hacia los capitales externos y hacia la reinversión de capitales que están dentro del esquema económico interno. Esto, también, ilimitadamente y hasta las últimas consecuencias.*

Fuente: Juan Carlos de Pablo, *La economía que yo hice*, Buenos Aires, Ediciones El Cronista Comercial, 1980.

LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS

El liberalismo moderado de la Revolución Libertadora

El gobierno surgido del golpe del '55 procuró modificar el esquema económico estructurado durante el gobierno peronista, quitando los aspectos de mayor intervencionismo estatal. Eliminó mecanismos de control del comercio exterior y de cambios e intentó estimular las exportaciones agropecuarias mediante mejoras impositivas y del tipo de cambio. No obtuvo resultados significativos. Enfrentó movimientos huelguísticos debido a la caída del salario real, que contrarrestó con acciones represivas. Pareció no tener una propuesta alternativa, a pesar de que los consejos de Raúl Prebisch, quien además de recomendar al gobierno de facto políticas más ortodoxas en materia fiscal y monetaria que restauraran los mecanismos de mercado, señaló las carencias en materia de provisión de energía, telecomunicaciones, transporte, extracción y refinamiento de hidrocarburos y enfatizó la necesidad de estimular la competitividad



Alvaro Alsogaray, 1963.

de diversas actividades con la incorporación de tecnología moderna mediante planes lanzados desde el sector público.

El conflictivo proyecto desarrollista

El presidente Frondizi intentó avanzar con su proyecto de desarrollo “contra” las preocupaciones centrales de la sociedad en ese momento: el conflicto político peronismo-antiperonismo, la pelea por la distribución del ingreso entre el sector agrario y los sectores urbanos, las ambiciones de poder de figuras de las Fuerzas Armadas.

Luego de un período (1958) de fuerte impulso de la inflación (grandes aumentos salariales, tarifarios, cambiarios), que fue considerado un “sinceramiento de variables” ya que se suponía que adquirirían niveles “reales”, a partir de 1959 se lanzó una decidida política de estabilización y de estímulo al ingreso de inversiones extranjeras en sectores prioritarios. Para ello se utilizaron una rígida fijación del tipo de cambio (la moneda sólo se devaluó 5% entre 1960 y 1961), reducciones impositivas y arancelarias a la importación de bienes de capital, créditos a tasas preferenciales y otras desgravaciones. Al mismo tiempo, se produjo una reducción del sector público, mediante disminución de las vacantes y caída salarial. Estas medidas dieron origen a diversos conflictos sindicales de considerable intensidad.

El impacto de la política frondizista fue rápidamente observado en la economía, logrando incrementar de manera sustancial la inversión extranjera directa, junto con el crecimiento de la deuda externa. En el caso de la política petrolera, favoreció la rápida concreción del autoabastecimiento, que se alcanzó en 1962, lo que significó un importante ahorro de divisas para el país. En cambio, la instalación de empresas automotrices careció de organicidad y adicionalmente acrecentó los problemas de la balanza de pagos.

Frondizi debió sostener el núcleo de su política económica haciendo concesiones a los sectores liberales, confiando en que el “desarrollo de las fuerzas productivas” produciría cambios económicos y sociales irreversibles, poniendo al país en la senda de la industrialización acelerada. El sector asalariado sufrió una pérdida de su poder adquisitivo, producto del fuer-

tes impacto inflacionario de 1959 (114%) y de la política de contención salarial posterior, lo que lo llevó a protagonizar fuerte choques con la administración desarrollista. La caída de Frondizi se debió a razones políticas, y las medidas tomadas, que modificaron la estructura productiva argentina, continuaron repercutiendo fuertemente a lo largo de la década.

El interregno recesivo 1962-1963

Durante el gobierno dirigido formalmente por José María Guido, el Ministerio de Economía fue ocupado por varios funcionarios allegados al “establishment” conservador y liberal (Federico Pinedo, Álvaro Alsogaray, Eustaquio Méndez Delfino, José Alfredo Martínez de Hoz). Las medidas implementadas tendieron a resolver el atraso cambiario engendrado por las pautas del gobierno desarrollista, reducir la inflación y equilibrar las cuentas del sector público.

Sin embargo, las disposiciones monetarias y cambiarias produjeron una profunda contracción en la actividad económica, que tuvo como consecuencia un elevado nivel de capacidad ociosa en la industria (cerca del 40%), aumento del desempleo hasta niveles desconocidos desde la década del 30 (8,8%) y aceleración de la inflación, lo que generó serio descontento social.

El único efecto positivo fue una mejora sensible de la balanza comercial, que volvió a tener superávit, debido a la contracción del mercado interno.



Adalberto Krieger Vasena, 1967.

Expansión de la demanda en el gobierno de Illia

La gestión radical del doctor Illia se caracterizó por apelar a un conjunto de instrumentos reactivadores que permitieron comenzar a absorber las nuevas

Anulación por el presidente Illia de todos los contratos petroleros suscritos durante la presidencia de Frondizi, 15 de noviembre de 1963

"Que diversos sectores de opinión señalaron oportunamente las graves transgresiones de carácter jurídico-institucional que los acuerdos petroleros representaban, así como su absoluta contradicción con los intereses de la Nación.

"Que el 7 de julio de 1963 el pueblo de la República manifestó en las urnas su rechazo a esa política.

"Que con la realización de los contratos petroleros se despojó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales de sus mejores reservas, fruto de cincuenta años de labor fecunda al servicio de la Nación.

"Que se ha afectado seriamente la seguridad del Estado al facilitar a compañías extranjeras el acceso a planes y estudios que aluden a su reserva energética.

"Que de igual manera, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas ha verificado en fecha reciente las transgresiones administrativas y legales, así como también las graves omisiones culpables mediante las cuales fueron puestos en vigencia discrecionalmente contratos jurídicamente objetables y económicamente inconvenientes."

Fuente: Pedro Sánchez, *La presidencia de Illia*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1983.

producciones surgidas de la industrialización desarrollista. Se impulsó el consumo, tanto a través del crédito como de la mejora de los salarios. La inflación se moderó, mientras se apelaba a un sistema de actualización cambiaria basado en pequeños ajustes periódicos. Una buena situación internacional de precios de las exportaciones y buenos rindes de la cosecha permitieron llevar el crecimiento global de la economía a niveles cercanos al 9% anual en 1964 y 1965. La expansión de la economía no afectó el desempeño de la balanza comercial, que mostró resultados positivos durante la gestión radical.

A pesar de los buenos resultados económicos, el clima social era adverso a un gobierno débil dado su origen y la administración aparecía parcelada entre las diversas fracciones del

partido; mostrando una escasa capacidad de gestión. El sindicalismo peronista exhibía un alto grado de combatividad a pesar de las evidentes mejoras obtenidas en el período (recuperación de la participación en la distribución del ingreso previa al

**Fragmentos del discurso pronunciado por el ministro de
Economía de la Nación, Adalberto Krieger Vasena,
el 13 de marzo de 1967**

"(...) A partir de ahora comenzamos los pasos impostergables para promover la gran transformación creativa de todo el funcionamiento económico y social del país, con la finalidad esencial de construir una nación moderna, pujante, integrada y justa. Había varios caminos elegibles para lograr ese resultado. Uno podía haber sido un proceso brusco de saneamiento y estabilización con grandes sacrificios populares, pero ello hubiera significado un salto en el vacío, con graves tensiones y conflictos que podrían afectar la cohesión nacional. Otra solución habría sido avanzar lentamente en la eliminación de dificultades, con un comportamiento tímido y vacilante. La experiencia de los últimos años, cuando se aplicaron políticas de pasos cortos para resolver los problemas económicos y sociales, demuestra su ineficacia. (...) El gobierno de la Revolución Argentina ha elegido, en cambio, el camino que considera más razonable, al adoptar un vasto conjunto de medidas interdependientes que, para ser eficaces, deben ser aplicadas en forma simultánea. (...) La lucha contra las causas que han producido la inflación, mal que ha socavado los cimientos de nuestra capacidad dinámica, requiere este ataque global. No sólo debe combatirse el déficit fiscal, sino, además, la ineficiencia de las empresas estatales, el despilfarro de recursos naturales, el insuficiente desarrollo de nuestra industria, las modalidades comerciales anacrónicas y, en fin, todo aquello que configure el mal uso de nuestro acervo nacional y de recursos humanos. (...)

"La mayor eficiencia de la actividad industrial argentina, unida a la fijación de un tipo de cambio adecuado, permitirán una fuerte expansión de las exportaciones de manufacturas. De este modo se procura corregir la anomalía de un país que ha llegado a producir una mayor proporción de productos industriales que agropecuarios y está exportando casi exclusivamente estos últimos. Nuestra meta final es un volumen creciente de exportaciones en el cual participen, significativamente, los productos industriales, tal como ocurre en países de conformación productiva similar a la nuestra."

desarrollismo, caída del desempleo al 5,5%) y del respeto del gobierno por las libertades públicas y los derechos sociales. El capital extranjero tampoco veía con beneplácito a un gobierno que revirtió la política petrolera aperturista de Frondizi, redujo el endeudamiento externo del país y enfrentó a los intereses de las multinacionales farmacéuticas planteando políticas de salud que reducían los beneficios de las empresas privadas productoras de medicamentos.

Hacia 1966 la economía se desaceleró. Si bien la expansión de la demanda provocada por el gobierno era un elemento importante para complementar la nueva capacidad productiva generada por el impulso desarrollista, la administración radical no parecía contar con una visión de largo plazo sobre qué perfil debía asumir la economía argentina.

Krieger Vasena: heterodoxia a favor de la concentración económica

A comienzos de 1967, la dictadura de Juan Carlos Onganía convocó a Adalberto Krieger Vasena a conducir el proceso económico. El nuevo ministro introdujo algunas innovaciones en las tradicionales medidas de estabilización y no respondió a las habituales recomendaciones de la derecha conservadora. Intentó reforzar las finanzas del Estado, frenar la inflación sin generar redistribuciones del ingreso en contra de los sectores urbanos, estimular a las grandes empresas industriales de capital nacional y extranjero en detrimento de sectores menos concentrados y liberalizar las relaciones financieras con el exterior.

Sorprendió a la sociedad realizando una fuerte devaluación “compensada”, lo que le permitió tomar los ingresos adicionales de los sectores exportadores para mejorar las cuentas públicas y evitar el impacto sobre los precios internos. Y actuó para inmovilizar los costos internos mediante congelamientos salariales, convenios de precios a cambio de ventajas crediticias e impositivas para las grandes empresas y fijación del tipo de cambio y de las tarifas públicas. Se realizó una tarea de reducción del déficit fiscal, aumentando la recaudación impositiva, recomponiendo las tarifas de los servicios públicos y reduciendo el número de empleados del Estado. La mejora en las finan-

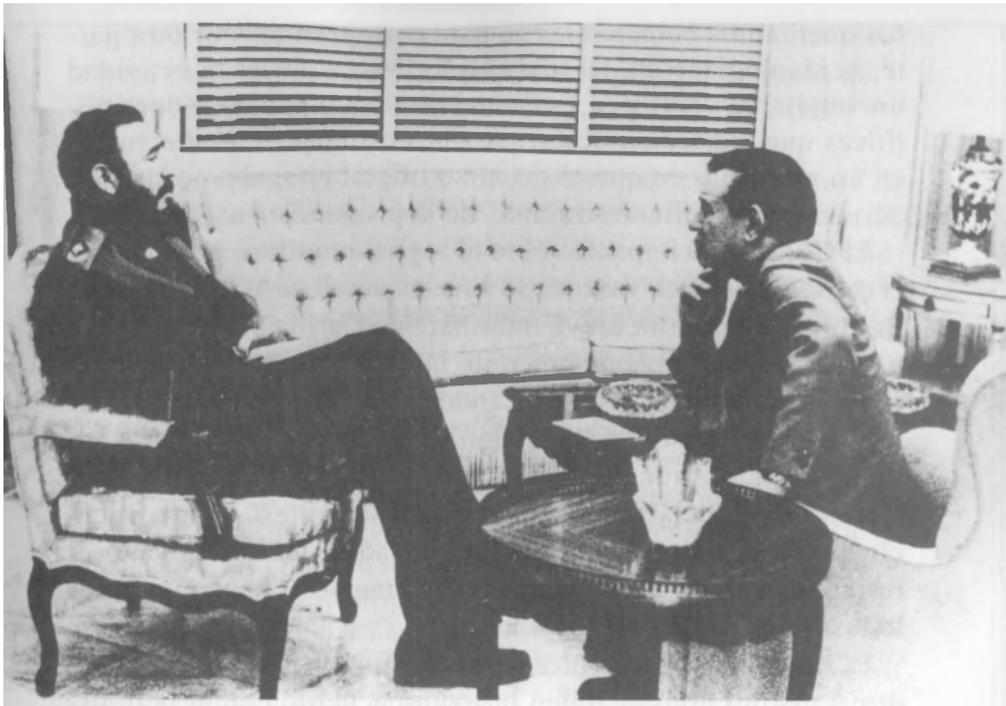
zas del Estado fue utilizada para dinamizar la economía mediante el lanzamiento de un conjunto de obras públicas que lideraron la expansión posterior. Las exportaciones de origen industrial empezaron a crecer significativamente partiendo de niveles muy reducidos.

A diferencia del desarrollismo, que buscó canalizar hacia determinados sectores prioritarios el flujo de capital extranjero, la gestión de Krieger Vasena no pretendió orientar las in-

Reportaje a Aldo Ferrer, ministro de Economía de la Nación (octubre de 1970-mayo de 1971)

“Uno de los puntos que enfatice mucho durante mi gestión fue la política de argentinización. (...) Lo dije explícitamente: la política de argentinización se refiere básicamente a lograr que los intereses locales tengan un peso preponderante en las industrias de base, cosa que en este momento no ocurre. Se señaló que los que queremos argentinizar el crecimiento vamos a crear condiciones de tal manera que el fuerte ritmo de expansión que prevemos para las industrias de base se realice en la mayor medida posible dentro de empresas argentinas. Para eso el ahorro argentino y el crédito argentino se van a dedicar fundamentalmente a empresas nacionales, y en la carta del Banco de Desarrollo se puso una limitación por la cual las garantías y los créditos del banco eran expresamente para empresas locales. Y dijimos además que, en la medida de lo posible, para desarrollar un proyecto industrial de base el Estado iba a dar su garantía y su apoyo a la empresa nacional. (...) Es decir, entonces no teníamos ningún interés de nacionalizar nada, teníamos interés de respaldar a la empresa privada y crear, en la medida de lo posible, las condiciones para que las empresas privadas argentinas, cuando pudieran hacerlo, se hicieran cargo de las industrias de base. (...) Por otra parte, el financiamiento de estos grandes proyectos se hace siempre con recursos nacionales, es decir, el aporte de capital propio en las industrias de base nunca va más allá del 10 o 15 por ciento del proyecto; el 85 o 90 por ciento del proyecto son recursos financieros internos o créditos del exterior para el equipamiento. Acá, el proceso de expansión de la empresa extranjera se hizo básicamente con recursos argentinos; eso es lo que queríamos revertir.”

Fuente: Juan Carlos de Pablo, *La economía que yo hice*, Buenos Aires, Ediciones El Cronista Comercial, 1980.



Fidel Castro y el ministro Gelbard en La Habana.

versiones provenientes del exterior. Éstas se caracterizaron por concentrarse en la compra de empresas ya existentes. La inversión productiva creció a tasas importantes (10% anual promedio), y las importaciones mostraron una dinámica mucho más vigorosa que las exportaciones debido a una mayor apertura económica y a las menores restricciones administrativas.

Desde Krieger Vasena el país empezó a pagar sistemáticamente más servicios de deuda externa que antes (diez veces más), producto del ingreso de capitales y de la toma de créditos para financiar diversas inversiones, lo que incrementó el endeudamiento hasta alcanzar 5.100 millones en 1972.

Onganía no pudo capitalizar los éxitos del plan económico por su incapacidad política, que le impidió establecer alianzas con sectores mayoritarios. La relativa prosperidad no alcanzaba por igual a toda la sociedad, que se sentía disconforme e insatisfecha. Los asalariados habían visto desmejorar gradualmente el salario real por el efecto inflacionario, en tanto en las empresas no incluidas en el esquema de apoyo gubernamental

los quebrantos comerciales se habían duplicado. Por otra parte, la ideologización del régimen lo llevó a atacar la actividad universitaria, científica y cultural mediante persecuciones políticas que alejaron a destacados profesionales e intelectuales en un momento en que el discurso oficial abogaba por la modernización y “eficientización” de la producción argentina.

El Cordobazo impactó sobre el régimen militar, provocando la caída de Krieger Vasena. Su sucesor fue José María Dagnino Pastore, luego de un breve interinato de Carlos Moyano Llerena. La caída de Onganía precipitó nuevos cambios en el Ministerio de Economía, profundizándose una tendencia crecientemente desarrollista en la gestión de Aldo Ferrer. Durante ese tramo de la gestión militar se verificó una paulatina reorientación a favor del capital nacional, que se expresó en modificaciones en el comportamiento del Estado, que incrementó el respaldo a las empresas locales y creó nuevos establecimientos industriales de capital nacional.

El tramo final del gobierno militar fue dirigido por Alejandro Agustín Lanusse, quien buscó un acuerdo con el peronismo, descuidando la gestión económica, especialmente en materia de gasto público y emisión de dinero, lo que aceleró la inflación.

La segunda experiencia peronista: distribucionismo sin reformas

Si bien la conducción económica del nuevo gobierno peronista de 1973 parecía ser consciente de la necesidad de estabilizar la economía, satisfacer las demandas de mejora de la base social del peronismo y continuar estimulando una salida exportadora industrial, los logros que se tuvieron en el período fueron efímeros en los distintos campos.

El ministro Gelbard, anterior dirigente de la Confederación General Económica, comenzó su gestión apelando a un acuerdo social entre sectores empresariales, gremiales y el Estado para estabilizar la economía y mejorar la participación de los asalariados en la distribución del ingreso. Se implementaron controles de precios y se lanzaron medidas orientadas al estímulo de las actividades de las pequeñas y medianas empresas.

Acta de Compromiso Nacional, suscripta el 8 de junio de 1973 entre el Gobierno Nacional, la CGT y la CGE

“Ante la penosa situación de las finanzas públicas, el proceso de desnacionalización económica y financiera, el ritmo incontenible del proceso inflacionario y su correlativo permanente deterioro del salario, el vaciamiento poblacional del interior, la desocupación, alarmante en algunas regiones del país, la quiebra de empresas agobiadas por el peso financiero, los vicios de la estructura de comercialización, la existencia de injustos privilegios, la depresión del mercado interno y el deterioro de vastas regiones del interior del país, el Gobierno Popular entiende que la crítica situación nacional exige, como medio para encaminar el proceso de Reconstrucción y Liberación Nacional y lograr el objetivo enunciado, la adopción de un compromiso que implica renunciamentos y esfuerzos de todos los sectores sociales de la comunidad, pero que necesariamente deberán ser mayores por parte de aquellos que tienen más capacidad para realizarlos. (...)

“En la seguridad que todos los argentinos querrán ser protagonistas y no meros espectadores, en la hora de la Reconstrucción y Liberación Nacional, el Gobierno Popular, la CGT y la CGE proclaman los siguientes objetivos:

“1º) Implantar como sistema de política salarial todas las medidas destinadas a una justa distribución del ingreso, cuya finalidad superior determine la conformación de salarios con creciente poder adquisitivo.

“2º) Eliminar la marginalidad social mediante la acción efectiva del Estado en materia de vivienda, educación, salud y asistencia social.

“3º) Absorber en forma total y absoluta la desocupación y el subempleo de los trabajadores argentinos.

“4º) Mejorar en forma irreversible la asignación regional del ingreso.

“5º) Terminar con el descontrolado proceso inflacionario y la fuga de capitales.”

El resultado inmediato fue una importante expansión de la actividad económica, que redujo a cifras mínimas la desocupación y llevó a récords históricos el nivel de la producción industrial.

Sin embargo, otras medidas más profundas de reforma de la estructura económica —controles estatales en la comercialización de carnes y granos, regulación de la inversión extranjera,

aplicación de un impuesto a la renta normal potencial de la tierra, nacionalización de los depósitos bancarios— y la ejecución de un Plan Trienal con ambiciosas metas productivas y sociales fueron quedando en el camino. La puja distributiva se reflejó en el presupuesto estatal. En tanto las erogaciones en materia de salarios, compras estatales y subsidios se incrementaron, los ingresos no siguieron esa evolución. El empleo público creció el 25% entre 1973 y 1975 y en las provincias lo hizo un 38%. Las disposiciones iniciales del pacto social fueron modificadas reiteradamente, haciendo concesiones a las presiones de los diversos sectores. A medida que se sucedían los ministros de Economía, la situación fiscal se deterioraba y el frente externo se volvía crecientemente conflictivo.

No sólo hubo factores locales que impidieron el éxito de la política económica. La ola inflacionaria provocada por el shock petrolero de 1973 incrementó los costos de las importaciones argentinas, dentro de las cuales el petróleo ocupaba un lugar significativo. El precio de este combustible se incrementó tres veces, en tanto el precio de la carne vacuna cayó a la mitad. Entre 1973 y 1975 los términos de intercambio cayeron un 25%. El alza del petróleo impulsó, a través de los costos, las presiones inflacionarias, ya difíciles de contener. En 1974 se produjo el cierre del mercado europeo de carnes a las exportaciones argentinas, lo que profundizó el déficit comercial local.

A diferencia del importante incremento del consumo, la inversión privada se redujo sustancialmente. Las empresas aducían que su rentabilidad había menguado debido a las medidas “dirigistas” del gobierno peronista (aumentos salariales y controles de precios), aunque es posible que factores políticos (rechazo a la influencia sindical en el gobierno) hayan incidido en este comportamiento inversor.

La agudización del conflicto económico coincidió con la exacerbación de reclamos sociales y luchas políticas —entre las cuales aparecían acciones guerrilleras y asesinatos producidos por grupos de ultraderecha— en el contexto de un gobierno que había presenciado el reemplazo de una figura de gran peso político, Juan Perón, por su viuda, de escasas capacidades para gestionar un cuadro político tan delicado.

A pesar de la apariencia de fortaleza, la debilidad del Estado se manifestó en la magnitud de las maniobras de evasión en el

comercio exterior durante 1975. En dicho año se registraron una reducción de las exportaciones superior al 25%, presumiblemente por subfacturación y contrabando, y un crecimiento desproporcionado de las importaciones, en muchos casos innecesarias, ante la pasividad de las autoridades públicas. Estas maniobras, que reflejaban negocios privados vinculados a manejos cambiarios, deterioraron severamente las cuentas públicas y las reservas del país.

El Rodrigazo como expresión de problemas irresueltos

Un hecho de enorme significación histórica fue el que se denominó Rodrigazo. Este nombre surgió a partir de un conjunto de medidas de fuerte impacto económico adoptadas en junio de 1975 por el nuevo ministro de Economía, Celestino Rodrigo, quien duró cincuenta días en el cargo. Dicho funcionario, apoyado por figuras influyentes pero minoritarias en el gobierno, lanzó una drástica devaluación de la moneda (160%), acompañada por un aumento en el precio de los combustibles (naftas 172%) y de otros recursos energéticos, mientras intentaba marcar un tope del 38% para los aumentos salariales que surgirían a partir de las nuevas convenciones colectivas de trabajo.

En teoría, las medidas apuntaban a disminuir drásticamente el déficit comercial externo y el desequilibrio de las cuentas del sector público mediante una violenta contracción de la actividad económica y de los salarios. Sin embargo, la existencia de poderosas fuerzas sociales —que rechazaron el cambio de precios relativos y de ingresos— y de instituciones democráticas —que garantizaban la libre expresión y el derecho de asociación y de huelga— desbarató las intenciones manifiestas del plan Rodrigo.

Los sindicatos, que protagonizaron un paro general de dos días contra el gobierno de su propio partido, obtuvieron grandes incrementos salariales (cerca del 100%). Se produjo nuevamente el ciclo inflacionario tradicional y el alza de precios en los dos meses siguientes superó en total el 60%. También en el sector público —que contaba con una gran dotación de personal y con un nivel de remuneraciones relativamente alto— los aumentos salariales fueron elevados, generando im-

portantes erogaciones sin contrapartida de ingresos similares, lo que acrecentó el desequilibrio fiscal.

Las medidas adoptadas tuvieron, a pesar de la elevación de los salarios, impactos recesivos e inflacionarios. Comenzó a incrementarse el desempleo y se produjeron grandes transferencias de riqueza entre deudores y acreedores, ya que aún no se había difundido la práctica de reajustar el monto de los préstamos sobre la base de la tasa de inflación. Se ha estimado en 3,7% del PBI la pérdida de ingresos de los acreedores a favor de los deudores. Al mismo tiempo se desató un fuerte juego especulativo en torno a unos títulos públicos llamados Valores Nacionales Ajustables, que absorbieron recursos que en circunstancias normales hubieran tenido como destino la producción.

La desestabilización económica provocada desde el mismo gobierno logró ser parcialmente controlada en los meses sucesivos, luego del cambio de ministro. El año finalizó con una inflación total del 183%. El grave déficit del Estado equivalió al 15% del producto. Sin embargo, el sector externo continuó siendo el foco de mayor preocupación, dadas la caída en las reservas del país y la acumulación de saldos comerciales negativos.

La combinación de políticas incongruentes, fuertes presiones sectoriales contradictorias, un débil Poder Ejecutivo y una clara campaña de desestabilización política —los planes económicos del futuro gobierno ya estaban siendo elaborados desde comienzos de 1975— contribuyó al clima de desorden económico que precedió al golpe de Estado de marzo de 1976.

Si bien hacia el final del gobierno peronista la coyuntura parecía de una gravedad excepcional, la capacidad productiva del país se encontraba intacta, el endeudamiento externo guardaba aún una relación razonable con el tamaño de la economía y los desafíos del proceso de industrialización todavía podían ser atacados con posibilidades de éxito.

EL CONFLICTO POLÍTICO Y SOCIAL

La comprensión de la evolución económica entre mediados de las décadas del 50 y del 70 requiere un abordaje multidisciplinario. Resulta imposible explicar determinados procesos

si no se atiende a la interacción de los desequilibrios económicos con los avatares políticos y sociales.

Sólo con perspectiva histórica se pueden entender las percepciones de los actores de la época: el malestar expresado a través de múltiples formas por partidos, sindicatos, corporaciones e intelectuales respecto de la situación del país. La extrema politización que tiñó numerosas decisiones que afectaron la economía a partir de la confrontación peronismo-antiperonismo. La paralela ideologización de las Fuerzas Armadas en relación con el conflicto comunismo-anticomunismo, que las llevó a encarar cruzadas anticomunistas sin que existieran corrientes políticas de ese signo con peso específico en la escena política. Y, paralelamente, el surgimiento de grupos contestatarios que adoptaban como modelos de lucha que se debían imitar a países con estructuras económicas, sociales y culturales radicalmente diferentes de la Argentina.

La inestabilidad política aumentó la imprevisibilidad de las reglas de juego económicas. La incertidumbre del mediano plazo se constituyó en una forma de funcionamiento económico que, a pesar del contexto de crecimiento, afectó negativamente los comportamientos de empresarios y funcionarios, reduciendo la disposición inversora de largo plazo, estimulando la propensión al consumo a expensas del ahorro y debilitando el potencial de crecimiento económico.

Buena parte de las políticas intervencionistas que se aplicaron en el período no fueron originales: habían sido implementadas en otras regiones del planeta —también en países desarrollados— con éxito considerable. La protección a la industria doméstica, los subsidios a determinadas ramas industriales, la orientación pública del crédito, el apoyo a la actividad exportadora manufacturera, eran herramientas de uso frecuente en el capitalismo de posguerra. Sin embargo, en el caso argentino, los efectos positivos, comparados con los recursos empleados, fueron considerablemente menores.

Algunos autores han llamado “proteccionismo frívolo” a la forma que adquirió en América latina el respaldo hacia la industria local: no se intentó fijar metas en materia de productividad para un empresariado que disfrutó de grandes ventajas debido a las condiciones de producción que le garantizó el Estado nacional. Incluso el trato hacia las compañías multinacio-

nales adoleció de los mismos problemas: se permitió el acceso al mercado local, sin fijar prioridades, límites o condiciones que potenciaran el impacto positivo del ingreso del capital extranjero. El sector privado, conformado por sectores muy heterogéneos, se encontraba amparado de presiones competitivas y sin exigencias sistémicas. El resultado fue la dificultad del sector industrial en su conjunto para participar equilibrada-mente en el comercio mundial.

La economía mixta no estaba adecuadamente articulada: no existían líneas de acción de largo plazo desde el sector público que sirvieran para orientar la acción privada y, a su vez, los empresarios apostaban menos a las ganancias que obtuvieran a través de los mecanismos de mercado que a los beneficios que se podían desprender de las regulaciones emanadas del Estado, que no siempre guardaban coherencia y que en muchos casos respondían a demandas específicas de sectores de interés.

La puja distributiva a lo largo del período será un factor de enorme significación. El comportamiento distribucionista del justicialismo a partir de la captación de parte de la renta agraria, si bien atenuado, continuó en los sucesivos gobiernos. Este elemento permitió elevar los estándares de vida y de ingresos de amplios sectores urbanos, más allá de la productividad realmente lograda en sus actividades específicas. La presencia central y decisiva del Estado en este proceso favoreció actitudes rentísticas de los diversos actores sociales, que basaban sus estrategias en obtener transferencias de riqueza a través de la intervención pública, más que en el incremento de la productividad sectorial.

Las expansiones y contracciones económicas constituyeron también oportunidades para redistribuir la riqueza: los frecuentes movimientos en los precios relativos, los saltos cambiarios, los golpes inflacionarios, crearon buenas oportunidades de ganancias especulativas, que superaban los resultados obtenidos por medio de laboriosos emprendimientos productivos.

Las propias políticas económicas mostraban fuertes incongruencias entre los propósitos enunciados y las acciones explícitas: por ejemplo, los ajustes “estabilizadores”, que fracasaban sistemáticamente en el intento de frenar la inflación —incluso la aceleraban—. En realidad, el objetivo puntual era mejorar la balanza comercial. No se confesaba, por obvias razo-

nes políticas, que se deseaba reducir el peso económico del Estado y bajar el salario real.

A partir del gobierno de la Revolución Argentina comenzó a estrecharse la relación entre el Estado y los grandes empresarios. Esto se expresó en las políticas públicas orientadas específicamente a promocionar a un grupo de aproximadamente doscientas grandes empresas nacionales y extranjeras y en las estrechas relaciones que establecieron diversos conglomerados económicos con figuras del elenco militar y luego político.

El desarrollo económico no fue homogéneo. Hubo una fuerte disparidad de tasas de crecimiento sectorial: durante las dos décadas, el agro creció un 28%, mientras la industria lo hizo al 172%. La industria, que superaba en un 50% el producto del agro al comienzo del período, lo triplicaba al final del mismo. La productividad industrial entre 1956 y 1973 se incrementó en un 80%, mientras el total de la economía sólo lo hizo en un 35%. Es decir, se incrementó significativamente la presencia económica y política de un bloque urbano, compuesto por un heterogéneo sector industrial y poderosos sectores obreros y de capas medias. Hacia el final del período, dentro de este mismo bloque, afloraron fuertes contradicciones que impactaron decididamente en el funcionamiento de la economía.

Entre 1964 y 1974 el PBI total y el PBI industrial crecieron sin interrupción. Gracias al incremento de la producción petrolera local y al incremento de las exportaciones —primero las agropecuarias, luego las industriales— cesaron los ciclos de “stop and go”. En ese período también se acrecentó la importancia del componente tecnológico en los procesos industriales locales (ramas como la electrónica, la farmacoquímica y la de máquinas y herramientas), lo que generaba condiciones para un ulterior salto en materia de sofisticación de la producción y de proyección internacional de las ramas industriales más modernas.

El Estado fue atravesado, durante todo el período, por los conflictos que vivía la sociedad. La ausencia de consensos sustentados por poderes estables llevó a que fuera considerado un instrumento de coyuntura para apoyo de los proyectos políticos que se sucedían aceleradamente, sin poder cristalizar en una forma acabada de ordenamiento económico. Las políticas económicas fueron definidas localmente, sobre la base de las

pujas y victorias parciales de fuerzas cambiantes. Dentro de estas fuerzas, fueron cobrando creciente peso las firmas extranjeras. Los proyectos más liberalizantes, favorables a una amplia presencia del capital extranjero en la economía local, contaron con el apoyo y el beneplácito internacionales. Las Fuerzas Armadas, con una activa participación política en el período, se alejaron de las posturas económicamente más retrógradas, apoyando un crecimiento industrial y tecnológico que permitiera al país enfrentar las “amenazas externas”.

La crisis de 1975, fruto de dificultades económicas que podrían haber sido superadas en otro contexto, pero que se agudizaron violentamente a partir de un profundo conflicto social y un cuadro de descomposición política severo, opacó los trabajos logros de un proceso de industrialización y modernización de un país que aún confiaba en sus propias capacidades y recursos para alcanzar su “destino de grandeza”.

BIBLIOGRAFÍA

Bisang, Roberto, y Kosacoff, Bernardo, *Exportaciones industriales en una economía en transformación: las sorpresas del caso argentino, 1974-1990*, Buenos Aires, CEPAL, 1992.

Dagnino Pastore, José María, *Crónicas económicas. Argentina 1969-1988*, Buenos Aires, Crespillo, 1988.

Diamand, Marcelo, *Doctrinas económicas, desarrollo e independencia*, Buenos Aires, Paidós, 1973.

Di Tella, Guido, *Perón-Perón, 1973-1976*, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986.

Dornbusch, Rudiger, y Pablo, Juan Carlos de, *Deuda externa e inestabilidad macroeconómica en la Argentina*, Buenos Aires, Sudamericana, 1988.

Ferrer, Aldo, *Crisis y alternativas de la política económica argentina*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1977.

———, *La economía argentina. Las etapas de su desarrollo y problemas actuales*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1970.

Ferrer, Aldo; Brodersohn, Mario; Eshag, Eprime, y Thorp, Rosemary, *Los planes de estabilización en la Argentina*, Buenos Aires, Paidós, 1969.

Ferrucci, Ricardo, *Política económica argentina contemporánea*, Buenos Aires, Macchi, 1991.

FIEL, *El control de cambios en la Argentina*, Buenos Aires, Manantial, 1989.

Macon, Jorge, *Las finanzas públicas argentinas. Período 1950-1980*, Buenos Aires, Macchi, 1985.

Mallon, Richard, y Sourrouille, Juan, *La política económica en una sociedad conflictiva. El caso argentino*, Buenos Aires, Amorrortu, 1973.

Neffa, Julio César, *Modos de regulación, regímenes de acumulación y sus crisis en Argentina (1880-1996)*, Buenos Aires, Eudeba, 1998.

Nun, José, "Argentina, el Estado y las actividades científicas y tecnológicas". *Redes*, N° 3, Avellaneda, 1995.

Pablo, Juan Carlos de, *Economía política del peronismo*, Buenos Aires, El Cid Editor, 1980.

———, *Política antiinflacionaria en la Argentina, 1967-1970*, Buenos Aires, Amorrortu, 1972.

———, *Política económica argentina. Materiales para el desarrollo del tema según el método de los casos*, Buenos Aires, Macchi, 1984.

Peña, Milcíades, *Industrialización y clases sociales en la Argentina*, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986.

Poder Ejecutivo Nacional, *Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional*, Buenos Aires, 1973.

Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Economía, *Política para el cambio estructural en el sector público. Mensaje de los proyectos de leyes de presupuesto*, Buenos Aires, 1989.

Rapoport, Mario, y col., *Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000)*, Buenos Aires, Macchi, 2000.

Rofman, Alejandro, y Romero, Luis, *Sistema socioeconómico y estructura regional en la Argentina*, Buenos Aires, Amorrortu, 1997.

Sábato, Jorge F., *La clase dominante en la Argentina moderna. Formación y características*, Buenos Aires, CISEA/Imago Mundi, 1991.

Sánchez, Pedro, *La presidencia de Illia*, Buenos Aires, CEAL, 1983.

Schvarzer, Jorge, *La industria que supimos conseguir. Una historia político-social de la industria argentina*, Buenos Aires, Planeta, 1996.

Sikkink, Kathryn, "Las capacidades y la autonomía del Estado en Brasil y la Argentina: un enfoque neoinstitucionalista", *Desarrollo Económico*, N° 128, 1993.

Silberstein, Enrique, *Los ministros de Economía*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1971.

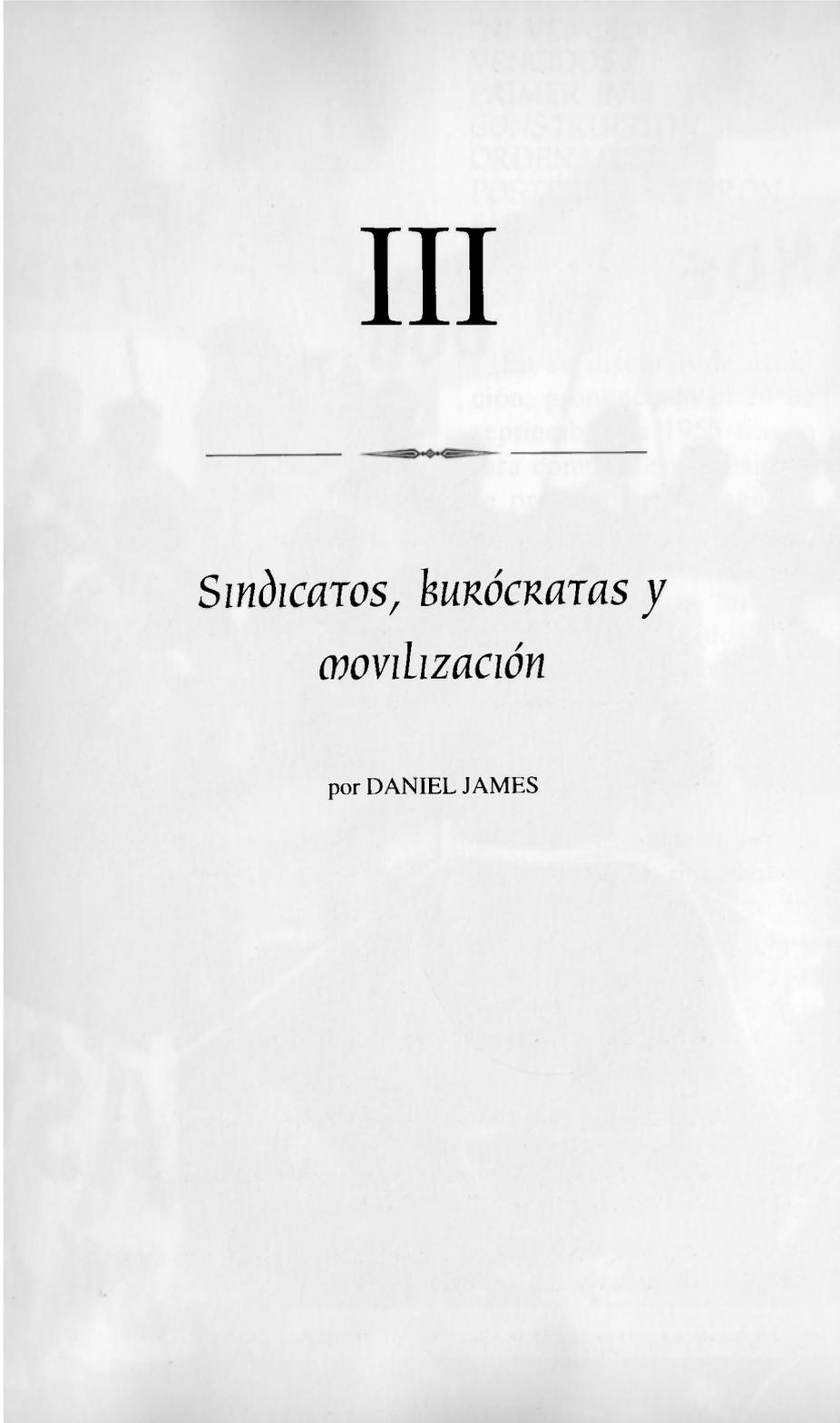
Treber, Salvador, *La economía argentina. Análisis, diagnóstico y alternativas*, Buenos Aires, Macchi, 1977.

———, *La economía argentina actual, 1970-1987*, Buenos Aires, Macchi, 1987.

Véganzones, Marie-Ange, y Winograd, Carlos, *Argentina en el siglo XX: crónica de un crecimiento anunciado*, París, OCDE, 1997.

Vitelli, Guillermo, *Los dos siglos de la Argentina. Historia económica comparada*, Buenos Aires, Prendergast, 1999.

VV.AA., *La agricultura pampeana. Transformaciones productivas y sociales*, Buenos Aires, FCE/IICA/CISEA, 1988.



III

*Sindicatos, burócratas y
movilización*

por DANIEL JAMES



de la carne en Plaza Miserere, 15-7-1964.



“NI VENCEDORES, NI VENCIDOS.” EL PRIMER INTENTO DE CONSTRUIR UN ORDENAMIENTO POSTERIOR A PERÓN ENTRE LOS SINDICATOS Y EL ESTADO

En su discurso de asunción, pronunciado el 23 de septiembre de 1955 tras la jura como nuevo presidente provisional, el general Eduardo Lonardi anunció que en la Argentina posperonista no habría “ni vencedores, ni vencidos”. Su intención era, sobre todo, tranquilizar a la masa de trabajadores peronistas preocupados por el destino de las conquistas sociales y económicas alcanzadas con Perón y de las organizaciones sindicales que las garantizaban. La lógica subyacente a la política de Lonardi con respecto al movimiento sindical peronista era clara. El presidente y sus partidarios dentro del gobierno provisional estaban dispuestos a admitir que los peronistas siguieran controlando los sindicatos. Su única salvedad era que debía tratarse de un peronismo purificado de

los vicios que lo habían corrompido y conducido a la derrota.

El ala nacionalista de la oposición a Perón coincidía con mucho de lo que se había logrado. Para ellos, el peronismo representaba un baluarte contra el comunismo. La cuestión tenía que ver, en esencia, con los límites y los excesos. Si los gremios reconocían la necesidad de mantenerse dentro de su propia esfera y la demagogia corrupta de los elementos más estrechamente asociados a Perón podía eliminarse, los sindicatos conducidos por los peronistas tendrían un papel crucial en la Argentina posperonista como órganos de control social y canales de expresión de la clase obrera. Luis Cerruti Costa, el ministro de Trabajo, adoptó en consecuencia una política de avenencia con la conducción gremial peronista. La CGT quedó en manos de ésta, lo mismo que, en un inicio, muchos de los grandes sindicatos.

El intento de Lonardi de llevar a la práctica esta política fracasaría a mediados de noviembre, y el primer mandatario sería reemplazado por su vicepresidente, el general Pedro Eugenio Aramburu, líder del campo militar antiperonista de línea dura. Varias razones explicaban ese fracaso. La posición de Lonardi era minoritaria entre los militares y las fuerzas cívicas que habían llevado a cabo la Revolución Libertadora. El grupo dominante dentro del campo antiperonista consideraba el peronismo como una calamidad que era preciso exorcizar de todos los sectores de la sociedad argentina. Les preocupaba en especial la autoridad peronista sobre la clase obrera. En armonía con esta línea de pensamiento, grupos armados de antiperonistas se habían apoderado de muchos sindicatos en las semanas siguientes al golpe. Estos grupos eran conocidos como “comandos civiles” y estaban compuestos principalmente por activistas socialistas y radicales que habían desempeñado un destacado papel en la rebelión contra Perón. Se veían a sí mismos como una milicia civil que actuaría como un bastión contra la amenaza de un resurgimiento peronista.

De tal modo, mientras Lonardi y su ministro de Trabajo procuraban concertar con la conducción gremial peronista un compromiso que posibilitara una continuidad modificada de la situación laboral previa a septiembre, los antiperonistas intensificaban sus ataques a los locales sindicales e instaban a sus partidarios dentro del gobierno provisional a efectuar una



El general Lonardi con sindicalistas. En el extremo derecho, Augusto Vandor.

completa purga de la influencia justicialista en los gremios. Como resultado de esa situación, la conducción peronista de la CGT, encabezada por Andrés Framini y Luis Natalini, comenzó a dudar cada vez más, si no de las intenciones, sí al menos de la capacidad de Lonardi y sus seguidores nacionalistas de cumplir sus promesas. Lo cierto era que el sector nacionalista del gobierno provisional no tenía la autoridad suficiente dentro de la policía o las Fuerzas Armadas para impedir los ataques antiperonistas y la toma de locales u oponerse al arresto de una creciente cantidad de funcionarios sindicales peronistas de nivel medio.

En este contexto de tensión y recelos en aumento, surgió otro actor como figura crucial en la resolución del interregno de Lonardi. Las bases gremiales peronistas, en un principio aturdidas por el golpe contra Perón, habían demostrado en los dos meses siguientes una creciente disposición a resistir y preservar “algo que por instinto sentían estar perdiendo”. Gran parte de esa resistencia dejó a un lado a la conducción sindical

peronista. El 17 de octubre y una vez más a comienzos de noviembre se produjeron huelgas espontáneas en gran escala, como protesta por la situación nacional en general y los ataques antiperonistas contra los sindicatos en particular. A su turno, esto alarmó y fortaleció a los elementos más duros de las Fuerzas Armadas y sus aliados civiles e hizo aún más difícil para Lonardi dar el tipo de concesiones que podrían haber tranquilizado a las bases peronistas.

La CGT convocó a un paro general para el 14 de noviembre, con el fin de protestar contra la asunción del nuevo régimen. Pese a un considerable apoyo entre las bases, las nuevas autoridades reprimieron eficazmente la medida y el 16 de noviembre el gobierno intervino la CGT y todos sus sindicatos miembros y detuvo a muchos dirigentes.

El interregno de Lonardi, en consecuencia, puso de relieve la existencia de una conducción sindical peronista que estaba profundamente confundida y sacudida por acontecimientos que le costaba entender y le era imposible controlar. Al mismo tiempo, la clase obrera peronista había comenzado a exhibir una firme voluntad de defender sus sindicatos. Esta voluntad sería un factor crucial en el desarrollo de las relaciones entre los gremios, los trabajadores y el régimen militar en el período siguiente.

EL GOBIERNO DE ARAMBURU, LA RESISTENCIA OBRERA Y LA SUPERVIVENCIA DEL PERONISMO

El nuevo gobierno provisional del general Pedro Eugenio Aramburu y el vicealmirante Isaac Rojas se dispuso a abordar de inmediato lo que para ellos era un problema nacional decisivo: la persistente influencia peronista en todos los niveles de la sociedad argentina. Según su criterio, el peronismo era una aberración que era preciso borrar de la conciencia nacional. En la esfera de la clase obrera y sus instituciones, esto significaba varias cosas. En el nivel más concreto, las autoridades intentaron proscribir a toda una generación de funcionarios gremiales peronistas. El decreto 7.107 excluyó de la actividad sindical a todos aquellos que habían tenido cargos representativos entre 1952 y septiembre de 1955, así como a quienes eran indagados

por una comisión especial creada para investigar los delitos e irregularidades cometidos por los funcionarios justicialistas. De manera similar, quedaron proscriptas todas las actividades políticas peronistas.

Al mismo tiempo, esta ofensiva antiperonista se extendió a la base fabril. Inmediatamente después de la intervención de la CGT en noviembre de 1955, el Ministerio de Trabajo del nuevo régimen declaró disueltas todas las comisiones internas de delegados. A principios de 1956, por lo tanto, la situación sindical había cambiado radicalmente. La CGT estaba bajo el control de un interventor militar, el capitán Patrón Laplacette, que sería asistido por un consejo asesor de figuras antiperonistas de la época anterior a 1945. Además de la detención de muchos miles de funcionarios justicialistas de alto y mediano rango y de la proscripción de varios millares de ex activistas, se habían designado interventores militares y antiperonistas en todos los sindicatos. El sueño del gobierno militar y sus asesores civiles era que, luego de una etapa de necesaria purga, el terreno quedara despejado para la elección de dirigentes gremiales verdaderamente “democráticos”.

El sueño se demostraría irrealizable. Hacia 1957 el gobierno terminaría por reconocer que no había logrado borrar la influencia peronista. Las raíces de este fracaso residen en la naturaleza de las políticas del gobierno militar y en la virulencia de su ofensiva antiperonista. El régimen estaba decidido a llevar esa ofensiva al nivel más elemental de la experiencia obrera en el proceso de producción. El decreto 2.739 autorizaba a la patronal a eliminar lo que definía como “obstáculos a la productividad”. Junto con el ataque a las comisiones internas, la cuestión de esos “obstáculos” se convertiría en una piedra de toque crucial en la mente de los trabajadores, a través de la cual éstos podrían apreciar las consecuencias concretas del cambio de autoridad política nacional para su vida laboral.

Para la patronal y el gobierno la cuestión era fundamental. La industria argentina se caracterizaba por una situación de hecho que daba a las comisiones internas un amplio margen de control del proceso productivo. Éste era el legado de la posición singular del movimiento sindical dentro del peronismo y se había incorporado a los convenios colectivos firmados entre 1946 y 1948. Este poder de la base fabril impedía eficaz-

mente la implementación de nuevos ordenamientos laborales racionalizados que podían incrementar la productividad del trabajo. El intento del nuevo gobierno y de los empleadores de transformar esta situación chocó con una resistencia generalizada de los trabajadores, arraigada en el desarrollo de una cultura fabril específica durante la era peronista. Esa cultura traducía la nueva posición social y política de los trabajadores dentro de la sociedad argentina en una serie de supuestos y afirmaciones concernientes a lo que la patronal podía y no podía demandar legítimamente a su personal. Para los trabajadores, las prácticas y disposiciones que los empleadores y el Estado ahora consideraban tan objetables eran una salvaguardia crucial de la calidad de vida en las fábricas. Como tales, eran emblemáticas de un aspecto decisivo del significado de la experiencia peronista para la clase obrera: la letra menuda de la realidad cotidiana que subyacía a las abstracciones más vagas de la retórica justicialista.

Para defenderse a sí mismos del ataque contra los sindicatos y las condiciones fabriles, los trabajadores iniciaron el proceso de reorganización espontánea y localizada que la cultura política peronista llegaría a conocer como “la resistencia”. Frecuentemente cimentada en comités de base extraoficiales y con una diversidad de formas de accionar que iban desde el sabotaje hasta las huelgas salvajes y el trabajo a desgano en distintos sectores, esta lucha confirmó la dominación peronista de la clase obrera. Cuando el gobierno convocó a elecciones para reconstituir las comisiones internas a fines de 1956, en la mayoría de los casos fueron elegidos delegados peronistas.

No hubo, entonces, un momento de vacilación en lo que se refiere a la lealtad al peronismo. Ni socialistas ni comunistas pudieron desafiar eficazmente esa fidelidad. El gobierno de Aramburu y Rojas, con sus ataques a las comisiones internas, su generalizado revanchismo en la base fabril y la ofensiva contra las condiciones laborales, expresaba con mucha claridad para los trabajadores lo que estaba en peligro de perderse y el contraste con la época de Perón. De ese modo, reforzaba la identificación de Perón y el peronismo con las experiencias obreras concretas.

Las luchas defensivas de 1956 y 1957 pusieron en primer plano una nueva camada de dirigentes gremiales más jóvenes

que llenaron el vacío generado por la proscripción de la generación anterior a 1955. Esta nueva generación tenía estrechos lazos con las bases y disfrutaba del prestigio que se desprendía de la dureza y las penurias del activismo sindical en esos años.

Dos serían los principales desafíos que estos dirigentes enfrentarían en 1957 y 1958. El primero era negociar eficazmente con la patronal y las autoridades nacionales, para lograr expandir y consolidar los espacios institucionales que se les concedían a regañadientes. Hacia fines de 1956 varios sindicatos volvían a estar a cargo de gremialistas peronistas luego de celebrar elecciones; otros se les sumarían en 1957, cuando el régimen terminó por reconocer la inevitabilidad de una constante y fuerte presencia peronista. Algunos de los gremios normalizados, tanto peronistas como no peronistas, formaron la Comisión Intersindical a principios de 1957. Este organismo convocaría a varias importantes huelgas en el transcurso de ese mismo año. Más adelante, siempre en 1957, el interventor militar de la CGT llamó a un congreso normalizador. Los socialistas y otros antiperonistas controlaban sindicatos como los

“Instrucciones Generales Para los Dirigentes” del Comando Superior Peronista

“Plan de Acción

“La idea operativa es la siguiente:

- ”1. Resistencia civil por las fuerzas cívicas y sindicales organizadas.*
- ”2. Mientras se realiza la resistencia, debe activarse la organización y perfeccionar lo existente en forma que (...) la resistencia se extienda a todo el país.*
- ”3. Cuando el desgaste sea suficiente y la organización adecuada se paralizará el país, tentando una decisión final.*
- ”4. Para el caso de que aun paralizado el país, la canalla resistiera (...) deben irse preparando los medios para descargar la guerra de guerrillas en todas partes. Para esa ocasión debe contarse con las fuerzas del Ejército, Gendarmería, Policía, etc., que se encuentren en acuerdo con nosotros (...)”*

Fuente: Perón-Cooke, *Correspondencia*, vol. 2.

de empleados de comercio, bancarios, personal civil de la nación y empleados municipales. Cuando estos gremios se vieron en minoría, abandonaron el congreso y constituyeron los 32 Gremios Democráticos. Los restantes sindicatos, peronistas en su abrumadora mayoría, formaron entonces las 62 Organizaciones. La creciente división de la sociedad argentina entre peronistas y antiperonistas, que el régimen militar había esperado convertir en cosa del pasado, encontraba de ese modo expresión institucional dentro del movimiento sindical. Las 62 Organizaciones representaron para los gremialistas peronistas la primera organización justicialista completamente legal desde el derrocamiento de Perón, y la utilizarían para coordinar su accionar y presionar al gobierno tanto en el campo sindical como en la esfera política más general. En rigor de verdad, éste era precisamente el segundo gran desafío que enfrentaba la nueva generación de dirigentes gremiales.

El término “resistencia”, que fue un punto crucial de referencia en la cultura política peronista, significaba algo más que la mera alusión a la defensa de las condiciones y la organización dentro de las fábricas. En el folclore del movimiento, la resistencia fabril estaba estrechamente asociada a la resistencia en otros terrenos. En la conciencia popular peronista la resistencia evocaba un conjunto diverso de respuestas que iban desde la protesta individual, a través del sabotaje personal y actividades clandestinas más organizadas, hasta el intento de levantamientos militares. La meta última de esta gama de acciones se sintetizaba en la consigna “Perón vuelve”. Muchos activistas peronistas concebían la resistencia desde un punto de vista insurreccional. El exponente más consumado de esta perspectiva era el delegado personal de Perón en esos momentos, John William Cooke (véase el capítulo VIII).

Para muchos militantes, el dilema radicaba en el hecho de que el éxito mismo de la resistencia en los sindicatos estaba cambiando el contexto dentro del cual debía actuar el movimiento. El gobierno se retiraba y abría posibilidades de actividad legal dentro de las estructuras existentes. No obstante, en el movimiento eran muchos los que rechazaban esa opción táctica, porque dejaba a un lado el derrocamiento del régimen y el retorno de Perón. El punto focal de esta tensión se centró en las elecciones presidenciales convocadas para febrero de 1958.

Arturo Frondizi había cortejado abiertamente al peronismo para obtener su voto. Para los dirigentes sindicales peronistas, apoyar su candidatura era una opción con muchos atractivos. Frondizi había prometido la reconstitución de la CGT, había impulsado la convocatoria de elecciones en todos los sindicatos aún no normalizados y era partidario de la vuelta a un fuerte sistema de negociaciones colectivas basado en sindicatos nacionales centralizados, de acuerdo con la estructura existente durante el régimen de Perón. El contraste con el gobierno militar parecía evidente. Este último había emitido el decreto 9.270, que garantizaba la representación de las minorías en la conducción sindical y el reconocimiento de varios sindicatos con iguales derechos de negociación en una misma rama industrial, y había prohibido toda actividad gremial que se definiera como política.

En este contexto, el llamado de muchos sectores de la resistencia a abstenerse o votar en blanco tenía poco que ofrecer a los activistas sindicales de las 62 Organizaciones. En cambio, una victoria del candidato “no continuista”, Frondizi, contribuiría a consolidar las posiciones que habían arrancado al régimen militar. Esa fue la lógica que Perón aceptó al ordenar a sus seguidores que votaran por el candidato de la Unión Cívica Radical Intransigente en las elecciones de febrero de 1958.

LOS AÑOS DE FRONDIZI: LA LÓGICA EMERGENTE DEL PRAGMATISMO INSTITUCIONAL

El gobierno de Arturo Frondizi disfrutó de una tregua inestable con los sindicatos durante sus primeros ocho meses en el poder. Las bases peronistas, en particular, habían salido del régimen militar con una confianza muy robustecida en sus propias fuerzas, fundada en su comprobada capacidad de sobrellevar la represión militar y recuperar los sindicatos. Esta elevada autoconfianza se reflejaba en una sostenida oleada de militancia. Alentados por la nueva situación institucional representada por un presidente que debía ese cargo a sus votos, los trabajadores peronistas lanzaron una cantidad creciente de huelgas. Sólo en la Capital Federal, en 1958, se perdieron más de seis millones de horas de trabajo a causa de esas medidas de fuerza.

Al mismo tiempo, Frondizi cumplió una de sus principales promesas de campaña y sancionó la ley 14.455, de asociaciones profesionales, que en muchos aspectos se basaba en el Código del Trabajo peronista. Esta ley permitía el reconocimiento de una sola entidad negociadora en cualquier rama industrial y de ese modo daba por terminado el intento del régimen de Aramburu de implementar una negociación con varios sindicatos por rama. La nueva ley también abolía la representación de las minorías en la conducción sindical, otra característica de la política gremial del gobierno militar. Se restablecía el tradicional sistema peronista por el cual la lista ganadora tomaba el control de todo el sindicato. También se autorizaba a los empleadores a retener la cuota gremial de sus trabajadores por cuenta y orden de los sindicatos. Las elecciones realizadas en muchos sindicatos de acuerdo con las disposiciones de la nueva ley dieron por resultado el triunfo de las listas peronistas en todos los gremios industriales de importancia. Para terminar, Frondizi prometía el restablecimiento de la CGT una vez que se completara ese proceso electoral.

La promesa de estabilidad en el frente laboral que parecían brindar esos primeros meses se disipó rápidamente. En enero de 1959 Frondizi, luego de negociaciones con el FMI para obtener un préstamo de emergencia, anunció un plan de estabilización que reducía de manera drástica las protecciones arancelarias, devaluaba el peso, aumentaba la mayoría de los precios controlados y prometía un virtual congelamiento salarial. Parte del acuerdo también implicaba la privatización del Frigorífico Nacional Lisandro de la Torre. La respuesta del movimiento obrero a estas medidas iba a conducirlo a una serie de encarnizadas acciones defensivas en el transcurso de 1959 y 1960. La primera de ellas fue la ocupación del mencionado frigorífico por su personal para protestar contra el decreto de privatización. De hecho, en 1959 se perdería una cantidad sin precedentes de días de trabajo a causa de las huelgas, emprendidas por los trabajadores para defenderse del impacto del plan económico de Frondizi. A corto plazo, las medidas gubernamentales envenenaron las relaciones laborales. Tanto los sindicatos peronistas como los no peronistas se encontraban en una situación desventajosa al enfrentarse con un gobierno respaldado por las Fuerzas Armadas y dispuesto a usar el poder del Estado

John William Cooke evalúa para Perón la actuación de los dirigentes sindicales ante la huelga general decretada en solidaridad con los trabajadores del Frigorífico Lisandro de la Torre

“(...) pero mantienen su gravitación los dirigentes importantes: Vandor, Olmos, Framini... el equilibrio de fuerzas y la gravitación de los dirigentes de primera categoría no parecen haberse alterado después de los episodios recientes. Vandor, detenido el día domingo de la huelga, aparece encabezando el sector más duro y tiene, además de sus méritos personales, la fuerza de contar con la solidaridad de su gremio, ratificada en una asamblea general realizada (...)”

Fuente: Carta de Cooke a Perón, 5 de febrero 1959, Perón-Cooke, *Correspondencia*, vol. 2.

para sostener su política económica. Muchos gremios volvieron a ser intervenidos durante 1959. La lucha también era desigual porque, con la aguda recesión provocada por el plan de estabilización, la posición negociadora de los sindicatos había quedado muy debilitada. El resultado fue una serie de derrotas que desmovilizaron y pusieron a la defensiva al movimiento obrero. En 1960 y 1961 la cantidad de huelgas declinó drásticamente.

Los sindicatos peronistas experimentaron estos acontecimientos como una traición. A corto plazo los sucesos señalaron, sin duda, el fin de cualquier posibilidad inmediata de implementar el programa económico desarrollista, basado en una alianza nacional policlasista con inclusión de una fuerte presencia sindical. Para muchos peronistas, la “traición” de Frondizi era una prueba de que su renuencia con respecto a la decisión original de apoyarlo estaba bien fundada. Frondizi pasaría la mayor parte del tiempo que le quedaba en el gobierno tratando de convencer a los dirigentes gremiales peronistas de su buena fe y su compromiso permanente con las ideas de desarrollo “nacional y popular”.

Es importante subrayar la complejidad de la situación que enfrentaba la mayoría de los sindicalistas —tanto peronistas

como no peronistas— en esos tiempos. Para los peronistas, en particular, el atractivo del proyecto de Frondizi había tenido dos caras. Existía, por cierto, un aspecto pragmático. La ley 14.455 era esencial para el restablecimiento de un movimiento gremial centralizado y bien financiado. Había además muchas otras ventajas institucionales y prácticas que hacían al gobierno constitucional de Frondizi preferible al régimen militar precedente. De tal modo, los dirigentes gremiales se veían en la necesidad de considerar seriamente el efecto de sus acciones sobre la supervivencia del gobierno frondizista. Y estaban muy al tanto de las presiones militares antiperonistas sobre el presidente.

De igual importancia, sin embargo, era lo que podríamos llamar una afinidad ideológica subyacente entre concepciones clave del desarrollismo y ciertos dogmas fundamentales de la ideología justicialista formal. La retórica desarrollista e industrialista de Frondizi abrevaba en una tradición de larga data del nacionalismo económico argentino que incluía al peronismo. Aun la tardía adhesión del presidente a la idea de la importancia de los capitales extranjeros podía encontrar un precedente en algunas políticas de los últimos años de Perón (el contrato con Standard Oil y el acuerdo con Kaiser Industries). El desarrollismo también compartía con el peronismo ciertas concepciones básicas sobre los beneficios de la armonía social y la humanización de las relaciones entre capital y trabajo. Más específicamente, Frondizi y sus socios hacían mucho hincapié en la necesidad de que los trabajadores, a través de fuertes sindicatos independientes, cooperaran con otros “factores de poder” como la Iglesia y la patronal.

La afinidad entre elementos centrales de la filosofía desarrollista y concepciones que podían encontrarse en la ideología justicialista fue un factor crucial que apuntaló las acciones sindicales durante el gobierno de Frondizi y sus sucesores. El hecho mismo de que los sindicalistas consideraran como una “traición” las políticas del presidente en 1959 indica una persistente creencia en la eficacia de las ideas traicionadas. La búsqueda de una u otra versión de este proyecto de desarrollo iba a ser un fundamento estable de la actividad política y social de los sindicatos peronistas a lo largo de la década siguiente. Frondizi y sus partidarios argumentarían que el plan de estabi-

lización fue una necesidad temporaria y que las concesiones al capital extranjero eran imprescindibles para romper las ataduras del subdesarrollo. Consideraciones cada vez más pragmáticas llevarían a los dirigentes gremiales a dar al presidente el beneficio de la duda en esta cuestión.

Una importante minoría militante dentro del peronismo y la clase obrera se resistiría a esta lógica práctica. Apoyados en la experiencia y los valores de la resistencia, denunciaron el compromiso con Frondizi. Esta posición se sostenía de una interpretación literal y selectiva de la ideología y la experiencia peronistas que no se remontaba al Perón de los contratos con la Standard Oil sino al de la privatización de los ferrocarriles de propiedad británica. Para esta minoría militante, además, la presencia del mismo Perón tenía una significación crucial como garantía de que el Estado no sería utilizado en perjuicio de los trabajadores y la nación. Esta oposición a Frondizi no elaboró una crítica fundamental de la estrategia desarrollista. Antes bien, perduró como un rechazo moral de su impacto y los asociados a ella y una insistencia en la importancia de los criterios sociales y morales para establecer las políticas estatales.

A menudo esta oposición sindical recibía el nombre de “línea dura”. Si bien sentían que la lógica del desarrollismo los ponía cada vez más a la defensiva, los “duros” conservaron una mayoría formal dentro de las 62 Organizaciones durante los años de Frondizi. Sostenidos por la aspereza misma de las luchas de 1959 y 1960 y con frecuencia representantes de sindicatos particularmente afectados por la aguda recesión de 1960 y 1961, denunciaban con pasión a Frondizi. La línea dura creía que la participación en la negociación, el compromiso y la defensa de lo que se veía como una apuesta por el sistema implicaría inevitablemente la postergación para algún vago futuro de las aspiraciones fundamentales que habían sido la base de la lucha obrera desde 1955, sobre todo la vuelta de Perón. En rigor de verdad, la política de Frondizi, expuesta sin tapujos, consistía precisamente en divorciar a Perón del movimiento y en especial de su rama gremial. En definitiva, la solución que proponían los duros para contrarrestar esta amenaza era una insistencia en las virtudes subjetivas de la dureza, la intransigencia y la lealtad y en la fidelidad a quienes habían lu-

chado y sufrido y sobre todo a Perón. La línea dura era, en última instancia, más un estado de ánimo que una posición política articulada, y esto dio a un núcleo militante del sindicalismo peronista la capacidad de sobrevivir a la desilusión de los años siguientes.

La lógica del pragmatismo terminó por imponerse. El período posterior a 1959 se caracterizó por el crecimiento de cierta resignación y desmovilización que iba a ser el telón de fondo de un proceso de burocratización de los sindicatos. Esto implicaba un cambio en la relación entre los dirigentes y las bases y en las actitudes de los propios líderes sindicales. Varios factores explican este proceso. Muchos activistas estaban desocupados e incluidos en listas negras; otros simplemente habían abandonado la actividad gremial. Quienes persistían comprobaban a menudo que sus sindicatos eran lugares crecientemente hostiles. La democracia interna de facto que había caracterizado en general la lucha sindical luego de 1955 comenzaba a cambiar de manera dramática. El fraude electoral era cada vez



Delegación argentina a la reunión de la OIT. Desde la izquierda, Augusto Vandor (con bolso de mano blanco), Francisco Pérez Leirós, Guillermo Acuña Anzorena, ministro de Trabajo, Riego Ribas, Juan Carlos Loholaberry, José Alonso, Luis Angeleri y Máximo Castillo, 5-6-1961.

más frecuente. Ahora, las conducciones gremiales nacionales también ejercían un control mucho más férreo sobre los dirigentes fabriles locales. Este tipo de control estaba acompañado por la purga de activistas de base. Los convenios firmados en 1960 y 1961 formalizaron esa creciente autoridad de la organización sindical en el nivel de las plantas. Los sindicatos firmantes de dichos convenios aceptaban muchas de las restricciones a la actividad de las comisiones internas en la base fabril que la patronal había procurado implementar durante el gobierno de Aramburu.

En parte, este proceso se fundaba en cierto grado de corrupción personal. En este período aumentaron las oportunidades de enriquecimiento o simplemente de una vida más cómoda. En una carta a Perón, John William Cooke comentaba que “de ahora en adelante habrá más represión, más cárcel, más cachiporrazos. Pero también habrá más dinero y facilidades para quienes quieran llegar a algún arreglo con el gobierno. En todos los ámbitos el objetivo será debilitar al peronismo por medio de una integración práctica”. Pero el efecto de la corrupción personal en su sentido más literal no debe exagerarse. La mayoría de los dirigentes ahora tentados por esa “integración práctica” había surgido muy poco tiempo atrás de las luchas fabriles contra el régimen militar. No estaban separados de los activistas por años de disfrute de privilegios burocráticos. Augusto Vandor, el líder de los metalúrgicos, había dejado la planta de Philips apenas cinco años antes. A decir verdad, activistas y dirigentes compartían una experiencia común en la resistencia a los militares y a Frondizi. Los activistas reconocían en los líderes a hombres como ellos, con los mismos antecedentes, aspiraciones y debilidades. Además, muchos activistas locales formaban parte ahora de las jerarquías sindicales.

La lógica de cierta avenencia era difícil de resistir. Los militantes peronistas se enfrentaban a la realidad de que a mediados de 1960 la opción insurreccional era una ilusión. El Plan CONINTES instaurado a principios de ese mismo año destruyó eficazmente la estructura clandestina de la resistencia peronista.

Al mismo tiempo, Frondizi ofreció oportunidades institucionales más concretas a los sindicatos. Además de los contratos de negociaciones colectivas firmados en 1960 y 1961, que

condujeron a la primera renegociación general de los convenios desde principios de la década del 50, el presidente también tomó algunas medidas para cumplir su antigua promesa de devolver la CGT. En 1961, las 62 Organizaciones aceptaron compartir el poder con los no peronistas en una comisión de veinte miembros encargada de convocar un congreso reorganizador.

El pragmatismo institucional presentaba sus propios desafíos a los dirigentes sindicales. El papel cumplido por los sindicatos peronistas empezaba a mostrar numerosas facetas. Por un lado, era evidente que los gremios tenían que representar las necesidades institucionales de sus organizaciones y los intereses económicos de sus afiliados. Esto implicaba negociar con la patronal, el Estado y los sindicatos no peronistas. Al mismo tiempo, los gremios se habían convertido en la principal expresión del peronismo en la Argentina y, como tales, tenían a su cargo la negociación de las demandas del movimiento con otros actores del sistema político institucional. La proscripción legal del justicialismo político no hacía sino reforzar esta tendencia. Por último, los dirigentes sindicales debían negociar *dentro* del peronismo con otros sectores del movimiento. Luego de 1960, esto significaba esencialmente dos cosas. Por una parte, tratar con el conjunto de partidos neoperonistas que habían surgido con la intención de reclamar el legado político asociado al voto peronista. También significaba tratar con las diversas figuras políticas y organismos oficiales designados por Perón en diferentes momentos para hablar en su nombre y representar las necesidades políticas del movimiento.

La primera prueba real de la capacidad de los dirigentes sindicales para desempeñar eficazmente esos múltiples roles se produjo en las elecciones de mitad del mandato presidencial, en marzo de 1962. Dentro de la dirigencia sindical prevalecía la idea de que el peronismo debía intentar presentar sus propios candidatos en vez de seguir recurriendo a la táctica del voto en blanco de elecciones anteriores. Cualquier campaña justicialista dependería indudablemente de la capacidad de los sindicatos de movilizar a su electorado peronista. La pregunta crucial era quién sería el principal beneficiario de las recompensas. Las figuras del justicialismo político esperaban convencer a los sindicatos y a Perón de la necesidad de dar los

votos a los partidos neoperonistas. Los propios sindicatos estaban decididos a imponer una mayoría de candidatos de su sector. Aún más importante, el líder de los trabajadores textiles, Andrés Framini, iba a ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

El propio Perón era, a lo sumo, ambivalente con respecto a esta perspectiva. Una campaña electoral exitosa apoyada en los sindicatos confirmaría a éstos como un sector con poder de negociación dentro de la política argentina y los mostraría hasta cierto punto independientes de su control.

Para terminar, los sindicatos debían ser conscientes de las posibles consecuencias negativas de su intervención directa en esa campaña. El propio Frondizi apostaba sin duda a limitar el éxito de cualquier participación peronista. Esto dejaría a los sindicatos, en particular, con pocas alternativas salvo seguir adaptándose a los movimientos del presidente. Éste advertía las probables implicaciones que tendría una victoria peronista en lo tocante a la respuesta de las Fuerzas Armadas. En rigor, contaba con esta amenaza implícita para convencer a los gremios de que no presentaran sus candidatos. A su juicio, los sindicatos también debían comprender lo que podrían perder si su participación electoral provocaba una respuesta militar.

Se trataba de un juego complejo, pero en definitiva los líderes sindicales de las 62 Organizaciones consideraron las elecciones como una oportunidad única para confirmar el peso del gremialismo tanto dentro del peronismo como en el sistema político argentino. Aun si los resultados de los comicios indu-



Andrés Framini se dirige al plenario de la CGT de La Plata para leer el mensaje que se proponía dirigir al pueblo de la provincia de Buenos Aires en carácter de gobernador. A su lado, Augusto Vandor y atrás Vicente Solano Lima, marzo de 1962.

cían a los militares a intervenir, los sindicatos se habrían establecido como una fuerza con la cual estaría obligado a negociar cualquier nuevo régimen. También otros cálculos entraban en sus consideraciones. Es indudable que la línea dura juzgaba la participación en las elecciones como una forma potencial de deponer a Frondizi. En las bases peronistas había asimismo un profundo deseo de votar candidatos justicialistas como un modo de protestar contra el gobierno frondizista. El resultado de los comicios fue una resonante victoria peronista; sus candidatos ganaron ocho de las catorce gobernaciones en juego, incluida la de la provincia de Buenos Aires. Frondizi anuló de inmediato las elecciones e intervino esas provincias, pero esto no fue suficiente para salvar su presidencia. El 29 de marzo, con apoyo militar, juró como primer mandatario el presidente provisional del Senado, José María Guido, que a continuación formó un gabinete decididamente antiperonista.

Las elecciones de marzo demostraron con claridad el nuevo estatus del sindicalismo peronista. Dentro del movimiento justicialista habían logrado imponer sus candidatos a otros sectores. En términos más generales, la expresión política de la clase obrera peronista estaría ahora muy atada al movimiento sindical. El líder que surgió de la campaña electoral como figura dominante dentro del sindicalismo peronista —y por extensión dentro del peronismo en su conjunto— fue Augusto Vandor. Como jefe de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el sindicato industrial más poderoso del país, había sido en gran medida responsable de la organización de esa campaña. La victoria en las elecciones había sido posible gracias a la infraestructura y los recursos económicos provistos por la UOM y otros sindicatos peronistas. En la prensa y en el movimiento sindical, tanto amigos como enemigos comenzaban a utilizar con creciente frecuencia el término “vadorismo”.

LOS AÑOS VANDORISTAS: APOGEO DE LA BUROCRACIA SINDICAL

Augusto Vandor llegó a simbolizar el proceso de integración del aparato sindical al sistema político institucional argentino y su corolario de burocratización y uso creciente de métodos

autocráticos para controlar la vida interna de los sindicatos. El término “vadorismo” se convirtió en sinónimo de negociación, pragmatismo y aceptación de la *Realpolitik* que gobernó la sociedad y la política argentinas luego de 1955. Para los comentaristas políticos y el público en general, Vandor personificó la transformación del peronismo y sus sindicatos, que pasaban de una postura de franco antagonismo con respecto al statu quo posterior a 1955 a una actitud de aceptación de la necesidad de acomodarse a él y encontrar un espacio dentro de sus límites. Políticamente, el vadorismo implicaba el uso del poder y la representatividad que los sindicatos debían a su posición de fuerza dominante dentro del peronismo —como único sector plenamente legal dentro del movimiento— a fin de negociar con otros “factores de poder”.

En términos mediáticos, la imagen de poder e influencia dentro del sistema se simbolizaba en las frecuentes conversaciones entre dirigentes gubernamentales y sindicales sobre cuestiones económicas y sociales. En un nivel informal, esta situación era reforzada por la reproducción constante de las abundantes consultas entre Vandor y sus compañeros de la conducción sindical y políticos, dirigentes empresariales, sacerdotes y jefes militares. La imagen de un Vandor en mangas de camisa y sin corbata que, en su carácter de dirigente sindical, entraba a la Casa Rosada o al Ministerio de Defensa, iba a convertirse en el elemento dominante del imaginario político de la Argentina de esa época. Continuamente reiterada por los medios, esta representación contribuyó a fortalecer la percepción de los sindicatos peronistas como una parte fundamental del sistema social y político. A su turno, los dirigentes gremiales se apresurarían a hacer suya esa imagen.

Había otras maneras de definir el vadorismo, menos neutrales desde el punto de vista emocional. Su lado más oscuro también era objeto de la atención. En este caso, la imagen proyectada recordaba el modelo de gangsterismo sindical norteamericano asociado a personajes como Jimmy Hoffa. También suscitaba la evocación del siniestro conspirador que intrigaba con potenciales golpistas en los pasillos del poder. Para los adversarios de Vandor en el movimiento sindical —los duros a quienes había marginado de las 62 Organizaciones— y para aquellos que, dentro del movimiento en su conjunto, aún acu-

dían a personas como John William Cooke en busca de orientación estratégica, el líder metalúrgico llegó a personificar la traición al espíritu de la resistencia y la esencia de un peronismo obrero radical. Esta concepción sobreviviría al apogeo del poder del líder metalúrgico y encontraría expresión en una nueva generación de activistas peronistas más jóvenes que ingresarían en grandes oleadas al movimiento a fines de la década de 1960. También tendría vigencia en las formaciones guerrilleras responsables de su asesinato el 30 de junio de 1969.

La versión más atrapante de esta visión del vandorismo fue la expresada por el escritor Rodolfo Walsh. Éste investigó un tiroteo producido en 1966 en la pizzería La Real, en Avellaneda, entre un grupo de activistas peronistas y un grupo de dirigentes de la UOM, incluido el propio Vandor. El violento enfrentamiento causó la muerte de dos de los activistas y de uno de los protegidos de Vandor, el joven líder metalúrgico Rosendo García. Walsh utilizó la investigación de este incidente para lanzar una denuncia más general sobre la naturaleza del vandorismo tal como actuaba en la UOM y había afectado la vida de militantes como Domingo Blajaquis, Raimundo Villaflor, su hermano Rolando y su compañero Juan Granato, todos ellos víctimas —sostendría Walsh— de las maquinaciones de Vandor esa fatídica noche en la pizzería. Aún más dramáticamente, Walsh afirmaría que García, protegido del jefe de la UOM, no había muerto por las balas de los activistas sino como parte de un complot deliberado del líder sindical para eliminar a un potencial rival más joven dentro del grupo de conducción. Su visión de Vandor y el vandorismo como un ejemplo de corrupción política y moral se publicó originalmente en una serie de artículos periodísticos, luego aparecidos como libro con el título de *¿Quién mató a Rosendo?*, que alcanzó gran circulación.

¿Cuál era entonces la base del poder de esta dirigencia sindical? En un nivel elemental, el poder de cualquier sindicato dependía en la Argentina de la facultad que la ley 14.455 asignaba al gobierno para otorgar personería gremial a un solo sindicato por rama industrial, lo cual aseguraba a éste el derecho a conducir las negociaciones en esa actividad laboral. La ley también regulaba la mayor parte de los demás aspectos del funcionamiento sindical. Si bien admitía una estructura fede-

rativa de organización gremial, en la práctica los sindicatos más grandes e importantes del país tenían estructuras sumamente centralizadas que concentraban el poder en una única dirigencia de nivel nacional. Estos sindicatos tenían un control casi total sobre las actividades de sus ramas y seccionales. En los hechos, ni siquiera los sindicatos que tenían una estructura federal formal garantizaban la autonomía de sus seccionales con respecto al control centralizado. La ley laboral autorizaba a las federaciones a imponer estatutos que disciplinaban severamente a los sindicatos afiliados y limitaban su capacidad de actuar de manera independiente de la federación. Así, la Ley de Asociaciones Profesionales no sólo garantizaba a las dirigencias gremiales el derecho a negociar, sin temer la competencia de sindicatos rivales, sino que también sentaba las bases de una estructura sindical que contribuía en mucho a asegurar el control centralizado *dentro* de un sindicato.

Otro motivo crucial del poder y la influencia de la conducción era el manejo de las finanzas. También en este caso los fundamentos procedían de la ley. Las finanzas gremiales tenían dos fuentes esenciales: la cuota sindical y la cuota asistencial, prevista para el mantenimiento de los diversos servicios sociales ofrecidos por los sindicatos. Una tercera fuente era la cuota empresarial, pagada por la patronal como un aporte a los fondos gremiales para el bienestar social. Por último, había cuotas extraordinarias negociadas en los convenios, que por lo común eran un porcentaje del primer salario quincenal pagado al comenzar un nuevo contrato. La Ley de Asociaciones Profesionales establecía un sistema de retención automática de estas diferentes cuotas, de la que se encargaban los empleadores. Dada la preponderancia de un tipo de estructura gremial centralizada, este sistema proporcionaba grandes recursos económicos a la dirigencia sindical. En términos esenciales, significaba que en los grandes sindicatos industriales y de empleados administrativos la cuota del afiliado metalúrgico de Córdoba, el trabajador de la carne de Rosario o el ferroviario de Tucumán era deducida por sus empleadores y depositada directamente en la cuenta bancaria del sindicato central en Buenos Aires. Las cifras del Ministerio de Trabajo muestran que el valor total de los bienes de propiedad sindical en la actividad manufacturera se calculaba en casi 600.000 millones de

pesos en 1965. El valor total de los bienes de los sindicatos ascendía ese mismo año a 4.201 billones de pesos.

En sí mismas, esas enormes sumas se asociaban, por supuesto, al gangsterismo y la corrupción cada vez más identificados con el sindicalismo peronista. La prensa oficialista y los grupos opuestos a Vandor dentro de los sindicatos ponían en circulación muchas historias sobre el desvío de esos fondos en beneficio de determinados dirigentes. Igualmente significativo, sin embargo, era el hecho de que con ese dinero se solventaba toda una gama de servicios sociales ofrecidos por los sindicatos a sus afiliados. Los fondos también facilitaban a la conducción gremial central la implementación de una política clientelista de vasto alcance. El dinero y los servicios que proveía eran la base a partir de la cual se producían las negociaciones entre diferentes sectores de la burocracia. Tenían importancia por lo que representaban en términos de puestos de trabajo, influencia y prestigio. El sistema clientelista que sustentaban en los sindicatos se basaba en una compleja red de intereses entrelazados dentro de cada gremio y en el movimiento sindical en su conjunto.

El sistema de elecciones gremiales también otorgaba a las conducciones existentes un considerable poder para descabezar los desafíos a su autoridad. La ley 14.455 instituyó una política por la cual la lista ganadora se llevaba todo. En efecto, la lista mayoritaria asumía el completo control del sindicato. En sí mismo, esto podía contribuir a aumentar la violencia que rodeaba las elecciones, dado que la lista de candidatos elegidos no sólo ocupaba todos los cargos puestos en juego sino que, una vez en ejercicio de sus funciones, procedía a instalar a sus seguidores en todo el aparato administrativo. De tal modo, cada elección implicaba también una red de oportunidades laborales. Una vez elegido un grupo, era extremadamente difícil desalojarlo, dado que la organización de los comicios ulteriores y el establecimiento de las reglas del juego tanto para los procedimientos de votación como para el reconocimiento oficial de las listas opositoras quedaban a su exclusivo cargo. El resultado era un sistema que hacía virtualmente imposible que un grupo de oposición, aunque lograra superar los obstáculos en torno de la presentación de su lista de candidatos, desplazara a las autoridades existentes por medio de elecciones.

Vandor y los otros líderes sindicales, tanto peronistas como no peronistas —que amoldaban cada vez más sus conductas a la del líder metalúrgico—, utilizaron este sistema para convertirse en decisivos interlocutores sociales y políticos dentro de la sociedad argentina. En enero de 1963 se reconstituyó formalmente la CGT. Las 62 Organizaciones tenían una clara mayoría frente a los sindicatos no peronistas. Controlaban todos los sindicatos industriales y todos salvo uno de los comités regionales de la central obrera. Hacia 1962 los 32 Gremios Democráticos, de fuerte militancia antiperonista, prácticamente habían desaparecido, mientras que la influencia comunista también estaba restringida a unos pocos sindicatos más pequeños. La mayoría de los grandes sindicatos de empleados administrativos que habían sido el núcleo de los 32 Gremios Democráticos se definía ahora como independiente. Aceptaban la realidad de la influencia peronista en el movimiento sindical y necesitaban encontrar un *modus vivendi* eficaz con ella. La CGT reconstituida representaba justamente esa posibilidad. Si bien el comité central estaba dividido en partes iguales entre peronistas e independientes, Vandor insistió con éxito en que el secretario general debía ser un peronista y colocó a miembros de esta tendencia en los puestos clave de secretario del interior y de asuntos gremiales.

El secretario general elegido con la bendición de Vandor fue el líder de los trabajadores del vestido, José Alonso. La nueva confederación afirmaba tener alrededor de 2.567.000 afiliados.

Con la recién recuperada CGT en funcionamiento y su base de poder en las 62 Organizaciones ahora consolidada, la conducción sindical peronista lanzó una campaña para buscar soluciones a las penurias económicas y sociales de sus afiliados. El gobierno de Guido había implementado un plan de estabilización similar al de Frondizi, con parecidos resultados para la clase obrera: una pronunciada recesión, alto desempleo —sobre todo en industrias tradicionales como la textil y la metalúrgica— e inflación en aumento. La primera etapa de aquella campaña culminó con el lanzamiento del llamado Plan de Lucha.

La primera fase de este plan terminó en mayo de 1963 con una semana de protesta contra la política económica del go-

bierno de Guido. Se organizó una vasta serie de acontecimientos cuya intención era fortalecer la posición del movimiento sindical como un interlocutor crucial de otros sectores de la sociedad civil. Se realizaron debates y reuniones públicas con representantes de los estudiantes universitarios, las federaciones patronales y la Iglesia, en los cuales se discutían las políticas económicas, sociales y culturales. La semana culminó con un paro general de veinticuatro horas.

Con la mejora de la situación económica en 1963 y principios de 1964, la CGT intensificó su campaña para recuperar el terreno perdido. Sus intentos de presionar al gobierno radical de Arturo Illia, que había sucedido a Guido en julio de 1963, condujeron a la implementación de la segunda fase del Plan de Lucha en mayo y junio de 1964. Esta etapa consistió en una escalada de ocupaciones de fábricas en todo el sector industrial argentino. El principal arquitecto de este plan fue Vandor, y la industria metalúrgica encabezó el número de ocupaciones. Cuidadosamente planificadas y llevadas a la práctica bajo el firme control del aparato sindical, estas medidas fueron una

La CGT explica el Plan de Lucha

“Por Qué Luchan Los Trabajadores Argentinos

”Los trabajadores luchan pues por un mundo mejor, por la conformación de una sociedad basada en la justicia social y cuyo fin sea la felicidad y el bienestar de todos los habitantes. Por la igualdad ante la ley y por la equidad necesaria para que el débil no se vea explotado. Que la única diferencia sea la capacitación, pero que tengan las mismas oportunidades y que nadie se encuentre sumergido. O sea que Capital, Gobierno, Estado y Trabajo sean puestos al servicio del hombre en la gran dimensión humanista que representa. En una palabra, que el ser humano sea el medio y el fin de toda acción.

”Por eso luchan los trabajadores (...) ante el panorama opresor (...) y como una manera y táctica de esa lucha, los trabajadores argentinos ocupan en forma pacífica las fuentes de producción y comercialización, no para utilizarlas contra el país sino para ponerlas a su servicio.”

Fuente: Declaración de la CGT, mayo de 1964, Santiago Senén González, *El sindicalismo después de Perón.*

La CGT exige un cambio de estructuras

“El avance de la ciencia y la técnica, aplicado a la solución de los problemas concretos del hombre de hoy, hace inexorable en su escala internacional una acción al respecto (...) Las tensiones sociales y políticas es reconocido que encuentran su causal verdadera en las insatisfacciones de las necesidades elementales del hombre, tanto como aquellas creadas por la civilización industrial de que formamos parte como país civilizado. El problema del subdesarrollo, entonces, es considerado como problema estratégico de primera prioridad por los países que tienen intereses económicos y defensivos en el mundo (...) La CGT sostiene la necesidad de exigir un organismo específico con participación sindical y poder de decisión al más alto nivel del Estado. Para lograr el esfuerzo concertado de la comunidad en las relaciones económicasociales, ésta sería una de las formas de participación posibles.”

Fuente: CGT, “Hacia el cambio de estructuras”, Buenos Aires, 1965.

impresionante muestra de organización y disciplina. A lo largo de cinco semanas, la CGT afirmó haber ocupado más de once mil plantas, con la participación de más de 3.900.000 trabajadores.

Con la conducción de José Alonso, la CGT asumió su papel de actor fundamental en los cruciales debates nacionales. En esos años la central obrera editó una gran cantidad de publicaciones e informes y organizó numerosas y bien publicitadas conferencias. Se crearon un departamento estadístico y una comisión de asistencia jurídica. Se restablecieron los lazos con sindicatos extranjeros y organizaciones laborales internacionales. Durante la secretaría general de Alonso, la CGT cultivó asiduamente la imagen de una central obrera avanzada y con capacidad técnica, que podía discutir científica y responsablemente el futuro de la nación. Esta postura implicaba tanto un análisis crítico de la inequidad de las estructuras económicas vigentes como una crítica de la eficacia de las formas representativas liberales. En ocasiones, esa crítica asumía una clara forma neocorporativista, ya que la representatividad de la CGT se comparaba favorablemente con la de los partidos políticos,

en cuya falta de legitimidad se hacía frecuente hincapié. Esta actitud se convirtió luego en una afirmación de la necesidad de institucionalizar esa función representativa y asegurar así al grupo social representado por la CGT —la clase obrera— el reconocimiento que merecía en las deliberaciones del Estado.

EL DOBLE JUEGO: LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE JUGAR A LA POLÍTICA

La Ley de Asociaciones Profesionales daba a la conducción sindical un poder considerable. También habría que decir que era un poder ambiguo, característica que radicaba en el papel del Estado en las cuestiones del trabajo. La legislación laboral argentina otorgaba al gobierno el control de la mayoría de los asuntos internos de un sindicato. La capacidad misma de éste de negociar con la patronal dependía de que consiguiera y mantuviera la personería gremial. La ley laboral se ocupaba de



José Alonso presenta al vicepresidente, Dr. Perette, un petitorio, 1964.

todos los aspectos del funcionamiento sindical, desde la realización de elecciones hasta la contabilidad de los recursos económicos. Regulaba la frecuencia de las asambleas generales, determinaba cuáles eran los requisitos para ser delegado y establecía el plazo previo con que debía anunciarse la realización de una asamblea. Ahora bien, el uso concreto que el gobierno en ejercicio hacía de este poder era precisamente la base de las negociaciones entre los sindicatos y el Estado. Podía tratarse de un uso sutil: la tolerancia, quizá, de algunos abusos cometidos por una conducción gremial cuyos favores el gobierno estaba interesado en cultivar. De manera alternativa, podía implicar el acoso a un sindicato hostil cuya dirigencia y sus actos constituyeran un problema político para el gobierno. Dada la vasta gama de actividades gremiales cubiertas por las regulaciones laborales, el Ministerio de Trabajo siempre podía encontrar infracciones cometidas por los sindicatos si era necesario presionar a alguna conducción gremial en particular. En última instancia, ese ministerio tenía la facultad de designar a un interventor que se hiciera cargo del funcionamiento cotidiano de un sindicato o cancelar una personería gremial. A su turno, las consecuencias de estas medidas eran calamitosas desde el punto de vista sindical. Sin personería no era posible cobrar las cuotas, lo cual tenía un efecto inmediato sobre los servicios sociales y las tareas administrativas básicas del sindicato y amenazaba todo el sistema clientelista y de empleo.

El hecho de que una parte tan grande del funcionamiento sindical normal estuviera sujeta a esa estrecha supervisión potencial del gobierno de turno implicaba una inevitable “politización” de los asuntos gremiales en la Argentina. Obligaba a los líderes sindicales a interesarse en el carácter del gobierno nacional: su actitud potencialmente amistosa u hostil hacia ellos. Por sí mismo, éste era un factor importante que contribuía a explicar el proceso de “integración” sufrido por los sindicatos peronistas en esos años; en efecto, inducía vigorosamente a la conducción sindical a adoptar un realismo pragmático. Sin embargo, vale la pena señalar que ello no implicaba simplemente la vulnerabilidad de los sindicatos. La situación era bilateral. El gobierno, resuelto a ampliar su control legal de los gremios, podía chocar con la determinación sindical de

procurar su desplazamiento del poder. En marzo de 1966 el gobierno de Arturo Illia promulgó el decreto 969, modificatorio de la Ley de Asociaciones Profesionales. La disposición representaba un ataque en toda la línea contra las facultades de la dirigencia sindical, ya que imponía reglas exigentes en beneficio de la democracia interna, debilitaba la capacidad financiera de las centrales gremiales y también restringía el uso de sus fondos para lo que llamaba propósitos abiertamente políticos. Enfrentados a semejante ataque estratégico al centro del poder sindical, los gremios peronistas replicaron del mismo modo. Gran parte de sus negociaciones con figuras militares en las últimas etapas del gobierno de Illia y su intransigente hostilidad hacia él deben verse bajo esa luz.

Los sindicatos peronistas también cumplían una función más específicamente política que se deducía de su papel como principal fuerza organizadora del movimiento justicialista en su conjunto. Esto implicaba su participación en lo que se ha llamado el “doble juego”, consistente en representar a sus afiliados en la lucha por las demandas económicas y al movimiento peronista en sus conflictos y maniobras con otras fuerzas políticas argentinas. Este doble juego había sido claramente visible en las elecciones de marzo de 1962. En los años siguientes serían cada vez más notorios la tensión y el conflicto que este papel generaba dentro del movimiento justicialista y en las relaciones con el propio Perón. La tensión se centraba en el intento de la conducción sindical que rodeaba a Vandor de afirmar su dominación del movimiento peronista e institucionalizarla en una expresión política aceptable para las otras fuerzas actuantes en el sistema político argentino. Perón estaba resuelto a contrarrestar este desafío implícito a su posición como autoridad última y exclusiva del movimiento que llevaba su nombre. Entre 1962 y 1966 Perón realizaría esfuerzos sistemáticos por imponer en la Argentina una multitud de instituciones políticas peronistas que le respondieran directamente y limitaran la autonomía política del sector gremial.

Por lo común, se ha dicho que el proyecto vandorista implicaba la construcción de un partido obrero. Esto significaba la constitución de un partido político basado en los sindicatos, según el modelo de los partidos laboristas y socialdemócratas europeos. Sin lugar a dudas, ese proyecto podía reivindicar

ciertas raíces históricas dentro del peronismo, particularmente la creación del Partido Laborista en 1945. En algunos aspectos no era más que un desarrollo de la posición de facto en que se encontraron los sindicatos luego de 1955. El propio Vandor no tenía, en verdad, demasiados deseos de teorizar este proyecto. El dirigente sindical Miguel Gazzera, uno de sus íntimos colaboradores, señaló que aquél “estaba más interesado en los detalles planteados por una oportunidad determinada que en cuestiones de estrategia general”.

Para Vandor, el problema fundamental en juego no era una cuestión filosófica sobre la representación laboral sino, antes bien, el equilibrio interno de fuerzas dentro del peronismo. Si en sus relaciones con el Estado y otros “factores de poder” los sindicatos tenían que afirmar su derecho a actuar más allá de la esfera estrictamente económica de las negociaciones colectivas, también debían plantear una pretensión de hegemonía dentro del movimiento justicialista. Esta pretensión chocaba tanto con los grupos neoperonistas como con el ala política oficial del movimiento. Por otra parte, también significaba una demanda al menos implícita de independencia relativa con respecto al mismo Perón. Si realmente eran la “columna vertebral” del movimiento, como Perón nunca se cansaba de repetir, debían tener la libertad de determinar la táctica en la Argentina y negociar su propio destino.

En una conferencia de las 62 Organizaciones celebrada en Avellaneda en octubre de 1965, los delegados vandoristas reafirmaron su “voluntad de promover la institucionalización del movimiento”. Esto implicaría la creación de un partido político legal organizado de abajo hacia arriba “de una manera limpia e internamente democrática”. Era evidente que en un partido cuyos dirigentes fueran elegidos en un congreso nacional el papel de Perón sería limitado, dado que las decisiones políticas capitales dejarían inevitablemente de estar en sus manos.

Vandor era un astuto jugador del doble juego. En las elecciones de marzo de 1965, utilizando fórmulas partidarias neoperonistas, el sector sindical llevó al peronismo a una notable victoria. En la Cámara de Diputados había ahora un bloque peronista de facto constituido por cincuenta y dos miembros. En las provincias fueron elegidos más de ciento cincuenta diputados peronistas. En total, las listas justicialistas obtuvieron

más de tres millones de votos. Paulino Niembro, un dirigente de la UOM y estrecho allegado de Vandor, encabezó el bloque peronista en el Congreso, como un símbolo del poder sindical y su posición dominante en el movimiento.

No obstante, el poder político que incluso un jugador tan astuto como Vandor podía extraer del doble juego también tenía claros límites. El hecho de ser los principales representantes políticos de Perón confería a los líderes sindicales cierta autoridad frente a las bases y una reserva esencial de apoyo que los fracasos en el campo estrictamente económico tal vez les habrían negado. Cada visita a Madrid podía utilizarse para contrapesar una huelga perdida o un mal convenio firmado. Al mismo tiempo, su capacidad de movilizar a la clase obrera en nombre de Perón era un arma importante que podían emplear para presionar al gobierno de turno con el fin de obtener beneficios económicos concretos. La línea divisoria entre las movilizaciones por reivindicaciones de rutina y las maniobras políticas se desdibujaba constantemente y era casi imposible de definir. Las ocupaciones fabriles de 1964, por ejemplo, respondieron a una genuina demanda de soluciones económicas pero también pretendían demostrar a los militares tanto la debilidad del gobierno de Illia como el poder correspondiente de los sindicatos. Las Fuerzas Armadas se convencerían así de la necesidad de llegar a un acuerdo con la dirigencia gremial en caso de que planificaran un golpe, o bien de dejar a un lado sus objeciones a la participación electoral peronista, con el argumento de que la intervención en el proceso político disiparía el poder social militante desplegado en las ocupaciones de fábricas.

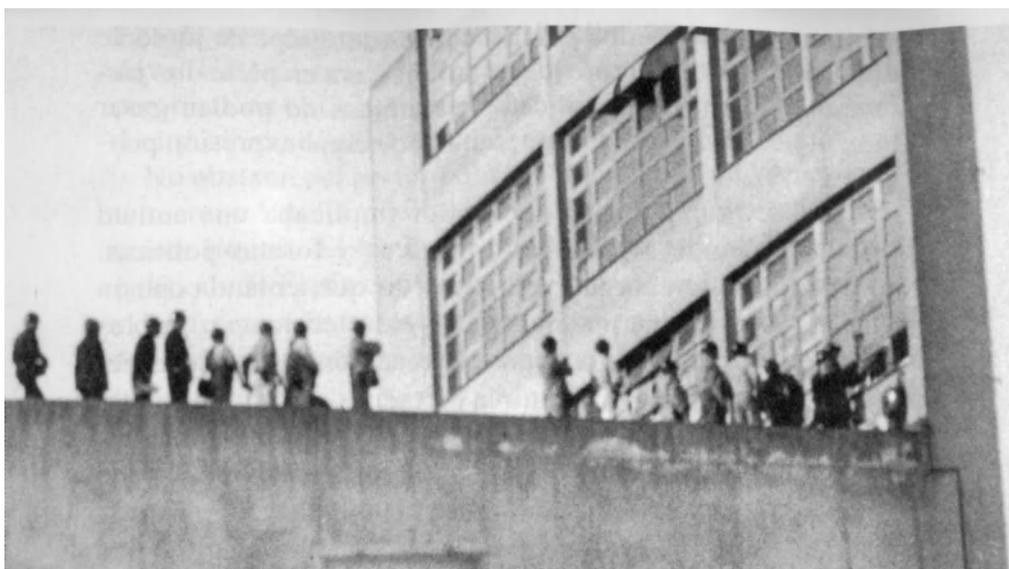
También podría aducirse, sin embargo, que la participación en este juego terminaba por ser desgastante para la conducción vandorista. En un marco institucional dominado por la dicotomía a favor de Perón/contra Perón, los sindicatos no podían estirar hasta donde quisieran la cuerda negociadora de la movilización peronista y la participación en las elecciones sin que las Fuerzas Armadas intervinieran y desbarataran el juego de amenazas y contraamenazas, instaurando un régimen menos expuesto a la presión sindical. Así, por ejemplo, los triunfos peronistas en las elecciones de 1965, motorizados por el sector gremial, y su probable victoria en las elecciones de 1967 entra-

ron en los cálculos de los planificadores del golpe de junio de 1966. Por lo tanto, el doble juego también era en parte un “juego imposible” que los sindicatos peronistas no podían ganar debido al hecho mismo de que eran la principal expresión política de Perón.

El célebre pragmatismo de Vandor implicaba una actitud oportunista cuando se trataba de tácticas y formas políticas. Los vandoristas se enorgullecían de decir que tenían la opción táctica de alcanzar el poder a través de elecciones o, si los triunfos electorales provocaban una reacción militar, encabezar la resistencia popular contra la dictadura castrense. En realidad, sin embargo, no se hacían ilusiones sobre las dificultades que los regímenes militares les planteaban en términos de negociación política. La lógica les indicaba la preferencia por la política electoral, por mucho que denostaran la ilegitimidad de la política partidaria tradicional en la Argentina. La conducción sindical era muy consciente de que su capacidad de alcanzar el poder y ejercer influencia dentro del sistema político provenía de su aptitud de movilizar a sus afiliados: en términos políticos, como delegados de Perón en la Argentina, y en términos más específicamente gremiales, como organizadores del movimiento obrero. Por definición, la vigencia de un sistema electoral —aunque restringiera el acceso peronista— les daba el mayor campo de acción para ejercer presiones y negociar.

También es importante advertir que su poder de negociación, desde un punto de vista político, procedía más de su posición como representantes de Perón ante las masas que de una capacidad negociadora autónoma debida a su actividad sindical y derivaba, en última instancia, del nombre del jefe del movimiento. Éste era una fuente de fortaleza pero también de debilidad porque, en definitiva, la dirigencia gremial no tenía la posibilidad de controlar la principal arma de negociación con que contaba.

El uso de la “camiseta” peronista les daba un margen considerable de maniobra y cierta independencia en sus tratos con Perón y los gobiernos, pero no era equivalente a negociar políticamente desde una posición de fuerza sindical autónoma. La conocida observación de Vandor de que “si dejara la camiseta perdería el gremio en una semana” era un reconocimiento rea-



Bomberos tratan de entrar a la fábrica Philips para desalojar a los obreros que ocupan el establecimiento siguiendo el Plan de Lucha de la CGT, 1964.

lista de esa situación. Cuando la independencia de los dirigentes sindicales se convertía en una amenaza, Perón podía recordarles la naturaleza relativa de su poder. Dentro del sector sindical siempre había rivales que él podía movilizar para contrarrestar a Vandor, como lo hizo a fines de 1965 cuando Alonso y otros leales se separaron de éste y fundaron una entidad rival, las 62 Organizaciones de Pie Junto a Perón.

Así, Perón y los líderes sindicales estaban atrapados en un círculo vicioso. Dada la índole de la situación posterior a 1955, aquél estaba obligado a apoyarse primordialmente en los sindicatos como su principal herramienta de negociación y afirmación de las pretensiones peronistas dentro del sistema político. Al mismo tiempo, el éxito que los sindicatos alcanzaban al cumplir este papel, la confianza que obtenían con él y el impulso que los triunfos daban a su base organizativa planteaban inevitablemente un desafío a la capacidad de Perón de determinar el destino del movimiento. Ésa fue la tensión que se exteriorizó en la disputa entre el líder justicialista y Vandor en torno de las elecciones de 1965 en Mendoza (véase el capítulo I). El triunfo del candidato de Perón sobre el vandorista oficialmente designado, Alberto Serú García, mostró los límites

de la independencia del poder político sindical y su imposibilidad de crear un partido basado en los sindicatos que relegara a Perón al papel de una mera figura decorativa.

¿Qué podemos decir, entonces, de la imagen que Walsh tenía del vandorismo? Indudablemente, los sindicatos iban a ser territorio cada vez más hostil para los activistas de base que trataban de criticar y oponerse a la conducción gremial. El uso de matones y de la “barra” para intimidar y reprimir a potenciales adversarios era un hecho cotidiano de la vida del vandorismo. Pero no era ésta la única forma de exclusión practicada en los sindicatos. Aunque las mujeres tenían un peso creciente dentro de la fuerza laboral argentina, estaban virtualmente ausentes de los organismos directivos del movimiento sindical. Aun en sindicatos con una significativa concentración de trabajadoras, como los textiles, encontramos a muy pocas de ellas en los cuerpos representativos del gremio por



Augusto Vandor y a su lado Serú García durante el proceso electoral de Mendoza, 1965.

encima de la base fabril. Éste no era, por supuesto, un rasgo exclusivo del vandorismo. El mundo del activismo peronista, tanto sindical como político, tanto entre los duros como entre los vandoristas, era un territorio abrumadoramente masculino. A pesar de que las actitudes concernientes a los papeles apropiados para las mujeres en la cultura en general (véase el capítulo VII) comenzaban a cambiar en la década del 60, el activismo gremial siguió teniendo un fuerte contenido de género y se definía en términos de códigos masculinos de fuerza, valentía y compañerismo. En este aspecto, no había diferencias entre los sindicatos vandoristas e independientes.

La imagen del vandorismo que se difundió en la década del sesenta tenía dos componentes conexos. Uno se basaba claramente en el estilo represivo de gobierno interno de la conducción gremial. El otro se centraba en el proyecto integracionista de esta dirigencia para forjarse un espacio como agentes de poder del peronismo dentro de un statu quo que en última instancia excluía a la persona de Perón. Ambos estaban evidentemente ligados y fue esa conexión la que motorizó la oposición a la jerarquía sindical, ya fuera entre los duros de mediados de los años sesenta o entre las formaciones de la juventud y la guerrilla peronistas de fines de esa década y principios de la siguiente, fuertemente influenciadas por la visión crítica de autores como Walsh. Su oposición se nutría de una impresión de afrenta y ultraje morales. No obstante, podría decirse que en definitiva la lógica del “pragmatismo institucional” era ineludible tanto para dirigentes como para dirigidos dentro del movimiento sindical. Por otra parte, y en oposición a la imagen ampliamente difundida del vandorismo, también podría argumentarse que, como política, la integración fue notable no por el poder que brindó a los líderes gremiales peronistas sino por sus resultados relativamente magros. Es fácil exagerar los resultados de las consultas entre la CGT y las organizaciones patronales. La armonía de clases seguía siendo un objetivo retórico, pero en realidad las relaciones entre sindicatos y empleadores estaban lejos de ese ideal armonioso. En una situación económica que luego de 1955 fue testigo de frecuentes ataques contra los salarios y las condiciones laborales, Vandor y sus compañeros de la conducción sindical eran muy conscientes de la necesidad de ser vistos como adversarios de la

patronal y el Estado en esta cuestión fundamental. Por lo demás, el doble juego los obligaba a estar en condiciones de movilizar a sus afiliados cuando fuera necesario con el fin, por lo menos, de mantener su credibilidad como una fuerza que los otros “factores de poder” debían tener en cuenta.

En el plano de las relaciones entre el Estado y los gremios, también es posible argumentar que, a despecho del notorio mayor peso de los sindicatos peronistas dentro del sistema social y político, había una marcada falta de expresiones formales e institucionalizadas de colaboración entre ambos campos. Pese a sus charlas con los generales y su afable familiaridad con los presidentes, la influencia de los sindicatos peronistas en los centros de decisiones de la nación era reconocida a regañadientes y estaba estrictamente limitada por la restringida tolerancia a todo lo que fuera peronista y obrero. Un whisky con el ministro de Trabajo era, en última instancia, un pobre sustituto de unas auténticas instituciones de integración. La delgada línea por la que caminaba cualquier líder gremial entre integración y oposición era aún más delgada debido a las magras ganancias reales que podían hacerse en este período. La frustración ocasionada por un sistema que proponía la fachada y el potencial de la integración sin su sustancia permitió a la conducción sindical peronista gozar de cierta tolerancia hacia sus aspiraciones políticas y económicas y era a la vez un reaseguro de que nunca iba a aprovechar el poder que le otorgaba esa tolerancia. Eso la llevó a recibir con beneplácito el final de ese juego desgastante, al que puso término el golpe militar de junio de 1966.

LOS DIRIGENTES SINDICALES PERONISTAS Y LA REVOLUCIÓN ARGENTINA

En un comienzo, la conducción sindical había recibido con muchas esperanzas el nuevo régimen del general Juan Carlos Onganía. El apoyo mayoritario que dieron al golpe de junio se basaba en una profunda antipatía hacia el gobierno de Illia, que consideraban ilegítimo y hostil a sus necesidades. Por otra parte, simpatizaban con figuras militares como Onganía, que aparentemente compartía sus ideas sobre las soluciones reque-



*Asunción del general Juan Carlos Onganía.
Entre la concurrencia, Augusto Vandor.*

ridas por los problemas argentinos. Sus frecuentes contactos con muchas de las figuras que estaban detrás del golpe en los meses previos a su ejecución, junto con el peso de la presencia gremial en la sociedad argentina, parecían asegurarles un acceso privilegiado a las nuevas autoridades públicas. Según sus cálculos, un régimen militar también reduciría seriamente la capacidad de maniobra política de Perón y su ejercicio de la autoridad a expensas de la dirigencia sindical. Al cabo de un año, estos cálculos, aunque muy plausibles, se revelarían como ilusiones en su confrontación con un régimen extremadamente autoritario resuelto a lograr a cualquier precio la racionalización de la economía y la modernización del Estado (véase el capítulo II).

El régimen militar hizo dos cosas que socavaron el poder de la jerarquía sindical. En primer lugar, suspendió toda actividad y organización políticas. De ese modo esperaba abolir el complejo sistema de negociaciones políticas a través de las cuales

los grupos sociales antagónicos intentaban lograr que el Estado satisficiera las demandas de sus integrantes. Ahora bien, una de las premisas centrales del proyecto vandorista había sido precisamente la aplicación eficaz de la presión sindical peronista en un sistema político caracterizado por la existencia de gobiernos débiles y adversarios políticos divididos. Al suprimir la capacidad de negociación política de los grupos sociales, el régimen de Onganía esperaba sentar las bases de un Estado controlado por las elites militares y políticas, desembarazadas de la presión de otros grupos de interés.

Al mismo tiempo, el nuevo régimen impuso férreos controles a los incrementos salariales y suspendió las negociaciones colectivas habituales. También se propuso erradicar las áreas



El dirigente portuario Eustaquio Tolosa es conducido detenido por la policía.

improductivas de la economía, ante todo en distintos ámbitos del sector público y de las economías regionales subsidiadas (véase el capítulo IV). La prioridad de la nueva política sería el desarrollo del sector más dinámico de la economía. De tal modo, al suspender las negociaciones colectivas y el funcionamiento del sistema político, el régimen logró minar las dos fuentes de la capacidad negociadora tradicional de los sindicatos en el período 1958-1966. Enfrentada a un gobierno intransigente, la CGT convocó a regañadientes un paro de veinticuatro horas en marzo de 1967 para protestar contra los planes económicos del ministro de Economía, Adalberto Krieger Vasena. La respuesta del régimen consistió en suspender la personería gremial de muchos grandes sindicatos e interrumpir concretamente el funcionamiento de la CGT. Frente a esta catástrofe, la central obrera procuró reanudar las conversaciones con las autoridades. La respuesta fue el silencio. De ese modo, el régimen militar ponía a la conducción gremial frente a un dilema: su existencia institucional corría peligro si oponía resistencia a la política gubernamental y, al mismo tiempo, la dirigencia se arriesgaba a perder credibilidad entre sus afiliados cuando esa política afectara la vida de éstos.

La respuesta de la conducción sindical a esta crisis fue variada. Para los sindicatos que habían sido más golpeados por la política económica y sufrían la intervención gubernamental de sus organizaciones, la franca oposición tenía un atractivo inicial. En las circunstancias del momento, la tradicional política sindical de movilización y negociación era claramente insostenible. Con poco que perder, la oposición abierta parecía una opción lógica. Esta alternativa podía encontrar legitimación en la cultura política peronista si se postulaba como la encarnación de la tradicional oposición a los regímenes militares gorilas. Los sindicatos pertenecientes a este grupo —portuarios, ferroviarios, trabajadores del interior— tomaron la ofensiva en el congreso convocado para normalizar la CGT en marzo de 1968. Entre los dirigentes presentes en él, una clara mayoría criticaba la incapacidad de las anteriores autoridades para oponerse a las políticas del régimen y abogaba por una actitud de abierta resistencia. Este congreso eligió como secretario general a Raimundo Ongaro, el carismático líder de los trabajadores gráficos, en contra del candidato vandorista. Cuando los vandoristas se reti-

raron y constituyeron su propia central obrera, la CGT de Ongaro comenzó a conocerse como CGT de Paseo Colón o CGT de los Argentinos. Esta organización se convirtió en un punto focal de la creciente oposición de amplios sectores de la sociedad civil al autoritarismo del régimen (véase el capítulo VIII), a la vez que brindaba un centro organizativo a muchos duros marginados por Vandor en años anteriores.

Para numerosos sindicatos más pequeños con una posición tradicionalmente vulnerable en el mercado laboral, la oportunidad de construir un nicho dentro del nuevo régimen y lograr gracias a la protección estatal lo que habían sido incapaces de hacer por medio de la negociación parecía una alternativa igualmente lógica, una vez demostrada la ineficacia de la estrategia vandorista en la cual se habían apoyado. Conocidos como “participacionistas”, estos dirigentes gremiales aceptaron la retórica corporativista del régimen sobre la necesidad de que los sindicatos concertaran una estrecha alianza con el Es-



Raimundo Ongaro, mayo de 1969.

tado. También esa alianza con figuras militares podía aducir precedentes en la ideología y la historia peronistas.

Los principales sindicatos peronistas agrupados alrededor de Vandor trataron de evitar alternativas tan drásticas. Sostuvieron, en cambio, la necesidad de adoptar una estrategia cauta, con el objetivo de recuperar la fuerza sindical y al mismo tiempo mantener abiertos los canales de diálogo con el gobierno. Esta estrategia pragmática no era contradictoria con el tono general de desmovilización obrera prevaleciente en los años que siguieron al fracaso de los intentos de resistencia al régimen de Onganía.

Este debilitado y dividido movimiento obrero daría al presidente la “paz social” crucial para la implementación del “tiempo económico” del régimen. Las huelgas se convirtieron de inmediato en luchas contra el Estado y se recurría a las Fuerzas Armadas para aplastarlas. En estas condiciones, no había casi ninguna oposición nacional coherente a las políticas laborales y económicas del gobierno. Lo que el régimen ofrecía al movimiento obrero y a otros sectores de la sociedad argentina que sufrían las consecuencias de su política económica era la promesa de una mayor participación en las futuras etapas social y política de la revolución vagamente definidas.

Los pronósticos de manipulación social y política en los cuales se fundaba esa política cayeron hechos pedazos en mayo de 1969 cuando el descontento obrero y las tensiones de la sociedad civil se aliaron en una ola de protestas sociales generalizadas que se inició en Córdoba (véase el capítulo VIII). Si bien las implicaciones del Cordobazo fueron calamitosas para el régimen militar, también fueron ominosas para la jerarquía sindical. Aun la CGT de los Argentinos tuvo un papel relativamente marginal en los acontecimientos cordobeses. Tomados por sorpresa por los hechos, los sindicatos de todos los sectores del movimiento obrero intentaron ponerse a la cabeza de la movilización para restablecer así su credibilidad y negociar el poder con las autoridades nacionales. No obstante, los años que siguieron al Cordobazo presenciaron un agravamiento de la crisis de la dirigencia gremial peronista, ya que nuevos sectores comenzaron a poner en tela de juicio su posición.



En Puerta de Hierro, Juan D. Perón rodeado de dirigentes peronistas. Entre otros, Julio Guillan, Antonio Cañero, Armando Cabo, Alberto Iturbe. Sentados, Vicente Solano Lima, Isabel Perón, Delia Parodi y Augusto Vandor.

NUEVOS ACTORES DESAFÍAN A LA JERARQUÍA SINDICAL

Estos nuevos actores se concentraban principalmente en los sectores industriales más recientes establecidos durante el gobierno de Frondizi: sobre todo la fabricación de vehículos, la siderurgia y la petroquímica. Varias importantes características que los diferenciaban tendrían un profundo impacto en el surgimiento de una respuesta obrera militante a la patronal, el Estado y el movimiento sindical tradicional en el período posterior al Cordobazo. En primer lugar, Frondizi había permitido el establecimiento de sindicatos por empresa en muchas de estas industrias. Así sucedía, por ejemplo, en las plantas de automóviles de Fiat en Córdoba y en la nueva industria petroquímica. En otros casos, la representación gremial se otorgaba a sindicatos nacionales más débiles ya existentes. En la industria automotriz, por ejemplo, los derechos de organización fueron

concedidos al Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), inicialmente un pequeño gremio de mecánicos de estaciones de servicio, en contra de las pretensiones de la UOM. La segunda diferencia de ese sector consistía en que las compañías insistieron en obtener —y lo lograron— el derecho a firmar convenios por empresa, lo cual socavaba el sistema de contratos nacionales por rama industrial previsto por la Ley de Asociaciones Profesionales.

La descentralización de las negociaciones colectivas y los sindicatos por empresa contribuyeron a producir una mano de obra inicialmente dócil en este nuevo y dinámico sector de la economía argentina. También debilitaron el poder de la estructura sindical nacional, porque trasladaban el centro de la negociación por los salarios y las condiciones laborales en sectores productivos cruciales al plano de cada empresa, en desmedro de las tratativas nacionales. En la práctica, esto significó la ausencia de representación de los sindicatos nacionales tradicionales, principalmente peronistas, en muchas de las nuevas industrias. Ésta era una consecuencia prevista de la política estatal y patronal. El gobierno de Illia había respondido a la hostilidad gremial peronista mediante una política laboral cuya intención era alentar una mayor autonomía sindical local.

Sin embargo, luego de 1969 se puso de manifiesto otra consecuencia —imprevista— de esa política. El traslado de las negociaciones salariales y sobre las condiciones laborales al nivel de cada empresa contribuyó al renacimiento de los sindicatos y seccionales locales. A largo plazo, tanto la negociación como los sindicatos de planta fortalecieron la iniciativa y la capacidad de los afiliados locales para actuar y presionar a sus gremios y a los empleadores. El hecho de que las condiciones y los salarios se determinaran localmente proporcionó un eje a la actividad de las bases, ausente cuando esas cuestiones se resolvían en el plano nacional y luego se transmitían a las seccionales locales. Esto tendría importantes consecuencias en los años posteriores al Cordobazo. Si bien la política laboral de las empresas del sector dinámico había garantizado el aislamiento casi completo de su personal con respecto a los sindicatos nacionales tradicionales, también significó, con el derrumbe del período de aquiescencia en mayo de 1969, que esas empresas se vieran frente a sindicatos que tenían muchas difi-

cultades para controlar la rebeldía de las bases. Esos gremios no contaban con el aparato de control interno que existía en los sindicatos peronistas tradicionales como la UOM, la construcción y los textiles. Ni siquiera sindicatos nacionales como el SMATA tenían la probada maquinaria interna de control característica de organizaciones industriales más antiguas. Por otra parte, tanto en los sindicatos de empresa como en las seccionales de los sindicatos nacionales que se rebelaban contra los dirigentes de éstos, tal como ocurría en las seccionales cordobesas del SMATA y Luz y Fuerza, las oposiciones locales se beneficiaban con la considerable autonomía financiera y organizacional que les otorgaba la legislación laboral. Sindicatos nacionales como el SMATA y Luz y Fuerza tenían estructuras federativas, y por esa razón su capacidad de doblegar el accionar de sectores locales díscolos era limitada.

La oposición laboral que floreció luego de 1969 quedó esencialmente confinada al interior del país. Sus representantes más conocidos tal vez fueran los dos sindicatos de las plantas de Fiat en Córdoba, SITRAC (Sindicato de Trabajadores de Concord) y SITRAM (Sindicato de Trabajadores de Materfer). En Buenos Aires, con anterioridad a 1973, el movimiento obrero se mantuvo virtualmente inmune al levantamiento del interior. La nueva militancia obrera centrada en éste se distinguía por una serie de características. Recurría con frecuencia a la acción directa y a otras formas no convencionales de movilización sindical. También tenía una naturaleza fundamentalmente antiburocrática. Se autodefinía sobre todo en términos de su oposición a los modelos existentes de conducción gremial y formas de gobierno interno. Agustín Tosco, el líder del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba y la figura que llegó a simbolizar esta postura antiburocrática en el plano nacional, definía como burócrata a “alguien sin vocación, sin ideales, que se convierte en un típico ‘administrador’ de un cargo sindical, lo usa para su beneficio personal y desde ese lugar comienza a dominar a sus compañeros”. En contraste, la nueva camada de militantes proponía un liderazgo honesto basado en la probidad personal y un compromiso con la democracia interna.

En un sentido general, además, los dirigentes que ocuparon el primer plano en este período centrado en Córdoba también

procuraban dar forma a su protesta gremial en términos de preocupaciones ideológicas más amplias. El clasismo, tal la denominación habitual de este movimiento opositor, implicaba para sus seguidores una identificación del movimiento obrero con la eliminación del capitalismo y la creación de una sociedad socialista. En su concepción, el sindicato tenía una función vital de despertar las conciencias con el fin de preparar a los trabajadores para lo que sería en última instancia una batalla política contra la patronal y el Estado. La vehemente insistencia antiburocrática del clasismo en la democracia interna y en la participación masiva planteaba para la jerarquía sindical peronista una clara amenaza en términos de influencia y ejemplo. Tanto para los sindicatos como para los empleado-

SITRAC habla de la CGT

“Esta crisis no puede resolverse con enjuagues de trastienda; es decir, con un simple cambio de mascaritas o con una trenza en la que sólo se discuta la cesión de un ‘puesito’ para, en definitiva, mantener esta política burocrática que los trabajadores condenamos. Esta condena que apunta a la dirección de las 62, tanto a los obsecuentes del plan Levingston como los que apuestan a un golpe ‘salvador’, se extiende a la dirección cegetista encabezada por José Rucci (...) esta conducción trata de mantenerse con una nueva carga de oxígeno (...) Nosotros afirmamos que la dirección y la política que el movimiento obrero cordobés y nacional necesita deben surgir y haberse probado en las luchas que libramos contra nuestros enemigos (...) esta dirección y esta política, clasista y revolucionaria, ya han comenzado a dar sus primeros pasos (...) Para dar una salida que corresponde a nuestros intereses y reivindicaciones (...) importa que esa política que hoy surge arraigue en miles y miles de trabajadores de nuestra provincia y de todos los rincones de la Patria, que nos ayude a organizarnos por abajo y a barrer a esta conducción claudicante —que no nos representa— sentando las bases para la construcción de la CGT de y para la clase obrera y el pueblo.”

Fuente: Boletín de SITRAC, N° 1, 13-1-1971, citado en Natalia Duval, *Los sindicatos clasistas: SITRAC (1970-1971)*, Centro Editor de América Latina, 1988.

res, el reconocimiento clasista de la naturaleza inconciliable de los intereses de clase implicaba una batalla constante entre ambos y la negación del terreno común del compromiso tan esencial para los gremios tradicionales y la patronal. También el régimen militar advertía con claridad la amenaza. El movimiento opositor había demostrado coherentemente su aptitud de impugnar el orden público mucho más allá de las puertas de la fábrica. Demostraba asimismo su capacidad de enunciar una amplia gama de reclamos sociales y políticos y proponer una redefinición del papel del sindicalismo y su misión para adoptar formas radicales de movilización.

DEL CORDOBAZO AL RETORNO DE PERÓN

En los años posteriores al Cordobazo, las Fuerzas Armadas trataron de cerrar la caja de Pandora de la insurgencia social y política desatada por el levantamiento cordobés. La incapacidad del presidente Onganía y de su sucesor, el general Levingston, para cumplir esta tarea les costaría su desplazamiento del sillón de Rivadavia. Desde 1971, con la conducción del nuevo presidente, el general Alejandro Lanusse, los militares se dispusieron a preparar el terreno para un retorno ordenado al régimen civil. El Gran Acuerdo Nacional, con la guía de Lanusse, pretendía reinstaurar las instituciones tradicionales de la vida cívica y política a fin de desactivar la insurgencia social que inundaba la Argentina. La proscripción de la actividad política partidaria se levantó en julio de 1971. El alto mando de las Fuerzas Armadas también se propuso incluir al peronismo en el consenso nacional que intentaba construir. La solución política que imaginaba implicaba la legitimación electoral de un candidato respaldado por los militares —el propio Lanusse— en comicios prometidos para 1973. Las autoridades militares suponían que tanto el radicalismo como significativos sectores del peronismo lo aceptarían como un costo necesario de la transición hacia la democracia. En este escenario ideal, los sindicatos peronistas cumplirían el vital papel de proporcionar la base social del plan. Los estrategas militares del Gran Acuerdo Nacional presumían que la dirigencia gremial recibiría con agrado la oferta de una estrecha relación con

una figura militar favorablemente dispuesta. Luego del trauma del régimen de Onganía y del constante ataque de las nuevas fuerzas opositoras de la clase obrera, esos dirigentes darían la bienvenida a la oportunidad de restablecer su control y credibilidad como actores fundamentales del sistema político argentino, brindada por un Estado que solicitaba su apoyo.

Este escenario militar demostró falta de realismo por muchas razones. La principal fue la astuta contraestrategia de Perón, que se mostró capaz de canalizar en beneficio de sus propias necesidades la crisis cívica y social que seguía desgarrando a la sociedad argentina. La movilización masiva de la juventud de clase media y la capacidad en rápido crecimiento de los grupos guerrilleros para llevar a cabo acciones sumamente eficaces fueron utilizadas por Perón para hostigar al régimen y dar lustre a su imagen como la única fuerza capaz de restablecer el orden social y controlar la amenaza planteada por una juventud y una protesta obrera radicalizadas.

En última instancia, también se demostró infundado el supuesto del régimen de que podría reclutar a una proporción significativa de la nueva dirigencia sindical para revivir el reformismo militar.

La crisis de la credibilidad sindical provocada por el régimen de Onganía no podía superarse simplemente por medio de una proclamación gubernamental. ¿Podría la dirigencia gremial dirigir y encauzar una protesta social que había surgido al margen de su control y era independiente de sus deseos? La modificación de la política económica dispuesta por Lanusse, junto con la vuelta a una forma limitada de negociaciones colectivas, señalaban la perspectiva de cierta rehabilitación de la conducción sindical. Pero el gobierno no estaba dispuesto a conceder las negociaciones colectivas irrestrictas que habrían dado a los dirigentes gremiales las herramientas para reafirmar su indiscutida hegemonía sobre las bases y embarcar a sus sindicatos en el camino del compromiso y la alianza imaginados por el Gran Acuerdo Nacional. Si bien eran capaces de mantener el control del aparato gremial con sede en Buenos Aires, ya no podían movilizar y conducir a sus afiliados como lo habían hecho durante el apogeo del vandomismo.

Más importante aún, los estrategas militares subestimaban la posición cada vez más sitiada de las conducciones sindica-

les dentro del peronismo. En parte, esto se debía a la rehabilitación del sistema y los actores políticos. Aun un táctico tan astuto como Vandor sólo había logrado ambiguos resultados con las incursiones gremiales de mediados de la década de 1960 en la arena política. Con su asesinato y las incertidumbres de principios de la década siguiente, en el mejor de los casos las perspectivas sindicales dentro de una política democrática restaurada parecían dudosas. Los líderes gremiales eran conscientes de que cualquier apertura política fortalecería la posición de Perón y debilitaría la suya propia. Esto era especialmente cierto en un contexto que prometía la legalización política formal del justicialismo e incluso el posible retorno de Perón. Los sucesores de Vandor, conducidos por el nuevo secretario general de la CGT, José Rucci, apoyado por su compañero metalúrgico y dirigente de las 62 Organizaciones Lorenzo Miguel, adoptaron una actitud de completo acatamiento de las tácticas políticas de Perón. Subordinaron la CGT a las necesidades de negociación de éste con el régimen y las otras fuerzas políticas. Su principal interés consistía en afirmar sus pretensiones de compartir el botín ofrecido por el resurgimiento político de Perón.

La sensación de vulnerabilidad de la dirigencia sindical se debía a su inquietud por la influencia de las nuevas fuerzas dentro del movimiento. La amenaza planteada por los grupos guerrilleros y la Juventud Peronista era a la vez material y política. A partir del asesinato de Vandor en junio de 1969 y siguiendo con el homicidio de Alonso un año después, la guerrilla peronista inició una campaña de eliminación selectiva de líderes gremiales. La juventud de clase media que ingresaba en tropel al peronismo durante esos años señalaba a la burocracia sindical como el principal obstáculo a la concreción de las metas de esa corriente política como movimiento de liberación nacional. Para estos recién llegados, la burocracia sindical era una casta corrupta cuya función era reprimir y manipular a las masas peronistas y desviarlas de la lucha por una Argentina liberada.

La Juventud Peronista y las formaciones guerrilleras eran un desafío a toda la trayectoria del movimiento sindical dentro del peronismo y a la identidad que los dirigentes gremiales daban a éste como movimiento. El nacionalismo reformista que identificaban con el peronismo, y el pragmatismo y compromiso que

éste había llegado a implicar luego de 1955, sufrían hoy un asalto con características de cruzada moral emprendido por advenedizos sin antigüedad en el movimiento. Los recién llegados procuraban redefinir el peronismo en términos de un credo revolucionario que tenía poco significado para los dirigentes sindicales tradicionales. Esta redefinición entrañaba negar la legitimidad de la presencia misma de esos dirigentes dentro del nuevo peronismo imaginado por los jóvenes radicalizados.

Durante esos años, el propio Perón hizo poco por mitigar los temores de la conducción sindical. El líder justicialista advertía que los sectores juveniles representaban el humor prevalente de la sociedad argentina, en el que se mezclaban el resentimiento y la esperanza de renovación mucho más eficazmente que en una insegura dirigencia gremial. En ese carácter, la juventud era una importante herramienta de negociación para Perón, un recordatorio de la capacidad del peronismo de desestabilizar si no se reintegraba a la sociedad argentina en términos aceptables para él. A lo largo de 1972 hubo en los comentarios públicos de Perón un elogio constante a los “muchachos” y una crítica a la burocracia sindical. A medida que se acercaban las elecciones de 1973, los sindicatos adquirían creciente conciencia del menor peso que ahora tenían en el movimiento. En contraste con 1962 y 1965, cuando habían impuesto sus candidatos a voluntad, en estos momentos se veían obligados a aceptar la misma cantidad de candidaturas que las otras ramas del movimiento. No había una sola figura gremial que fuera candidato a gobernador. Más ominoso aún era el hecho de que el tono y la organización de la campaña electoral quedaran en manos de sectores juveniles que hacían tanto de los militares como de la burocracia sindical el blanco de un particular repudio.

Así, los resultados de las elecciones del 11 de marzo, que significaron el retorno del peronismo al poder, fueron vistos con escaso entusiasmo por la conducción gremial del movimiento. Tras dieciocho años de compromiso formal con la recuperación del poder, la realidad que enfrentaban cuando Héctor Cámpora juró como presidente el 25 de mayo ofrecía poco margen para el optimismo.

Traducción de Horacio Pons

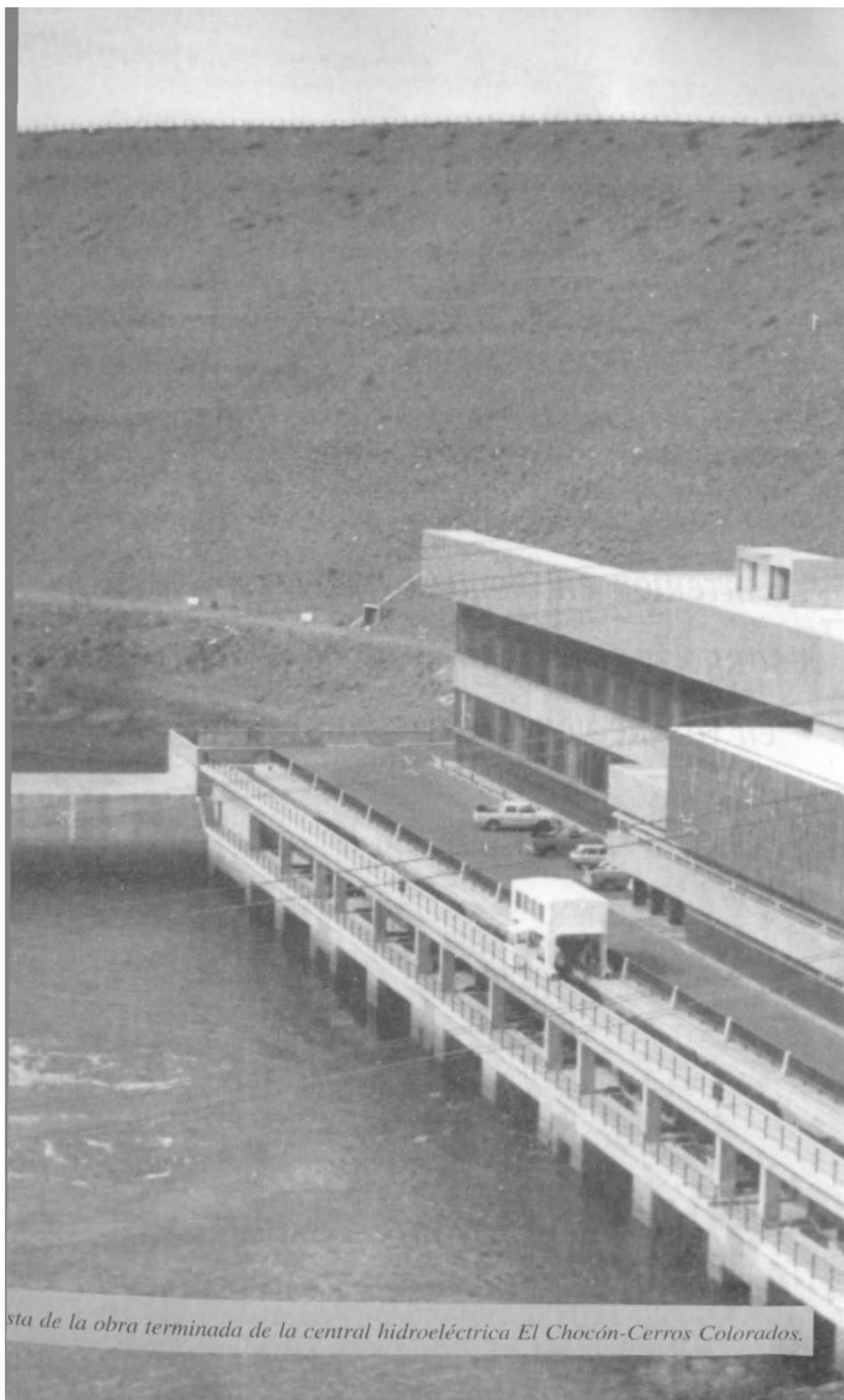
BIBLIOGRAFÍA

- Abós, Alvaro, *Augusto T. Vandor: sindicatos y peronismo*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1999.
- Baschetti, Roberto (comp.), *Documentos de la resistencia peronista, 1955-1970*, La Plata, Ediciones de la Campana, 1997.
- Brennan, James, *El Cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba, 1955-1976*, Buenos Aires, Sudamericana, 1996.
- Carri, Roberto, *Sindicatos y poder en la Argentina*, Buenos Aires, Sudestada, 1967.
- Gazzera, Miguel, "Nosotros los dirigentes", en Ceresole, Norberto, y Gazzera, Miguel, *Peronismo: autocrítica y perspectivas*, Buenos Aires, Descartes, 1970.
- James, Daniel, *Resistencia e integración. El peronismo y la clase obrera, 1946-1976*, Buenos Aires, Sudamericana, 1990.
- Martuccelli, Danilo, y Svampa, Maristella, *La plaza vacía. Las transformaciones del peronismo*, Buenos Aires, Losada, 1997.
- Perón, Juan Domingo, y Cooke, John William, *Correspondencia*, dos tomos, Buenos Aires, Granica, 1973.
- Pozzi, Pablo, y Berrotarán, Patricia, *Estudios inconformistas sobre la clase obrera argentina, 1955-1989*, Buenos Aires, Letra Buena, 1993.
- Senén González, Santiago, *El sindicalismo después de Perón*, Buenos Aires, Galerna, 1971.
- Senén González, Santiago, y Bosoer, Fabián, *El hombre de hierro*, Buenos Aires, Corregidor, 1993.
- Torre, Juan Carlos, *El proceso político interno de los sindicatos argentinos*, documento de trabajo N° 89, Buenos Aires, Instituto Torcuato Di Tella, 1974.
- Walsh, Rodolfo, *¿Quién mató a Rosendo?*, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1969.

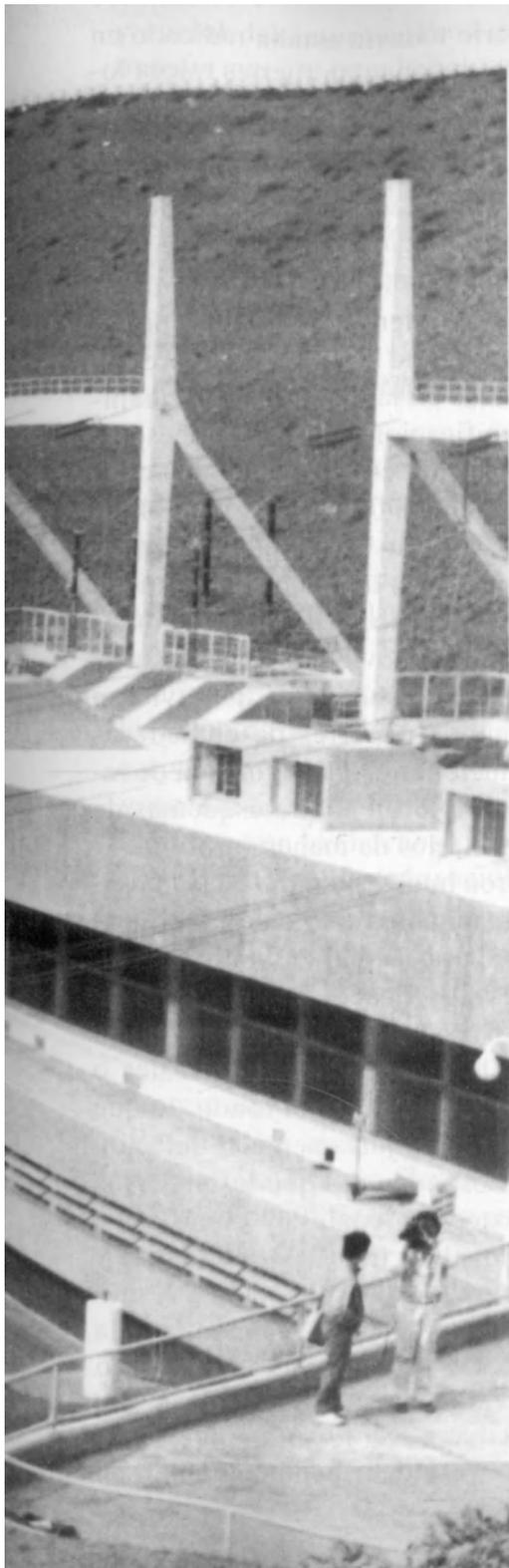
IV

*El interior en disputa: proyectos de
desarrollo y movimientos de protesta
en las regiones extrapampeanas*

por MARK ALAN HEALEY



Vista de la obra terminada de la central hidroeléctrica El Chocón-Cerros Colorados.



En cierto sentido, entre 1955 y 1976, el centro de gravedad de la política argentina se desplazó hacia el interior. Este proceso se inició con el surgimiento y las políticas del peronismo, pero recién se hizo plenamente visible con la creciente importancia de la cuestión regional después de la Revolución Libertadora. Se potenció con las políticas de desarrollo regional adoptadas, aunque de manera irregular y discontinua, por los gobiernos de Arturo Frondizi, José María Guido y Arturo Illia y profundizadas de manera contradictoria por los gobiernos militares instaurados desde 1966. Pero fue a partir de la crisis azucarera tucumana y fundamentalmente del Cordobazo en mayo de 1969 que las complejas y variadas problemáticas del interior pasaron a ocupar un lugar central en la vida política de la nación. Así, lugares que poco antes se consideraban estancados y marginales pasaron a ser escenarios fundamentales del cambio político y social.

Este desplazamiento, que entonces parecía definitivo, resultó ser fugaz y tuvo lugar en un contexto donde en

última instancia el poder decisorio todavía estaba radicado en Buenos Aires. Si estas rebeliones reconocían fuertes raíces locales en sus causas, sus tiempos y objetivos casi siempre estuvieron marcados por la política nacional. Podría parecer natural, por lo tanto, que los estudios de esta época se hayan dirigido más hacia la tambaleante estructura de poder central y sus disputas.

Córdoba fue el epicentro no sólo de los proyectos de desarrollo sino también de inéditos movimientos de protesta protagonizados por obreros y estudiantes que motivaron temores en la derecha y produjeron esperanzas en la izquierda. Este capítulo se propone examinar las ramificaciones de este proceso en el Noroeste, en la Patagonia y en el Nordeste. Veremos cómo las políticas de reestructuración económica fueron un éxito inicial al momento de proponerse desarticular la protesta en Tucumán, pero después un indudable fracaso tanto en sus objetivos estrictos en materia de desarrollo como en sus aspiraciones más amplias de cerrar el camino a los movimientos contestatarios del interior. Aunque muchas de estas protestas tuvieron detonantes aparentemente menores —cierres de comedores universitarios, reemplazos de funcionarios, reasignación de recursos de infraestructura—, se dirigieron contra esquemas de poder mayores y llegaron a impactarlos de manera profunda.

Estas rebeliones, que incluyeron huelgas y puebladas, movilizaciones estudiantiles y enfrentamientos sindicales, dieron al interior un protagonismo político poco usual en la historia argentina del siglo XX. Si bien sus significados fueron variados, tal vez más de lo que muchos pensaron entonces, es erróneo suponer que se trataron de cuestiones simplemente locales o de meros reflejos de procesos nacionales. En el fondo, lo que estas protestas ponían en cuestión era justamente la relación entre lo regional y lo nacional. Los modos en que los procesos nacionales incidieron en contextos regionales, y cómo éstos afectaron aquéllos, siguen siendo, al decir de James Brennan y Ofelia Pianetto, “en gran parte territorio desconocido”. A menudo, estas protestas intentaron replantear la economía y la política nacionales desde lugares o posiciones sociales poco tomados en cuenta hasta entonces. Lo cual no quiere decir que esta ola de rebeliones sea reducible a una lectura única, dado que hizo emerger la propia heterogeneidad económica, política

y social del interior. Produjeron, además, la posibilidad de transformar ese mundo heterogéneo. Desde luego, al poner énfasis en la variedad de situaciones emergentes, no se busca negar el importante sentido de unidad compartido entre estas protestas, sino mostrar cómo se fue tejiendo un frente amplio de cuestionamientos al poder, especialmente entre 1969 y 1973, y cómo esa frágil unidad de protesta se fue fragmentando y perdiendo para terminar siendo olvidada después.

“LAS DOS ARGENTINAS”

El peronismo no quebró la estructura espacial de poder heredada pero sí produjo transformaciones. Esto era evidente no sólo en la mayor visibilidad social de los habitantes —y especialmente de los migrantes— del interior sino también en el fortalecimiento del sindicalismo, las extensas inversiones en salud y educación, la expansión del mercado interno y la amplia red de proyectos y actores que se conformaron en torno a los intentos de planificación económica. Estos últimos significaron una apertura política y social decisiva, a pesar de que la vocación federalista del peronismo resultó ser más fuerte en teoría que en los hechos.

Sin embargo, la renovación producida por el peronismo fue ambigua, ya que la incorporación de las clases populares del interior no significó un desplazamiento de las elites del interior, sino que, al contrario, articuló una nueva alianza basada en la oposición compartida a la “oligarquía” liberal del litoral agroexportador. Aun cuando estas elites del interior no resultaron ser aliados fieles del peronismo, igualmente mantuvieron esas frágiles alianzas. Y el mayor protagonismo del interior también llevó a que, después de la caída de Perón, su subdesarrollo se convirtiera en un asunto político y cobrara renovada importancia.

Así como el peronismo había desconocido el linaje conservador de las políticas que hicieron posible su movilización y transformación del interior, quienes asumieron el poder después de 1955 borraron el precedente inmediato para hacer del interior una causa política. En realidad, esta acción fue potenciada por las políticas adoptadas por la Revolución Libertado-

ra. El derrocamiento de Perón evidenció las profundas fracturas políticas, económicas y sociales que atravesaban no sólo a la sociedad argentina, sino también a la propia alianza antiperonista. Estas fracturas hicieron imposible la articulación de un proyecto coherente por parte de los ganadores y, con el desgaste de la Revolución Libertadora, se presentaron como un desafío fundamental para cualquier proyecto político o económico futuro. Más allá de las divisiones entre peronistas y antiperonistas, radicales y conservadores, nacionalistas y liberales o terratenientes e industriales, también había una división geográfica, que se hizo cada vez más evidente, entre la próspera región pampeana y las empobrecidas provincias extrapampeanas, o, tal como se decía en esos días, entre el litoral cosmopolita y moderno y el interior criollo y tradicional. Esta noción de las “dos Argentinas” no era novedosa, pero cobró nueva vigencia en un contexto de tan obvia división.

Para algunos modernizadores, éste fue el momento de redescubrir (una vez más) un interior marcado por el atraso y asumir que la tarea de la hora era vencer ese atraso llevando al interior los beneficios de la modernización. Esto implicaba una eliminación de las prácticas sociales y económicas supuestamente tradicionales e irracionales que caracterizaban a estas provincias. Para esta línea de interpretación, el interior era un espacio por conquistar y redimir. Era menos importante conocerlo que transformarlo.

Por su parte, los nacionalistas también nutrían una concepción simplista y a menudo homogénea de las regiones del interior. Tendían a tomar el interior como algo que debía valorarse antes que transformarse: el mundo cultural “tradicional” tan criticado por Gino Germani era justamente el mundo que ellos reivindicaban. Pero esa reivindicación no condujo a ningún proyecto político en particular, pues el nacionalismo fue mucho más hábil criticando proyectos ajenos que formulando proyectos propios.

El esquema de las “dos Argentinas” invitaba a ambas lecturas, proclamando la importancia del interior pero desconociendo su complejidad y diferenciación. Aunque se pretendía histórico, era un esquema que rehusaba la utilización de la noción del cambio histórico: ignoraba el impacto reciente del peronismo, desconocía la enorme variación económica, social y cultu-

ral de la Argentina extrapampeana (y también de la pampeana) y apenas registraba el estatus específico de regiones como la Patagonia o el Chaco, que no habían formado parte ni del interior colonial ni del litoral aluvional. En realidad, el esquema de las “dos Argentinas” explicaba poco. Pero su impecable linaje sarmientino, paradójicamente reforzado por el nacionalismo revisionista, lo dotaba de una notable fuerza retórica que le permitía llegar desde perspectivas muy variadas a conclusiones bastante parecidas sobre la urgencia de superar esta fractura, de consolidar una sola Argentina.

LA PROMESA DEL DESARROLLO

Fue Arturo Frondizi quien mejor articuló retóricamente este incipiente proyecto con los términos “integración” y “desarrollo”. Ambos remitían a la compleja cuestión de cómo enfrentar y resolver las políticas, estructuras y lealtades heredadas del



El presidente Arturo Frondizi visita el campamento Saipén en Cañadón Seco, Santa Cruz, por el Día del Petróleo, 13-12-1959.

peronismo. Dejaban entrever, además, las realidades regionales que se habían asomado al debate político nacional después de la caída del peronismo. Estos dos términos resumían un proyecto que apostaba al crecimiento económico para superar las profundas fracturas sociales y políticas de la Argentina de fines de la década del cincuenta.

Para el desarrollismo, el futuro de la nación pasaba por la exitosa incorporación de todo el espacio nacional al proceso de modernización. Este proceso sería impulsado, planificado y dirigido por el Estado y daría como resultado un país más consolidado hacia dentro y más fuerte hacia fuera. Desde el comienzo, el desarrollismo presentó a la industrialización como una herramienta fundamental de integración.

Sin embargo, este programa se asentaba sobre bases poco integradoras. El desarrollismo proponía la concentración económica como un paso previo necesario destinado a acelerar el crecimiento, un enfoque que terminaría por reforzar el centralismo en vez de diluirlo. Junto a la apuesta a la atracción de capitales multinacionales —tan criticada por nacionalistas de izquierda y derecha—, esta opción sugería que en realidad el desarrollismo tenía escasa voluntad o capacidad para enfrentar las desigualdades del interior. El énfasis dado a las industrias consideradas estratégicas tuvo un importante corolario geográfico. Al margen de su proclamado federalismo, el desarrollismo concentró sus esfuerzos en la industria pesada de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba y en la explotación de recursos de energía en Mendoza, Salta y la Patagonia. En la práctica el gobierno seguía una estrategia de “polos de desarrollo”, concentrando sus inversiones en lugares considerados estratégicos y confiando que más tarde redundaría en beneficio de toda la nación.

Mientras tanto, las demás provincias ocuparon lugares marginales en el proyecto nacional del desarrollismo. Hubo, es cierto, un intento de incorporarlos al proyecto de desarrollo por medio del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Desde este organismo consultivo se produjo un notable despliegue de saber técnico sobre todo el país en proyectos de desarrollo hidráulico, industrial, agrícola y turístico. Pero estos proyectos fueron de calidad desigual y realización dudosa, dado que el organismo no tenía poder de decisión real. Por lo tanto, su im-

pacto fue relativo durante el gobierno de Frondizi y sólo relevante en algunas pequeñas iniciativas locales. Aun así, a largo plazo permitieron consolidar un incipiente grupo de expertos en desarrollo regional.

Las acciones del gobierno nacional que tuvieron más impacto en las provincias fueron importantes justamente por no haberlas tomado en cuenta. La “reforma agraria” del desarrollismo se centró en pregonar la concentración, la capitalización y la modernización como métodos para mejorar la eficiencia del agro. Todo eso mientras desmantelaba los mecanismos de regulación y fomento del mercado ensayados durante los gobiernos conservadores y consolidados con el peronismo. Esto produciría una serie de crisis de precios y sobreproducción en las economías regionales que alcanzaría su máxima expresión hacia mediados de los años sesenta.

Pero las promesas incumplidas del desarrollismo con las provincias, prácticamente el único espacio político que no presionó a Frondizi, contribuirían a una crisis política más convencional. En efecto, fue en las provincias donde la derrota de sus candidatos en 1962 a manos de los candidatos peronistas a quienes él había permitido postularse sellaría el destino de su partido y aceleraría su derrocamiento (véase el capítulo I).

Sin duda, el desarrollismo trazó las líneas maestras para las políticas económicas y sociales de los años sesenta y setenta. Fue un legado más que ambiguo, pues terminaría por producir resultados opuestos a sus proclamados objetivos, empeorando en muchos sentidos las desigualdades que supuestamente venía a combatir. Esto puede percibirse en los frutos más obvios del desarrollo: las grandes obras de infraestructura. Muchas tuvieron sus orígenes en propuestas de estos años y algunas, como el túnel subfluvial del Paraná, incluso fueron iniciadas durante la administración de Frondizi.

El desarrollismo fue crucial para la conformación de una red de expertos, intereses y empresas que impulsaron la proyección y construcción de grandes obras, sobre todo represas, como política prioritaria del Estado y como eje de políticas regionales. Sin embargo, los legados más notables de estas obras fueron el fortalecimiento de las empresas contratistas, el endeudamiento externo, la concentración del poder en Buenos Aires, y no precisamente la consolidación de nuevos “polos de

desarrollo” de mayor autonomía, eficacia e igualdad. Aun así, estas obras también muestran cómo el desarrollismo había reformulado los términos del debate, pues los críticos de las obras enfatizaban su poca contribución al desarrollo local, criticando al desarrollismo en términos derivados de su propia prédica. Esto también podría verse desde el punto de vista opuesto: el desarrollismo dio el marco general para un debate cada vez más amplio sobre el desarrollo regional y supo impulsar un proceso que, a la larga, hizo que ese debate fuese irrelevante.

Al llegar al poder, el gobierno de Arturo Illia tenía escasa credibilidad política y menos margen de maniobra que su antecesor. A grandes rasgos, su estrategia de desarrollo siguió a la de Frondizi, aunque con un viraje nacionalista en materia petrolera y una política monetaria y crediticia bastante más abierta. Más cercano a la pequeña y mediana industria que al gran capital multinacional favorecido por Frondizi, el gobierno de Illia también les otorgaba más importancia a las problemáticas del interior, tanto por su propio origen cordobés como por los resultados de iniciativas desarrollistas anteriores. Convencido de la necesidad de superar los “desequilibrios interregionales”, creó el Consejo Nacional de Desarrollo para fortalecer el CFI e implementar sus proyectos.

A nivel de política provincial, ésta fue una época de experimentos importantes. Los intentos nacionales de planificación fueron retomados por iniciativas provinciales, sobre todo en materia de regulación económica y de planificación y desarrollo de recursos hidráulicos, como ocurrió, por ejemplo, con la creación de la Corporación del Valle del Río Dulce en Santiago del Estero. También fueron años de ensayos en otros campos, como la fundación de varias universidades provinciales, que siguió a la aparición de casas de estudio privadas fundadas por el gobierno de Frondizi.

Pero esta apertura, producto no sólo de la debilidad sino también de cierta flexibilidad del gobierno central, tuvo como contracara serias crisis económicas y políticas en varias provincias, sobre todo en Tucumán. Esta crisis se potenció por el retorno de un sindicalismo poderoso, orientado por el dirigente metalúrgico Augusto Vandor, y su búsqueda de una salida política. Fue justamente en el ámbito provincial, en las elec-

ciones de 1965, donde se dirimió la disputa entre Vandor y Perón por el control del justicialismo. Allí se reafirmó al líder y se demostró inviable el proyecto de un “peronismo sin Perón”. Jaqueado por los grupos de poder, la prensa y el sindicalismo, el presidente Illia fue depuesto por un nuevo golpe militar (véase el capítulo I).

“PARA QUE SE CUMPLA EL DESTINO DE NACIÓN GRANDE”: EL INTERIOR EN LA REVOLUCIÓN ARGENTINA

La meta fundamental del gobierno de Onganía, ya anunciada en la larga campaña previa al golpe, apuntaba a lograr una modernización brusca y contundente. Representaba una culminación lógica de la estrategia desarrollista, esto es, la asignación forzosa de recursos al sector moderno y transnacional de la economía supuestamente con el objetivo de producir un salto cualitativo en la vida argentina. Esta estrategia de concentración económica y política privilegió a las grandes industrias y a las fuertes inversiones, tanto extranjeras como estatales, sobre el comercio, la industria y el crédito de escala más pequeña. Atentó, por lo tanto, contra el amplio y heterogéneo conjunto de actores económicos, sobre todo del interior del país, reunidos en la Confederación General Económica. También les quitó poder y recursos a los trabajadores y, de manera selectiva pero amenazante, a sus sindicatos. Pero si puso todos estos grupos a la defensiva, sobre todo en las regiones extrapampeanas, también incorporó a sus filas a muchos políticos del interior, de peronistas a conservadores, que terminaron ocupando puestos importantes en el sector político del gobierno.

La Revolución Argentina intentó profundizar los procesos de modernización económica en curso, a la vez que recortar o frenar la modernización cultural y política que podría acompañarlos. En efecto, el lanzamiento de la industria automotriz en Córdoba en los años cincuenta vino acompañado por un programa innovador y agresivo de promoción cultural y artística. Esta triple conexión entre innovación económica, regional y cultural nunca fue estable y se estiró hasta quebrarse definiti-



Caravana de automóviles en el Túnel Subfluvial, 1969.

vamente con la afirmación de una modernización autoritaria y conservadora. Si a fines de la década del cincuenta y a comienzos de la siguiente el Instituto Di Tella había representado un espacio disidente pero integral del proyecto modernizador desarrollista, a partir de 1966 dejó de serlo.

El proyecto militar impulsó la modernización económica reivindicando su vocación regional, pero rechazando la innovación cultural y vaciando el espacio político. Las universidades estuvieron entre los primeros en sufrir las consecuencias, pero sus efectos pronto se extenderían al conjunto de la sociedad. Dentro del campo de la cultura, mientras tanto, la modernización se asociaba cada vez más a un acercamiento político a lo regional y nacional. Esto produciría una amplia gama de efectos hasta entonces inesperados como los múltiples acercamientos entre la izquierda y el nacionalismo, la producción renovada de estudios académicos fuertemente politizados sobre

el interior por la generación pionera de sociólogos y antropólogos y el viaje al interior radicalizado de la obra colectiva de arte *Tucumán arde*, de 1968, que marcó un hito fundamental en la politización de los espacios culturales.

Otro aspecto fundamental de estos años fue la activación política del catolicismo. En los años que siguieron a la caída de Perón, la Iglesia católica logró consolidar el avance institucional que había sostenido desde los años treinta, además de conseguir una meta fundamental con la legalización y el establecimiento de universidades católicas. Sin embargo, el peronismo y la resistencia también habían hecho evidentes los límites de esa reactivación política del mundo católico. Por lo tanto, hacia finales de los años cincuenta se impulsó una serie de iniciativas para ampliar su llegada a las clases populares. Estas iniciativas terminaron coincidiendo con otras presentadas por la Iglesia en el marco de la profunda reforma del mundo católico por el Segundo Concilio Vaticano. A la larga, el resultado de estas iniciativas no sería la ansiada “cristianización” de las clases populares (y peronistas) a que aspiraban, sino la fuerte “peronización” y radicalización de muchos grupos católicos, tanto laicos como de sacerdotes. Este proceso también tendría notables efectos sobre las clases populares, al construir toda una red de alianzas y amistades que pronto servirían para encauzar proyectos políticos.

Por otro lado, el esfuerzo secular de ganar a los hombres de la clase alta para la Iglesia también vería frutos en esta época gracias, en gran medida, a los “cursillos de cristiandad” originados en la España franquista. Como sugiere el título de las memorias de uno de los consejeros del gobierno —*El Escorial de Onganía*—, los altos mandos se caracterizaron por una fuerte impronta católica conservadora. En ese sentido, la Iglesia se vería fuertemente tensionada por dos movimientos dinámicos que iban en sentidos contrarios: la consolidación de un catolicismo de elite, que tendría una influencia central en la Revolución Argentina, y la expansión de un catolicismo popular, contestatario y cada vez más “peronista”, que tendría una participación fundamental en la oposición a la dictadura. De esta manera, los intentos de “cristianizar” la sociedad tuvieron el resultado de “politizar” nuevamente la Iglesia, con fracturas aún más fuertes que las producidas por el peronismo. La base

más fuerte del conservadurismo católico estaba en el interior; de allí provenían muchos de los colaboradores y simpatizantes del gobierno militar, como por ejemplo el nuevo arzobispo de Buenos Aires, monseñor Aramburu, que había sido obispo de Tucumán e impulsor de los cursillos. Por otra parte, el contacto con las problemáticas del interior fue central en el proceso de radicalización de otros grupos católicos. Tanto para los curas que trabajaban en el interior como para los migrantes provinciales que trabajaban en Buenos Aires, el cuestionamiento del poder empezó por impugnar su expresión espacial.

La Revolución Argentina tuvo entonces un curioso doble efecto en materia de desarrollo regional. A corto plazo, su abierta vocación por planificar una Argentina futura absorbió las instituciones y los saberes que se habían expandido a la sombra del proyecto desarrollista. A mediano plazo, sin embargo, esa vocación planificadora comenzaría a perfilarse a la marcha de discursos alternativos que aparecerían en dos lugares. Fuera del Estado, se hicieron evidentes en la creciente radicalización del campo intelectual y técnico que no por azar se condensó en la muestra *Tucumán arde*. Y dentro del Estado, produjeron el resurgimiento de una fuerte vocación estatista en los organismos de planificación. Esta cuestión siempre había sido contemplada dentro del esquema de la Revolución Argentina como una segunda etapa que se cumpliría después de lograr la tan mentada estabilidad. Pero después del Cordobazo de mayo de 1969, esa estabilidad se desvaneció y las propuestas se apartaron de la ortodoxia con que habían sido concebidas.

La masiva ola de protesta, tan inesperada por el gobierno como por muchos de los propios protagonistas, cambió notablemente el lugar del interior en la política argentina. Después del Cordobazo, el rumbo económico del gobierno se modificó de manera significativa. Se aceleraron y profundizaron las inversiones públicas de envergadura, como el proyecto de El Chocón, que se venían estudiando desde antes, y la planificación a largo plazo tomó una marcada orientación regional.

La presentación por el general Roberto Levingston de su Plan de Desarrollo y Seguridad fue un hito en el aumento de la importancia asignada a las cuestiones regionales. Lanzado el 23 de diciembre de 1970 desde San Luis, su provincia natal, el plan denotaba la influencia del estructuralista ministro de

Economía Aldo Ferrer y también era el fruto de años de estudios sobre desarrollo regional. Usando términos hasta entonces impensables en un documento oficial, como “colonialismo interno”, el plan apostaba al desarrollo regional como parte central de una estrategia de desarrollo global. En eso representaba un giro fundamental en las posturas anteriores del desarrollismo y sus variantes, pues proponía un franco abordaje de las desigualdades regionales y un esfuerzo directo de desarrollo regional como un fin esencial en sí mismo. Sin embargo, como observaron algunos críticos en su momento, esos proyectos de desarrollo regional fueron encarados exactamente como los estudios anteriores: de manera aislada y poco integrada. El paso de Levingston por la presidencia resultó fugaz, a raíz de otra revuelta en Córdoba, y los “Lineamientos de un Nuevo Proyecto Nacional”, tan trabajosamente elaborados por sus asesores, pasaron a un distante segundo plano.

Muchos de los elementos del programa económico de Levingston perduraron durante el nuevo gobierno del general Alejandro Agustín Lanusse, pero de forma mucho más acotada y sujeta a decisiones políticas. Lanusse era plenamente consciente de la imposibilidad de la utopía compartida por militares y planificadores de fijar metas globales y llevarlas a cabo sin consultas. Para eso estaba la política. Pero la intrucción de estos conceptos y la activación de todo un circuito de protesta en el interior hicieron que constantemente tuviera que lidiar de un modo pragmático con estas protestas y demandas en su intento de armar una gran coalición político-electoral de corte conservador y popular.

OPERATIVO TUCUMÁN

El Tucumán moderno surgió a la sombra de las chimeneas de los ingenios azucareros. La industria azucarera nació y se consolidó al amparo del Estado nacional. Pero si éste fue al principio el garante del poder de la elite, con el tiempo pasó a ser artífice de un modelo original de ascenso social para la clase media cañera y urbana y finalmente terminó siendo aliado crucial de los trabajadores para la obtención de derechos e ingresos. De esta manera, el Estado nacional estuvo involucrado

de manera constante, aunque poco coherente, en el conflicto cada vez más amplio por definir el rumbo y el perfil de la economía y la sociedad tucumanas.

Durante el gobierno peronista, Tucumán vio el nacimiento de un sindicato poderoso y contestatario, la Federación Obrera de Trabajadores de la Industria Azucarera (FOTIA), que pronto ocupó un lugar central en la política provincial y nacional. Surgió en un momento de rápido crecimiento ocupacional de la industria azucarera y logró mejoras fundamentales en salarios y condiciones de trabajo. En 1950, el peronismo estableció cuotas de producción que favorecieron a los productores más chicos y menos eficientes a costa de los más grandes y más eficientes e impulsaron la expansión de la superficie cultivada a un récord histórico en 1955.

La contracción del sector empezó antes de la Revolución Libertadora y se aceleró a partir de entonces. Después de haber alcanzado su nivel máximo en 1948, el número de trabajadores de fábrica cayó de manera continuada. Algo parecido ocurrió con el empleo de trabajadores del surco que cayó en picada y, a mediados de los años sesenta, se había reducido a la mitad. Además, los ingenios cambiaron las condiciones de empleo y la mayoría absoluta de trabajadores permanentes de los años cuarenta se convirtió en una pequeña minoría hacia los años sesenta.

En la década posterior a 1955, los distintos gobiernos nacionales impulsaron políticas de desregulación que avanzaron, aunque de manera esporádica y desigual, en la reducción de los subsidios a la industria y en la reorientación de éstos hacia los sectores de ingenios y cañeros más concentrados. El resultado fue el crecimiento sostenido de la producción dentro de un contexto inestable caracterizado por grandes oscilaciones en el precio y en la producción de un año a otro. Esto llegó a su punto más álgido en la zafra de 1965, cuando se produjeron 1.200.000 toneladas para un mercado interno capaz de recibir apenas 800.000 toneladas. La situación se agravaba pues los altos costos hacían imposible cualquier intento de exportar el excedente. Se produjo entonces una abierta puja por obtener subsidios para mantener a flote los ingenios, mientras el Estado provincial en bancarrota enfrentaba huelgas de empleados públicos y de los trabajadores azucareros.

Al mismo tiempo, la FOTIA asumía un liderazgo importante pues conservó su lugar en el escenario tucumano no sólo como representante de los trabajadores, sino también como representante eventual de la patronal, presionando para que el gobierno pagara a los ingenios y éstos, a su vez, abonaran los salarios a sus trabajadores. A pesar de la represión política durante los gobiernos de Aramburu y Frondizi, la FOTIA había conservado su presencia y combatividad, que había provocado la cancelación de su personería gremial en 1961. Al recuperarla durante el gobierno de Illia, el sindicato tomó nueva fuerza y la renovación de autoridades colocó en un primer plano a una nueva generación de dirigentes combativos. Éstos se distinguieron por su capacidad de maniobra política y un mayor conocimiento de las situaciones concretas de cada uno de los ingenios. En medio del intento del sindicalismo vandorista por construir un “peronismo sin Perón”, los dirigentes combativos de la FOTIA se alinearon con el peronismo ortodoxo, presentándose como candidatos del partido neoperonista Acción Provincial, que ganó las elecciones. A principios de 1966, la federación inauguró una nueva e imponente sede en el centro de la capital tucumana, que era un claro símbolo de su renovado protagonismo dentro de la crisis generalizada del azúcar y de su capacidad para articular alianzas con los cañeros, la Iglesia y los grupos de izquierda. Varios curas de pueblos azucareros se plegaron a marchas, protestas y medidas de fuerza. La pujante izquierda estudiantil tucumana también buscó conexiones con los trabajadores del azúcar, y algunos los creyeron como la “vanguardia” de un proletariado rural que sería “detonante de la revolución argentina”. Sin embargo, la Revolución Argentina que habría de llegar sería bien distinta.

Poco después de asumir, el general Onganía viajó a Tucumán para celebrar el sesquicentenario de la independencia y fue recibido, según un dirigente gremial, por una multitud como “no se había visto desde la época de Perón”. La provincia le ofreció a la Revolución Argentina una primera oportunidad para demostrar la eficiencia y la visión estratégica que pregonaba. La larga crisis de la década anterior, llegada a su ápice en los últimos días de Illia, dio lugar a un proyecto de reconversión radical. Si en las universidades, en los puertos y en los ferrocarriles el programa inicial de los golpistas militares pareció represión pura y

simple, en Tucumán el gobierno difundió un proyecto más amplio y prometió mejoras calcadas del lenguaje del desarrollo regional. Unas semanas después de la visita el gobierno anunció el Operativo Tucumán. La provincia sería un nuevo “polo de desarrollo”, todo un ejemplo que se debería seguir en las nuevas técnicas de planificación y desarrollo regional.

Dos meses después del golpe, el gobierno militar anunció el “plan de transformación” de la provincia. El gobierno apuntaba a “racionalizar” tanto a los cañeros como a los ingenios, eliminando los subsidios y fortaleciendo a los productores más eficientes y concentrados. En vez de “inyectar dinero para subvencionar el monocultivo azucarero”, el ministro de Economía del gobierno militar proponía cerrar los ingenios en bancarrota. Por otra parte, prometía una transformación industrial, con la instalación de múltiples fábricas que habrían de generar nuevos y mejores puestos de trabajo para los sectores castigados por la “racionalización” del azúcar. Este “plan de transformación” calcó su lenguaje y objetivos de proyectos de desarrollo regional y basó sus medidas específicas en estudios realizados por el CFI.



El teniente general Juan Carlos Onganía preside el desfile militar durante el sesquicentenario junto al cardenal Antonio Caggiano y el teniente general Pascual Pistarini, en Tucumán, 10-9-1966.

Tucumán arde, “Informe: Viaje a Tucumán de los artistas”, octubre de 1968

“Esta situación se agrava debido al sistema de explotación de los ingenios que no han alcanzado el grado de tecnificación necesaria para una producción racional por las siguientes razones: la falta total de interés de parte de los propietarios por renovar las maquinarias desmintiendo en la práctica las supuestas intenciones de renovación técnica que el gobierno auspicia mediante su Operativo Tucumán. El espectáculo de las viejas maquinarias y la disposición y estructura edilicia de los ingenios remiten al recuerdo involuntario de la típica fábrica europea del siglo XIX. La última renovación técnica de los ingenios tucumanos data de los años '20 y, en algún caso, sorprende la insólita presencia de un poderoso y moderno trapiche arrumbado como chatarra mientras sigue en funciones el viejo trapiche ubicado allí desde la fundación del ingenio (...)

”Esta situación mediatizada en imágenes visuales, sonorizadas y actuadas será la base de la muestra-denuncia organizada por el Grupo de Artistas de Vanguardia como parte de la obra Tucumán arde.”

Fuente: *“Informe: Viaje a Tucumán de los artistas”, octubre de 1968.*

En los siguientes tres años tanto el plan oficial como la respuesta local tendrían desenlaces poco previsibles. Las promesas oficiales de eficacia, transparencia y crecimiento fueron desmentidas desde el comienzo, y la proyectada reorientación de la economía derivó en un claro fracaso. Once de los veintisiete ingenios azucareros cerraron sus puertas para siempre. En varios de ellos se lanzaron planes de colonización, entrega de tierras y creación de talleres, pero ninguno llegó a concretarse de manera significativa. Además, después de que el gobierno anunciara los primeros cierres, otros dueños hicieron lo mismo con sus ingenios. El intento de reglamentar la producción cañera produjo un registro de productores que excluyó a miles de pequeños cañeros, empujándolos a la producción en negro. La tasa de desempleo subió a niveles inéditos, impulsando a decenas de miles de trabajadores a migrar hacia otras



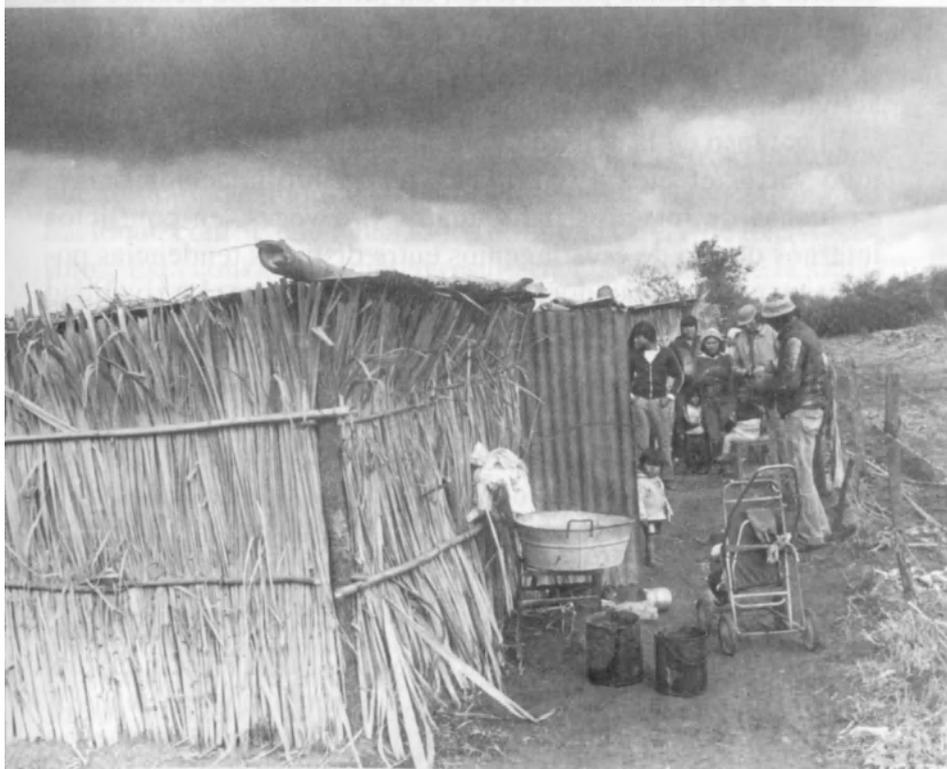
Tucumán arde, *exposición colectiva.*

regiones del país. Algunas fuentes oficiales de la época afirmaban que el éxodo comprendía entre 150 y 200 mil trabajadores, sobre una población provincial de poco más de 700 mil habitantes. Aunque algunos intentos de diversificar los cultivos tuvieron éxito, especialmente los de tabaco y soja, las nuevas fábricas atraídas por los programas oficiales crearon escasos empleos y los programas de trabajo temporario del gobierno —de “pico y palo”— alcanzaron a pocos más y generaron mucho repudio. En resumen, aunque el programa fue un gran éxito para los dueños de ingenios más poderosos, los grandes cañeros y los amigos del poder, fracasó en alcanzar sus propias metas.

Esta destrucción de la economía provincial, y sobre todo de la industria azucarera, provocó una resistencia fragmentada, latente y difícil de sostener. Para sorpresa de muchos, seguramente incluyendo a más de un funcionario oficial, se produjo

el colapso de uno de los sectores más combativos de la clase trabajadora argentina. Hasta entonces, la FOTIA había sido el baluarte de la resistencia comunitaria contra los recortes salariales, las demoras en el pago y los efectos de la crisis azucarera. Al haber pasado a manos de una dirigencia menos combativa poco antes del golpe, la federación tomó una actitud más bien conciliatoria y sumisa hacia el gobierno. Cuando realizó una huelga el 17 de octubre de 1966 contra el laudo salarial del gobierno y el cierre de los ingenios, a pesar del éxito relativo, terminó perdiendo la personería gremial del sindicato.

En la dirigencia, mientras tanto, se produjo una fuerte puja entre un grupo más conciliador y cercano al vandonismo dispuesto a dialogar con el gobierno a toda costa, un sector más ortodoxo que reivindicaba la autoridad de Perón y proponía soluciones algo más combativas y una franja minoritaria más radicalizada y abierta a planteos de la izquierda.



Ranchos de los trabajadores azucareros en Tucumán.

Estos conflictos más o menos ideológicos se superponían a las diferentes posiciones de los sindicatos de ingenios abiertos o ingenios cerrados ya sea por decisión gubernamental o patronal. Las diferencias de condiciones entre estos ingenios, la dificultad para coordinar acciones conjuntas sin personería gremial (y por lo tanto sin recursos) y la persistencia de actitudes conciliadoras y pactistas en un contexto de crisis profunda debilitaron de manera profunda la acción sindical. Aunque gran parte de las bases obreras aún seguían confiando hasta cierto punto en la intervención del Estado, la pérdida en la capacidad de presión de la FOTIA y la ausencia de propuestas de desarrollo regional concretas hicieron que influyera bien poco en la definición de los alcances y el rumbo de las medidas de reestructuración.

A lo largo de los dos años posteriores al golpe de Onganía la FOTIA fue desgarrada por luchas internas y desplazada de su lugar central como articuladora de proyectos en defensa de obreros y pequeños productores. En julio de 1968 declaró otra huelga con demandas muy parecidas a la de octubre de 1966, pero esta vez sólo se plegaron tres sindicatos de ingenios en actividad.

El colapso de la actividad gremial de la industria azucarera tuvo varios efectos. Por un lado, fragmentó la acción obrera en luchas de ingenios individuales y, a veces, en conflictos internos dentro de esos ingenios entre distintas tendencias políticas y entre trabajadores de fábrica y de surco. La rivalidad histórica entre esos dos grupos de trabajadores fue potenciada por un intento de los vandoristas de dividir los sindicatos y desplazar a los ortodoxos. Estos conflictos derivaron en actos de violencia y hasta provocaron enfrentamientos armados y muertes.

Por otro lado, la fragmentación de la FOTIA también unificó a la resistencia dentro de algunos ingenios. Especialmente en los ingenios cerrados, donde comités de defensa asumieron un lugar central en la lucha y los curas y dirigentes vecinales cumplieron un papel destacado. No todos los curas fueron aliados de los sectores más contestatarios. Uno de ellos lideró una procesión religiosa que sacó a los obreros del ingenio para que los dueños pudieran entrar y llevarse la maquinaria. Pero fueron muchos más los sacerdotes que ocuparon un lugar protagónico

**Carta de curas tucumanos a monseñor Aramburu,
18 de marzo de 1969**

“No sin asombro y preocupación hemos leído el comunicado firmado por usted. La Iglesia argentina parece la Iglesia del silencio. Sin querer jactarnos, constatamos sin embargo que los desposeídos han visto renacer su fe en la Iglesia de Cristo por la acción de los colaboradores ministeriales, de los obispos en las villas miseria, en los lugares de trabajo, en los sindicatos, compartiendo la pobreza con los pobres, alentando a los oprimidos y marginados; por el contrario, ¿qué decir de la actitud del Episcopado frente a las injusticias institucionalizadas de nuestra sociedad, donde se lesiona la libertad, la dignidad, el derecho de todo el pueblo?”

Fuente: Emilio Crenzel, *El Tucumanazo (1969-1974)*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1991.

en estas luchas y que, en una escala nacional, participaron en el lanzamiento del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM) en 1968.

Los sectores más combativos se acercaron a otros sindicatos que se sentían excluidos y reprimidos por la dirigencia sindical nacional, confluyendo casi todos ellos en la CGT de los Argentinos. Esta conexión también resultaría clave para que la situación tucumana volviera a tener en 1968 la proyección nacional que tuvo en 1966. Con la fundación de la CGTA y el MSTM en 1968, Tucumán pasó a ocupar un lugar central en la oposición nacional. El acercamiento de la CGTA a ciertos sectores intelectuales que se radicalizaban produjo como resultado *Tucumán arde*, una obra colectiva de denuncia hecha por una franja importante de la vanguardia artística porteña y rosarina. Esta obra fue expuesta en la sede rosarina de la CGTA un par de semanas, y después pasó a la sede porteña, donde duró un día antes de ser clausurada por el gobierno. Muchos esperaban que la desesperante situación de Tucumán iría a provocar allí una fuerte y masiva protesta. Sin embargo, cuando en mayo de 1969 se produjo esa ola de protesta su epicentro no fueron los clausurados ingenios de Tucumán, símbolos de un país en co-

lapso, sino las fábricas de Córdoba, verdadero motor del proyecto económico del gobierno.

Si el resultado más destacado del gobierno de Onganía en Tucumán fue la desarticulación de un notable movimiento de protesta social fragmentando los intereses de sus integrantes, en otros lugares consiguió justamente lo opuesto. En términos macroeconómicos Córdoba fue el escenario de su mayor éxito, pero pronto sería también el teatro de su más importante derrota política. Aunque es difícil precisarlo, parecería que el éxito conseguido en Tucumán impulsó al equipo de Onganía a avanzar con su estrategia de unificar el territorio a favor del gran capital. Cabe destacar que la causa inmediata del Cordobazo fue una operación destinada a eliminar supuestas “irregularidades” económicas, claro que menores que las tucumanas. Esta acción produjo una protesta social notable, potenciada por las propias divisiones internas del régimen militar así como por la eficacia del gobierno en alinear en su contra al empresariado pequeño y mediano debido a su restrictiva política de crédito. El Cordobazo se produjo también en el contexto de una serie de protestas en otras regiones, sobre todo en Corrientes y Tucumán, que ponían en duda la capacidad del gobierno para contener la situación social.

“EL ASSUÁN ARGENTINO”

Si el Estado nacional desempeñó un papel crucial en la formación del Tucumán moderno, en la Patagonia su rol fue aún más decisivo. Y si Tucumán se convirtió en los sesenta en un estorbo para diversos proyectos modernizantes, la Patagonia fue, en cambio, toda potencia. Tanto la presencia tutelar del Estado que ocupaba el territorio como las riquezas de recursos naturales disponibles, y especialmente de petróleo, hicieron de la Patagonia un escenario privilegiado para intentos estatales de planificación regional. Una larga tradición local enlazada con la fuerte presencia de reparticiones del Estado —y del Ejército— ponía énfasis en la potencialidad de la región y en la necesidad de una poderosa intervención estatal para aprovecharla. Es sabido que el capital privado, sobre todo los ferrocarriles ingleses, ejerció un papel relevante en el desarrollo de la

región, pero cabe subrayar la frecuencia con que las esperanzas y expectativas volvían a centrarse en el Estado nacional como agente de transformación.

No hay duda de que la Patagonia fue la región donde hubo más propuestas y más proyectos de desarrollo regional, provenientes no sólo del gobierno central sino también de sectores de la sociedad civil y, sobre todo, de una amplia gama de profesionales vinculados a la planificación, fueran arquitectos, ingenieros o economistas. Esta variedad de propuestas indica la fuerza con que se arraigó una representación de la Patagonia como un espacio de gran potencia. Tanto por sus recursos y ubicación como por su aparente maleabilidad fue terreno preferido para sueños profesionales y estatales, ampliamente difundidos en la sociedad y que tendrían una influencia no menor en la significativa llegada de migrantes hasta los años ochenta.

La larga trayectoria de muchas de estas ideas puede ser rastreada en una de las obras más emblemáticas de la época, la represa El Chocón-Cerros Colorados en la provincia de Neuquén. Estas iniciativas técnicas no eran nuevas y remitían a un imaginario del progreso que no era privativo de un gobierno en particular sino que se vinculaba con los programas de varios. La idea original para construir una represa data de 1938, la primera propuesta formal se hizo en 1953 y los primeros pasos fueron aprobados en 1956 como parte de las propuestas de la Revolución Libertadora y de la elite de ingenieros interesada en promover un nuevo accionar territorial del Estado. Para ellos, el desarrollo capitalista del país requería un salto cualitativo en fuentes de energía y recursos y las represas hidroeléctricas habrían de cumplir un papel clave. Algunos ingenieros también pensaban en incorporar extensos programas de riego, siguiendo los modelos norteamericanos o soviéticos que por entonces encontraban su expresión más acabada en la represa de Assuán en Egipto.

El "Assuán argentino", como algunos llamaron la obra de El Chocón, o también el eje del "Ruhr argentino", según el ideólogo desarrollista Rogelio Frigerio, avanzaría de manera irregular pero sostenida en estos años. El objetivo fundamental de esta obra era proveer mayor cantidad de electricidad para los consumidores y la industria del Litoral. Formaba parte de una



Aspecto de la construcción de la presa de El Chocón-Cerros Colorados, 1972.

estrategia de desarrollo pensada desde el centro, aunque representaba también para Neuquén un fortalecimiento de sus lazos con el propio centro y una inversión importante de recursos y mano de obra. Como en muchos proyectos hidroeléctricos, también figuraba entre los objetivos de la represa proveer enormes cantidades de agua para riego aunque eso nunca se llevó a cabo. A la vez era símbolo y motor de una nueva estructura regional y una nueva orientación estatal, ya que la obra también fue marcada por pujas entre diversos *lobbies*, desde las propuestas para dotarla de turbinas soviéticas promovidas por José Ber Gelbard, presidente de la Confederación General Económica, hasta la dirección y el financiamiento que finalmente tuvo del Banco Mundial.

Cabe destacar que esta obra imponente del Estado nacional permitió y promocionó el desarrollo de fuerzas políticas provinciales. Fue a la sombra de El Chocón, así como de otros proyectos nacionales petroleros que involucraban a Neuquén, como el líder neoperonista de Neuquén, Felipe Sapag, construyó una variante singular del Estado de bienestar a escala local.

Dotado de recursos que permitían fomentar la educación y la salud y sin núcleos fuertes de oposición en la sociedad civil, Sapag pudo marginar absolutamente al radicalismo y al peronismo ortodoxo de la provincia. Así, ninguno de los gobiernos nacionales que tanto se esforzaron en concretar el proyecto pudo cosechar beneficios políticos locales. Mientras tanto, en la provincia vecina de Río Negro, el avance de El Chocón y otras obras de desarrollo regional, sobre todo el regadío en el Bajo Valle y la mina de hierro de Sierra Grande, resultaron aún más conflictivos, provocando vigorosas puebladas de las fuerzas vivas de Cipolletti en 1969 y de General Roca en 1972, ambas motivadas por los torpes intentos oficiales de reacomodar el poder interno en la provincia como resultado de las grandes obras. En ambos casos, el crecimiento económico producido por las obras no benefició al gobierno, sino que mostró su incapacidad para articular alianzas duraderas, fortaleciendo

El presidente Arturo Illia sobre El Chocón, Neuquén, 3 de junio de 1966

“Aquí ha concurrido toda la nacionalidad y concurrirá, como lo demuestra la historia, para la concreción de las grandes obras. Y éste es otro factor que queremos destacar: es decir, cómo se va formando la conciencia nacional y afirmando paulatinamente alrededor de este tipo de concepciones (...) La integridad física del territorio nacional, la necesidad de que la Nación se proyectara hacia la Patagonia, imponía también que apuráramos lo más rápidamente posible la obra a la que felizmente hoy damos inicio (...)

“Para integrar políticamente el país es indispensable realizar acciones que, con el desarrollo económico, den la posibilidad de afirmar poblaciones que tengan sentido de la seguridad en su progreso. De esa manera, las instituciones y las leyes son más fácilmente acatadas.

“Debemos integrar política y físicamente a la Patagonia (...) era necesario que se realizara esta obra de El Chocón-Cerros Colorados para darle personalidad económica destacada a toda la Patagonia (...) La Argentina será una Gran Potencia Mundial.”

Fuente: Secretaría de Prensa de la Presidencia de la Nación, Buenos Aires, 1966.

un partido político provincial en Neuquén y promoviendo fuertes divisiones intraprovinciales en Río Negro.

Pero el espectáculo central de la política regional en estos años fue sin duda la tumultuosa construcción de El Chocón, la “segunda conquista del desierto”. Después de un complejo proceso de definición y formación de consorcios, Illia lanzó el proyecto en junio de 1966 afirmando “la necesidad de que la Nación se proyectara hacia la Patagonia” para “integrar política y físicamente” a la región y destacando “cómo se va formando la conciencia nacional alrededor de este tipo de concepciones”. Su convicción de que los proyectos de desarrollo afirmaban las instituciones resultó menos precisa, y cuando Onganía tomó el poder tres semanas después, archivó el proyecto para reformularlo.

Siguiendo las sugerencias del Banco Mundial, el proyecto de El Chocón fue relanzado en 1968 bajo la supervisión de Hidronor, un ente mixto con representación del sector privado y del gobierno nacional. El ingeniero que dirigía la obra, Raúl Ondarts, tenía una larga trayectoria política dentro de su profesión y también fuera de ella, como cuando fue candidato a gobernador de Buenos Aires por el partido orientado por Aramburu en 1963. Las obras específicas serían llevadas a cabo por una serie de empresas contratistas coordinadas bajo el mando del consorcio ítalo-argentino Impregillo y Sollazo, que ejercía la dirección de la obra. De hecho, habría que resaltar la complejidad del entramado organizativo del proyecto, todo un ensayo de la futura formación de grupos económicos alrededor de entes mixtos y enormes proyectos de infraestructura. El consorcio que construyó El Chocón-Cerros Colorados ocuparía un lugar central en el posterior *boom* hidroeléctrico argentino, que incluyó, entre otros proyectos, Salto Grande y Yacyretá.

El rápido avance de la obra, todo un símbolo de la supuesta eficacia militar, estuvo fundado en un autoritarismo cotidiano que provocaría un conflicto obrero de grandes resonancias nacionales. Entre enero y diciembre de 1969 se levantó un obrador con viviendas para 3.000 trabajadores. Los procedimientos de la empresa en la primera etapa de la obra y en la construcción del propio obrador fueron netamente autoritarios. Se pagó menos de lo acordado y se obligó a los trabajadores a comprar

sus propias herramientas. El nivel de exigencia de los capataces fue muy alto, y el cumplimiento de normas de seguridad laboral, casi inexistente. En el primer año de la obra, ocho trabajadores murieron en accidentes laborales.

La empresa otorgó escasa atención a los problemas sociales. Así, las condiciones de trabajo eran sumamente duras tanto como las condiciones de vida (problemas de vivienda, salubridad y alimentación). Además, se imponían normas arbitrarias como la prohibición de venta de bebidas alcohólicas para los obreros pero no para el personal jerárquico. Esta situación provocó un fuerte malestar entre los trabajadores.

Casi todos los obreros de El Chocón provenían de otras provincias, especialmente de Tucumán, después de la crisis azucarera, y del Litoral, donde muchos habían adquirido experiencia en la construcción del túnel subfluvial del río Paraná. Al comienzo, los argentinos representaban el 75% de la mano de obra para la represa. Este porcentaje descendió ligeramente a lo largo del conflicto pues se incorporaron en gran número



Viviendas de los trabajadores de la construcción de la presa, 1970.

obreros bolivianos y chilenos. Esta mezcla de grupos fue parte de una estrategia empresarial deliberada para dividir a los trabajadores, aunque no alcanzó los resultados esperados. Al comienzo de las obras hubo un incidente con 42 obreros chilenos a quienes un subcontratista había prometido condiciones de vida y de trabajo que no se cumplieron. Pero también había trabajadores bolivianos con una trayectoria de lucha minera y, sobre todo, se generalizó una gran frustración que superaba cuestiones de origen nacional o tradición partidaria.

Los reclamos laborales puntuales pronto llevarían a los obreros a un enfrentamiento generalizado con el gobierno, con las empresas contratistas y, en especial, con la burocracia sindical. En marzo de 1969 se produjo la primera iniciativa de organización de los trabajadores para enfrentar los problemas laborales y sociales que generaba la obra. Esta acción se produjo al margen del sindicato que supuestamente los representaba, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). La seccional Neuquén del sindicato era una organización débil, de escasa trayectoria antes del inicio de las obras de El Chocón. La UOCRA era fiel a la línea participacionista seguida por su dirección nacional, como sugiere su



Huelguistas de El Chocón, diciembre de 1969.



Fin del paro de los obreros de El Chocón, 1969.

primera acción en el conflicto: horas después de una visita del dirigente local de la UOCRA a El Chocón, el trabajador que había impulsado la organización fue despedido. El despido motivó un paro espontáneo de 350 de los 400 trabajadores entonces ocupados en la obra, dando lugar a la primera asamblea para elegir delegados.

En diciembre de 1969, los obreros eligieron como sus representantes a Antonio Alac, Armando Olivares y Edgardo Torres, que no fueron reconocidos por la Dirección General de Trabajo de la provincia. Los delegados acordaron una reunión con la empresa, pero fueron detenidos. Esta acción motivó otro paro, conflictos con la policía y un intento de parte de la UOCRA de infiltrar a sus activistas en la obra. Una semana después, los delegados fueron liberados, se postularon en nuevas elecciones y volvieron a ganar. Entonces, la empresa empezó a atender algunos de los reclamos: cambiaron categorías, calmaron a los capataces, abrieron consultorios médicos de la UOCRA. Hubo incluso una inspección completa de la obra por parte de la Dirección General de Trabajo de Neuquén, aunque la empresa después desconoció sus conclusiones, alegando que estaba en la jurisdicción de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Un apoyo fundamental a los huelgistas provino del obispo de Neuquén, Jaime de Nevares, cercano al MSTM. Otro ejemplo del nuevo papel de la Iglesia fue la participación de un cura obrero, Pascual Rodríguez, como uno de los delegados rebeldes. Aunque gozaba de la confianza de los trabajadores, cuando trascendió su identidad sacerdotal, la empresa y el gobierno propusieron construir una iglesia y gestaron una movilización obrera para colocar una Virgen en la obra.

La alianza de Estado, empresa y burocracia sindical contra los trabajadores insurrectos era clarísima. Justo después de la protesta de las empresas contra la inspección, el gobierno nacional abrió una seccional de la Secretaría de Trabajo en Neuquén y le otorgó jurisdicción sobre El Chocón. Dos semanas más tarde se implantó una nueva comisión normalizadora, favorable a la empresa y al sindicato nacional, y al día siguiente los trabajadores declararon un paro para conseguir un 40% de aumento y el reconocimiento de los delegados elegidos. Mientras los obreros seguían habitando en una “villa de emergencia”, el delegado de la Secretaría de Trabajo y el representante de la UOCRA vivían en casas cedidas por la empresa.



*Monseñor Jaime Francisco de Nevares,
obispo de Neuquén, 1969.*

En medio de un clima de terror, alentado por los matones sindicales que se habían infiltrado en la obra, la huelga se fue debilitando. En los primeros días de marzo, dos de las empresas subcontratistas volvieron a trabajar y cientos de obreros abandonaron las obras. A mediados de marzo de 1970 apenas quedaban 140 obreros en huelga. Entonces las fuerzas policiales invadieron la villa a la madrugada y detuvieron a los delegados.

El gobierno nacional reconoció su incapacidad para imponer orden y nombró gobernador a Felipe Sapag. La reso-

Discurso de monseñor de Nevares sobre los obreros de El Chocón, 13 de marzo de 1970

“He señalado a los que estuvieron ausentes de sus deberes. Hay que añadir a los que pretenden manejar los problemas humanos con mentalidad IBM. Y conste que no tengo nada contra dichas máquinas. Expresiones como ‘por encima de todo está la obra’, que hemos escuchado, podrían haber estado en boca de los faraones cuando la construcción de las pirámides con el trabajo de los esclavos. O bien: ‘estamos perdiendo tantos millones por día’. Las angustias del trabajador por el pan de sus hijos, sus esfuerzos por el reconocimiento de su dignidad y por la justicia ¿no valen nada? Valen mucho más. Pero, Monseñor, se me dirá, ¿no hay culpables en el otro sector también? Respondo: ¿quién culpará a quien se defiende de una agresión? Porque los obreros han sido agredidos en sus personas, en su dignidad y en sus derechos.”

Fuente: Antonio Alac, Armando Olivares y Edgardo Torres, *El Chocón: La Lucha de Unos es la de Todos*, Buenos Aires, Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical, 1970.

lución del conflicto se debe en alguna medida a su capacidad para cumplir la función mediadora que no habían podido desarrollar ni el gobierno nacional ni los sindicatos. Al finalizar el conflicto, el obispo de Nevares auspició una comida para los delegados que habían estado presos, mientras el gobernador Sapag hizo un homenaje a las fuerzas policiales.

Desde mediados de 1970, la empresa y los sindicatos adoptaron algunas medidas sociales invirtiendo en un club obrero, fortaleciendo la clínica médica y financiando viajes para los trabajadores. Estas iniciativas también incluyeron la construcción de una capilla, terminada en 1971, a la cual el obispo de Nevares se negó a asistir e inaugurar por considerarla un fruto de la injusticia y una prueba de la intromisión en su autoridad. Finalmente lo hizo el provicario castrense monseñor Bonamín —poco después apologista del terrorismo de Estado— con la presencia del presidente Lanusse y de los gobernadores de Río Negro y Neuquén.



Felipe Sapag, gobernador de Neuquén.

A partir de agosto de 1970, el sindicato tuvo nuevos delegados que contaban con el apoyo de los anteriores, mayor espacio de maniobra y una actitud más negociadora. En 1971 volvieron a hacer una huelga, esta vez más exitosa, y a partir de entonces se dio un acercamiento progresivo entre el sindicato y el gobernador Sapag. Éste mostró su habilidad al distanciarse del gobierno militar y derrotar al peronismo en las elecciones de 1973, hechos que le permitieron consolidar una política regionalista frente al centralismo del Estado nacional. De hecho, su capacidad para resolver conflictos contrasta notablemente con la incapacidad de sus pares de la vecina provincia de Río Negro. Y la supervivencia

política debe mucho a los ingresos y regalías de esos proyectos energéticos, particularmente de El Chocón.

EL NORDESTE

A diferencia de Tucumán y la Patagonia, las provincias del Nordeste no fueron una prioridad del gobierno nacional. Aun después del viraje regional en la política económica oficial, los recursos asignados al Nordeste fueron magros. Pero aunque se les tomara poco en cuenta, no fueron en absoluto ajenas a los procesos nacionales. La política de concentración del gobierno y la caída de precios agrícolas tuvieron un fuerte impacto negativo en la región. Desde finales de los años cincuenta, y sobre todo a partir de los primeros años sesenta, las crisis de las economías regionales provocaron un fuerte éxodo de la región, especialmente en las provincias de Formosa, Corrientes y Chaco. La escasa eficacia de las organizaciones agrarias tradicionales

para amortiguar los efectos de la crisis y el oportunismo de ciertos grupos poderosos provocaron una serie de rupturas en las estructuras políticas y económicas provinciales. En la apertura de ese espacio de conflicto, surgieron las Ligas Agrarias.

Hacia el final del gobierno militar, este movimiento se había hecho fuerte en Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes. La organización de los productores no era en absoluto una novedad, sino que por décadas había sido el objetivo central de una amplia gama de organizaciones cooperativas y gremiales de larga trayectoria. Pero la severidad de las crisis enfrentadas durante el gobierno militar, la poca eficacia reivindicativa de las organizaciones tradicionales y los intentos de organización impulsados por grupos católicos o cooperativos disidentes fueron factores que se combinaron y permitieron la emergencia de las Ligas Agrarias. Como sugiere su nombre, las ligas se nutrieron de los ejemplos aportados por las movilizaciones campesinas en Brasil y Paraguay, que habían comenzado a principios de los años sesenta y

en las cuales la Iglesia había desempeñado un rol fundamental. Interpretadas en su momento como el primer paso para una revolución agraria, las ligas locales tenían sin embargo una base social y un impacto político distinto de lo que sugiere esa retórica. Mostraron una gran capacidad para articular grupos e intereses antes dispersos en movilizaciones aparentemente inéditas en una región olvidada por la política nacional. En rigor, estas movilizaciones tenían sus raíces y antecedentes en los conflictos sociales de los años veinte y treinta y en los cambios sociales de la



Norma Morello iza la bandera en un acto de las Ligas Agrarias.

época peronista. Pero las Ligas Agrarias representaban un salto cualitativo sobre esos antecedentes en términos de escala, energía y capacidad de propuesta. Dos hechos fueron decisivos para producir ese cambio: el avance de la Iglesia católica y la crisis larvada del agro.

Ya se ha sugerido el cambio de perspectivas y actuación producido en la Iglesia en estos años. Cabe destacar además la presencia de muchos sacerdotes tercermundistas en el Nordeste que contaban con el apoyo de varios obispos. Pero los agentes fundamentales del proceso de politización en esta zona fueron los laicos más que los curas. De hecho, las Ligas Agrarias surgieron de uno de los procesos más interesantes de educación popular en la Argentina y son un ejemplo de los cambios sociales producidos no sólo en las ciudades sino también en el campo entre los jóvenes de los sesenta. Los protagonistas clave de las ligas fueron los hijos de los colonos o pequeños agricultores locales, un grupo social relativamente definido cuyos miembros, con la excepción parcial de Formosa, distaban de ser campesinos como su retórica pretendía sugerir. Otro aspecto importante de las ligas fue la influencia recibida del peronismo entre sectores que tradicionalmente eran baluarte del radicalismo. Aunque esta adscripción política terminaría siendo compleja en todas las provincias, y especialmente en Corrientes, donde el gobernador peronista se convertiría en el mayor enemigo de las ligas, igualmente representó un notable cambio que impulsó hacia una radicalización mayor a una parte de la dirigencia agraria.

La crisis general del agro afectó a las distintas regiones en forma concreta y de manera diversa. En el caso del algodón, la reducción de subsidios, la saturación del mercado y la caída de precios sumieron a extensas zonas de Formosa y el Chaco en crisis desde principios de los sesenta. El hecho de que esta crisis, tan profunda o más que la de la industria azucarera tucumana, haya pasado casi inadvertida en el ámbito político nacional indica cuán marginal era el lugar de estas provincias. Pero esa escasa visibilidad también era un efecto producido por el poder: al mismo tiempo Chaco y sobre todo Formosa fueron integrados en el circuito ganadero, permitiendo que las mejores tierras de la pampa fuesen dedicadas al engorde. En Formosa, donde la mayor parte de la tierra era de propiedad

EL CLAMOR CHAQUEÑO

LOS CAMPESINOS CHAQUEÑOS, EN DOS ACTOS PUBLICOS REALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA SYLVINA Y LAS BREÑAS, VOLVIERON A TRATAR AGUDOS INCONVENIENTES QUE SOBRELLEVAN DESDE HACE TIEMPO. DENUNCIARON QUE NO SE CUMPLEN LAS PROMESAS DEL PRESIDENTE LANUSSE FORMULADAS HACE TRES MESES, EN OCASION DE SU VISITA A ESA PROVINCIA. REPRESENTANTES DE LAS LIGAS AGRARIAS PUSIERON DE RELIEVE LAS IRREGULARIDADES CON LA VENTA DE MAQUINARIAS, Y RECLAMARON POR OTROS PROBLEMAS, ENTRE ELLOS, POR LA TENENCIA Y PROPIEDAD DE LAS TIERRAS, LA IMPORTACION DE FIBRA Y LA CONSTITUCION DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE COLONIZACION POR NO SER REPRESENTATIVO.



Convocados por las Ligas Agrarias Chaqueñas, los campesinos de la provincia se reunieron en Santa Sylvina y Las Breñas para formular reclamos.

Titular de Así, 22 de agosto de 1972.

fiscal, esta incorporación se realizó mediante una “regularización” del régimen de propiedad que cedió gratuitamente vastas secciones a ganaderos pampeanos, expulsando a pequeños productores empobrecidos con dudosas pruebas legales de su arraigo en la propiedad. Así, a lo largo de los años sesenta, hubo expulsiones masivas en la provincia, acompañadas por la cada vez mayor diferenciación entre pequeños productores aislados y grandes productores integrados al circuito comercial. Serían esta división entre productores en ambas provincias y las demandas de tierra en Formosa los problemas que definirían la agenda de las Ligas Agrarias.

En Misiones, el eje de la lucha fue el proceso de desregulación de los mercados de yerba mate y té, que también produjo una diferenciación mayor entre los productores. En Corrientes, mediante la repentina reestructuración de la industria tabacale-

ra a mediados de los sesenta, casi todos los productores nacionales fueron desplazados por empresas extranjeras y reemplazaron al tabaco negro por el rubio. Obviamente esta situación tuvo un fuerte impacto sobre los productores de tabaco negro pues, de improvisto, su mercado se achicaba rápidamente, mientras el endurecimiento del sistema de calificación de hojas de tabaco significaba una caída adicional en los precios.

Las protestas se concentraron sobre los problemas generados en el sistema de crédito, comercialización y distribución. Las ligas surgieron recién al final del gobierno militar, en 1971 y 1972, y tanto su estrategia como su retórica fueron fuertemente condicionadas por el contexto de confrontación generalizada con el gobierno. Aunque hubo protestas anteriores, como por ejemplo las movilizaciones estudiantiles en Corrientes en 1969, las ligas emergieron en un momento de repliegue y rearticulación del gobierno nacional. Precisamente, su rápido crecimiento se explica en gran medida por el retroceso del gobierno. También se debe a la atención prestada a la situación de los pequeños productores puesto que la organización que históricamente los había representado, la Federación Agraria Argentina, se alineaba con el gobierno, y el gobierno estaba tejiendo alianzas con grupos monopólicos, como los emprendimientos de los hermanos del presidente Lanusse en Chaco o de Deltec en Formosa.

En las ligas confluían las estrategias de acumulación o mera supervivencia de muchos pequeños productores con la ideología radicalizada de la juventud católica. En el espacio de negación formal de la política, canalizaron intereses corporativos de manera política con un nivel de activismo y empeño inédito. Pero, con el retorno de Perón, mantener esa representatividad o transferirla a proyectos explícitamente políticos resultó más difícil de lo que pensaban. En última instancia, los orígenes comunes de las ligas no les permitieron articular una estrategia conjunta, y cada una fue víctima de su éxito, en la medida que los gobiernos surgidos de las elecciones de 1973 intentaron incorporarlas al gobierno o formar organizaciones paralelas. Así, mientras unos sectores de la dirigencia se radicalizarían, otros se alinearían con el gobierno, dividiendo el movimiento. Los sectores más negociadores quedaron marcados por el turbulento escenario de las políticas económicas de

Perón y Gelbard. Las franjas más radicalizadas, por su parte, permanecieron fuertemente conectadas con la Juventud Peronista y los Montoneros, cada vez más sujetas a las iniciativas de esas organizaciones y el trágico destino que les esperaba. La provincia que anticipó esa trayectoria nacional fue otra vez Tucumán.

LA VUELTA Y DEMOLICIÓN DE LAS CHIMENEAS

El fracaso rotundo de la huelga de la FOTIA en junio de 1968 marcó el eclipse del sindicato como articulador de protesta social, pero la explosión de mayo de 1969 inauguró un nuevo ciclo de movilización. Aunque los trabajadores de varios ingenios cerrados tendrían una participación importante en este ciclo, y a veces los ingenios mismos se convertirían en



Acto de los trabajadores del gremio del azúcar en Tucumán, 27-10-1970.

espacios de confrontación, el motor de estas protestas fueron los estudiantes universitarios y secundarios y su escena fundamental fue la ciudad de San Miguel de Tucumán. La protesta de mayo de 1969 fue desencadenada por una marcha de los obreros del cerrado ingenio Bella Vista, liderada por curas tercermundistas, y también por la represión policial contra manifestaciones estudiantiles en Corrientes y Rosario. Llegó a su punto más álgido durante la misma semana del Cordobazo, con una ocupación total del centro de la ciudad.

Esta protesta fue apenas la primera de toda una serie de movilizaciones estudiantiles que a menudo incluyeron la participación de obreros de ingenios cerrados y también de las nuevas (y fallidas) fábricas, además de amplios sectores medios de la población urbana. Lo notable fue, por un lado, que las organizaciones estudiantiles dirigieron la protesta, desplazando a la fragmentada e intervenida FOTIA, sobre todo entre 1969 y 1973. En noviembre de 1970 y de nuevo en marzo de 1971, los estudiantes tomaron el centro de la ciudad. La combatividad estudiantil impulsó a las autoridades a reflatar un viejo plan para trasladar la universidad del centro hasta la Quinta Agronómica, hecho que profundizó el conflicto.

Pero otro aspecto clave del activismo estudiantil fueron sus reclamos curiosamente reformistas. Todas las breves e intensas luchas se centraron en las políticas autoritarias dentro de la universidad y en el manejo del comedor universitario —sitio central de la sociabilidad universitaria y mecanismo importante de la apertura de la universidad a sectores menos pudientes—, aunque siempre tuvieron en la mira el contexto global de la provincia y la nación. Fueron movimientos clave no sólo para combatir a una sucesión de gobiernos provinciales cada vez más débiles, sino también para reclutar cuadros para diversos grupos de izquierda y de la guerrilla entonces en expansión.

Es difícil no ver estos años como la antesala del horror que se instalaría a partir del golpe militar de 1976, pero para entender el surgimiento de los grupos guerrilleros cabría enfatizar la generalizada descomposición de la clase dirigente local. Los representantes locales del gobierno militar daban golpes en la oscuridad, incapaces de encarrilar los restos del Operativo Tucumán hacia un proyecto medianamente sostenible o creíble.

Hacia el final del gobierno militar, se acercaron con renovada fuerza a un liderazgo sindical igualmente gastado, dividido y carente de estrategias.

En mayo de 1970, poco antes de su destitución, el gobierno de Onganía dispuso la intervención de otros ingenios y reunió a cinco de ellos —San Juan, Bella Vista, La Florida, La Trinidad y Santa Rosa— en un nuevo ente, la Compañía Nacional Azucarera S.A. (CONASA), que debía ser reorganizada y privatizada en un plazo de tres años. Muy criticada por los dueños de otros ingenios, la CONASA representó un intento de salvaguardar y recuperar apoyo popular para el gobierno, que desistió de privatizar, realizó inversiones significativas y dio fuerte participación a los dirigentes azucareros.

En 1973 el peronismo retornó al poder prometiendo que las chimeneas de los ingenios volverían a echar humo. Durante el gobierno peronista, la CONASA llegó a tener el 25% de la producción nacional del azúcar. Pero la FOTIA, en una demostración del derrumbe del empleo, había caído de 36.000 afiliados a apenas 19.000 y tanto la crisis interna del peronismo como la prolongada crisis social tucumana superaron este éxito limitado.

Fue en estos años de protesta masiva que el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) cobró fuerza en la provincia. Sus primeras acciones armadas obedecían a una lógica más propagandística que militar: asaltos a negocios y camiones de alimentos, cuyo botín luego era repartido en los barrios pobres. Pero el ERP quiso ver en los pueblos de ingenios cerrados, en la densa y flotante población campesina y en los numerosos obreros azucareros y estudiantes universitarios radicalizados las condiciones para lanzar una guerrilla rural de envergadura. Su lectura de las pésimas condiciones sociales tal vez no fue tan extraviada, pero su estrategia y los resultados se revelaron desastrosos. La campaña comenzó cuando aún estaba el régimen militar pero se expandió durante el gobierno peronista. Fue en Tucumán donde se produjo la respuesta más sistemática de la Triple A y el Ejército ensayó un tipo de represión brutal que se generalizaría poco después. Los nombres de sus protagonistas, de Bussi a Videla, y sus tenebrosas consignas señalan el trágico curso futuro del país.

La vuelta de las chimeneas fue fugaz: el Ejército cerró la

CONASA y convirtió a más de un ingenio en un campo de concentración. A fuerza de represión masiva y despiadada, el Ejército llevó a cabo el último capítulo del Operativo Tucumán, con la eliminación no sólo de los ingenios sino de todo el amplio espectro social, cultural y político que se había organizado en torno de ellos para imaginar un mundo mejor. Con algunos ingenios cerrados convertidos en centros clandestinos de detención, la dirigencia militar quiso eliminar de una vez por todas el progreso posible que alguna vez habían significado las chimeneas. Pusieron las cargas de dinamita, invitaron al público y un día de 1977 volaron las tres chimeneas de uno de los ingenios más contestatarios, Santa Ana.

BIBLIOGRAFÍA

Arias, María Fernanda, "From Rebellion to Rupture: Peronist Party Politics in Neuquén, 1961-73", en Brennan, James (comp.), *Peronism and Argentina*, Wilmington, Delaware, Scholarly Resources, 1998.

Arias, María Fernanda, y García Heras, Raúl, "Carisma disperso y rebelión: los partidos neoperonistas", en Amaral, Samuel, y Plotkin, Mariano Ben (comp.), *Perón del exilio al poder*, Buenos Aires, Cántaro, 1994.

Bandieri, Susana; Favoro, Orietta, y Morinelli, Marta, *Historia de Neuquén*, Buenos Aires, Plus Ultra, 1993.

Bartolomé, Leopoldo, "Base social e ideología en las movilizaciones agrarias en Misiones entre 1971 y 1975", en *Desarrollo Económico*, vol. 22, N° 85, abril-junio 1982.

Brennan, James, "Industriales y 'bolicheros': la actividad económica y la alianza populista peronista, 1943-1976", en *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani"*, tercera serie, N° 15, 1997.

Brennan, James, y Pianetto, Ofelia, *Region and Nation*, Nueva York, St. Martins Press, 2001.

Crenzel, Emilio, *El Tucumanazo (1969-1974)*, 2 tomos, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1991.

Ferrara, Francisco, *Qué son las Ligas Agrarias: historia y documentos de las organizaciones campesinas del Nordeste argentino*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1973.

Longoni, Ana, y Mestman, Mariano, *Del Di Tella a Tucumán arde: vanguardia artística y política en el '68 argentino*, Buenos Aires, El Cielo por Asalto, 2000.

Murmis, Miguel, y Waisman, Carlos, "Monoproducción agroindustrial, crisis y clase obrera: la industria azucarera tucumana", en *Revista Latinoamericana de Sociología*, vol. 5, N° 2, 1969, pp. 344-383.

Quintar, Juan, *El Choconazo (1969-1970)*, Neuquén, EDUCO, 1998.

Rosenvaig, Eduardo (dir.), *La cepa: arqueología de una cultura azucarera*, 3 tomos, Tucumán, UNT/Letra Buena, 1997.

Roze, Jorge Próspero, *Conflictos agrarios en la Argentina: el proceso
liguista*, 2 tomos, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1992.

Sigal, Silvia, "Acción obrera en una situación de crisis: Tucumán 1966-
1968", en *Revista Mexicana de Sociología*, vol. 25, Nº 2, abril-junio, 1978.

———, "Crisis y conciencia obrera: la industria azucarera tucumana" *Re-
vista Latinoamericana de Sociología*, vol. 6, Nº 1. 1970, pp. 60-99.

V

*“¿Y esto es Buenos Aires?”
Los contrastes del proceso
de urbanización*

por JAVIER AUYERO y RODRIGO HOBERT

Deseamos agradecer a Gastón Beltrán y a Norberto Pereyra por sus críticas y aportes a este capítulo.



e mano en la Avenida de Mayo, 1968.



La escena nada tenía de especial. Sobre uno de los accesos a la villa un antiguo coche plaza de tracción a sangre se detuvo. De él descendió temerosa la familia de Marcelo con su equipaje. Observaron la extensión de casillas de madera y chapa desde donde brotaban pequeños hilos de humo de las fogatas. El aire enrarecido parecía acompañar la confusión de aromas y de ese instante. Sobre la vereda, yacía el armazón elástico de una vieja cama que otro hombre había traído consigo en su viaje. La familia observaba; ellos no traían cama ni elástico, sólo algunas frazadas. Marcelo, todavía aturdido por el viaje, había prestado poca atención al panorama. Sólo al día siguiente, después de ir a una letrina de madera cubierta por tela de arpillera deshilachada y de recorrer por los estrechos callejones el amontonamiento de ranchos y casuchas de lata, se acercó desilusionado y a la vez incrédulo a su madre, y entonces preguntó: “¿Y esto es Buenos Aires?”.

Este relato condensado aquí fue publicado en el año 1957 por Bernardo Verbitsky en su libro *Villa Miseria tam-*

bién es América. Este título resume el intento político de la novela; exhibir a las “villas miseria” como parte del paisaje urbano del continente y, en especial, de la Argentina. “Así ocurrió”, continúa Verbitsky. “Una mañana cualquiera Buenos Aires descubrió un espectáculo sorprendente: al pie de los empinados edificios de su moderna arquitectura se arremolinaban infinidad de conglomerados de viviendas miserables, una edificación enana de desechos inverosímiles”. Estos contrastes entre “modernidad” y miseria, temas de este capítulo, frutos del intenso éxodo rural hacia la ciudad con posterioridad a la década del 30, comienzan a verse acentuados en las décadas posteriores a la del 50, como consecuencia de una serie de procesos de cambio en la estructura económica y social de la Argentina, que encontrarán su reflejo en la configuración del espacio urbano.

Como una referencia anterior a este período resulta significativo tener en cuenta que a partir de 1880 no sólo Buenos Aires, sino también gran parte de las urbes latinoamericanas, comenzaron a ver modificadas tanto su estructura social como su fisonomía. Estas transformaciones se encontraban íntimamente emparentadas con los cambios en las estructuras económicas de la mayoría de los países latinoamericanos, modificaciones que a su vez operaban en la concentración y orientación de la producción nacional con vistas a la exportación de materias primas requeridas en el mercado mundial. Esta relación entre las economías latinoamericanas y la de los grandes países industrializados trajo aparejadas no sólo una conversión de las estructuras productivas, sino también la multiplicación y diversificación del movimiento comercial y financiero, que operaron asimismo en el fomento imaginario del enriquecimiento espontáneo y, por ende, en la idea de un vertiginoso ascenso social. Es a partir de este período que podemos observar uno de los principales momentos del explosivo crecimiento demográfico en la ciudad de Buenos Aires, cuya población en 1895 se acercaba a las 677.000 almas, para luego en 1930 superar los dos millones.

Tanto Buenos Aires como otras urbes latinoamericanas significaron para los sectores más desposeídos no sólo la posibilidad de poder aprovechar los beneficios de esa especie de caldero rebosante de oro, que desbordaba por los costados la es-

peranza del ascenso social y el bienestar, sino también la posibilidad real de insertarse dentro del sistema productivo. Una posibilidad vedada en las zonas rurales, pero que se corporizaba y reafirmaba en el imaginario conforme se acentuaban los procesos de conversión del aparato productivo. Esa esperanza de hacer realidad el tan deseado ascenso social fue uno de los factores preponderantes que operaron en la promoción inmigratoria de las regiones pobres a las ricas, de las zonas rurales a las urbanas.

 Pero no todos aquellos que se trasladaban a las grandes ciudades en busca de ese ascenso lograban incorporarse espontáneamente a los sectores de ingresos medios o altos. Una vez en Buenos Aires, la mayoría de los migrantes estuvo lejos de ver realizados sus sueños y experimentó como única transformación la de su entorno. La pobreza rural ahora se configuraba como miseria urbana. Una miseria urbana que los obligaba a confinarse en barrios marginales y miserables, que ya constituían una parte significativa de ese paisaje de “otro mundo” que Buenos Aires estaba asimilando a su geografía.

 Con la crisis de 1930, este proceso migratorio orientado hacia las grandes ciudades fue acentuándose, operando directamente sobre la conformación y la composición social del espacio urbano. El “otro mundo”, la “otra sociedad” dentro de “la sociedad” receptora, fue creciendo tanto en la cantidad como en la heterogeneidad de su composición. Es fundamentalmente durante la década siguiente a esta crisis cuando se manifestó explosivamente el crecimiento de la población migrante del interior de la Argentina en las zonas urbanas y suburbanas, como consecuencia de las políticas económicas tendientes a la industrialización por sustitución de importaciones (ISI).

 En este capítulo se analizan las transformaciones en la estructura social de la Argentina, poniendo especial atención al proceso de formación de un tipo de enclave de pobreza urbana en particular, cuyo crecimiento y desarrollo continuos se han encontrado íntimamente ligados a los procesos y estrategias de desarrollo económico del Estado nacional, en el contexto de los cambios demográficos y transformaciones en la estructura social de la Argentina que comienzan a vislumbrarse entre las décadas del 50 y del 70 y que en los años posteriores se acentuarán. Se presta particular atención al crecimiento de la pobla-

ción urbana, alimentado por las migraciones internas y de países limítrofes, y a las modificaciones morfológicas en las clases medias y en los sectores populares. En la última parte de este capítulo, se recoge un conjunto de voces de los habitantes de una villa del Gran Buenos Aires —voces que también, como en el relato de Bernardo Verbitsky, preguntaron si ésta era la ciudad con la que habían soñado mientras vivían en el interior— con el objetivo de exponer los cambios en las condiciones de existencia en estos territorios de relegación.

DEMOGRAFÍA, ECONOMÍA Y ESTRUCTURA SOCIAL

El período se encuentra marcado por un conjunto de fenómenos demográficos significativos. Entre los censos de los años 1947 y 1970, la población de la Argentina creció de 15.894.000 a 23.364.000 habitantes. Asimismo el crecimiento vegetativo se desaceleraba, mientras disminuía notablemente la inmigración total (la magnitud de la inmigración masiva europea prácticamente finalizó en 1930). Sumados a esta disminución existen otros dos fenómenos significativos: por un lado, el aumento del flujo de inmigrantes provenientes de países limítrofes, entre los que predominan trabajadores manuales calificados y no calificados, y, por otro lado, el inicio de un hecho sin precedentes en la Argentina hasta esa época: la emigración neta de argentinos (entre los que predominan el personal técnico y profesional), la cual se acelera en la década del sesenta y se acentúa en la década del setenta.

Podemos observar otros dos fenómenos demográficos destacables en este período: la disminución del índice denominado “población económicamente activa” (PEA, que comprende la franja etaria de 15 a 64 años), que pasa del 65,2% al 63,7% de la población, y el progresivo “envejecimiento de la población” (aumento de la proporción de habitantes de 65 años y más), el cual se incrementa de 3,9% a 7,0% sobre el total de la población. Es necesario destacar que hasta principios de los '60 los procesos que hemos señalado no se manifiestan en la magnitud con que lo harán recién a fines de esa década, momento en el cual el ritmo de crecimiento de la sociedad fue disminuyendo, al tiempo que gran parte de las políticas estatales que incidían

en los procesos de urbanización fueron cambiando de dirección o desaparecieron. La acelerada urbanización del país en este período constituye una prueba manifiesta del sentido de los procesos de poblamiento.

En relación con esto subyace el marcado aumento de la población que habita en grandes conglomerados urbanos durante el período comprendido entre los censos de 1950 y 1970. Un incremento del 62,2% al 79%, alimentado en gran medida por las migraciones internas desde las zonas rurales (que como consecuencia de la contracción del sector agropecuario comienzan a expulsar gran cantidad de individuos) hacia las zonas urbanas. Hasta mediados de la década del 60 el destino final de casi el 70% de los migrantes internos será el área del Gran Buenos Aires (que crece a un ritmo muy superior al del resto del país, llegando a concentrar el 29,4% de la población, para luego aumentar hasta por encima de un tercio del total de la población de la Argentina, 33,6%).

Resulta necesario remontar a las décadas previas el período de interés de este capítulo para poder comprender la relación existente entre los procesos de urbanización e industrialización y las migraciones internas. Como se ha señalado al comienzo, resulta difícil, si no imposible, poder conceptualizar el crecimiento y desarrollo de las grandes urbes latinoamericanas, y en este caso particular el de Buenos Aires, realizando un recorte a partir de la década del 30, sin prestar atención, aunque sea brevemente, a los años previos que fueron marcando de manera paulatina los tipos de asimilación migratoria. Esto se debe en gran medida a que los grandes conglomerados urbanos comenzaron a experimentar su explosivo crecimiento a comienzos de la década de 1880, fomentado principalmente por la exportación primaria y la expansión de las fronteras agropecuarias.

Este período, que puede ser conceptualizado como el de “la expansión”, abarca desde 1880 hasta 1914 y se caracteriza por la consolidación de un sistema institucional directamente enfocado hacia la preponderancia del sector primario por encima del industrial, cuyas consecuencias más inmediatas fueron las escasas inversiones e innovaciones tecnológicas que trajeron aparejadas deficiencias en el sistema productivo y en la especialización. En este sentido, las modificaciones que se produ-

jeron en este período al privilegiar la producción de la Pampa Húmeda en detrimento de las poco desarrolladas economías regionales contribuyeron a la configuración de zonas más dinámicas (ciudades/puerto) donde se concentraron, y hacia donde confluyeron, los medios de comunicación y transporte.

Este proceso continuó con sus marcadas influencias hasta comienzos de la década del 30, momento en que la Argentina se embarcó en un proceso de sustitución de importaciones, dando nacimiento a un nuevo sector manufacturero, mayoritariamente dedicado a bienes de consumo a expensas de la industria pesada, que se asentó en aquellas regiones ya dinamizadas en el anterior proceso de “expansión” aprovechando las ventajas de la infraestructura existente. El crecimiento de la manufactura y la reducción del sector agropecuario en las pampas y en el resto del interior promovieron una masiva migración interna desde las áreas rurales hacia Buenos Aires, con el posterior proceso de proletarización de la nueva clase obrera industrial.

Las dificultades en el comercio exterior causaron un deterioro general en el nivel de las exportaciones de cereales desde mediados de los años '30. Mientras el desempleo crecía en el campo, se multiplicaban los nuevos obreros industriales en las afueras de Buenos Aires. Entre 1937 y 1947, aproximadamente 750.000 migrantes internos llegaron al Gran Buenos Aires y a la capital. La crisis económica en el campo y las posibilidades de obtención de empleo y de muchos y mejores ingresos en Buenos Aires (además de las cuestiones referidas a la atracción de la vida en la ciudad) “empujaron” a muchos provincianos hacia la ciudad. El aumento del ritmo de crecimiento industrial implicó un crecimiento en la migración anual, que subió de un promedio de 70.000 entre 1937 y 1943 a 117.000 entre 1943 y 1947. La población de la ciudad de Buenos Aires creció de alrededor de 1,5 millones en 1914 a 3,4 millones en 1935 y a 4,7 millones en 1947. La mayoría de estos migrantes se instaló en los suburbios obreros de la capital, como Avellaneda, San Martín y Lanús.

La clase de desarrollo que caracteriza la época posperonista es de distinto tipo. En su detallado análisis de las transformaciones en la estructura social argentina, Susana Torrado caracteriza el período que se extiende desde 1958 hasta 1972 como una etapa en la que predomina “la estrategia desarrollista”. En

este período, el proceso de desarrollo se encuentra centrado en la industrialización sustitutiva de bienes intermedios y de consumo durable, donde el aumento de la demanda es asegurado por la inversión, el gasto público y el consumo suntuario de los estratos sociales urbanos de altos ingresos. Este modelo implica un proceso regresivo de concentración de ingresos. La estrategia industrializadora predominante en este período elimina un significativo número de establecimientos industriales pequeños y medianos y en consecuencia hace desaparecer una gran cantidad de pequeños empresarios, obreros asalariados y artesanos por cuenta propia empleados allí. Esta estrategia, por otro lado, expande el empleo asalariado de clase media (administrativos y técnicos industriales) y, en cierto modo, compensa la pérdida de empleo para los sectores obreros. Este es también un período de intensa tercerización de la economía, donde tiene preeminencia el vertiginoso crecimiento de la clase media asalariada.

El tipo de desarrollo económico que predomina en esta etapa trae aparejados cambios sustanciales en el mercado de trabajo. José Nun lo resume resaltando que mientras en 1947, de cada 100 personas ocupadas, 26 trabajaban en el campo, 24 en la industria y las otras 50 en construcción, comercio y servicios, en 1980 las estadísticas indican que apenas 13 de cada 100 trabajaban en el campo, 23 en la industria y las 64 restantes en construcción, comercio y servicios.

La década 1960-1970 es testigo de un importante crecimiento en el sector industrial (con una tasa anual de crecimiento del 6,1%), aunque la tasa de crecimiento de la ocupación en este sector es ínfima (0,4% contra 1,7% de la PEA total). Este crecimiento del producto sin una suba del empleo significó asimismo un notable aumento de la productividad industrial (5,4% contra 1,8% de la economía total). El sector industrial crece pero no logra absorber el incremento de la oferta de la mano de obra, producto del crecimiento vegetativo y de las migraciones internas. Este aumento es entonces captado por el sector de la construcción y, sobre todo, por el sector terciario, que absorbe el 72,6% del aumento intercensal de la oferta de mano de obra no agropecuaria. De este modo observamos de qué modo, entre los censos de 1947 y de 1970, la ocupación en la rama industrial se mantiene prácticamente estable (del 23,9% al 23,7%),



Vista aérea de la zona norte de la ciudad, 1971.

mientras sobrepasa el 50% en el sector terciario (del 45,0% al 53,5%) y se duplica en la construcción (del 4,8% al 8,6%) debido al fomento del Estado a través del diseño y la ejecución de carreteras, autopistas, edificios públicos y otra amplia variedad de obras públicas (véase el capítulo II).

En la década del 60, el sector terciario absorbe casi el 73% del empleo no agropecuario creado durante ese período, siendo el lapso en el que se produce la aceleración más pronunciada de la tercerización de la economía, no obstante es importante destacar que los orígenes de esta tercerización son diversos. Hasta comienzos de la década del 60, este proceso se nutre del avance en el transporte, los servicios públicos y la administración, casi todas ramas de carácter estatal. En otras palabras, el aumento del empleo público explica gran parte de esta tercerización. Ya hacia fines de la década comienza a producirse un proceso tendiente a la orientación de esta rama productiva desde el sector privado, fundamentalmente basado en el aumento

de las ramas de comercio, servicios personales y de los hogares y restaurantes y hoteles.

La acelerada tercerización de la economía es acompañada por significativas modificaciones en la estructura social; en términos relativos, crecen los sectores medios y disminuyen los sectores obreros. Entre los años 1947-1970, los sectores medios asalariados son los de más rápida expansión. En 1947, el 32,1% de la PEA total se encontraba compuesto por la clase media y el 62,1% por la clase obrera. Ya en 1970 observamos una contracción de la clase obrera con el aumento del sector autónomo en su interior (57,1%) y una expansión de la clase media alimentada por el crecimiento del sector asalariado (38%). Estos sectores medios, al mismo tiempo, comienzan a dejar de trabajar en relación de dependencia para percibir sus salarios. Como señala Torrado, asistimos a un “crecimiento ininterrumpido del volumen relativo de la clase media y su concomitante asalarización”.

Casi el 50% de los puestos de trabajo creados entre el censo del año 1947 y el de 1980 corresponden a esos estratos medios. En este sentido, al observar más detenidamente el crecimiento de la clase media en este período, subyacen importantes cambios en su composición interna. Y con relación a esto, el aumento del empleo del personal administrativo y el crecimiento relativo de profesionales provenientes de estos sectores coadyuvan a comprender estas modificaciones hacia el interior en función del trabajo. En correspondencia con esto, los sectores medios se distinguirían del resto por su relación privilegiada con la educación, tomada ésta como vía ascendente de movilidad social que a la vez los diferencia de otras clases sociales. Fue la relación entre el Estado y los sectores medios lo que condicionó a estos últimos en su expansión, contribuyendo a la conformación de un amplio sector de profesionales y funcionarios ligados a la administración pública y a los servicios de salud.

Este proceso de “salarización” de los sectores medios se complementa con un decrecimiento relativo de la clase obrera y su concomitante desalarización. Uno de los fenómenos más impactantes de este período es la transformación morfológica de los sectores obreros asalariados industriales, al darse una significativa retracción de su peso relativo en la estructura so-

cial urbana y en el sector industrial. En otras palabras, descien- de el componente obrero entre las clases populares, al tiempo que se expande el segmento de trabajadores especializados au- tónomos. Es en este período cuando, entre las capas populares, el sector asalariado se contrajo y/o se volvió más precario, in- terrumpiéndose la línea ascendente con la que se había caracte- rizado hasta este momento. La “desobrerización” de los secto- res populares y el aumento sostenido del cuentapropismo, que se duplica entre 1947 y 1970, constituyen, como señala José Nun, los principales síntomas de la expansión de la llamada economía negra que comenzaría a privar a los sectores popula- res “de la protección de las leyes sociales”.

La expansión de las clases medias y la contracción de los sectores populares podría suponer un proceso de movilidad social ascendente generalizada. Sin embargo, es importante señalar que junto a este proceso de asalarización de las clases medias, la participación de los asalariados activos en el ingreso nacional decrece del 44% en 1955 al 40% en 1972, aunque otras estimaciones sostienen que el porcentaje de salarios en el PBI pasó del 49% en 1949 al 35,8% en 1961. Teniendo en cuenta esta caída del salario en el ingreso nacional, se puede caracte- rizar este proceso en el sentido de una movilidad descendente relativa. Entre los años 1958 y 1972, los sectores de mayores ingresos de la sociedad y los segmentos superiores de la clase media mejoraron sus posiciones, al tiempo que comenzaban a padecer su descenso en la estructura social la clase obrera y los segmentos inferiores de la clase media. Por ello, si bien entre los años '50 y '60 asistimos a un transposición de trabajado- res manuales a los estratos medios, fundamentalmente al traba- jo no manual asalariado, el contexto de creciente pauperiza- ción de amplias franjas de los estratos medios y bajos hace que este fenómeno no implique hablar de movilidad social ascen- dente.

A fines de la década del 60, comienza a observarse una serie de fenómenos que indican un deterioro, aunque incipiente, en los niveles de bienestar de la población perteneciente a los es- tratos inferiores. Esta caída se acentuará dramáticamente en los años posteriores al Proceso de Reorganización Nacional inicia- do en el año 1976. Tanto los gobiernos de facto de Onganía (1966), Levingston (1970) y Lanusse (1971), así como el pos-

terior régimen militar de marzo de 1976, fueron minando definitivamente ese proyecto “desarrollista”, al deteriorar sistemáticamente el rol del Estado nacional en sus funciones correspondientes a la salud, la educación y el empleo público.

No será sino hasta las dos últimas décadas cuando se podrá visualizar este impacto sobre los sectores asalariados radicados en el área del Gran Buenos Aires, donde la pobreza llegará a incrementarse un 67%. Con relación a este punto, es dable tener en cuenta la nueva composición de estos sectores relegados, ya no sólo migrantes internos, sino los llamados “nuevos pobres”, ex integrantes de los sectores medios, quienes vieron caer sus ingresos por debajo de la línea de pobreza. Este empobrecimiento fue la resultante de la incidencia de factores externos e internos, marcados por una alta y persistente inflación a lo largo de la década del 80, el estancamiento del producto bruto, la desindustrialización creciente y la reducción de un mercado de trabajo que fue incentivando la precarización y la informalidad. Del mismo modo, al producirse las caídas en las inversiones de los servicios prestados por el Estado, fueron incrementándose la exclusión social y la pobreza urbana.

Como se ha expuesto, es en el período que nos ocupa en este capítulo cuando comienzan a manifestarse de manera incipiente los rasgos de desigualdad social que luego se tornarían más generales en la Argentina. En comparación con las décadas posteriores a la del 60, la magnitud de las cifras comprendidas en los análisis sociales opaca las de este período. No obstante esto, la pertinencia al tomar estas décadas comprendidas entre 1950 y 1970 se funda en las formas iniciales de un proceso de desmantelamiento que luego será sostenido y en donde comienzan a observarse la decadencia de la situación habitacional, la precariedad de la prestación de servicios por parte del Estado, el retroceso sistemático del tipo y la calidad de inserción ocupacional y la decadencia del sistema educativo estatal.

Puede observarse, entonces, de qué modo los gérmenes del proceso que se hará sentir con fuerza en la estructura social de los años ochenta y noventa ya estaban presentes en forma embrionaria hacia mediados de los años sesenta. Durante esta etapa, el alto crecimiento económico y la modernización de la estructura social se dan al precio de una marginación en aumento de una parte importante de la población. Marginación

que, como veremos, toma una forma espacial particular en la zona metropolitana del Gran Buenos Aires. Esta área geográfica constituye una manifestación espacial particular del conjunto de procesos demográficos y económicos que acabamos de describir.

TREN, COLECTIVO Y TERRENITO

Hacia comienzos de la década del 70, casi el 80% de la población argentina habitaba en zonas urbanas. Este proceso de urbanización fue incrementando las desigualdades interregionales, concentrando casi el 80% del comercio interno entre las ciudades de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires y acentuando la disminución demográfica en las zonas del norte del país: alrededor de cien mil personas emigraron de Santiago del Estero y



Omnibus recién llegados al país circulan por el centro de la ciudad, 1961.

otras cien mil de Corrientes, la mayoría de ellas con rumbo a Buenos Aires y su zona metropolitana donde, en los sesenta, se establecen aproximadamente 750.000 personas. Buenos Aires se convirtió en la tercera área metropolitana más importante de América latina.

Siguiendo a Horacio A. Torres, es importante subdividir el período que nos ocupa en dos segmentos: hasta comienzos de la década del 60, la zona metropolitana asiste a un acelerado proceso de “suburbanización masiva”, del cual son protagonistas los sectores populares de ingresos más bajos. A partir de esta década, el proceso de suburbanización masiva se desacelera y comienzan a verse atisbos de lo que se convertirá en un proceso generalizado en los años ochenta y noventa, la suburbanización residencial.

El Gran Buenos Aires sufre cambios espaciales significativos, fundamentalmente entre las décadas del 40 y del 60. Mientras la ciudad de Buenos Aires mantiene estable su población y, como se ha señalado, las zonas rurales pierden pobladores al tiempo que el área del Gran Buenos Aires crece a una tasa del 6% anual, hacia los años cincuenta casi el 20% de la población del país vive en esta zona metropolitana. Esta suburbanización se encuentra alimentada centralmente por migrantes del interior del país y, en menor medida, por migrantes de países limítrofes, que aumentarán de manera significativa durante la década del 60. Constituye un movimiento hacia la periferia esencialmente protagonizado por sectores populares. Prueba de ello es que mientras en 1943 las zonas con índices sociohabitacionales superiores a la media (zonas “buenas” de acuerdo con la definición de Torres) y las zonas “malas” se encuentran a igual distancia del centro, al completarse el proceso de suburbanización masiva y popular las zonas “malas” han duplicado su distancia del centro, mientras que las zonas “buenas” continúan a la misma distancia.

Veamos, entonces, algunas de las causas de este proceso así como la forma que adquiere. En el período comprendido entre los años 1940 y 1960, el crecimiento de la zona metropolitana, concentrado sobre todo en el anillo externo de la avenida General Paz, se encuentra íntimamente ligado al proceso de industrialización iniciado en la década peronista pero por sobre todo a la incidencia de la acción del Estado nacional. Es decir,

el proceso de suburbanización masiva se encuentra nutrido por la dinámica interacción entre el mercado y el Estado.

Una de las políticas del Estado fundamentales en el proceso de suburbanización popular se refiere a la nacionalización de los ferrocarriles (1948). Es a partir de entonces y de la nacionalización, y posterior disolución, de la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, que abarcaba tranvías, subterráneos, trolebuses y ómnibus, que la red suburbana de ferrocarriles, ahora subsidiada por el Estado, si bien decrece en su nivel de servicios dada la ausencia de inversiones, aumenta su papel en los desplazamientos cotidianos de decenas de miles de nuevos habitantes del Gran Buenos Aires.

Las zonas periféricas se vuelven accesibles gracias al ferrocarril. Del mismo modo en que las zonas intersticiales entre las estaciones del ferrocarril se vuelven accesibles mediante la multitud de empresas privadas de transporte de pasajeros, “colectivos”, que se multiplican en esta época. Como bien señala Torres, el transporte urbano subsidiado por el Estado, de carácter ineficiente, alienta la suburbanización de grupos de menores ingresos y desalienta la suburbanización de los estratos medio-altos y altos de la sociedad, para los cuales las bajas tarifas son menos relevantes que el uso del tiempo libre que se consume en los largos, y poco confortables, trayectos. El “colectivo” surge entonces como “el protagonista” de esta suburbanización.

En este proceso dinamizador de los lazos geográficos entre las zonas urbanas y suburbanas, cumplieron un rol fundamental las políticas estatales, tendientes a la construcción de autopistas. Torres sostiene: “Las autopistas —sobre todo el Acceso Norte, cuyo tramo principal queda habilitado en la segunda mitad de la década del 60— representaron en este caso para los grupos de mayores ingresos (poseedores de uno o más automóviles privados por familia) el mismo factor inductor de un proceso de suburbanización que el representado para los grupos de menores ingresos por los ferrocarriles suburbanos con tarifas subsidiadas dos décadas antes”.

Asimismo, entre las décadas del 40 y del 60, el proceso de crecimiento de la zona metropolitana va acompañado de un incremento de la propiedad, como modo de tenencia residencial dominante. Mientras que en 1947 el 26,8% de los residentes en



Centro de Buenos Aires, 1967.

la zona metropolitana eran propietarios, en 1960 éstos constituyen el 58,1%. Entre los sectores medios de la ciudad de Buenos Aires este aumento de la tenencia de la propiedad se produce mediante el incremento de la construcción de los departamentos en “propiedad horizontal”, beneficiado en gran medida por la ley de propiedad horizontal que permitió la copropiedad de los edificios de departamentos, hasta entonces vedada.

Otro fenómeno significativo es la pérdida de relevancia relativa de los alquileres de propiedades por parte de los sectores populares. Esta cuestión se funda en el acceso a la propiedad que se produce durante este período a través de los llamados “loteos económicos”, por los cuales los sectores de menores ingresos logran acceder al “sueño” del terreno propio, y luego, fundamentalmente mediante la autoconstrucción de la casa propia, que sigue el ritmo de las posibilidades de ahorro y de tiem-

po disponible. En palabras de Torres, “el gran aumento de propietarios en los suburbios entre 1947 y 1960 (de 43% a 67%) se debe a la posibilidad de acceder a la propiedad de casas individuales y lotes para la construcción facilitada por planes oficiales de crédito dirigidos a obreros y empleados de bajos ingresos, beneficiarios de leyes de previsión social, a la que se sumaron otras medidas como la protección legal a los compradores de lotes en mensualidades”. Este aumento de la propiedad fue fomentado en gran medida por políticas estatales, al otorgar préstamos subsidiados en bancos oficiales y tarifas subsidiadas en el transporte público, los cuales implicaron fundamentalmente un “subsidio a la tierra periférica del que resultaron beneficiados amplios sectores de los trabajadores urbanos”. Junto a este conjunto de políticas urbanas “implícitas”, el Estado argentino adoptó una actitud francamente liberal en cuanto a la reglamentación del uso del suelo, lo cual no sólo implicó que los loteos económicos resultaran un fantástico negocio inmobiliario, sino que además consolidó “un tejido urbano discontinuo y desarticulado”.

Con la finalización de las políticas redistribucionistas y el comienzo de lo que Torrado denomina el “proceso regresivo de concentración de ingresos”, el crecimiento en el área metropolitana se desacelera del 6% en la década 1950-1960 al 2% en la siguiente. Asimismo las políticas “implícitas” que constituyeron la fuerza motora de la suburbanización popular se ven reducidas drásticamente. El financiamiento público, mediante el Banco Hipotecario Nacional, tendiente a la compra de viviendas se suspende, y disminuye progresivamente el subsidio al transporte público. Durante esta década, el aumento del costo del transporte público sobrepasa al del costo de vida y al de los salarios. Ya desde mediados de la década del 60, la suburbanización pasa a ser una suburbanización residencial, fundamentalmente protagonizada por los sectores socioeconómicos medio-altos y altos.

Si bien entre fines de la década peronista y comienzos de la década del 70 podemos reconocer dos períodos claramente diferenciados en la configuración del área metropolitana de Buenos Aires, se puede detectar asimismo una continuidad en cuanto a la conformación de un tipo particular de enclave de pobreza: las “villas miseria”. El período comprendido entre las décadas del

40 y del 50 fue testigo de su surgimiento y consolidación como parte de la geografía urbana argentina. Como sostiene Torres, constituidas “las villas miseria” principalmente por aquellos “sectores que quedan fuera de los mecanismos del mercado residencial”, esto es, trabajadores temporarios o precarios, en gran proporción se fueron localizando en terrenos fiscales, especialmente en las zonas que siguen a las cuencas inundables de los ríos Matanza, Riachuelo y Reconquista. Los tipos particulares de viviendas que se encuentran en estos asentamientos contrastan con los de los barrios populares por el uso de materiales precarios (lata, cartón, chapas, maderas, tela, etc.) y por la forma irregular en la que se ubican sobre el trazado urbano.

Del mismo modo en que el período de los años '40 y '50 asistió a su surgimiento, las décadas del 60 y del 70 fueron testigos de su expansión. En estas décadas el número de habitantes en “villas miseria” en el Gran Buenos Aires se duplica, pasando del 5% de la población en 1960 al 11,24% en 1970. Íntimamente ligados a este crecimiento se encuentran los factores económicos detallados antes, los cuales fueron operando por sobre las diversas estrategias de reproducción de los sectores más relegados, impidiéndoles paulatina y acentuadamente la posibilidad real de poder asentarse en otras zonas del Gran Buenos Aires, no ya como “ocupas” de terrenos fiscales, sino como propietarios de su propia vivienda. Comienza a observarse en este período, entonces, otra serie de fenómenos que luego se verán acentuados en las décadas siguientes. El tiempo de permanencia breve en las “villas”, caracterizadas con el nom-

La villa como hábitat permanente

“Si mirás la villa ahora, vas a ver que casi la mayoría de las casillas son de material. Antes la gente no se preocupaba tanto por la vivienda, se consideraba de paso. Por todas partes veías parrillas llenas de carne, no había hambre, todos tenían trabajo. Y salían más también, iban al centro, a pasear. Ahora nos quedamos en casa y sin las parrilladas de antes.”

Fuente: Hugo Ratier, *Villeros y villas miseria*, Buenos Aires, CEAL, 1971.

bre de “villas de emergencia” con el que fueron descriptas durante décadas, se fue modificando.

LAS VILLAS

A comienzos de la década del 90, varios periódicos publicaron una foto de una casilla precaria en una villa de la ciudad de Buenos Aires donde se leía un cartel que decía: “Bienvenida clase media”. Durante la última década, mucho se ha hablado del aumento de la pobreza en los últimos veinte años, esto es, el crecimiento del número de “nuevos pobres”, pero al tiempo que este tema se ha tornado una problemática social, se ha dejado en un segundo plano a aquellos que ya eran pobres antes de “la caída”. Los llamados “pobres estructurales”, un alto porcentaje de los cuales habita en villas miseria.



Villa miseria en la ciudad, década del 60.

Luego de cincuenta años de su surgimiento en el paisaje urbano como fenómenos transitorios típicos de una “etapa de desarrollo”, las villas son parte hoy de la geografía de Buenos Aires. Durante estos cincuenta años, las villas capturaron la imaginación de cineastas como Lucas Demare (1957), novelistas como Bernardo Verbitsky (1957) —a quienes algunos acreditan la invención del nombre “villa miseria”— e intelectuales como Hugo Ratier (1971). Las villas también han sido sitios de intensa militancia política, social y religiosa.

Difícilmente se pueda dar con una configuración urbana que haya sido, y aún sea, depositaria de tantas, la mayoría de las veces negativas, representaciones. De tantas esperanzas en el pasado y tantos miedos en el presente. Las villas fueron retratadas como el ejemplo acabado del fracaso del populismo peronista en los últimos años de la década del 50, como suerte de laboratorios para los sueños modernizadores en la década del 60, como cunas de la revolución en la década del 70, como obstáculos para el progreso y como germinadores de subversión durante la última dictadura militar, y como lugares de inmoralidad, crimen y ausencia de ley en la Argentina contemporánea.

En la actualidad, la discusión pública sobre la inseguridad recurre frecuentemente a las figuras de “la villa” y “los villeros” como explicaciones originarias de la amenaza. En la fragmentada y polarizada Argentina actual, las villas son zonas que hay que eludir, “zonas de crimen” que deben ser temidas y evitadas. Los informes de los medios de comunicación periódicamente se refieren al miedo que estos “aguantaderos” generan en la gente que no vive allí. Así como los suburbios, las villas son también el producto de una particular interacción entre las fuerzas del mercado (industrialización y demanda de mano de obra) y las políticas del Estado (políticas habitacionales, planes de erradicación, leyes de expropiación, etc.). Entre los años 1956 y 1970, la población en las villas de la zona metropolitana de Buenos Aires creció a un ritmo anual del 8,4%. En 1956, 78.430 personas vivían en villas. Diez años más tarde eran medio millón. En el distrito de Lanús, un ejemplo, el 8,2% de la población vivía en villas en 1956 y el 9,7% en 1980.

En los años que siguieron a las primeras migraciones internas masivas, el crecimiento anual de la migración desde el in-



Villa miseria del Bajo Belgrano ante el inminente desalojo, 1966.

terior hacia el Gran Buenos Aires continuó subiendo. En 1947, casi cinco millones de personas habitaban en el Gran Buenos Aires. Trece años más tarde, una considerable cantidad de los siete millones de personas que vivían en los nuevos suburbios del Gran Buenos Aires habitaba en barrios obreros y villas. La vivienda era escasa y extremadamente cara en relación con el salario de estos migrantes, nuevos proletarios. Así, terrenos desiertos en zonas aledañas a la ciudad y cercanas a las plantas industriales se convirtieron en las zonas habitables para miles de familias migrantes. Muchas de estas zonas, como en la que se asentaron los pobladores de Villa Jardín en Lanús, eran inundables. Pero las políticas estatales que en un principio intentaron tibiamente organizar el espacio urbano, tendieron hacia el *laissez-faire* o al desentendimiento respecto de la utilización de dicho espacio, lo que permitió que esas zonas se convirtieran en habitables.

La villa era en ese momento una de las formas sociales disponibles dentro del “menú” de formas alternativas para los pobres urbanos. Además de viviendas autoconstruidas, hoteles baratos y pensiones, la villa devino en una configuración espa-

cial ligada al crecimiento de la industrialización sustitutiva de importaciones. Como en muchas otras ciudades de Latinoamérica, las corrientes migratorias produjeron de manera espontánea una superpoblación de villas habitadas por individuos que estaban en los bordes del empleo formal urbano. Alrededor de la década del 50, las villas fueron convirtiéndose en un elemento permanente en el paisaje urbano. El censo de 1956 llevado a cabo por la Comisión Nacional de la Vivienda reportó que 112.350 habitantes estaban viviendo en villas del Gran Buenos Aires, cantidad que representaba el 1,9% del total de la población.

Para comprender mejor las condiciones que fueron dando forma a este tipo particular de enclave urbano se verá a continuación un ejemplo en particular: la villa denominada Villa Jardín, ubicada en Lanús, con el fin de poder expresar más claramente el cúmulo de relaciones y trayectorias “macrosociales” que se condensan en la especificidad del relato y en la experiencia cotidiana. Como nos comentó una habitante de Villa Jardín: “Era



Soldados del Ejército transportan enseres de los habitantes de Villa Progreso durante el Plan de Erradicación de Villas, 1968.

Detrás de un largo muro

La película *Detrás de un largo muro*, filmada en 1956 en Villa Jardín, ofrece un invaluable documento que nos permite observar el paisaje de la villa en ese momento. Algunos de sus diálogos sintetizan la experiencia de muchos migrantes recientes.

A fines de la década del 40, el presidente Perón se encontraba en la cima del poder. Rosa (R) y su padre —los protagonistas de la película— acaban de llegar a Buenos Aires, como tantos otros migrantes internos, provenientes del campo, de los estratos sociales agrarios más modestos (Torrado, 1992). Dos amigas del campo de Rosa (N y O), ahora habitantes de la villa, y el novio de una de ellas (Sr.) los van a buscar a la estación de trenes. Se encuentran cruzando Buenos Aires en automóvil, dirigiéndose a Villa Jardín.

Siendo la primera vez que está en Buenos Aires, Rosa está deslumbrada con los edificios, parques y calles:

R: —Es maravilloso (refiriéndose a la ciudad).

N: —¿Te gusta mucho?

R: —¡¡Más de lo que imaginás!!

N: —Pero desgraciadamente, querida, no todo es así en Buenos Aires.

O: —Acá también hay cosas muy desagradables que una ni sospecha.

R: —¿Qué cosas?

Sr.: —Ustedes saben que ahora viene mucha gente a trabajar en las fábricas. Como se construye poco, esa gente no tiene dónde meterse.

O: —Es tal la aglomeración que se forman barrios de emergencia.

N: —Nosotros vivimos en uno de ellos... Villa Jardín.

R: —¿Villa Jardín? ¡¡¡El nombre es muy lindo!!!

O: —Es lo único lindo que tiene...

N: —Pero es por poco tiempo, están por construir grandes barrios nuevos.

Sr.: —Mostrale la foto...

O: —Vean qué maravilla... Eso sí, por el momento la pasaremos bastante mal...

R: —¿Qué importa si es por poco tiempo...

Apenas llegan a la villa, Rosa se queda sola en una de las habitaciones de las extremadamente precarias casillas. Visiblemente conmovida por la miseria de la villa, comienza a llorar. Su amiga la consuela: "Yo también lloré el primer día, después una se acostumbra". Diez años más tarde, los recién llegados tenían una reacción similar.



Susana Campos y Mario Passano en una escena de la película Detrás de un largo muro, de Lucas Demare.

espantoso... Yo le decía a mi marido: ‘¿Esto es Buenos Aires?’. Porque cuando uno vive en la provincia, vos pensás que Buenos Aires es lo mejor. Pensás que es lindo. Cuando él me trajo acá, yo pensé: ‘¿Voy a vivir acá?’. Pero la necesidad... y me tuve que quedar. Esta calle era un basural... Yo ni me atrevía a salir de mi casa porque estaba como shockeada... pisar el barro y ver toda esa mugre” (Victoria).

La villa es, en parte, el producto de lo que algunos autores han llamado hiperurbanización: las instituciones urbanas no se acomodan lo suficientemente rápido al proceso de expansión nutrido por la rápida industrialización. Mientras que gran cantidad de migrantes llegaban a la ciudad y al área metropolitana, el gobierno peronista toleraba la ocupación ilegal en tierras públicas y privadas. Las dificultades eran parte de la vida cotidiana de los villeros. Muchos recuerdan que la obtención de agua potable de las canillas públicas (y las largas colas que tenían que hacer para llenar sus baldes en la madrugada) era el

principal problema de la villa. Redes familiares y de amistad son recordadas como las fuentes principales de resolución de esos y otros problemas. La obtención de agua, la construcción de sus “ranchos”, el rellenado de las lagunas y la construcción de puentes para cruzarlas, todo fue posible, según se recuerda, gracias a la activa cooperación de vecinos, familiares y amigos.

Si bien la vida en las villas era ardua, ésta era percibida como transitoria. Sea por la creencia bastante generalizada en la construcción de nuevos departamentos por parte del gobierno peronista, o porque los villeros se autopercebían como parte de un proceso general de movilidad ascendente, los habitantes de la villa pensaban que iban a “dejar la villa”. Como exclama uno de los protagonistas de la película al mirar la fotografía de las casas prometidas: “¡¡¡Ay, sí!!! Es toda mi ilusión, me paso el día mirando esta foto”. La perspectiva de una nueva casa es algo que muchos de los habitantes entrevistados en Villa Jardín recordaron como inminente durante los primeros años de residencia en la villa. Como queda claro en la película, y es recordado por innumerables testimonios, el vivir en la villa era considerado como algo temporario, como un paso transitorio entre la desesperanza rural y el progreso urbano. Como parte de un proceso generalizado de movilidad experimentado por los sectores obreros durante los cuarenta y los cincuenta. Villa Jardín estaba literalmente rodeada de grandes plantas industriales, en su mayoría metalúrgicas, textiles y frigoríficos, donde por medio de amigos y familiares sus habitantes consiguieron sus primeros puestos industriales. Para muchos residentes, todo lo que

La cooperación vecinal

“Mi papá nos contaba que cuando vinieron a la villa esto era como un pozo, era todo basura (...) había una laguna ahí en la otra cuadra (...) las casillas eran de chapa, una casillas chiquititas (...).” (Nora)

“Cuando llovía el agua nos llegaba hasta las rodillas (...) La gente se peleaba por el agua. Para llenar un balde había que ir donde estaban las cinco canillas, y ahí uno se peleaba con los vecinos (...) era un desastre.” (Pascual)

La villa y su entorno

“En aquellos años había mucho trabajo... uuuuhhh... un montón de trabajo (...) No teníamos agua, no teníamos luz... no teníamos nada de nada. Había sólo un colectivo para ir a la capital, pero tenías que cruzar la villa... en esa época se podía cruzar. Yo cruzaba a las cuatro de la mañana, con mi hijo, y era como que me sentía protegida porque éramos todos conocidos.”

necesitaban, incluido el trabajo en fábricas o tiendas, estaba cerca de la villa.

En 1954, se inauguró la primera escuela en la villa, la cual —de acuerdo con Lazcano— implicó un “claro reconocimiento de la existencia de la villa”, un reconocimiento otorgado por el Estado peronista. La escuela fue el único caso en la historia de la consolidación del hábitat de la villa en el que la construcción de infraestructura fue el producto de una iniciativa del gobierno sin que mediaran reclamos o presiones por parte de los vecinos. Los años que siguieron a la inauguración de la escuela son testigos del nacimiento de un modelo distintivo de resolución de problemas que combina, por un lado, los reclamos a los gobiernos locales y provinciales y sus cambiantes políticas públicas hacia las villas con un esfuerzo colectivo de parte de los residentes de la villa para mejorar el hábitat y las viviendas individuales, por el otro. Este modelo de resolución de problemas y formulación de reclamos niega cualquier imputación de una supuesta “cultura de la pobreza” que la población villera habría traído consigo desde el interior y que habría encontrado terreno fértil en la ecología de la villa.

El año 1955 marca un punto de ruptura en las políticas estatales hacia la villa. Una vez derrocado Perón, la llamada Revolución Libertadora comienza a pensar la villa como un problema. No sólo un problema de vivienda sino un “problema social”. El “Plan de Emergencia” que diseñó la Comisión Nacional de la Vivienda tenía como objetivo principal la erradicación de las “villas de emergencia”. Cuando las amenazas de desalojo comenzaron a crecer, se formó la primera organización barrial, la Unión Vecinal de Villa Jardín, creada para tratar

el “tema de la tierra”. Un análisis detallado de este y otros programas destinados a la erradicación de las villas está fuera del alcance de este capítulo. Baste decir que no sólo los habitantes de esta y otras villas no fueron desalojados sino que, frente a la amenaza, se consolidó la primera organización barrial.

El intervalo democrático iniciado en 1958 significó un nuevo cambio en las políticas dirigidas hacia las villas de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Las erradicaciones fueron nuevamente canceladas y, en consonancia con los intentos desarrollistas del presidente Frondizi por armonizar las clases sociales y subordinarlas a los intereses del Estado nacional, se pusieron en práctica un conjunto de políticas asistencialistas específicamente diseñadas para la población. Estos cambios a nivel del Estado tuvieron un impacto directo en Villa Jardín. El gobierno provincial sancionó la ley 6.526 (1962), que detuvo la ofensiva de los propietarios de la tierra en la que la villa estaba ubicada, evitando la erradicación. La ley fue un punto de quiebre en la historia del barrio. La residencia en la villa dejó de ser transitoria y las condiciones de vida comenzaron a mejorar aceleradamente. Las lagunas fueron rellenadas, se vieron las primeras señales de asfalto y se comenzó con la instalación de las primeras redes de agua y de alumbrado público.

Los años '60 presenciaron el pavimentado de las dos primeras calles como los eventos más importantes en la villa. La eliminación casi completa de las lagunas y la elevación sustancial del terreno de la villa, así como la extensión de la red de agua y la apertura del —aunque precario— primer centro de salud, fueron otros adelantos. En esos años los habitantes estaban construyendo su *lugar* en un empeño colectivo que incluía organizaciones barriales, interacciones con el Estado y esfuerzos individuales. Por cierto que la creciente densidad organizativa estaba lejos de ser un proceso armónico. Abundaban los conflictos entre “dueños” e “intrusos”, entre aquellos que vivían en los pasillos y los “frentistas”. Sin embargo, lo que prevalece en las narrativas de los residentes más viejos es la sensación de pertenencia a un lugar que *estaban construyendo*.

El golpe de 1966 marca un nuevo cambio en las políticas hacia las villas. El gobierno militar diseñó el *Plan de Erradicación de las Villas de Emergencia de la Capital Federal y del GBA* (PEVE), cuyo objetivo era el desalojo de más de 70.000

familias que habitaban las villas de la capital y el GBA, las que representaban una población de 280.000 personas aproximadamente. Definido por Yujnovksy como “totalizador y coherente”, el programa intentaba no sólo la reubicación de los villeros sino también su “readaptación social”. Frente a este proyecto, un sinnúmero de organizaciones barriales promueven no sólo una continua, y exitosa, defensa contra los renovados intentos de desalojo en actos y movilizaciones públicas, sino que también aceleraron el proceso de pavimentación de calles y la construcción de una nueva escuela primaria pública y de una guardería.

Según un vecino, los años '70 constituyeron el período más activo en la villa: “Desaparecieron las casas de chapa, se mejoraron los pasillos y se instalaron el agua y la luz”. Con el gobierno peronista (1973-1976), los desalojos se suspendieron nuevamente. En el contexto de la radicalización política de esos años, distintos grupos (Juventud Peronista, Sacerdotes del Tercer Mundo, grupos de militantes comunistas) trabajaron en Villa Jardín, como en tantas otras villas y barrios pobres, apoyando a las organizaciones locales. Durante el gobierno peronista, el objetivo común más importante de las organizaciones barriales fue el centro de salud, que finalmente se inauguró durante la dictadura militar (1976-1983).

Entre los años '50 y comienzos de los '70, la Argentina asistió a cambios demográficos, económicos, en su mercado laboral y en su estructura social. El proceso de urbanización iniciado en décadas anteriores se aceleró, el modelo distribucionista de la década peronista dejó lugar a un modelo concentrador de ingresos, la fuerza de trabajo se tercerizó al tiempo que se expandieron las clases medias y se contrajo el componente obrero dentro de los sectores populares, creciendo el número de cuentapropistas. Estas importantes transformaciones se expresaron en el espacio urbano de una manera particular. En efecto, la suburbanización creció a ritmo acelerado, siendo fundamentalmente una suburbanización de los sectores populares. La zona metropolitana de Buenos Aires se expandió vertiginosamente a un ritmo dictado por un conjunto de políticas estatales que favorecían este desarrollo. Con la eliminación de estas políticas, el proceso de suburbanización se desaceleró al tiempo que comenzaban a observarse los esbozos de otro proceso que ya en

años recientes y por causas también ligadas a un tipo distinto de políticas públicas implícitas adquirió renovado vigor: la suburbanización de las clases altas.

Si bien la época que nos ocupa reconoce importantes discontinuidades, también hay que destacar una continuidad muy importante: el crecimiento de la población villera y la cristalización de esta configuración espacial en el paisaje urbano. Todo lo cual hace pensar que muchas de las formas espaciales y de las morfologías sociales que caracterizan a este comienzo de siglo se encontraban en *status nascendi* en los años que ocuparon nuestra atención en estas páginas.

BIBLIOGRAFÍA

Beltrán, G., y Heredia, M., "La emergencia de los barrios privados en Argentina", en *Apuntes de Investigación del CEC y P*, N° 8, Buenos Aires, 2002.

Casullo, Fernando, *Diccionario de voces lunfardas y vulgares*, Buenos Aires, Plus Ultra, 1992.

Ferrer, Aldo, *Crisis y alternativas de la política económica argentina*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1977.

———, *La economía argentina. Las etapas de su desarrollo y problemas actuales*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1970.

Lazcano, Carlos, *Historia de la consolidación de Villa Jardín*, manuscrito, 1987.

Liernur, Jorge, y Silvestri, Graciela, *El umbral de la metrópolis. Transformaciones técnicas y cultura en la modernización de Buenos Aires (1870-1930)*, Buenos Aires, Sudamericana, 1993.

Minujín, Alberto, y Kessler, Gabriel, *La nueva pobreza en Argentina*, Buenos Aires, Planeta, 1995.

Notcheff, Hugo, "Neoconservadurismo y subdesarrollo. Una mirada a la economía argentina", en Notcheff, Hugo (ed.), *La economía argentina a fin de siglo: fragmentación presente y desarrollo ausente*, Buenos Aires, Eudeba-FLACSO, 1998.

Nun, José, "Cambios en la estructura social argentina", en Nun, José, y Portantiero, Juan Carlos, *Ensayos sobre la transición democrática en Argentina*, Buenos Aires, Puntosur, 1987.

Palomino, Héctor, *Trabajo y teoría social: conceptos clásicos y tendencias contemporáneas. Del trabajo asalariado a la sujeción indirecta del trabajo al capital*, mimeo, febrero de 2000.

Ratier, Hugo, *Villeros y villas miseria*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1971.

Rock, David, *Argentina 1516-1987*, Berkeley, CA, California University Press, 1987.

Romero, José Luis, *Latinoamérica. Las ciudades y las ideas*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2001.

Sidicaro, Ricardo, *La crisis del Estado y los actores políticos y socioeconómicos de la Argentina (1989-2001)*, Buenos Aires, Libros del Rojas, 2001.

Stillwaggon, Eileen, *Stunted Lives, Stagnant Economies. Poverty, Disease, and Underemployment*, New Brunswick, NJ, Rutgers University Press, 1998.

Svampa, Maristella, *Los que ganaron. La vida en los countries y barrios privados*, Buenos Aires, Biblos, 2001.

Tenti Fanfani, Emilio, y Goldbert, L., *Estructura social y pobreza en la Argentina. Escenario de los '90*, mimeo, 1993.

Torrado, Susana, *Estructura social de la Argentina*, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1992.

Torres, Horacio A., *El mapa social de Buenos Aires (1940-1990)*, Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Dirección de Investigaciones, 1990.

Yujnovsky, Oscar, *Las claves políticas del problema habitacional argentino*, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1984.

VI

*La modernización cultural y la
irrupción de la sociología*

por LUCAS RUBINICH



Escuela de Filosofía y Letras, 1966.



EL CLIMA DE CAMBIO SOCIAL Y LA SOCIOLOGÍA

La politización extrema de la sociología en la Argentina delineó un perfil de intelectual prestigioso y portador de sentidos trascendentes. Esta carrera encontró en la Universidad de Buenos Aires (UBA) su realización institucional en el año y medio que comprende 1973 y la primera mitad de 1974, punto más álgido de un proceso comenzado a poco de fundada la carrera. Este proceso no es ni exclusivo de la sociología, ni tampoco de la sociología argentina. Un clima similar rondaba en diferentes disciplinas y mundos culturales. Desde el momento de su refundación en 1957, la sociología no parecía —por lo menos en la práctica de Gino Germani, quien era su figura más relevante— adoptar la forma de una mera propuesta tecnocrática o un academicismo restringido.

Explicar la persistencia cultural del peronismo, aunque reafirmando para ello la necesaria autonomía del mundo científico, era una cuestión que colocaba a la

naciente disciplina más allá de los límites del mundo académico, en una escena cultural que, a la par de radicalizarse políticamente, generaba lazos (por esa identidad) con otras zonas de la sociedad y encontraba un público más amplio dispuesto a escuchar explicaciones de lo social que aportaran significados al sentimiento de estar experimentando un proceso de cambios. Tanto el impulso modernizador antiperonista de quien lideraría la institucionalización de la sociología como el decidido espíritu de transformación de las generaciones inmediatamente posteriores ubican a estos agentes bastante lejos del perfil del académico tradicional y los acercan a lo que la tradición occidental del último siglo conoce como intelectuales.

Es verdad que se daban condiciones políticas y culturales para que los mundos académicos, aun los más mesurados, de distintas regiones vieran surgir estos agentes que, reconvirtiendo su prestigio académico, encontraban espacios para desarrollar su vocación de intervención pública. Acreditados académicos, científicos y artistas se encontrarían predicando ante auditorios más diversificados que los que podían encontrar en sus ámbitos habituales de trabajo. En los centros culturales mundiales la radicalización política iba de la mano, más que de los actores tradicionalmente soñados como sujetos de cambio, de estudiantes e intelectuales. Y fue la universidad, tanto o más que la fábrica, el espacio privilegiado del clima de cambio de los años sesenta.

La sociedad argentina había logrado en los primeros años posteriores a la caída del peronismo ser la expresión de lo que algunos economistas llamaban el desarrollo intermedio. Las grandes ciudades albergaban una clase media extendida y en muchos casos recién llegada que comenzaba a acomodarse en ese lugar en un momento histórico privilegiado: el de la realización periférica de la sociedad de consumo. Si bien no se dio en la misma dimensión que en los centros mundiales, la posibilidad de grandes sectores de la población de acceder a los nuevos productos de confort para el hogar fue un elemento socialmente significativo. Además, las características ligadas a la valoración positiva de la educación por parte de esos sectores permitieron un desarrollo hasta el momento inusitado de la industria cultural, que resaltaría en la transformación (modernización) y creación de una serie de instituciones. No es difícil

sostener que en el campo de la cultura hubo, por lo menos, tres instituciones emblemáticas de este proceso de modernización: la editorial universitaria de la UBA (Eudeba), el Instituto Di Tella y, sin duda, la carrera de Sociología de la UBA.

Este proceso implicaba una fuerte incorporación de jóvenes de sectores medios y aun medio-bajos a instituciones y zonas de la cultura que se abrían cada vez más a estas franjas heterogéneas, que valorizaban ese contacto como parte de la

realización de la trayectoria de ascenso social. Era también una incorporación marcada por un contexto ideológico que no estigmatizaba su desventaja cultural y que en algunas zonas culturales se evaluaba positivamente. En este marco se desarrollaron algunas formas contraculturales similares a las de los centros mundiales que en su expresión política pudieron ser más fácilmente absorbidas en esos centros. La radicalización política, el surgimiento de nuevas izquierdas que, fundamentalmente y más allá de las variaciones, trataban de otro modo la cuestión nacional y en algunos casos el tema religioso, iban a manifestarse en distintos sectores de la sociedad: en el campo artístico, en zonas significativas del mundo sindical, en la Iglesia católica (que en este caso interesa particularmente), y no podía dejar de hacerlo en ese espacio privilegiado de la modernización cultural que fue la carrera de Sociología.

La característica que adquirió el proceso de radicalización en la sociología en la Argentina estuvo efectivamente marcada por la politización de la década. Por supuesto esta politización, si bien era parte de un proceso mundial, tuvo sus particularidades nacionales. Si la supervivencia del peronismo afectaba las relaciones del conjunto del campo político, en la naciente so-



Guido Di Tella.

ciología se convertiría en un objeto central de discusión y de divisiones de grupos y estilos de trabajo y hasta (para perspectivas nada marginales) en una especie de espacio epistemológico privilegiado. La disciplina moderna adquiriría una particular importancia en la interpretación de este fenómeno. Y en esta tarea no dialogaba sólo con los pares, sino que encontraba un público más amplio ligado al mundo de la cultura politizada de sectores medios de las grandes ciudades.

En lo que hace a su mundo más específico, es necesario remarcar que esta politización tomó, en las zonas más radicales que tenían relevancia en el conjunto de esa comunidad, una forma particular que afectaba casi el estatus mismo de la disciplina. Por cuestiones relativas a la debilidad institucional y al peso de tradiciones culturales más amplias como el ensayo y la literatura, la sociología —por la fuerza del clima político de la época y por la manera en que lo absorbieron algunos grupos— se convirtió en un terreno de lucha político-cultural. Era un espacio donde se dirimían visiones del pasado histórico nacional, un lugar en el que se resignificaba una genealogía de referentes culturales y, por supuesto, un mundo que se transformaba a sí mismo reorganizando elementos importantes y los límites recién trazados de la disciplina. La fuerza con la que se realizaba la casi abolición de una zona de la tradición científica y se incorporaban nuevos referentes de otras zonas culturales recuerda menos a los cambios (aun los radicales) dentro de un ámbito académico que a las rupturas de las vanguardias estéticas. No fue un simple cambio dentro del mundo académico, ni una revolución científica. Hubo sí un cuestionamiento a una manera de conocer (el cientificismo), pero asentada, más que en una refutación donde se descalifica la otra posición aceptando reglas de juego comunes, en una descalificación radical que parece proponer el trazado de un nuevo tablero.

En la sociología en la Argentina, en el espacio de la UBA, se pueden distinguir tres momentos durante un período que va desde la creación de la carrera en 1957 hasta la primera mitad del año 1974. El primer momento es el de la afirmación institucional y de los primeros conflictos entre los viejos y los nuevos. El segundo es el de la extrema radicalización de una franja de los nuevos sociólogos y el tercero refiere a la realización institucional de la politización en la universidad montonera en

1973-74. En cada uno de estos momentos los referentes más significativos, además de sus relaciones a veces conflictivas con el específico ámbito universitario, también eran parte de una red más amplia que incluía la universidad, pero también, de acuerdo con los momentos, el grupo cultural parauniversitario antiperonista, los espacios culturales del Partido Comunista, la revista con identidad de nueva izquierda o alguno de los diversos grupos político-culturales, expresiones de un área politizada del campo cultural. Tanto Gino Germani como Juan Carlos Portantiero y Roberto Carri fueron producto y productores de una relación con esas zonas politizadas del campo cultural que en cada caso implicarían vinculaciones (diferentes, más o menos mediadas, pero siempre relevantes culturalmente) con el campo político. La pertenencia, simbólicamente significativa, a tradiciones culturales distintas pero que trascienden la actividad académica, la confianza en las herramientas académico-culturales como elemento favorecedor de transformaciones sociales, la consecuente vocación de intervención pública, convierten a estos referentes de la sociología argentina en intelectuales clásicos.

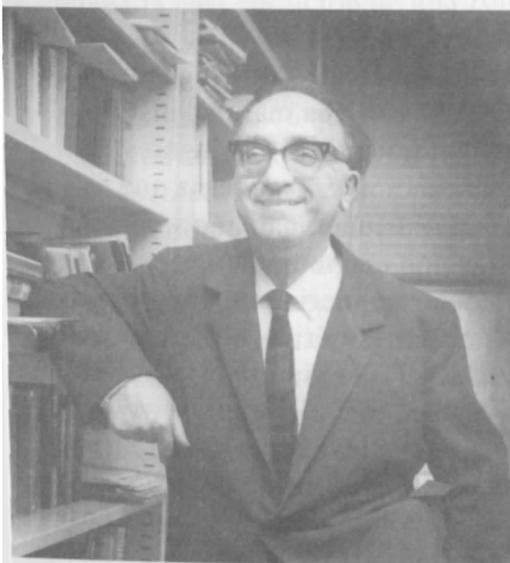
LAS PRIMERAS DISPUTAS: GERMANI Y SUS DISCÍPULOS

A partir de la creación del Departamento de Sociología de la Universidad de Buenos Aires en 1957 cobraba realidad institucional un proceso que se estaba dando en distintos lugares de América latina: la irrupción de una sociología moderna que se moldeaba en relación con el estructural-funcionalismo y con el desarrollo de técnicas de investigación que tenían un papel relevante en el mundo académico norteamericano. Frente al pensamiento social predominante en América latina, cuya principal forma de expresión era el ensayo, surgía esta nueva disciplina que se proponía lograr un conocimiento objetivo de la realidad social. Para ello recurría a la investigación empírica, que rescataba lo que llamaba neutralidad valorativa e insistía en la separación entre ciencia e ideología. Esto en el marco de un clima ideológico en el cual el desarrollismo promovido por los centros políticos desplegaba todas sus herramientas

para detectar los elementos tradicionales que impedían a los países subdesarrollados superar etapas. Los organismos regionales que se crean en América latina con objeto de adaptar la región a los tiempos (CEPAL, FLACSO, CLACSO) se convertirían en promotores de discusiones y formadores de científicos y del mismo modo surgirían en este estilo carreras de grado en distintos países de la región, como Colombia, Venezuela y la Argentina.

En nuestro país, la carrera de Sociología fue creada en la Universidad de Buenos Aires en 1957, en la Universidad Católica Argentina dos años más tarde y en la Universidad del Salvador en 1963. Después del golpe militar de 1966 la carrera fue creada en otras universidades del interior del país, a menudo con docentes entrenados en la UBA. Pero las tres primeras instituciones siguieron siendo dominantes y se repartían el 90% de los alumnos hacia 1969. La carrera se expandió rápidamente: en la UBA ingresaban unos 500 alumnos por año hasta 1969, pero en los tres años siguientes ingresaron unos mil nuevos estudiantes anualmente. Este fenómeno fue acompañado por la creación de numerosos puestos de investigación y el otorgamiento de cientos de becas para estudiar en el exterior.

En estos primeros años de la carrera de Sociología se pueden



Gino Germani.

observar dos movimientos: el primero, impulsado por el propio Germani, tendiente a afianzar una manera de concebir la sociología. Este afianzamiento supone una disputa contra zonas del campo cultural que se ocupaban del análisis de lo social desde otras perspectivas, más especulativas y literarias. Pero, a la vez, también desde el propio espacio de la nueva disciplina comienzan a surgir cuestionamientos a ese estilo de hacer sociología. Éste es el segundo movimiento.

El movimiento de Germani tendiente a clausurar las formas ensayísticas del análisis de lo social es fundacional y contundente. El otro movimiento, que tiene voces en el propio campo académico norteamericano, cobrará paulatinamente importancia en los nuevos. Los discípulos que Germani había formado y muchos de los cuales habían estudiado en el exterior volvían con nuevas maneras de pensar la sociología.

Desde el individualismo metodológico y desde perspectivas que revalorizaban el conflicto, el estructural-funcionalismo era cuestionado en el propio mundo académico americano. Por otro lado, en los distintos centros intelectuales mundiales se producía una revalorización académica del marxismo. No son demasiados los años en los que la versión del estructural-funcionalismo pueda desenvolverse con la tranquilidad de ser *la* sociología en la Argentina. Apenas un lustro después comenzarán los cuestionamientos.

Con la orientación de Germani, la carrera de Sociología de la UBA creó un Instituto de Investigaciones y se conformaron equipos que comienzan a desarrollar algunas líneas de investigación. Según Eliseo Verón, en este período hay tres tipos predominantes de investigación:

a) las descriptivas destinadas a reunir datos primarios sobre estructura social a nivel macrosociológico (estratificación, movilidad, procesos de urbanización, etc.);

b) aquellas descriptivas centradas en aspectos particulares de la estructura social que, en su mayoría, corresponden a recursos para el desarrollo (estructura de la educación primaria, secundaria y universitaria);

c) los estudios sobre actitudes y opiniones de sectores significativos de la estratificación social.

Los modelos de investigación, así como la docencia, estaban orientados por el modelo dual de sociedad tradicional-sociedad moderna. En el caso de la investigación, las preguntas orientadoras corresponden a caracterizaciones que ubicarán al país en distintos momentos del camino al desarrollo. Cuál es el diagnóstico y cuáles son los obstáculos que impiden el avance de los elementos modernos de cada sociedad. En el caso de la docencia, los autores que conformaban los programas centrales de las materias sociológicas pueden encontrarse en las compilaciones realizadas por Eudeba en el período: además

del propio Germani, Parsons, Robert Merton, Bendix, Lipset, Homans, Newcomb. Los clásicos estaban presentes sobre todo a través de Durkheim y Weber. El primero por su trabajo estadístico y el segundo por el de los tipos ideales.

Las críticas de protagonistas del período que se dirigen al “cientificismo”, pero con las armas de otras perspectivas epistemológicas legitimadas, no son muchas. Son los primeros nuevos, como Eliseo Verón, quienes de hecho comenzarán a incorporar nuevas corrientes en la práctica docente. Una década después su evaluación apunta a remarcar la debilidad con que la escuela que inauguraba la nueva sociología argentina era presentada en ese momento. “Los estudiantes conocieron sobre todo el estructural-funcionalismo a través de la trivialización de un Kingsley Davis, y su contacto con el pensamiento antropológico no se hizo a través de la riqueza abigarrada de un Malinowsky, sino más bien por la divulgación apagada y reiterativa de un Ralph Linton.”

Hay un texto de Germani donde se percibe la potencialidad del movimiento cuestionador de los nuevos a partir de operaciones similares que se están produciendo en un centro de la nueva sociología como es el mundo académico americano. A la vez que insiste en su movimiento fundacional, se propone posibilitar la lectura de debates que se realizan en comunidades académicas ya afianzadas. En 1962 Germani escribe el prólogo a *La imaginación sociológica*, de C. Wright Mills. Como se sabe, la crítica agresiva de Wright Mills se dirige a lo que él denominó “gran teoría”, “empirismo abstracto” y “ethos burocrático”. Allí caían estrepitosamente teorías y métodos que se habían constituido en las columnas maestras sobre las que se apoyaba el surgimiento de la sociología científica en la Argentina. ¿Cuál es entonces la operación realizada por Germani ante la presencia de este debate que, por lo menos, podría obstaculizar su proyecto de afirmación de un nuevo espacio en el campo académico argentino? En principio introduce el debate en este espacio, desplegando a la vez un estilo de lucha complejo.

Prologar la versión castellana del libro es de por sí una posición que anuncia algo de ese estilo. En ese prólogo realiza un análisis de la situación de la sociología a nivel mundial y observa los distintos grados de desarrollo de la disciplina, atendiendo

sobre todo a las comparaciones entre América latina y los Estados Unidos. La primera frase del prólogo declara contundente: “La traducción de un libro implica algo más que un mero problema lingüístico. Se trata de introducir en cierta cultura el producto de otra, alejada o próxima de la primera pero, en todo caso, distinta”. Aquí surgen los problemas de “comunicabilidad” de las ciencias y entonces advierte que la sociología se “halla... en una fase de comunicabilidad... menor de la que existe, por ejemplo, en la economía...”, aunque reconoce la emergencia de una “sociología ‘mundial’ en oposición a las sociologías ‘nacionales’”. En verdad, la principal dificultad es explicar cuáles fueron las condiciones de surgimiento del texto de W. Mills, pues se debería comprender eso para poder distinguir dos contextos de producción diferentes, dos campos académicos, con desarrollos históricos distintos en cuanto a su relación con la sociología mundial. “El examen que realiza Mills”, dice Germani, “no deja de darse en un contexto intelectual y científico bien distinto del que existe en América latina: en este sentido la ‘traducción’ requiere un esfuerzo por ubicar el contenido del libro dentro de su contexto originario y a la vez evaluar su significado con relación al contexto intelectual y científico propio de la cultura en que se trata de introducirlo”.

Es verdad que en su lucha por esclarecer los límites de la nueva disciplina Germani combate el “ensayismo”, pero también es cierto que los ecos de esas luchas llegan a través de sus adversarios y también de sus seguidores, simplificados hasta la caricatura. En el texto mencionado, insistiendo con las comparaciones entre América latina y los Estados Unidos abordaba el tema: “El ‘ensayismo’, el culto de la palabra, la falta de rigor son los rasgos más comunes en la producción sociológica del continente. Lejos del ‘perfeccionismo’ y el ‘formalismo metodológico’ yanquis, escasea o falta la noción misma de método científico aplicado al estudio de la realidad social”. Para Germani esta necesidad de marcar límites no excluye la posibilidad de pensar productivamente la incorporación de tradiciones que criticaba, en tanto competidoras de la sociología, pero que no podía dejar de tener en cuenta. No se presenta a la naciente sociología simplemente como una disciplina que se hace cargo de los desarrollos en los Estados Unidos y se constituye sobre un vacío local.

Para entender algunos gestos flexibles de Germani frente a otras formas de abordar la realidad social, que están más cercanas a (o son partes de) las disciplinas humanísticas, es necesario pensar las condiciones de conquista de la autonomía de este campo específico. En los momentos previos al surgimiento de la sociología científica, su iniciador formaba parte de una fracción del campo intelectual que podríamos denominar intelectuales liberales progresistas proscriptos por el peronismo. Las interrelaciones se dan en ese espacio entre actores tales como escritores, ensayistas, historiadores, filósofos. La cercanía con ese ambiente ligado a las disciplinas humanísticas (pero iluminista y sensible a la aparición de discursos científicos) lo confirma, luego del peronismo, con la creación de la carrera en la Facultad de Filosofía y Letras.

En este contexto, la de Germani no es una lucha ciega que desconoce al contendiente. Se parece más a una doble tarea: de diferenciación, frente a algunas tradiciones que hasta ese momento daban cuenta de la realidad social (más contundente en la medida que inauguraba una disciplina en contra de esas tradiciones ya instaladas), y de incorporación (menos declarativa) de aspectos de las mismas. Aunque hay momentos, como en este prólogo, en que la necesidad de la incorporación se hace explícita. Luego de las críticas al ensayismo, Germani advierte: “Mas a la vez no debemos olvidar aquellos elementos

Sobre el concepto y la metodología de la sociología en Gino Germani

“De acuerdo con esta concepción de la sociología y de sus métodos, el suscripto aboga por una transformación de la enseñanza sociológica en la Argentina, destacando la necesidad de eliminar el actual predominio filosófico y especulativo para propender a la investigación de la realidad social del país. La enseñanza de los métodos y técnicas de investigación y la creación de una base organizativa adecuada han sido señaladas como medios necesarios para el logro de tal objetivo.”

Fuente: Jorge R. Jorrot y Ruth Sautu (comps.), *Después de Germani. Exploraciones sobre estructura social de la Argentina*, pág. 30.

de la tradición intelectual latinoamericana que sin duda nos colocan en una posición más favorable que la existente en el país del Norte: así no cabe duda de que el 'pensamiento social' de América latina presenta más de un hermoso ejemplo de lo que Mills llama análisis social clásico. La influencia profunda del historicismo y algunas de las características mismas de la cultura predisponen casi 'naturalmente' a la ubicación de los problemas dentro del contexto mayor de la estructura social percibida históricamente, procedimiento que Mills recomienda con tanto énfasis".

El libro de Wright Mills que introducía Germani pasó a conformar un conjunto de elementos que derivó en el clima de desprestigio del estructural-funcionalismo y de un estilo de hacer sociología. Por supuesto no era el único y probablemente tampoco el más relevante y además ese clima no había adquirido, todavía en 1962, la forma que le daría fuerza cultural. En ese momento, las críticas no giraban exclusivamente en torno a la descalificación del "cientificismo", sino que se cuestionaba una manera de hacer sociología presentada como exclusiva. Las repercusiones más duras quizá deban encontrarse en los alumnos de las nuevas generaciones y no tanto en los discípulos más cercanos. En la carrera de Sociología se realizó una huelga contra la cátedra de Metodología a cargo de la profesora Regina Gibaja, una de las docentes del grupo cercano a Germani. El eslogan que levantaban los alumnos y que los llevó a la protesta es: "Contra el empirismo abstracto". No obstante, hay elementos para suponer que no es un indicador del estilo de discusión de ese momento. La institución parecía funcionar con un estilo tradicional de cualquier universidad, en el cual, entre otras cosas, las jerarquías institucionales tenían un reconocimiento. Y, por otro lado, no provenía de un mero acatamiento a las reglas. Luego de la caída del peronismo, la UBA se había prestigiado ante la sociedad y lograba un reconocimiento del conjunto del campo de la cultura. En la Facultad de Filosofía y Letras, que albergaba la carrera de Sociología, podían estar Gregorio Klimovsky y el rector José Luis Romero y otro grupo de intelectuales prestigiosos que volvían a la UBA luego del '55. En este clima no había cuestionamientos, por ejemplo, al estilo de examen tradicional que a fines de los sesenta sería modalidad corriente.



José Luis Romero.

Pero, independientemente del esfuerzo de adaptación a otro campo de Germani, los cuestionamientos surgían desde distintos ámbitos, también desde aquellos que poblaban sus discípulos más aventajados. Miguel Murmis y Eliseo Verón, luego de la experiencia del posgrado en el exterior, retomarán sus cargos en la cátedra Sociología Sistemática dirigida por Germani y comenzarán a introducir autores marxistas, la antropología estructural y la teoría de la comunicación, a la par de autores como Goffman, Garfinkel y Becker, que fueron la rebelión académica anti-Parsons. La experiencia

norteamericana de Murmis y la francesa de Verón produjeron una serie de cambios que conformaron el piso sobre el que se asentarían las futuras críticas a la versión germaniana de la sociología. La punta modernizadora de una institución como la UBA, que renacía y acumulaba prestigio, no podía estar ajena a la dinámica cultural, que hacía de la incorporación de lo nuevo una práctica constante. La sociología, como las vanguardias del Di Tella, debía estar al tanto de los movimientos de los centros mundiales. Como llegaba el *happening* de Nueva York, también debía ingresar Claude Lévi-Strauss, que sacudía los ambientes de las ciencias sociales en las universidades europeas y del mundo. En este contexto de las ciencias sociales donde lo anterior no era todavía tradición, lo nuevo ingresaba reprocesado localmente con el espíritu de las vanguardias estéticas, rompiendo y rechazando lo existente.

En 1964 Germani abandonaba su lugar en la UBA y entonces los discípulos mencionados quedaron a cargo de Sociología Sistemática y se convirtieron en referentes importantes dentro del campo de la sociología. Probablemente este retiro afectaba a la nueva carrera, porque perdía un docente y un investigador que había introducido el perfil moderno de la sociología. Pero además y fundamentalmente, se quedaba sin un organizador cultural. Alguien que había podido armar y conseguir financiación para un Instituto de Investigación, que generaba encuentros y convenios con referentes prestigiosos del campo académico internacional, principalmente de universidades norteamericanas.

De hecho, los discípulos mencionados se transformaron en los referentes más importantes para los alumnos de la principal institución formadora de sociólogos en la Argentina. En muchos aspectos, maestro y discípulos se parecían. Probablemente en ninguno más que en su relación práctica con el peronismo. Tanto Murmis como Verón tienen la experiencia de la universidad peronista previa al '55 y una formación en la que intervienen intelectuales del campo de la filosofía, por ejemplo, que conformaban los círculos antiperonistas. La experiencia del autoritarismo y el clima intelectual de la época dejaron marcas en su manera de relacionarse con las distintas formas de populismo. Si bien Verón escribe tempranamente en la revista *Contorno*, que sería un espacio de revisión de la idea clásica de los intelectuales acerca del peronismo, lo hace con un artículo en el que critica el nacionalismo, la antropología "profunda" de Víctor Massuh. También su estilo de relación con el mundo académico, el acatamiento de las normas institucionales, la actitud profesoral, la idea de una carrera académica, no serían demasiado distintos en ese momento. Quizá la diferencia hay que buscarla en la vocación no sólo académica, sino también de organizador cultural que poseía Germani y que no fue heredada por los discípulos. Estas discrepancias probablemente serán significativas a la hora de encontrarse con un clima cada vez más cuestionador ya no del cientificismo, sino de la práctica misma de la sociología.

Este estilo de disputas dentro de un ámbito académico no es demasiado extraño. Los nuevos presionan por ocupar un lugar y para ello cuestionan ciertos aspectos de la visión que sostie-

nen los que ocupan el lugar asentado, los que definen políticas de investigación e influyen sobre el armado del currículo de formación. Cuando existe una institucionalidad fuerte estas disputas se resuelven sin afectar demasiado el desenvolvimiento de la institución. En este caso, los cuestionamientos que pasaban por la ignorancia del currículo de corrientes como el nuevo marxismo, el estructuralismo y las nuevas corrientes de la sociología americana podían ser simplemente el movimiento que posicionara de otra manera a los nuevos. La situación institucional reciente, con poco más de un lustro de antigüedad, y el clima juvenil descalificador hacían difícil la inclusión de todos los actores. Es así como los nuevos comenzaron a desenvolverse en un espacio libre, en un momento en que la radicalización política en el ámbito universitario se agudizaba y adquiría formas insólitas hasta entonces.

UN ÁMBITO SIN PADRES EN UN CLIMA DE CAMBIOS

La intervención de la Universidad en 1966 tuvo características particulares en la carrera de Sociología. En principio no se produjo una fuga inmediata de profesores. Referentes importantes de ese período como Eliseo Verón, Miguel Murmis, Silvia Sigal y Manuel Mora y Araujo decidieron continuar dentro de la UBA, aunque luego de un cuatrimestre no les renovaron los contratos. Kratochwil describe la situación posterior a la intervención y las repercusiones que ésta generó en el resto del mundo académico: “De veintiocho profesores del Departamento de Sociología de Filosofía y Letras (UBA), quedan cuatro en marzo de 1967. El Instituto de Sociología, en el que había quince proyectos de investigación en marcha, cerró sus puertas por casi un año... En la Universidad Católica Argentina (UCA) una declaración que rechazó la violencia desatada en la universidad nacional condujo a una crisis entre el rectorado y el Departamento de Sociología. Su director, José E. Miguens, y treinta y tres docentes y auxiliares renunciaron hasta marzo de 1967, quedando cinco personas... También se interrumpieron las actividades de los sociólogos en el Instituto de Sociología de la Universidad del Litoral y Tucumán...”.

No obstante quedaron en la facultad grupos de alumnos aventajados que además de continuar con su proceso de politización encontraban la posibilidad de desempeñarse como auxiliares docentes. Por supuesto, en los primeros momentos de la intervención había pocos docentes con formación en sociología. La gran mayoría eran abogados y profesores de historia o filosofía con poca vinculación con el mundo moderno de la sociología académica que se habían replegado a otros espacios como el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales en 1967; el Centro de Investigaciones Motivacionales y Sociales, que efectuaba trabajos para la Federación Agraria y los arquitectos; el Centro de Investigaciones Sociales del Instituto Torcuato Di Tella, que funcionaba desde 1963; el Departamento de Sociología de la Fundación Bariloche, desde 1968; el Centro de Investigaciones en Ciencias de la Educación, aso-

El catolicismo radical y la falta de compromiso político de los profesionales

“Por su extracción social la casi totalidad de los profesionales argentinos pertenecen a la clase media y alta. Esto ya los condiciona a que en su paso por la Universidad buen número de ellos sólo busquen un título con el cual mantenerse o ascender en la escala social. La mentalidad del ‘no te metás’ que priva en la clase media argentina, tan ansiosa de seguridad, conforma en gran número de estudiantes hábitos burgueses que los marcan para toda la vida. De tal modo, el egresado descuida habitualmente aquellos aspectos de su profesión que más necesita la comunidad (investigación, docencia) para dedicarse por entero al ejercicio profesional en su aspecto más rentable.

“Por otra parte, del grupo de universitarios más rebeldes, de las minorías revolucionarias que existen en toda universidad, pocos son los que luego de egresados continúan en una actitud comprometida a favor del cambio. La mayoría de ellos se asimilan al aburguesamiento general y se incorporan a la gran corriente de ‘consumidores privilegiados’, de los que luchan por ‘tener más’ y renuncian a ‘ser más’.”

Fuente: Informe de la Juventud Católica al Episcopado argentino, 21 de abril de 1969, en A. Mayol, N. Habegger y A. Armada, *Los católicos posconciliares en la Argentina*, pp. 386-87.

ciado al Di Tella desde 1966; el Instituto de Desarrollo Económico y Social, que funcionaba desde 1960; el Centro Argentino del Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales; el Centro de Estudios Sociales de la DAIA, y el Centro de Investigaciones y Acción Social, fundado por la Compañía de Jesús.

Algunos de esos profesores tenían militancia cristiana, como Gonzalo Cárdenas, quien provenía de la democracia cristiana, o Justino O'Farrel, sacerdote con formación de posgrado en sociología. Muchos de estos docentes fueron afectados directa o indirectamente por un importante proceso de cambio que se estaba produciendo dentro de sectores del catolicismo en la Argentina, que a la vez recibía la influencia de un cada vez más radicalizado mundo cristiano en América latina. Cambios que suponían un creciente compromiso con los sectores más desprotegidos a la luz de las Conferencias de Puebla y Medellín, y además la relación con expresiones intelectuales de la izquierda como el marxismo, hasta la adopción de metodologías violentas para producir transformaciones. El sacerdote sociólogo Camilo Torres, muerto mientras luchaba como miembro de la guerrilla colombiana, sería uno de los muchos símbolos, pero no el más débil, para los cristianos que hacían su recorrido por el radicalizado clima de la época.

El fenómeno de radicalización de amplias franjas de estudiantes e intelectuales de sectores medios provenientes (en muchos de los casos del ámbito de la Facultad de Filosofía y Letras) de la izquierda, que luego también en algunas de sus franjas se peronizarían, permitiría entender el clima que producía la carrera de Sociología de la UBA. El campo cultural en los primeros años de creación de la carrera de Sociología todavía sostenía marcas fuertes de la relación con la política previa al '55. Una estructura de campo que albergaba un "frente racionalista", lo que la izquierda clásica llamaba la alianza anti-peronista con "el humanismo burgués". En ese panorama el referente intelectual más relevante como pensador de lo social podía ser Ezequiel Martínez Estrada, que circulaba sin demasiadas tensiones por la revista *Sur* y los *Cuadernos de Cultura* del Partido Comunista Argentino. Los cambios de la izquierda en los centros culturales mundiales y las consecuentes transformaciones del marxismo a través de la reinención de genea-

logías, relaciones con otras corrientes, sumados a hechos como la Revolución Cubana y los nacientes movimientos de liberación nacional en el Tercer Mundo, produjeron reacomodamientos significativos de este campo cultural. El prestigio del marxismo *aggiornado*, relacionándose cada vez más con la sociología en las universidades, posibilitaría el ingreso exitoso en zonas (entonces resignificadas) del campo cultural que Germani intentó mantener fuera de los límites de la sociología científica.

El joven Juan Carlos Portantiero era parte de ese grupo de docentes que estaban en la segunda línea luego del '66. Se trataba de uno de los jóvenes intelectuales del Partido Comunista que ya en ese momento formaban parte del clima de lo que luego se denominaría la nueva izquierda y que con el amparo de Héctor P. Agosti habían recuperado a Gramsci hacia fines de los años cincuenta. El prestigio de Portantiero, que se reconvertía en el ámbito de la carrera de Sociología, era el logro en espacios del campo cultural politizado de fines de los cincuenta y principios de los sesenta. Sus credenciales son artículos centrales sobre cuestiones culturales, sociales y políticas en los prestigiosos *Cuadernos de Cultura* de fines de los años cincuenta y un libro en 1961 (*Realismo y realidad en la narrativa argentina*). Allí se cuestiona el "falso marxismo economicista" valiéndose de herramientas proporcionadas por Antonio Gramsci, un autor marxista que impondría una marca en la cultura de esa época, incluida la sociología. En sólo un par de años, Portantiero se transformaría en uno de los nuevos referentes de la sociología argentina, proporcionándole a la izquierda cultural una identidad revolucionaria del peronismo.

Sin embargo, esta actualización, que recupera tradiciones intelectuales legitimadas en el marco más amplio del campo cultural y que continuarían pesando en esa comunidad, no agota el dinamismo de ese espacio académico, que es cada vez más un espacio cultural. Hay hechos coincidentes en dos niveles para que en la carrera de Sociología de la UBA se produzca un fenómeno singular que proporcionará identidad a una franja de los nuevos y afectará al conjunto de la comunidad sociológica: el de las llamadas cátedras nacionales. Este fenómeno adquirió una expresión institucional legítima a partir de una serie de hechos vinculados a la compleja relación del gobierno



Los condenados de la tierra, un libro de Frantz Fanon.

Los condenados de la tierra, un libro de Frantz Fanon. Este libro es una obra fundamental que aborda la cuestión de la liberación nacional y la transformación social en los países colonizados. Fanon analiza cómo el nacionalismo fue apropiado y resignificado en parte por franjas de jóvenes de izquierda que se peronizaban. Los caudillos federales, e incluso Rosas, armaban este árbol genealógico que culminaba en el movimiento de liberación nacional junto a Yrigoyen y a Perón. La reescritura de la historia y también el análisis social se realizan de la mano de referentes que hasta los primeros sesenta ocupaban un lugar relativamente marginal (sin lugar a dudas comparado con el que tuvieron luego) en el mundo de la cultura y aun en el peronismo: Raúl Scalabrini Ortiz, Arturo Jauretche y, sobre todo, Juan José Hernández Arregui. Estas influencias serían fuertes en términos político-culturales. Reivindicación de ciertos aspectos del marxismo *aggiornado*, recuperación del nacionalismo tercermundista y antiimperialista y del pensamiento cristiano revolucionario (y en especial el aspecto de esta tradición resignificada que supone una unión entre pensamiento y práctica). Más que en Jean-Paul Sartre, que indudablemente pesó

de Onganía con el peronismo y con sectores del catolicismo, que motivaron a profesores cristianos en proceso de peronización a encarar la preocupación por “entender al pueblo”. Por otro lado, el proceso de radicalización juvenil asumió, entre otras posibles formas, la de comprensión y reconocimiento del peronismo como un movimiento de cambio con distintos significados según el punto de vista, pero en todos estaba presente la aceptación de su potencial transformador. En el caso de la sociología, este proceso no es ajeno a un movimiento intelectual mayor que reacomoda las piezas en el tablero de la cultura nacional.

Con el correr de la década del sesenta, la visión que de la historia habían construido ciertos sectores del nacionalismo fue apropiada y resignificada en parte

en sectores de la nueva izquierda autóctona, estos sectores que proponían el socialismo nacional encontraban referentes en el análisis de la guerra chino-japonesa de Mao Tse-tung y en las experiencias de liberación nacional de pueblos de Asia y África, sobre todo de la visión de la revolución argelina presentada por aquel que Sartre había santificado a los ojos de los occidentales de izquierda: Frantz Fanon.

Los grupos sostenedores de esta perspectiva no ocluían en sus momentos de mayor fuerza la presencia de otras miradas que seguían teniendo su peso simbólico. Las llamadas cátedras marxistas continuaban funcionando en esta segunda mitad de los sesenta y, por supuesto, visiones profesionalistas ocupaban cátedras de materias específicas de la carrera. Sin embargo, más allá de las antipatías del mundo académico (Eliseo Verón las llama anticientificismo de derecha) y de la diferenciación constante que producían las cátedras marxistas (con las cuales parecían compartir un mismo terreno de lucha político-cultural) y aunque seguramente no fueran la expresión del conjunto de la nueva generación, tenían una fuerte presencia cultural en ese espacio. Además, esa presencia significativa en la carrera de Sociología de la UBA, que por su carácter de institución modernizadora era un foco de irradiación cultural, también puede entenderse como el reprocesamiento de un clima general que se convertía en el sentido común de gran parte de la militancia juvenil ligada a este nuevo peronismo que seducía a las capas medias universitarias.

En un momento en que algunas zonas de la institución universitaria adquirían un perfil cada vez más assembleístico, la relación con los pares podía adquirir menor importancia para el reconocimiento que la aprobación de las masas de alumnos. En este sentido, la significatividad que adquieren las cátedras nacionales radica en la relación que éstas establecen con una zona de la cultura (el nacionalismo cultural *aggiornado*) que a la vez contribuyen a recolocar. Esta relación los legitimaba, en tanto formaba parte de un clima mediante el cual jóvenes de sectores medios, muchos de ellos estudiantes de sociología, comenzaban a relacionarse con la política.

Este marco cultural es el que proporciona el espacio para que las cátedras nacionales se desenvuelvan, más que como una nueva perspectiva académica dentro de la sociología,

como un grupo cultural que actúa casi a la manera de las vanguardias artísticas. Ya no es sólo la aceptación de ciertos aspectos del peronismo que el mundo de la cultura y la cultura de los sectores medios rechazaban. La pelea cultural de las nuevas generaciones de las capas medias adquiere en la carrera de sociología una forma más radical. Una forma que rechaza las reglas del juego académico y que transforma a estos grupos en una especie de vanguardias culturales. Estos jóvenes de sectores medios habían escandalizado a sus padres (literalmente) en su opción por el peronismo, ahora escandalizaban al mundo académico proponiendo el ingreso a ese mundo de ensayistas del nacionalismo cultural transformados en baluarte de la sociología nacional. En una polémica con Francisco Delich, que la *Revista Latinoamericana de Sociología* se vio obligada a recoger —esto, más allá del rechazo, supone el reconocimiento de los otros como interlocutores, aunque se los descalifique—, Roberto Carri va a reivindicar, con un estilo más propio de las disputas literarias o artísticas que del académico. lo que llama “sociología del estaño”, citando a Arturo Jauretche dice:



El medio pelo, de Arturo Jauretche.

“El verdadero científico, el ensayista político, el político, realizan, crean individualmente esa conciencia social, esa práctica social, y con los pies bien afirmados en la realidad que analizan, y donde actúan, realizan su explicación. Éste es el método del ‘estaño’ que tanta gracia le causa a Delich...”

Más aún, la relación con el peronismo no suponía solamente una relación cultural y política. En el extremo propuesto por estos grupos, no es sólo la reivindicación de un ensayismo nacionalista como un estilo reivindicable de hacer sociología lo que ya supone una ruptura con el mundo

La creación de una “sociología nacional”

“La construcción de una sociología nacional es posible, como así también la elaboración de las herramientas conceptuales necesarias para las tareas de investigación y procesamiento teórico, pero siempre y cuando que el sociólogo realice sus tareas al servicio del Movimiento Nacional de Masas (...) el Peronismo leal a Perón (...)”

Fuente: Gonzalo Cárdenas, *De una sociología colonial a una sociología nacional*.

académico, sino que además la construcción de una sociología nacional precisaba del peronismo concreto como un espacio necesario de producción de conocimiento.

Uno de los textos que expresan con mayor claridad esta perspectiva, en una franja de la sociología argentina, es un libro de Norberto Wilner escrito sobre la base de una tesis de la carrera de Filosofía de la UBA dirigida por el sociólogo y sacerdote católico Justino O’Farrel. El libro, titulado *Ser social y Tercer Mundo*, es una condensación de los temas que van a ser recurrentes y aparecerán con distintas formas en la perspectiva de las cátedras nacionales. El anticientificismo en este caso adquiere una forma más radical. No es la crítica académica a la intención estructural-funcionalista de construir una ciencia avalorativa realizada desde visiones *aggiornadas* de las ciencias sociales.

La identificación con el cientificismo de grandes corrientes ideológicas como el marxismo y el liberalismo hace de este conflicto una lucha política y del encubrimiento producido por este cientificismo algo más que una forma de producción de conocimiento en la academia. La pelea fundamental se organiza en torno al debate con el concepto de ser social utilizado por Marx para reubicar en la discusión la idea de ser nacional. Como sostiene Wilner: “Volcar la realidad de los pueblos avasallados en el molde de la revolución que exige el desarrollo de la previa identidad es hacer del enemigo imperialista un aliado, y del aliado un enemigo. La política que Engels propugnaba ante México avasallado ilustra este asunto. Si el cam-

bio revolucionario es 'necesario'. La 'ciencia' absorbe a la política".

La discusión entonces supone la reivindicación de un ser nacional, por encima de un ser social, que estaría encubriendo e imposibilitando resoluciones políticas. La oposición entre lo satisfactorio de una revolución social y lo demagógico de una revolución nacional se convertiría en el elemento que organizará la lucha política, pero que además permitirá la descalificación en términos de producción de conocimiento. La reivindicación del ser nacional no es extraña a la historia de Occidente y tampoco en este caso este rescate adquiere una identidad novedosa. Sin embargo, en términos retóricos, este nacionalismo se planteaba como la opción superadora de las grandes tradiciones ideológicas occidentales. Quizás el análisis del texto de Wilner no permite descubrir elementos sofisticados. Pero el ejercicio más fácil es el de la descalificación apelando a los contenidos. Si se piensa este texto como producto social de un mundo académico particular en un momento en que ese espacio está impregnado de los debates culturales más amplios, el fenómeno adquiere otro significado.

Tanto en la carrera de Sociología de la UBA, como en los espacios de los centros de investigación antes mencionados, continuaban existiendo sociólogos que desempeñaban funciones más profesionales. Sin embargo, el centro de la actividad intelectual pasaba por las discusiones del estilo que propone el libro de Wilner, con diferencias de acuerdo con las perspectivas, pero sin dudas en cuanto al carácter político-intelectual del debate. Se podría decir que tenían mayor productividad cultural en general e influencia particular en el mundo de las ciencias sociales, revistas del espacio político cultural como *Antropología del Tercer Mundo*, *Cristianismo y Revolución* o *Pasado y Presente*, que la académica *Revista Latinoamericana de Sociología*.

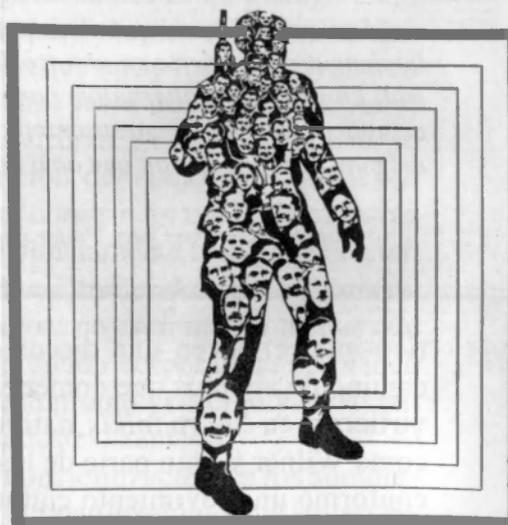
Del mismo modo que las vanguardias estéticas del Di Tella, las vanguardias culturales populistas de sociología eran rupturistas y escandalizadoras del propio campo. Tanto Marta Minujin como Norberto Wilner producían reacciones ante la irrupción de algo que se evaluaba a sí mismo como nuevo e irradiaban el optimismo y desparpajo de los movimientos culturales juveniles. Mientras que el trabajo de Murmis y Portan-

tiero sobre los orígenes del peronismo (el material de la época más significativo de la relación entre sociología y política) se produce rompiendo visiones anteriores, pero en una disputa más acotada al mundo académico, aunque con motivaciones y repercusiones que lo trascienden, el libro de Wilner y muchos de los folletos de las cátedras nacionales arrojaban todas las fichas del juego, pero también el tablero. La propuesta era bien radical, culturalmente hablando, y aunque exista una lógica de la demostración (lo de Wilner es una tesis universitaria), bastaba con generar ese producto

que, más que por sus condiciones intrínsecas, valía por la vitalidad cultural que le proporcionaba ser parte de un movimiento más amplio, a través de la pura y simple fuerza del movimiento cultural. Era una especie de demonización de quien mantenía la posición hegemónica en el mundo de la cultura, que en la sociología se expresaba a través del "cientificismo" con sus dos rostros: el liberal y el marxista.

A la par de la radicalización cultural se fueron produciendo hechos sociales y políticos que extreman, también en este campo, el grado de politización. Y la politización parece transformarse en una implicación que rebasaba el mundo de la cultura. Se fue convirtiendo en un camino donde las condiciones políticas podrían retardar, pero no frenar, la marcha de muchos de estos intelectuales a la acción. La vanguardia intelectual podía transformarse en vanguardia política. La bifurcación de caminos se produjo por la caracterización de lo que se denominaba el movimiento de liberación nacional. Efectivamente, la vuelta del líder depuesto en 1955 convertía a la discusión polí-

Cristianismo y Revolución



LA HORA DEL PUEBLO EN ARMAS

Revista Cristianismo y Revolución.

Sociología y peronismo

“Aquí, en la Argentina, todo intento por universalizar abstractamente la ciencia se convierte en una teoría de apoyo a la dominación imperial. La verdadera alternativa para un sociólogo consiste en producir científicamente desde nuestra propia realidad como país y desde dentro del movimiento popular, que aquí no es otro que el peronismo.”

Fuente: Roberto Carri, *Poder imperialista y liberación nacional*.

tico-intelectual en una discusión decididamente política. El camino de algunos que comenzaron como marxistas y se convirtieron en “*narodniks* nativos adherentes a un caudillo”, como Wilner y gran parte de las llamadas cátedras nacionales, conformó un movimiento cultural imaginativo en tanto Perón era una esperanza. Cuando Perón se convierte en actor real, el movimiento cultural imaginativo se transforma en un grupo de intelectuales peronistas seguidores prudentes de su líder. Pueden ser buenos analistas y mejores políticos, pero ésa no es la cuestión abordada aquí. Otros sectores en la sociología, por ejemplo algunos de la tradición marxista, conservaban una visión especulativa que no renegaba de la política, pero tampoco del espacio particular desde donde se participaba en ella. La negación del sociólogo convertido en político tenía el componente revolucionario, aunque eso suponía un peronismo al que Perón hecho realidad no favorecería.

LA SOCIOLOGÍA EN LA POLÍTICA

En agosto de 1968, durante la Convención Anual de la Asociación Sociológica de los Estados Unidos, el sociólogo Martin Nikolaus se dirigía a los presentes luego de una exposición del secretario de Salud, Educación y Bienestar. Aclaraba que sus observaciones críticas no estaban dirigidas a este funcionario, en tanto había aceptado voluntariamente ser miembro de la institución gubernamental que estaba librando una guerra imperialista contra el pueblo vietnamita. Consideraba a este funcionario

el jefe militar en el frente interno de esa lucha y, por lo tanto, desestimaba toda posibilidad de diálogo entre otras cosas porque el diálogo entre súbditos y gobernantes es un diálogo entre “gallinas y elefantes”. Su preocupación apuntaba a los miembros sociólogos de esta asociación que no se hubieran “vendido y comprometido a punto de hallarse fuera de su propio control para iniciar cambios o enmendar errores”. Y en otra parte de su exposición realizaba una definición del sociólogo americano que no apuntaba a la crítica de su obra y a un estilo de trabajo a la manera de Wright Mills, sino directamente a su papel social. “El sociólogo laureado, el de alto estatus, el de abultado contrato... el que publica un libro por año... no es ni más ni menos que un sirviente doméstico en la institución corporativa, un blanco tío Tom intelectual no sólo para su propio gobierno y clase gobernante, sino para cualquiera de los existentes.”

Este llamado panfletario a la concientización de los sociólogos no es un folleto surgido de la imaginación de un grupo radical que recorre las aulas de la carrera de Sociología de la UBA. Es una exposición en la Convención de la Asociación Sociológica de los Estados Unidos. Los movimientos estudiantiles y sociales del final de la década (radicalizados no sólo en el Tercer Mundo), los replanteos ideológicos y teóricos que revalorizaban estos hechos poco compatibles con el modelo de la izquierda tradicional, permitían creer a algunos intelectuales que estaba llegando la hora de dejar de comprender el mundo y comenzar a cambiarlo.

Es en este contexto que debe entenderse la transformación cultural en los alumnos de la carrera y en muchos sociólogos del período que implicaba, por ejemplo, la incorporación de bibliografía heterodoxa para las tradiciones académicas. Jaurerche y sobre todo Hernández Arregui aparecían junto a Gunder Frank y Puiggrós en algunas materias y seguramente eran parte de la discusión en los espacios de sociabilidad informal producidos por la facultad. Independientemente de que en muchos casos no se abandonara la lectura de ciertos clásicos y fundamentalmente la generación más nueva de los que habrían de adherir al peronismo montonero y a las cátedras marxistas, se incorporaban nuevos autores franceses como Althusser y Poulantzas, y junto a ellos podían encontrarse los menos académicos Mao Tse-tung y Frantz Fanon.

La revista *Panorama* en 1971, con motivo de la invitación a un debate sobre las posibilidades de la sociología, había realizado una encuesta formal a alumnos de la carrera. El periodista relata con asombro la actitud de la mayoría de los entrevistados, que decían desconocer sus posibilidades profesionales y que buscaban en la sociología elementos para realizar algún tipo de política con perspectiva revolucionaria, de cambio de estructuras y de cambio social. Cuando se les solicitó que nombraran sociólogos que habían influido en su elección, los nombres que aparecieron fueron Carlos Marx, Lenin, Juan D. Perón, Abelardo Ramos, “Che” Guevara, Arturo Jauretche. Por supuesto, el interrogante que el periodista trasladaba a la mesa de debate es el de la relación sociología-política. En el epígrafe la revista elaboraba ya una respuesta. Decía sin ambigüedades en su segundo párrafo: “Pocos dudan —incluidas las autoridades— de que la sociología es una carrera con perfil subversivo”.

Los participantes en el debate propuesto por la revista respondían, ante el desconcierto periodístico, sobre las posibilidades ocupacionales de esta carrera y su particular relación con la política. De los seis participantes, salvo Pedro David, especialista en sociología del derecho, y Fernando Cuebillas, en ese momento director del Instituto de Investigaciones de la UBA, la mayoría propuso una relación fuerte con la actividad política y la posibilidad de realizar cambios revolucionarios. Los dos primeros tampoco pudieron evitar el tema de la implicación con la política y hacer referencia al clima de cambios que se respiraba. Pero, sin embargo, fueron los cuatro sociólogos restantes, con su preocupación por evitar cualquier rasgo que no estuviera indicando una identidad radicalizada, quienes dieron el tono al debate. El joven profesor Ricardo Sidicaro saludaba la relación de profunda implicación con la política por parte de los jóvenes y celebraba las dificultades de restricción del mercado laboral para los sociólogos: “Hoy muchos ex militantes políticos son directores de marketing, burócratas de los ministerios o investigadores a sueldo de las fundaciones. Creo que es una suerte que nuestros estudiantes actuales, preocupados por la política, no puedan acceder a esos roles. Porque la cuota de cargos posiblemente ya esté cubierta y porque las circunstancias generales que vivimos hacen cada vez

más difícil ser burócrata de ministerio o ayudar a vender jabones...”

La frustración de los estudiantes no pasaba por su relación más o menos exitosa con un mercado de trabajo profesional. Las instituciones debían replantear sus funciones y sus miembros tenían que contribuir decididamente para lograr esos cambios. En este sentido, la carrera de Sociología, por sobre la intervención del gobierno militar, parecía estar dando respuestas impregnadas por una dinámica cultural que expresaba sin duda los nuevos tiempos. Así, Portantiero expresaba: “Hay que procurar que esos jóvenes no se frustren. Por eso debemos hacer todo lo posible para que la Facultad de Filosofía y Letras y la carrera de Sociología no vuelvan a ser lo que alguna vez fueron: formadoras de disociados que terminan trabajando para empresas o institutos financiados por el exterior”.

José Nun fue el que rodeó con más argumentos la necesidad de evitar una politización simple, de reconocer las mediaciones del mundo académico y de las tradiciones científicas, básicamente del materialismo histórico, para no producir un “populismo seudocientífico” que no proporciona las “herramientas teórico-conceptuales acerca de la realidad que se quiere transformar”. No obstante, en el marco de un proceso de cambio, reconocía la existencia de limitaciones formales en las instituciones académicas y exponía su necesidad de abolirlas. El ejemplo concreto hace referencia a los requisitos de ingreso a programas de posgrado: “Mi propuesta fue que este requisito se obviase con alguna prueba de suficiencia, porque hay una enorme multitud de individuos genuinamente interesados en la realidad latinoamericana que no han podido completar una carrera y que son tal vez más importantes para la revolución que los graduados universitarios”.

Santos Colabella cuestionó a Nun y, más allá de los aspectos anecdóticos de este debate, lo más significativo es la naturalidad con la que se vierte el discurso antisistema en este caso y en otros. Desde los que lo pronunciaban con la tranquilidad de marchar por el camino correcto, como Portantiero y Sidicaro, hasta los que como Nun (particularmente cuestionado por ser uno de los referentes del proyecto Marginalidad) debieron esforzarse por reconvertir su marxismo académico en un elemento más cercano a la política. Sin embargo, este debate es

todavía un indicador de una relación con la política que todavía tenía algo de retórica, aunque en él estén planteados los temas que se realizarán en el '73. Es precisamente la relación con la política lo que seguirá reorganizando posiciones dentro del mundo de la sociología, pero esta vez en torno a un compromiso real con un proyecto que aparecía como posible y, en los casos más radicales, convirtiendo el papel del sociólogo decididamente en el de un intelectual revolucionario que asume distintas actividades de acuerdo con las circunstancias que se produzcan en el proceso de cambio.

Hay algunos hechos políticos que resultaron decisivos en el paso de algunos grupos de la sociología local desde posiciones de rebeldía cultural politizada hasta el sombrío campo de la política real de la época. Luego del 11 de marzo de 1973 y, sobre todo, inmediatamente después de la asunción de Cámpora el 25 de mayo del mismo año hasta ocurrida la "masacre de Ezeiza" el 20 de junio, el probablemente ingenuo optimismo arrollador de las aulas universitarias se trasladaba a amplios sectores de la población. Fueron, precisamente, la masacre de Ezeiza y, aún más, el moderado discurso de Perón a poco de regresar del exilio los que reacomodaron las piezas de la política a nivel general. También produjeron modificaciones en el pequeño mundo de la radicalizada sociología.

Las elecciones de 1973 habían llevado al gobierno a Cámpora y en ese contexto los sectores ligados a la "tendencia revolucionaria del peronismo" ocuparon lugares significativos en distintas áreas de gobierno. La universidad, dirigida por Rodolfo Puiggrós, se convirtió en un espacio privilegiado para estos sectores. La carrera de Sociología produjo con este movimiento institucional una operación de cambio generacional. Los más jóvenes del peronismo de izquierda que no tenían prácticamente relación con las cátedras nacionales ocuparon cargos destacados en las partes administrativa y académica de la carrera. En el breve y conflictivo año y medio de esa administración no se produjeron cambios significativos en el currículo. Lo que se presiente es una implicación más real y probablemente más trágica con la política. No es simplemente la elaboración de una especulación en torno a la dependencia o a la revolución nacional. Las generaciones más jóvenes que participaban de esa administración son más actores, quieranlo o

no, de una lucha política dentro del peronismo que irá adquiriendo formas militares dramáticas. Ya no son, en esta franja, vanguardias culturales que proclaman una implicación en la política. O bien ocupan el lugar de subordinados al líder y por lo tanto pierden su productividad cultural y política en ese contexto o, de acuerdo con su ubicación en los distintos frentes de acción posibles, devienen en sector más o menos secundario de una vanguardia político-militar.

Los sociólogos más cercanos al proyecto de la izquierda peronista actuaron en función de esta identidad en un momento cada vez menos retórico. La política real comenzaría a ingresar en las aulas de la universidad mediante las formas más violentas. A la par, algunos de ellos harían de esa implicación un directo alejamiento de la universidad. No obstante, unos y otros hacían del diagnóstico político de un momento complejo un elemento imprescindible para la práctica. Si había una sociología era la sociología política, y quizá todavía más acotadamente, una sociología de la transición revolucionaria, pero reelaborada en la rapidez de la relación con la política. Las preguntas apuntaban a establecer el papel de las agrupaciones de vanguardia y su vinculación con el pueblo y sus organizaciones, el rol de éstas y su relación con el sistema de partidos y los actores económicos y militares, en una transición hacia la revolución.

Es quizá Roberto Carri, en un libro publicado a fines de 1973, quien mejor expresa esta posición. Allí se recogen artículos publicados en la revista *Antropología del Tercer Mundo* y otros producidos exclusivamente para el libro. En ambos casos se observan las características mencionadas. No son, ni quieren serlo, trabajos académicos. Pero entonces, tampoco son los productos de la vanguardia populista cultural de las ciencias sociales, se han convertido decididamente en herramientas intelectuales de la política. En el primer artículo, escrito a fines del '73, "El imperialismo y el gobierno popular", se intenta realizar una caracterización de la coyuntura en función de un proyecto político que es el de las organizaciones armadas peronistas, específicamente de Montoneros. Allí se analiza el camporismo, con el realismo que agrega la masacre de Ezeiza: "El gobierno popular garantiza de entrada una extensión de la democracia y el debilitamiento de la guerra con-

trarrevolucionaria, que deberá ejecutarse al margen de las estructuras formales del poder”.

Sin embargo, las circunstancias planteaban cuestiones que no determinaban caminos irremediables. Se habían acabado las simples loas al espontaneísmo popular, el momento requería la transformación de ese espíritu romántico en racionalidad política. “El problema de la hegemonía en el peronismo”, sostenía Carri luego de una extensa cita de Gramsci, “no es enfrentar a la espontaneidad con un criterio organizacionista abstracto, sino lograr la unión del espontaneísmo revolucionario con las organizaciones de vanguardia...”. Más adelante, describía el escenario posible y proponía el elemento organizativo básico para desenvolverse en él: “La etapa resistente del peronismo, que sirvió para llegar a un gobierno popular después de dieciocho años de lucha constante, caracterizada por la espontánea movilización de las masas y la existencia de gérmenes de organización revolucionaria, debe ahora transformarse en una etapa de ofensiva hacia el poder que implica ‘disciplinar’ este movimiento y encuadrarlo masivamente en la guerra popular. La experiencia histórica de las masas peronistas, en especial de la clase obrera, se transforma en conciencia estratégica de la necesidad del poder, con su encuadramiento colectivo en la forma orgánica necesaria para enfrentar las tareas de la etapa: la milicia popular”.

Lo que se describe aquí no es necesariamente la expresión real del conjunto de lo que podía definirse como la comunidad de las ciencias sociales en la Argentina del período. De ninguna manera. Seguían existiendo posiciones profesionalistas, académicas y aun politizadas que no participaban de este proyecto. Sin embargo, la inminencia de la profundización de un proyecto revolucionario, aunque a fines del año '74 se dudara cada vez más de su fácil concreción, parecía tener credibilidad para los que no participaban directamente de él e incluso no lo compartían. En este contexto es que pueden entenderse adhesiones desde algunos espacios más tradicionalmente académicos como el Instituto Di Tella y también desde grupos culturales ligados a las ciencias sociales identificados con posiciones marxistas que no habían sido afectados fuertemente por la peronización de la izquierda. El clima de relación directa con la práctica política penetraba de manera fuerte en el conjunto

de lo que podría denominarse el espacio progresista de las ciencias sociales, que por otro lado era el de mayor peso y relevancia, convirtiendo a los sociólogos con más significación cultural en intelectuales implicados políticamente. Por ello, en este corto período, los elementos que indican la centralidad cultural deben buscarse en el lugar simbólicamente prestigioso que de hecho esa comunidad otorgaba a la cercanía con un proyecto revolucionario decidido a la acción, independientemente de la forma política que éste adquiriese.

BIBLIOGRAFÍA

Altamirano, Carlos, y Sarlo, Beatriz, "La Argentina del Centenario: Campo intelectual, vida literaria y temas ideológicos", en Altamirano, Carlos, y Sarlo, Beatriz, *Ensayos argentinos*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1983.

Balán, Jorge, "La práctica sociológica en el mundo contemporáneo", en *Punto de Vista*, N° 16, Buenos Aires, 1982.

Bourdieu, Pierre, "Campo intelectual y proyecto creador", en *Problemas del estructuralismo*, México, Siglo XXI, 1967.

———, *Campo de poder y campo intelectual*, Buenos Aires, Folios, 1983.

———, *Homo academicus*, París, Minuit, 1984.

———, "Sociólogos de la creencia y creencia de los sociólogos", en Bourdieu, Pierre, *Cosas dichas*, Barcelona, Gedisa, 1988.

Bourdieu, Pierre, y Passeron, Jean Claude, *Mitosociología*, Barcelona, Fontanella, 1975.

Brunner, José, *¿Pueden los intelectuales sentir pasión o tener interés en la democracia?*, Santiago de Chile, FLACSO, 1986.

——— y Barrios, Alicia, *Inquisición, mercado y filantropía. Ciencias sociales y autoritarismo en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay*, Santiago de Chile, FLACSO, 1987.

Cárdenas, Gonzalo Horacio, *De una sociología colonial a una sociología nacional*. Buenos Aires, sin mención de editorial, 1969.

Carri, Roberto, *Poder imperialista y liberación nacional*, Buenos Aires, Efece ediciones, 1973.

———, "Un sociólogo de medio pelo", en *Revista Latinoamericana de Sociología* N° 4, Buenos Aires, 1968.

Cortés, Rosalía (comp.), *Ciencias sociales: ideología y realidad nacional*. Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo.

Coser, Lewis A., "Los intelectuales académicos", en *Hombres de ideas. El punto de vista de un sociólogo*, México, Fondo de Cultura Económica, 1968.

Delich, Francisco, *Crítica y autocrítica de la razón extraviada. 25 años de sociología*, Buenos Aires, El Cid Editor, 1977.

Germani, Gino, "Prólogo", en Wright Mills, Charles, *La imaginación sociológica*, México, Fondo de Cultura Económica, 1963.

González, Inés, y Vachieri, Ariana, *Los centros académicos privados en Argentina*, mimeo, Buenos Aires, 1984.

Jorrot, Jorge R., y Sautu, Ruth (comps.), *Después de Germani. Exploraciones sobre estructura social de la Argentina*, Buenos Aires, Paidós, 1992.

Kratochwil, Germán, "Sociología", en *El estado de las ciencias sociales en la Argentina*, documento de trabajo N° 67, Buenos Aires, Centro de Investigaciones Sociales, Instituto Torcuato Di Tella, 1969.

Marsal, Juan, *La sociología argentina*, Buenos Aires, Fabril Editora, 1967.

Miceli, Sergio, *Intelectuais e classe dirigente no Brasil (1920-1945)*, Río de Janeiro, Difel, 1979.

Portantiero, Juan Carlos, *Estudiantes y política en América latina, 1918-1938. El proceso de la reforma universitaria*, México, Siglo XXI, 1978.

Rubinich, Lucas, "Redefinición de las luchas por los límites: un debate posible para las nuevas generaciones en la Sociología", *Entrepasados*, N° 6, Buenos Aires, 1994.

Sidicaro, Ricardo, *La accidentada trayectoria de la sociología en Argentina*, mimeo, Buenos Aires, 1995.

Sigal, Silvia, *Intelectuales y poder en la década del sesenta*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002.

Tenti Fanfani, Emilio, "A modo de alegato en favor de las ciencias sociales", en *Boletín de la Carrera de Sociología*, Buenos Aires, UBA, 1992.

Terán, Oscar, *Nuestros años sesenta*, Buenos Aires, Puntosur, 1991.

Verón, Eliseo, *Imperialismo, lucha de clases y conocimiento. 25 años de sociología en la Argentina*, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1974.

Wilner, Norberto, *Ser social y Tercer Mundo*, Buenos Aires, Galerna, 1969.

VII

*Rebeldes y modernos.
Una cultura de los jóvenes*

por SERGIO A. PUJOL



Astor Piazzolla con Amelita Baltar en el programa "Casino" de televisión. 1970.



SER JOVEN

Las fechas están muy separadas entre sí como para poder hablar de una unidad histórica bien clara. Tampoco es sencillo determinar a qué cultura nos estamos refiriendo cuando decimos “cultura de los jóvenes”. Esto sin abordar una cuestión teórica que desvela a los sociólogos desde hace varias décadas: ¿existe realmente esa categoría sociocultural llamada *juventud*, o sólo se trata de una invención discursiva confusa, un *actante* de los relatos que sobre las sociedades modernas se vienen vertiendo, según piensan algunos con el fin de hacernos olvidar de la existencia de las clases sociales?

Pero si aceptamos el concepto de “revolución cultural” para una caracterización general de los años '60 —concepto al que han apelado varios autores, incluso Eric Hobsbawm, quien no suele reconocer revoluciones fácilmente—, ¿cómo no ver que fue el sector lozano de la sociedad el que encabezó, en distintas partes, ese movimiento de transformación que terminaría por afectar el funcionamiento del mundo occidental?

Desde luego, las diferencias entre los países centrales y los periféricos fue grande. Allá se rebelaron los hijos de la abundancia; aquí, la sublevación cultural no estuvo totalmente separada de otras insurrecciones. Allá, una satisfecha clase obrera sólo despertó a la conciencia política cuando la guerra de Vietnam le devolvió a sus hijos en bolsas de plástico; aquí, los jóvenes siempre soñaron con una revolución que iría más allá del *flower power*.

Sin embargo, en las próximas líneas se intentará demostrar que sí hubo, después del '55 y antes del golpe del '76, una cierta identidad juvenil mundial a la que los argentinos que habían sido niños en el país de los '40 y '50 se plegaron con entusiasmo, varios elementos propios y no pocas contradicciones. En cierto modo, y no obstante la cruel sangría de los años de la dictadura militar, aún vivimos al amparo de algunos signos de aquellos años juveniles. Si bien los '90 parecieron ser la celebración descarnada y cínica de la mentalidad pragmática y la razón económica, también se ensayaron miradas de rescate hacia ese pasado tan próximo como diferente. Es cierto que muchas veces se cayó en la nostalgia del museo cultural: pasen a ver cómo fue aquel tiempo dorado... Pero no sería descabellado considerar que más de una actividad de los jóvenes de hoy tiene sus raíces en los '60 y comienzos de los '70. Es evidente que el diálogo con aquel pasado no ha cesado. Es que, en gran medida, el período 1955-1976 sigue siendo un pasado perturbador.

No obstante el efecto generalizador que tienen los artículos que abordan una época de modo orgánico, el lector de las próximas páginas deberá tener en cuenta que esa identidad juvenil a la que aludimos —que mejor sería definirla como una sensibilidad colectiva afectada al concepto de fisura o brecha generacional— englobó por lo menos dos generaciones. Para decirlo con ejemplos emblemáticos: estuvo la generación del escritor Rodolfo Walsh (1927) y la del músico Luis Alberto Spinetta (1950).

El primero escribió su célebre *Operación Masacre* en 1957, pero sus mejores textos literarios datan de la segunda mitad de “la década prodigiosa” (*Oficios terrestres*, 1966; *Un kilo de oro*, 1967), momento en el que un adolescente Spinetta ensayaba en su guitarra sus primeras composiciones, finalmente

grabadas por Almendra a partir de 1968 (*Tema de Pototo/El mundo entre las manos*). Si bien fueron fenómenos bien diferentes —otros lenguajes, otra relación con lo político, otras estéticas—, aquella literatura y aquella música no sólo compartieron una mera sincronía de almanaque: participaron de una misma trama cultural, refractando un imaginario social signado por una urgente sed de futuro. Había en el aire una cierta idea de porvenir que toda una generación estaba decidida a sostener con una energía inaudita. Había confianza en lo nuevo y malestar por lo viejo. Para el triunfo de lo primero y la superación definitiva de lo segundo, había que actuar. Y la acción no tuvo una sola cara o modalidad. Hubo una praxis estética y una praxis política, y desde finales de los '60 se hicieron varios intentos —con resultados dispares, pero en sí mismos significativos— de fusionar ambas acciones. Desde luego, la cultura joven no fue homogénea. En los '70, Walsh se internaría en el compromiso político y la militancia, mientras Spinetta profundizaría su relación con la contracultura. Pero incluso en esa divergencia existencial, un escritor metido en política sabía qué pasaba con la música y un músico que buceaba en el submundo de la expresión artística seguía con atención las inflexiones de lo político.

La mayoría de los ensayos escritos sobre los años '60 y '70 en la Argentina ha puesto el acento en la militancia política, el desarrollo de la guerrilla y el deseo de una revolución (marcas de “la juventud maravillosa”). Aquí se verán otros aspectos, no siempre complementarios de aquéllos. Se expondrán los rasgos principales del ser joven durante los avatares comprendidos entre la esperanza frondizista y el oscurantismo de López Rega. Sintetizando de modo un tanto brutal, podríamos decir que estaremos más cerca de Spinetta que de Walsh.

Entre las estrategias comerciales de las industrias culturales en su fase de máxima expansión y los caminos de la contracultura, una tensión sostenida refundó la noción de juventud. Al fin y al cabo, tan “jóvenes” fueron los chicos y chicas que a partir del '63 “compraron” la fórmula del Club del Clan y se hicieron adictos a la televisión, como aquellos hippies porteños que cuatro años más tarde se congregaron en Plaza Francia desafiando el autoritarismo represivo de Onganía. Mientras, millones de argentinos mayores de 15 y menores de 40 —aca-



Manuel Puig.

so tan lejos de Palito Ortega como del hippismo— leían a Rodolfo Walsh, pero también a Julio Cortázar, Ernesto Sabato, Jorge Luis Borges, Manuel Puig, Leopoldo Marechal, Haroldo Conti, Marta Lynch y Bernardo Kordon; escuchaban mucha música —del folclore al jazz, de Los Beatles a Pescado Rabioso—, veían cine con fruición y sabían quién era Antonio Berni y por qué se hablaba tanto de Marta Minujin.

Juventud “culta”, juventud consumidora de cultura y sueños revolucionarios: este actor social multiforme y ávido de información *nueva, moderna y joven* es nuestro tema, en tanto respondió, con diferentes actitudes y distancias según los momentos y la franja sociológica que se contemple, a los desafíos ideológicos y comerciales de una oferta cultural pujante. Para ésta, la juventud argentina supo ser a la vez la meta y el problema, el negocio y la subversión, el número y la diferencia.

CONTINUIDAD Y RUPTURA (1955-1962)

La percepción intelectual

La cronología de la historia política tiene razones que la historia cultural no comprende. O no siempre, al menos. Cuando en 1955 se quebró la continuidad del peronismo en el gobierno, la vida cultural de los argentinos siguió su curso con relativa “normalidad”. Es innegable que las tensiones que el golpe introdujo en la vida nacional se reflejaron en determinadas zonas de lo privado: la noche y las prácticas del ocio, por ejem-

plo, se vieron claramente afectadas por la sospecha que ellas generaban entre las nuevas autoridades. Éstas, no sin fundamento, asociaban fenómenos populares como el tango y el fútbol con el gobierno recién desplazado. Pero la gente de entonces no tuvo la experiencia de una ruptura cultural decisiva. El viejo país peronista, orgulloso y opulento, confiado tanto en la eficacia como en la legitimidad social de sus bienes simbólicos y materiales, subsistía en la nueva situación política.

¿Había cambiado aquel país? Algunas señales eran claras. Se había producido un golpe, una sustitución de gobierno, una crisis institucional y una serie trágica (y de larga y por entonces insospechada descendencia) de venganzas y revanchismos políticos con diversos grados de violencia. Pero no es fácil caracterizar el país cultural emergente en términos diferentes de los que suelen emplearse a la hora de estudiar el período 1946-1955.

¿Por dónde pasaban entonces los cambios culturales más fácilmente reconocibles? La nueva universidad era sin duda muy diferente de la del peronismo. No pueden negarse las innovaciones que se operaron en ese y otros ámbitos de la “alta cultura”. Además, quien hoy consulte ejemplares de aquellos años de *Sur* o *Contorno*, por citar dos versiones bien diferentes del campo intelectual, no dejará de observar la renovación de las agendas, amén de otros signos más sutiles. Y lo mismo podría inferirse a partir de otros indicadores: ciertos nombres del mundo editorial, los nuevos protagonistas de los debates culturales, el nuevo énfasis en los suplementos literarios de los diarios tradicionales de la Argentina (con la restitución, con todos los honores, de *La Prensa*, que junto a *La Nación* siguió siendo por un tiempo la autoridad cultural del mundo periodístico).

No obstante, como ha señalado Silvia Sigal, la percepción que los intelectuales tenían de la conformación de un nuevo marco nacional no tendría una correspondencia inmediata en el resto del cuerpo social hasta entrados los años '60. La vida cultural parecía fluir a dos velocidades: la de los intelectuales, bien informados y deseosos de un nuevo rumbo para la cultura del país, y la del resto de la sociedad, aún estática más allá de sus adhesiones políticas.

De todos modos, aunque todavía limitada a unos pocos, la

percepción de una nueva situación era ya una realidad. Entre los jóvenes que pronto iban a apoyar con gran optimismo el proyecto desarrollista se empezaba a vislumbrar la posibilidad de otra Argentina, la posibilidad de un país moderno tanto en lo económico como en lo cultural. Y, en ese sentido, se había constituido un elenco de gran prestigio, los cuadros político-culturales del posperonismo: Jorge Romero Brest, al frente de la dirección del Museo Nacional de Bellas Artes; Alberto Ginastera, ascendido a la categoría de gran compositor de la Argentina contemporánea (enfrentado, al menos en el campo estético, a Juan Carlos Paz), y José Luis Romero, devenido en impulsor de la vida universitaria acompañado por un cuerpo de profesores notables. En ese aspecto, que podríamos llamar de política y gestión culturales, los síntomas de una renovación no eran invisibles, si bien esto no suponía un cambio inmediato, ni siquiera un relevo total y decisivo.

Por ejemplo, la programación del Teatro Colón — epítome de la “alta cultura” argentina— no iba a sufrir grandes revisiones después del '55. Incluso convendría recordar, contra las interpretaciones maniqueas, que con el peronismo se habían conocido en la Argentina obras fundamentales de la literatura musical moderna: de Arthur Honegger a Leos Janáček; de Igor Stravinsky a Albert Roussel; de Ginastera a su ex alumno Astor Piazzolla, músico de dos “mundos”, el clásico y el del tango. Aunque para Roberto Caamaño el Teatro Colón sufrió cierto estancamiento entre 1944 y 1960, no puede afirmarse que durante esos años la programación haya sido conservadora, ni muy diferente de la de otros períodos del teatro.

Algo similar cabría decir sobre la prensa cultural anterior al '55. A pesar de la clara censura que marcó a fuego al país de los '40 y '50, pequeñas empresas culturales como las revistas *Ars* y *Lyra* conocieron por entonces su apogeo, mientras una publicación como *Imago Mundi* desarrollaba una verdadera universidad “de relevo”, paralela a la manipulada institución oficial.

Cultura popular

Un observador atento a los signos cotidianos no notaría grandes diferencias entre las rutinas de comienzos de los '50 y las que tuvieron su curso inmediatamente después de la Revolución Libertadora. La gente se siguió vistiendo más o menos igual: perduraron entre varones elegantes y damas voluptuosas los códigos indumentarios caricaturizados por el dibujante y humorista Divito en la revista *Rico Tipo*, así como los "petiteros" siguieron conformando la tribu urbana más pintoresca del Buenos Aires de los '50.

Es cierto que hubo menos sombreros y más jeans, y que la figura del "rebelde sin causa" entró en escena, pero la moda no reveló transformaciones importantes en materia de rasgos identitarios, roles o moral sexual. Los jóvenes de los '50 no se diferenciaban demasiado de sus mayores. Supieron bailar con frenesí cuando llegaron a Buenos Aires los primeros discos de Bill Haley —"Rock alrededor del reloj" y su modesta descendencia— y las chicas suspiraron por Elvis Presley. Pero nada de esto fue excluyente: una suerte de paz armada aún reunía a jóvenes y adultos. En realidad, se era "joven" sólo de noche. Y esa noche era compartida por diversas edades.

Con respecto al tango, aún muy vital, las "barras" que seguían con fervor a los directores Osvaldo Pugliese y Juan D'Arienzo estaban conformadas por muchos menores de 30 años y los grandes bailes en los clubes sociales y deportivos no mermaron ni en tamaño ni en importancia social (un club como Comunicaciones, cuya historia está tan ligada al peronismo, tuvo por entonces su momento más glorioso). Con los años, músicos y público recordarían con cierta amargura los años posteriores al golpe, pero hay coincidencia en que la crisis comercial del tango llegó un poco más tarde, ya en plena década del 60. Aunque los discos empezaron a amenazar a las orquestas "en vivo", aquel país de finales de los '50 todavía confiaba en sus formas tradicionales de diversión y expresión popular.

Los años del bolero no habían pasado. Ellas iban de tarde a conversar a la confitería con orquesta y de noche a bailar acompañadas por sus madres y hermanas mayores. Ellos practicaban el código sexista del café con amigos, flirteaban engo-

minados o con “media americana con navaja” en las funciones “vermouth” y “noche” y se acostaban con mujeres “de cascos ligeros” en los “amueblados” de Palermo. Los noviazgos partían todos de un mismo molde y una rutina más o menos establecida. Damas y caballeros se sabían de memoria las letras de los boleros, “caminaban” tangos por las pistas de los clubes sociales y deportivos, intimaban en los zaguanes de las casas de familia y tenían cronometrados los programas de radio más populares.

El radioteatro, ese género emblemático de la comunicación moderna, continuaba aunando pasiones sublimadas alrededor de la radio “capilla” o, en hogares de mejor situación económica, del “combinado”. Quienes pronto serían adolescentes disconformes, merendaban con la compañía de *Tarzán y Tarzanito*, mientras sus hermanos —y sobre todo sus hermanas— mayores seguían los éxitos musicales del momento por las radios El Mundo y Splendid.

Mueble soberbio que reinaba en el living de la casa argentina, el “combinado” era ante todo un decodificador musical. Si la recién inventada radio a transistores (Spica fue la marca) servía para comunicar relatos deportivos y noticias, el combinado primero y más tarde el “tocadiscos” (Wincofón fue la marca) eran artefactos esencialmente musicales. Todas las músicas salían de sus parlantes, y hacia 1956 empezó a notarse la presencia cada vez mayor del rock and roll, esa música frenética —más frenética y juvenil que el jazz, que hacia los años '50 ya era un clásico en la escucha de los argentinos— que venía de los Estados Unidos y que *también* los jóvenes sudamericanos consumían con interés y buena predisposición física; incluso algunos músicos argentinos, como el trombonista Eddie Pequenino, se atrevían a interpretarlo.

Más allá de certámenes y “asaltos” juveniles, el país musical se definía más por el *Glostora Tango Club* por Radio El Mundo que por los discos y las películas con (de) Elvis Presley. Liberados de la tutela asfixiante del Estado controlador, los medios no renovaron radicalmente sus “contenidos”. Un compositor de vanguardia tenía a fines de los '50 los mismos obstáculos para la difusión de su obra que los que hubiera padecido en plena euforia del “alpargatas sí, libros no”.

Es que por “música del siglo XX” se entendía los géneros

populares, y lo clásico y *culto* rara vez cruzaba la frontera estilística del siglo XIX. De todos modos, los “enterados” no estaban tan perdidos. Abundaban los programas de música clásica por radio (eran célebres, desde muchos años antes, las transmisiones de Municipal y Nacional) y a lo ya dicho sobre ciertas “filtraciones” de música contemporánea en la cartelera del Colón, se sumaba un panorama discográfico más rico y diversificado que antes. La consolidación del disco de larga duración (microsurco de 33 y 1/3 revoluciones, con mayor capacidad de información sonora) favoreció notablemente el registro y la posterior difusión de música sinfónica, óperas y otras macroformas, así como el nacimiento del álbum de canciones, en el dominio de la música popular.

Con referencia al jazz, la segunda mitad de los '50 fue una época importante. La gran orquesta de Lalo Schifrin (que antes de cumplir los 30 había compuesto la banda sonora de “El jefe” de Fernando Ayala, sobre libro de David Viñas: todo un encuentro) y la aparición de “Gato” Barbieri y otros solistas de talento hablaban de un movimiento local intenso. Y las primeras grandes visitas de los creadores del género (Dizzy Gillespie en 1956 y Louis Armstrong en 1957) estaban indicando que los caminos de la música podían conducir al mundo exterior y conectar a los argentinos, siempre ávidos de universalismo, con la sensibilidad de las grandes capitales. El jazz era por entonces la música “de los jóvenes” (lo venía siendo desde los años veinte, toda una proeza espiritual), pero esta condición no era excluyente.

El folclore estaba de parabienes, aprestándose a vivir su *boom*. Intérpretes y compositores, salteños y santiagueños en su mayoría, animaban peñas y fiestas, grababan con mayor frecuencia que antes y editaban canciones que, a través de partituras y cancioneros, estaban impulsando el triunfo definitivo de la guitarra criolla y el canto en el hogar de clase media. La zamba y la chacarera se imponían en muchos bailes, y pronto las letras conjugarían el imaginario nativista con reivindicaciones sociales. Con los años, el encuentro folclórico sería, para muchos jóvenes, un cruce vital entre la canción popular y la demanda política. Este nuevo perfil ideológico del folclore de proyección, tan distinto del de los años '40, tuvo en Atahualpa Yupanqui a su pionero y mentor más talentoso.

Ahora muchos jóvenes empezaban a identificarse con aquel “payador perseguido”.

En otro orden de cosas, es cierto que la aparición de la televisión y los efectos de la purga macartista significaron un golpe cruento para el Hollywood dorado, tan fielmente seguido por el público argentino desde los tiempos de Rodolfo Valentino. Pero las carteleras de los cines de la calle Lavalle, abastecidas en gran medida por aquella producción, no perdieron su poder de seducción: la competencia de la televisión llegaría mucho más tarde. Nadie se iba a quedar en su casa por el solitario Canal 7.

Mientras tanto, la gran fábrica de sueños seguía facturando en las remotas ciudades sudamericanas con gran rentabilidad, y el cine argentino aún tenía unos cuantos teléfonos blancos y alguno que otro drama social, si bien ya despuntaban la mirada y la sensibilidad de una manera nueva de hacer cine. Por su parte, los clubes de “cine arte” estaban acortando distancias entre el mejor cine europeo y un público argentino cada vez más demandante y exigente, que no sólo seguía con atención

los cambios de cartelera, sino que leía las críticas especializadas, haciendo del cine todo un tema de conversación social. Un poco más tarde, ese mismo público cinéfilo se adjudicaría el “descubrimiento” mundial de las filmografías de Bergman, Fellini y otros “monstruos sagrados” del *cinema* como forma artística.



Atahualpa Yupanqui.



Leopoldo Torre Nilsson y Beatriz Guido durante una filmación.

De la rutina a la desobediencia

Las formas de entretenimiento de los públicos urbanos más numerosos no se modificaron sustancialmente en la segunda mitad de los '50. Ernesto Goldar ha observado que, hasta 1956, la sociedad argentina siguió caracterizándose por “el estreñimiento social, el paternalismo, el localismo y la severidad”. Incluso después de esa fecha, la dinámica de cambio no se alteró demasiado. La vida social permanecía aferrada a los códigos del ayer, confirmando que, en palabras de Goldar, la vida cotidiana siempre está “quedada” respecto de los cambios estructurales.

Sin embargo, había algunas señales anticipadoras, ciertas conductas avanzadas, señales pioneras del cambio que venía. Por lo pronto, había una generación —flamante generación— que se aprestaba, con mayor o menor grado de conciencia según las actividades, a buscar una “apertura al mundo”, un nuevo estilo de ser argentino. ¿Qué fue aquel clima si no la antesala de la

rebeldía? Esa búsqueda no estuvo ajena al gran crecimiento de las industrias culturales, aunque la relación entre arte y mercado no sería apacible: pronto desnudaría fuertes tensiones entre lo viejo y lo nuevo, lo masivo y la vanguardia, lo popular y lo culto. ¿Acaso no serían éstos los ejes principales en torno a los cuales iba a girar la dinámica cultural a lo largo de los años '60?

Si tuviéramos que sintetizar en dos hechos artísticos la “desobediencia” en potencia de aquella Argentina que asistía con optimismo y confianza al ascenso político de Frondizi y el desarrollismo, podríamos pensar en el cine intimista y “de autor” de Leopoldo Torre Nilsson (de *La casa del ángel*, de 1957, a *Setenta veces siete*, de 1962) y en la música del iconoclasta Astor Piazzolla (cuyo célebre Octeto Buenos Aires se fundó justamente en 1955, mientras la idea del quinteto iba a terminar de cristalizar en los años siguientes).

En gran medida, la sensibilidad de los '60 se anticipaba en ese cine y esa música, con discípulos, admiradores y adversarios que enseguida irrumpirían con la violencia de una auténtica revolución cultural. En aquellos signos visuales y sonoros vibraban las modulaciones de una Argentina diferente, en alguna medida incomprendida (la *incomprensión* pasó a ser una legítima categoría cultural) y básicamente hecha *por y para* una audiencia con los sentidos puestos en el futuro.

UN SÍNDROME GENERACIONAL (1962-1966)

Los jóvenes viejos

Incomprendidos, pero también incommunicados: los jóvenes argentinos de comienzos de los '60 reflejaban, en sus charlas y proyectos, en sus prácticas sociales y su producción artística, el malestar de una época que acababa de pasar velozmente del sueño desarrollista (con su promesa de gran síntesis modernizadora) a la realidad más modesta —y tardíamente valorizada— del gobierno del radical Arturo Illia.

En sus análisis de los intelectuales de aquellos años, Oscar Terán ha subrayado el tema de la incommunicación como una cuestión que trascendía la esfera individual, para convertirse en el “fondo” de toda una generación. Habría que agregar que

no se trataba de un cuadro meramente argentino. ¿Dónde ubicar si no el éxito mundial de un filme tan bellamente amargo como *La dolce vita* de Federico Fellini, auténtica bandera de un cierto escepticismo generacional?

Para Oscar Terán, un clima análogo al del pesimismo existencialista que el escritor Héctor Murena expresaba por entonces en las páginas de *Sur* se podía rastrear en otros ámbitos de la cultura. En efecto, en ese momento un filme como *El silencio*, de Bergman, en la mira de los censores vernáculos, fascinó a un público argentino predispuesto a identificarse, más allá de su densidad formal, con la temática de la incomunicación. Por otra parte, ¿de qué otra cosa si no de incomunicación hablaba el filme de Rodolfo Kuhn *Los jóvenes viejos*, de 1962? ¿Qué decir de las piezas más representativas del nuevo teatro realista de Ricardo Halac, Germán Rozenmacher y especialmente Roberto Cossa, con la tematización de la frustración de la clase media y la imposibilidad de vehiculizar ese sentimiento de modo positivo?

Podríamos agregar que tanto la atracción que despertaban los textos de Sartre entre escritores destinados a ser “de los



Julio Cortázar.

'60' (es el caso del cuentista Abelardo Castillo) como una primera valoración de la narrativa de Julio Cortázar terminaron de configurar un clima de ideas muy particular. La producción artística (y teórica, si pensamos en el ensayo sociológico a la manera de Juan José Sebreli o en los primeros combates del estructuralismo, más o menos evidentes en Oscar Masotta, Eliseo Verón y otros) logró plasmarlo con particular vehemencia. Aunque la alianza entre el desarrollismo y la juventud se había quebrado dramáticamente con la polémica sobre la ley de enseñanza libre y otras concesiones del imprevisible Frondizi, es indudable que aquel lazo contribuyó a un cambio de estilo. Ahora había toda una pléyade de artistas e intelectuales iracundos que se movían pendularmente entre el escepticismo y el compromiso. Pero quizá lo más importante era su relación con los bienes simbólicos. Éstos ya no eran las vacas sagradas de la cultura argentina, sino una estimulante serie de novedades y cosas nuevas al alcance de las manos.

Al comenzar los años '60 se agudizó la percepción de aquel cambio que antes sólo unos pocos habían detectado; incluso empezaron a rendir frutos algunas creaciones de la etapa anterior. Se habían creado carreras universitarias nuevas, como Sociología, Psicología y Educación, y el flamante CONICET fomentaba la investigación científica en el país. Mientras el Fondo Nacional de las Artes y una serie de premios nuevos alentaban el desarrollo de una producción artística más rica y variada, menos apegada a los canales de circulación tradicionales, la editorial universitaria Eudeba publicaba lo mejor de la producción intelectual del momento, con un plan de traducciones muy actualizado.

Todos éstos eran datos muy alentadores sobre las expectativas culturales de los jóvenes. En materia de periodismo, el semanario *Primera Plana*, fundado por Jacobo Timerman en 1962, se convirtió enseguida en el gran testigo (e impulsor, en más de una ocasión) de los gustos, las costumbres y los criterios de consumo cultural de toda una generación. ¿Cómo entender si no aquella temprana definición de "década frenética" (1962) con la que el semanario bautizó un momento tan particular de la Argentina y el mundo?

Masculino-femenino

Sin embargo, donde más “frenética” pareció ser la nueva década no fue tanto en el campo de la política cultural e institucional como en el de las transformaciones de la vida cotidiana. En ese sentido, uno de los puntos centrales —si bien no el único— fue la moral sexual y, por ende, la situación de los roles genéricos. No fue necesario esperar el estreno de *Masculino-femenino*, la polémica película de Jean-Luc Godard de 1966, para descubrir que muchas cosas estaban cambiando en las relaciones entre hombres y mujeres jóvenes. Para los primeros, no iba ser tan sencillo asimilar estos cambios, pero tal vez menos simple para las mujeres protagonizarlos. De todos modos, los temores no inmovilizaron a la gente, y ser mujer en los '60 fue muy distinto de ser mujer apenas unos años antes.

Junto a otros tabúes descongelados, como el divorcio o la mujer independiente, el sexo apareció asociado, desde comienzos de los '60, a una idea de mayor libertad individual y autoconocimiento, siendo el vehículo de una verdadera revolución moral. Una revista “de mujeres” como *Claudia* se internaba, ya en 1960, en temáticas “difíciles”, como la infidelidad, las relaciones extramatrimoniales y el placer sexual en la pareja. Para una sociedad aún férreamente vigilada por la Iglesia

Una nueva mujer

“La mujer argentina se ha vuelto fanática de los cine-clubes y admira más las virtudes del director que a las estrellas del filme. Averigua todo lo que puede sobre música dodecafónica, sobre lo último que salió en jazz, sobre el libro recién salido de la imprenta. En las fiestas, baila menos para hablar de política y, en lugar de whisky, bebe jugo de frutas. Ya no usa pañuelo anudado a la cabeza (lo cambió por el alegre sombrero tirolés), abandonó las ballerinas para usar el gracioso zapato de taco carretel, vive en pulóveres multicolores adornados con imprevisibles collares de fantasía; su maquillaje, delicado en los labios, subraya con audacia extrema la importancia de los ojos (...) ¡Vivan las mamás que parecen hermanas de sus hijas!”

Fuente: Revista *Claudia*, mayo de 1960.



Tapa de la revista Claudia, agosto de 1957.

católica y el Ejército, tocar estos temas en los medios, a partir de la sospecha de que eran cambios que realmente se estaban operando en una amplia franja de la población, era un gesto de valentía, pero también una apuesta al futuro inmediato.

En las encuestas de entonces —los '60 fueron años de fiebre de encuestas—, los jóvenes argentinos reconocían, en alto porcentaje, estar a favor de las relaciones prematrimoniales y juzgar negativamente “el amor de los adultos”. No menos importante era el número de personas que defendían la idea de divorcio, incluso entre gente

que profesaba alguna religión. A medida que se ascendía en escala y nivel socioculturales, más liberales solían resultar las creencias. Pero en líneas generales, la nueva sociedad de los jóvenes había modificado velozmente (frenéticamente) las conductas en materia de amor y relaciones de pareja.

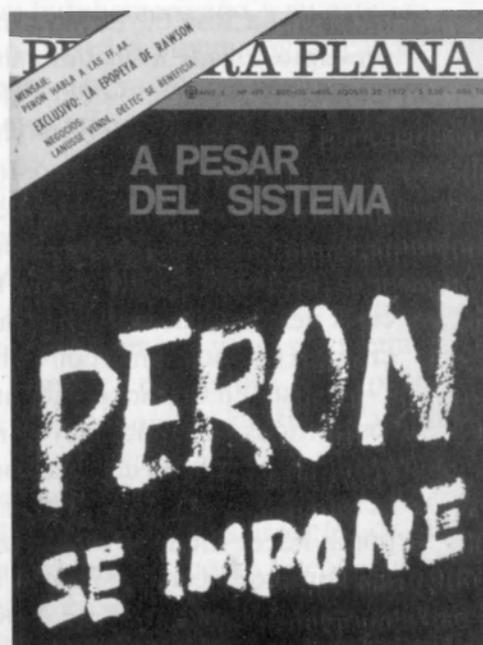
¿Las causas del cambio? El impacto cultural del psicoanálisis era un dato que se debía tener en cuenta. Tanto la terapia en sí misma como la circulación de la vulgata psicoanalítica en el habla cotidiana ayudaron a encarar la vida sexual con un poco más de libertad. Por otro lado, la influencia de la modernización cultural sobre la vida privada se hizo sentir con fuerza. El imperativo marital y procreador estaba en descenso. Disociar, definitivamente, el sexo de la procreación fue una de las grandes proezas de la década, y en ello tuvo mucho que ver la píldora anticonceptiva descubierta por el ginecólogo John Rock. Desde la minifalda hasta la moda unisex, desde las ideas de Herbert Marcuse a favor del “fortalecimiento de los instintos vitales” (*Eros y civilización*) hasta la posterior consigna del amor libre de los hippies, el sexo ya no fue entendido con la mojigatería de antaño.

Como emergente de los '60, la píldora y el derrocamiento de viejos prejuicios pusieron en escena un nuevo tipo de mujer, más próximo a los modelos defendidos por publicaciones como *Femirama*, *Karina* y *Claudia* que al clásico prototipo matriarcal de *Para Ti*; más interesado en programar racionalmente la forma y las dimensiones de su familia que en cocinar para todos según las recetas de Doña Petrona; más deseosa de concretar sus propios deseos que en satisfacer los de sus maridos. Y entre esos deseos "propios", el de integrarse más activamente al mercado cultural ocupó un lugar sumamente importante. No casualmente una revista como *Primera Plana* tuvo en cuenta las modulaciones que se estaban operando en la dialéctica masculino-femenino y se dirigió tanto a un lector masculino como a uno femenino, aunque en su planta de redacción hubiera una abrumadora mayoría de periodistas varones.

Un mercado cultural en expansión

Primera Plana "bajaba" el mundo exterior al mundillo porteño; mediaba, cual ágil traductor, entre las grandes capitales de la cultura moderna y un Buenos Aires escindido entre la nostalgia de los tiempos peronistas y la sed de apertura y cosmopolitismo de muchos jóvenes. Desenfadada y sofisticada a la vez, la revista —que tuvo su entorno y su descendencia en *Panorama*, *Convicción* y otras publicaciones nuevas— transformó sustancialmente las relaciones entre los objetos culturales y sus potenciales consumidores. En ese aspecto de la vida social, ya nada sería como antes.

Tal vez resulte insuficiente definir a una generación por



Tapa de *Primera Plana*, 22-8-1972.

sus lecturas “prestigiosas”, ya que cientos de miles de argentinos leían muy poco, otros directamente no lo hacían y muchos leían con fruición revistas de historietas cada día más exitosas, de *El Tony* a *Patoruzú*. Pero, como ha puntualizado John King, las condiciones del mercado cultural cambiaron de modo notorio en los '60. Había ahora un público ávido de novedades y toda una camada de editores jóvenes deseosos de poner a circular textos extranjeros desconocidos en el país, así como de brindarles oportunidades a escritores noveles.

A lo largo de los '60 fueron emergiendo editoriales pequeñas y de gran empuje: Jorge Álvarez (cuya actividad abarcó casi toda la década de modo emblemático), De la Flor, Corregidor y Galerna, entre otras. Las grandes, como Sudamericana, Emecé y Losada, impulsaron a la literatura nueva y tuvieron su recompensa: las listas de *best sellers*, que empezaron a tener cierto valor periodístico en ese tiempo, solían incluir algún título nacional. A su vez, revistas literarias como *El Escarabajo de Oro*, *La Rosa Blindada* y *Cuadernos de Cultura* —en el contexto de una izquierda cada vez más diversa y díscola— daban cuenta de las relaciones entre la cultura y la política.

Es cierto que la sociedad argentina siempre había sido lectora, pero en los '60 la letra impresa multiplicó su presencia y prestigio. Desde los estudiantes de Filosofía y Letras y los poetas bohemios adictos del café céntrico (el Bar Moderno y el Ramos, entre muchos otros) hasta los jóvenes empresarios que soñaban con ser ejecutivos (una conocida canción de María Elena Walsh se reía de ellos), una parte destacada de la comunidad buscó cierto prestigio a través de la cultura literaria. Un *boom* de lectores, sin duda. Y sobre todo de lectores jóvenes, cuya demanda de integración y participación sociales se relacionaba directamente con el hábito de la lectura.

Por eso, en una sociedad muy sensible a lo nuevo, la tarea de los críticos adquirió mayor relieve. A ellos se les pedía que evaluaran la oferta cultural, pero sobre todo que se atrevieran a descubrir “nuevos valores”. Una crítica de Jorge D'Urbano podía hacer dichoso o infeliz al músico criticado. La palabra de Romero Brest —así como la de Ángel O. Nessi o la del fundador del Museo de Arte Moderno, Rafael Squirru— era tenida en cuenta tanto por artistas como por *marchands*. Las notas de Tomás Eloy Martínez y Ernesto Schoo apuntalaban, más de

Edición masiva de libros

“En septiembre de 1966, el equipo renunciante de Eudeba funda el Centro Editor de América Latina. Del ritmo impreso a la tarea da cuenta este primer lanzamiento. Spivacow, presidente y director gerente, concreta sus propósitos cuando lo interrogamos, poniendo énfasis en el espíritu nacional y la proyección latinoamericana que aspiran a dar a la nueva editorial.

”—Queremos que vastos sectores de América latina puedan tener acceso a las más importantes expresiones de la ciencia, el arte, la técnica y la cultura. Y que tengan contacto con aquello que, en particular, haga conocer los problemas del continente. Más aún: deseáramos que todo latinoamericano que tuviera algo que decir, que pudiera justificar por qué lo dice y supiera cómo decirlo, lo dijera a través de las páginas de nuestra editorial.”

Fuente: *Análisis*, 23 de enero de 1967.

una vez de modo decisivo, la obra de un escritor, como efectivamente sucedió con el colombiano Gabriel García Márquez y lo que se dio en llamar el *boom* latinoamericano y su estética central: el realismo mágico. Las reseñas cinematográficas de Agustín Mahieu y Homero Alsina Thevenet guiaban a los espectadores por la senda del mejor cine, según los cánones de aquellos años.

El jazz y otros géneros musicales de raíz popular fueron temas “serios” las veces que de ellos escribieron Guillermo Orce Remis, Eduardo Lagos y un poco más tarde Jorge Andrés. El rock tuvo que esperar un tiempo para que, a partir de Miguel Grinberg, se lo tratara con “seriedad”, aunque ya en sus memorias Juan Carlos Paz hablaba bien de Los Beatles y un poco más tarde Galerna editaba dos libros pioneros de Juan Carlos Kreimer: *Beatles & Co* (1968) y *¡Agarrate!...* (1970), este último con testimonios de “la música joven en la Argentina”. También las publicaciones dedicadas a distintos aspectos de la comunicación social y la cultura de masas, como la colección Transformaciones (CEAL), incluyeron de vez en cuando a la música pop entre sus preocupaciones.

Aunque limitada a un espacio y un cierto sector social, la

vanguardia de comienzos de los '60 ya no era hermética y distante como la de otras épocas. A través de ella emergía, en plena ola del arte pop, un espíritu lúdico cuya apuesta más osada consistía en barrer con “el paternalismo, el localismo y la severidad” que Ernesto Goldar señalaba como marcas negativas de la Argentina de los '50. En ese sentido, la experiencia del Instituto Di Tella ocupó un lugar central entre las actividades artísticas más relevantes del momento, y así forjó su propia leyenda.

En el Di Tella hubo de todo, siempre que ese “todo” se plegara al imperativo de lo nuevo. Estuvieron las canciones de Jorge de la Vega y Nacha Guevara, el teatro de Rodríguez Arias, Roberto Villanueva y Griselda Gambaro, la danza de Iris Scaccheri y por cierto la artes visuales: León Ferrari, Dalila Puzzovio, Alberto Greco, Edgardo Giménez... Desde

Las luces del Di Tella

“En ese momento se podían usar muchos lugares, alquilar galerías o montar espectáculos en teatros pequeños. Pero el Di Tella era fundamentalmente el lugar donde era posible reunir tantas disciplinas diferentes. Todas las actividades que se realizaban en el CEA eran muy importantes. En el CAV, sólo estaba el premio que permitía exponer a los artistas modernos. Durante el resto del año parecía más bien un museo de arte moderno. Creo que la importancia del Di Tella consiste en que fue un centro que permitió que muchas actividades diferentes se desarrollaran en el mismo edificio. Era una suerte de corte de los milagros. Gente con ideas diversas encontraba allí un lugar donde vivir y expresarse. Era un momento de riqueza en la Argentina después de tantos años de oscuridad. Había una explosión cultural y el Di Tella era el centro y la parte sensible de esta explosión. Pero no era posible continuar en ese nivel. No creo, sin embargo, que el Di Tella fuera atípico. La Argentina tiene una fuerte tradición cultural: los argentinos conocen lo que pasa en Europa mejor que los europeos. En las artes y el teatro hay un nivel muy alto de información. Como estamos tan lejos de esas fuentes culturales, tenemos una gran sed de conocimiento.”

Fuente: Alfredo Rodríguez Arias, en John King, *El Di Tella y el desarrollo cultural argentino en la década del sesenta*, Buenos Aires, Ediciones de Arte Gaglianone, 1985.

los *collages* de música electrónica llevados a cabo en el CLAEM hasta los muy publicitados *happenings*, las actividades del instituto constituyeron uno de los grandes temas de los medios (principalmente de *Primera Plana*, que apuntaló el experimentalismo con gran decisión y logística) y algunos de sus artistas, como la pintora y escultora Marta Minujin, devinieron en iconos de la década en la Argentina.

Moderno y masivo

Pero no fue aquel el único ámbito interesante. Si la Argentina posterior al '55 se caracterizó por una expansión y un mayor poder de las industrias culturales, hay que convenir que la modernidad de los '60 no se circunscribió sólo a los centros de experimentación estética del reducto de la calle Florida. Después de todo, por más moderna que fuera, la experiencia del Di Tella estaba limitada a un tiempo y un espacio. Compartía con el arte tradicional el ritual de la contemplación de lo "único" e "irrepetible". En cambio, en los productos realmente masivos se encarnaba el ideal de la cultura pop: la culminación estética de aquello que Walter Benjamin denominó "el arte en su etapa de reproductibilidad mecánica".

Un texto muy consultado en aquellos años, *Apocalípticos e integrados* del semiólogo italiano Umberto Eco, hablaba "bien" de los cómics, la canción popular, la moda y otros signos de la vida moderna. Ya no se trataba de defender la legitimidad de láminas y reproducciones de cuadros famosos puestos a circular en la sociedad de masas. Ahora esta sociedad generaba sus propios hijos. La descendencia vernácula de las nuevas teorías no se hizo esperar, con una fuerte impronta francesa y, en los autores más volcados a la temática de la comunicación, americana. De aquel tiempo datan los primeros trabajos sobre comunicación y cultura de masas de Aníbal Ford, Jorge Rivera y Heriberto Muraro; un poco más tarde, llegarían los escritos de Oscar Steimberg y Juan Sasturain sobre historietas, mientras que, en el campo de la creación, las firmas de Pratt, Breccia y Oesterheld y Solano López adquirirían un estatus literario impensable en tiempos de Dante Quintero. Definitivamente, la historieta dejó de ser objeto exclusivo

de la lectura infantil. Fue aceptada como una legítima forma narrativa, cruce con futuro de la antigua tradición del folletín y la dinámica de la era pop. No es casual que uno de sus principales defensores y teóricos haya sido Oscar Masotta, cuyo alegato a favor de un copamiento artístico de los *mass media* fue seguido con atención por algunos artistas plásticos.

En los años '50 el concepto de cultura aún respondía a categorías tradicionales e iluministas, pero a partir de los '60 la situación comenzó a modificarse. Por cierto que no fue un cambio inmediato. En la encuesta sobre consumo cultural que Regina E. Gibaja realizó para el Instituto Di Tella en 1964, a los lectores de historietas se los relacionaba con un bajo nivel de instrucción, y en el prólogo a los resultados la autora adoptaba la noción de “cultura mediocre” para todo aquello que se “transmite fundamentalmente a través de los medios de comunicación de masas”.

Sin embargo, desde otras miradas, crecía la evidencia de que la cultura popular no se limitaba a los viejos esquemas de tiempos del peronismo. Cultura popular, cultura de masas, comunicación social: la proliferación de nuevas categorías del análisis cultural respondía a una nueva realidad en el consumo y la percepción. Viejas antinomias ya no parecían tan irreductibles como antes. El imaginario de muchos jóvenes se estaba modelando con novelas como *Sobre héroes y tumbas*, de Ernesto Sabato, pero también con las zambas del Cuchi Leguizamón, el último disco de Los Beatles, el cómic *El Eternauta* y, en dosis diarias, tiras como *Mafalda* de Quino o las viñetas humorísticas de Landrú, el gran editorialista gráfico de los '60.

Por su parte, la televisión, que pronto se convertiría en la bestia negra de la crítica cultural, alternaba programas “pasatistas” con espacios “culturales”, y los cruces de ambos registros eran bastante frecuentes. Por ejemplo, en programas como *Sábados circulares de Mancera* o *Casino* no era extraño saltar de algún número cuasi circense o revisteril a una actuación del quinteto de Astor Piazzolla o de los Huanca Hua, acaso la mejor expresión de la proyección folclórica a varias voces. Con una audiencia cada vez mayor, la televisión brindaba argumentos a integrados y apocalípticos casi por igual. En todo caso, la preocupación familiar, respaldada por la psicología de niños de Florencio Escardó y Eva Giberti, se dirigía a

una situación tan nueva como inquietante: los posibles efectos que el nuevo aparato podía ejercer sobre el sector infantil de la audiencia.

En una época en que padres y pedagogos debatían el mejor medio para controlar o neutralizar las marcas televisivas sobre la psiquis de los infantes, éstos se reían con *El capitán Piluso* y vivían todo tipo de aventuras a través de las series de la tarde, del psicodélico *Batman* modelo '60 al macartista *Yo soy espía* o el lento *Bonanza*. Estas series continuaban, desde un nuevo campo audiovisual, la vieja costumbre de las meriendas a la salida de la escuela, cuando *Tarzán* y *Tarzanito* esperaban a los chicos desde la radio. La televisión estaba acuñando una nueva domesticidad: siesta para los consejos femeninos de *Buenas tardes, mucho gusto*, tardecitas para los niños que volvían de la escuela y la noche para adultos de ambos sexos, con las adaptaciones del Clan Stivel y películas o series al estilo de *El show de Dick Van Dyke*.

Mientras así se acuñaba la subjetividad de miles de niños argentinos —los que serían jóvenes en los '70 y '80—, sus progenitores añoraban los tiempos en los que la infancia se asociaba a las novelas de Alejandro Dumas y Emilio Salgari. Pero no todo estaba perdido. A veces, algunos de estos libros lograban penetrar en la mente televisiva de los niños. Aún se editaban (y reeditaban) los mejores títulos de la colección Robin Hood de editorial Columbia, y una serie de clásicos “adaptados” llamada Iridium, de editorial Kapelusz, tuvo grandes ventas a lo largo de los '60 y un poco más tarde también. Podría decirse que los pequeños también participaron, a su manera, del *boom* de lectores. No era extraño encontrar en sus bibliotecas *De la Tierra a la Luna* y *20.000 leguas de viaje submarino*, obras de Julio Verne también trasladadas al cine y que pronto se verían por televisión. Más allá de sus medios específicos, la narrativa seguía siendo imbatible entre niños y jóvenes.

La mirada rebelde

Ni las historietas ni el cada día más influyente televisor le restaron mucho público al cine, que en los '60 logró crecer a partir de la renovación de sus temas y su lenguaje. Con su *nouvelle*

Un cine diferente

“No es fácil fijar una fecha, un estilo, una ideología; tampoco se puede hablar de una misma búsqueda, de personalidades compatibles, de una verdadera amistad. ¿Apenas una actitud? No tanto: se parecen poco entre sí, difieren en situación económica, discrepan sobre los métodos por aplicar en una batalla que, sin embargo, los une. Porque todos quieren filmar, expresarse a través de la cámara, recrear el contorno humano que los rodea y los ha engendrado; también pretenden —nada más justo— que su obra sea conocida y que el cine se vuelva cada vez más su trabajo, su modus vivendi cotidiano. Se llaman: Simón Feldman, Manuel Antín, Leonardo Favio, Ricardo Alventosa, David José Kohon, Rodolfo Kuhn, Lautaro Murúa. Estos nombres no son los únicos, pero sí los de quienes más evidentemente han demostrado su derecho a filmar. Por situarlos bajo un rótulo, se los ha llamado la generación de 1961, aunque esa fecha no sea igualmente significativa en todos los casos; por lo que son, por lo que pudieron ser y por cuanto hicieron, sería mejor llamarlos la generación desperdiciada...”

Fuente: *Primera Plana*, 27 de septiembre de 1966.

vague, el cine francés volvió a seducir a una considerable franja de la clase media, en momentos en los que el italiano Federico Fellini y el sueco Ingmar Bergman gozaban de un prestigio equiparable al de los grandes novelistas y cuentistas. Los argentinos se volcaron gran fruición al cine europeo, tras la doble meta de acrecentar su cultura cinematográfica y estar “al día” en información cultural. Si se quería tener un tema de conversación interesante, había que conocer algo del cine que los europeos filmaban y exportaban por esos años, aunque muchos prefirieran *alienarse* en las tardes de Súper Acción de Canal 11.

Por entonces, desde la creación local, la llamada “generación del ’60” (Simón Feldman, Rodolfo Kuhn, Fernando Birri, Leonardo Favio, Lautaro Murúa, etc.) postuló la necesidad de un cine “autoral” capaz de plasmar la realidad argentina desde otras premisas formales. En parte lo logró, generando un renovado interés por el cine nacional. Atrás quedaron, definitivamente, los teléfonos blancos y las comedias burguesas de las décadas anteriores, si bien no todo fue cine “de autor”.

En realidad, la crisis de cine “de géneros” era mundial, y en el país también se operó una rebelión contra el viejo sistema de estudios y estrellas. El cine se volvió crítico y reflexivo, tanto sobre la materia política y social (de *Los inundados* de Fernando Birri a *La hora de los hornos* de Fernando Solanas) como sobre el mundo “interior” de personajes atribulados y enigmáticos, atacados por un malestar difícil de precisar (de *Los jóvenes viejos* de Rodolfo Kuhn a *Circe* de Manuel Antín, sobre un cuento de Julio Cortázar).

Pero los grandes éxitos del cine “de calidad” vendrían de la mano de un maestro de los '50, Leopoldo Torre Nilsson, y de un joven ávido de transitar, con poderoso instinto, por diferentes registros de lo popular: Leonardo Favio. Mientras el primero filmaba el cuerpo central de su obra a lo largo de los '60 y comienzos de los '70 (llegaría a ser masivo con sus discutidas versiones de *Martín Fierro* y *El Santo de la espada*), Favio alternaba el mejor cine de los '60 (*Crónica de un niño solo*, *El dependiente*, *El romance del Aniceto* y *la Francisca*) con la canción “melódica” más banal (*Fuiste mía un verano*). Eran los extremos de una época en una misma persona.

Aquel cine invitaba a la contemplación y la reflexión, mientras que el de Armando Bo y su actriz fetiche, Isabel Sarli (*Carne*), se convertía en el objeto visual más frecuentado de una erótica brutal y *kitsch* al mismo tiempo. Esta vez no había conexión entre arte “alto” y arte “bajo”, como soñaba Manuel Puig desde sus novelas. Si la infancia cantaba con las “canciones para mirar” de María Elena Walsh, la adolescencia descubría el sexo de modo compulsivo en los cines de estación. En ellos, el voluptuoso cuerpo de la Sarli era celebrado y ultrajado a la vez por la mirada masculina de su director-amante.



Leonardo Favio

REBELIÓN DE CENTAUROS, BASTONES MILITARES (1966-1973)

Teenagers argentinos

Es sabido que, a partir de los '60, la juventud se convirtió en un segmento relativamente autónomo —podría agregarse que orgullosamente autónomo— dentro de la sociedad occidental. Estuvo, por un lado, el despertar político, con la presencia modélica de la Revolución Cubana, la figura carismática del Che Guevara. También se manifestó en el estilo de la contracultura, eso que Theodore Roszak denominó “la rebelión de los centauros”.

En realidad, la historia de una contracultura argentina es inseparable de aquello contra lo que se levantó: la celebración mercantilista de la juventud como nueva categoría de mercado. A comienzos de los '60, tras la inspiración comercial de las industrias *para los teenagers* de los países centrales, algunos empresarios locales, en conexión con capitales internacionales, pusieron en marcha una serie de productos “juveniles” muy superficiales. La confección de listas de éxitos fue un intento, en gran parte triunfante, de manipular el gusto de los adolescentes y acrecentar con relativa facilidad las ganancias de las empresas orientadas al consumo de música “joven”.

El caso más conocido fue el del Club del Clan. Se trataba de un grupo de cantantes destinados a despertar una idolatría de baja intensidad entre una audiencia que buscaba diferenciarse claramente de la generación del tango. Con las excepciones (tan diferentes entre sí) de Julio Sosa y Astor Piazzolla, el tango estaba en retirada, ya casi no se lo bailaba y los pocos espacios que conservaba resultaban muy poco atractivos para la juventud. El “clan” ofrecía un producto ligero y moderno, traducción criolla del *beat* mundial. En realidad, su imagen correspondía más al último tramo de los años '50 —etapa de transición en el mundo pop— que a la nueva década. Desde el eje anglosajón se había difundido el modelo del cantante “frenético” y juvenil (tan juvenil como su público): Adriano Celentano en Italia, Johny Holliday en Francia, Roberto Carlos en Brasil... y el Club del Clan en la Argentina.

El “clan” vendía la imagen de una juventud despreocupada,

alegre y en el fondo juiciosa. Con la excepción de Palito Ortega, cuya fama trascendería el marco original, los miembros del "clan" trabajaban sobre la idea de que ellos eran comunes y corrientes. En efecto: estaban allí casi por casualidad. Era fácil identificarse con ellos: figuras intercambiables, sin recursos artísticos especiales (si bien no todos cantaban mal), se diferenciaban entre sí por pequeñas señales externas a la música. Algunos se atrevían a "rockear" un poco, pero sin ser verdaderos rockers.

Sus compradores eran, según la expresión acuñada por Miguel Grinberg, "los hijos de la inercia". Aquella juventud tenía sus propios códigos, pero los vivía de modo transitorio, sabiendo en el fondo que la adolescencia era "una enfermedad pasajera" y que, en todo caso, había que pasarlo de la mejor



Tanguito (Raúl Cobián), Nicky Jones, Lalo Fransen, Raúl Lavié y Violeta Rivas, integrantes del Club del Clan, 1963.

manera posible mientras el “mal” durara. En televisión, un caso equivalente fue la serial *La Nena*, con Marilina Ross en el rol juvenil y Osvaldo Miranda en el del padre. Si bien *La Nena* superaba en calidad al oportunista Club del Clan, su rebeldía era siempre muy limitada: la chica le complicaba la vida al pobre padre, pero nunca se interrumpía el diálogo; la nena y su papá —que cerraba su número hablándole a la cámara, guiño a tantos padres que debían adaptarse a los nuevos tiempos— podían convivir bajo un mismo techo, sin que sus visiones de la vida se enfrentaran de modo crucial.

La contestación del rock

A mediados de los '60, superponiéndose con esas imágenes “ligeras” y conformistas de la juventud, empezó a cobrar vuelo otra manera (y otra estilística) de ser joven en la música, la actuación, el consumo cultural. Si bien aún no se hablaba de rock nacional, ni de estilos alternativos, la influencia de Los Beatles fue decisiva. Con un programa estético tan excepcional, primero Los Beatles y luego decenas de conjuntos y solistas ingleses y norteamericanos —bajo el dominio del arte pop como gran plano de referencia— establecieron los basamentos de una “música joven” diferente. El pop dejó de ser así un mero acompañamiento para bailarines despreocupados. Como había sucedido con el jazz dos décadas antes, ahora el pop aspiraba a ser considerado una música “para ser escuchada” al margen de las industrias del entretenimiento. Al *boom* de lectores de la primera mitad de los '60 se le sumaba un *boom* de oyentes.

Es cierto que las primeras presentaciones de Tanguito, Los Gatos, Moris, Almendra, Manal y Los Abuelos de la Nada se dieron en el marco general —e indeterminado— del *beat* argentino: cabellos largos, guitarras eléctricas, una cancionística de corte “generacional”, camisetas estampadas e invitación al baile “suelto”, tras los efectos del temprano twist. Pero pronto se vio que no todo era lo mismo.

El año 1966 fue una fecha clave para la cosmogonía del rock nacional. Ese año, Moris cantó: “*Rebelde me llama la gente,/ rebelde es mi corazón,/ soy libre y quieren hacerme/ esclavo de una tradición*”. Los primeros rockers nacionales, que ve-



Los Gatos.

nían reuniéndose en La Cueva, se trasladaron a la Perla de Once, el lugar de la fundación mítica del rock nacional. Un año después, Los Gatos, liderados por Litto Nebbia, grabaron *La balsa*, con la nada despreciable venta de 200 mil unidades, y unos alumnos del Instituto San Román deslumbrados por las canciones de Lennon-McCartney decidieron llamarse Almendra.

La irrupción del rock nacional (primero *beat*, más tarde pop y, ya consolidado como movimiento, simplemente rock) produjo una doble tensión. Por un lado, la mirada paterna se enturbió: aquello no era sólo música, iba más allá de la fiesta de 15 y el “asalto” del sábado a la tarde. Los chicos ya no se conformaban con encerrarse en sus habitaciones con el Winco: ahora querían asistir a recitales en sitios dudosos, fumar marihuana y otras yerbas clandestinas y mantener noviazgos más liberales, impensables en tiempos de “típica y jazz”. Pero también comenzó a instalarse una disidencia más sutil entre el joven comprometido con la política y el joven “pelilargo” del

rock. Esta bipolaridad que escindió a la juventud argentina se prolongó a comienzo de los '70, para desaparecer durante el período 1976-1983, cuando la represión no hizo mayores diferencias entre “hippies drogadictos” y “subversivos marxistas”.

Mucho antes de esa dramática unificación, hubo intentos de reunión y síntesis, como el sello Mandioca, de Jorge Álvarez. El activo editor se volcó al rock nacional, o a cierta línea dentro del género: el trío Manal desarrolló una síntesis interesante entre el blues urbano y cierto realismo ciudadano que los hacía —al menos en teoría— más presentables ante los autores de la editorial. Pero la empresa tuvo vida corta. Para los escritores del “pensamiento nacional”, la retórica sonora y visual del rock no podía ser valorada en otro contexto que no fuera el de la lucha contra el imperialismo. Y en ese contexto, el rock perdía. La incompatibilidad ideológica entre el nuevo nacionalismo popular (alentado por autores como Arturo Jauretche y Juan José Hernández Arregui) y sus matices de izquierda, por

Del jazz al rock

“Yo llegué a La Cueva cuando todavía había jazz. Estaba Bernardo Baraj... y cuando terminó estaba Litto Nebbia. Para llegar a eso hubo que pasar por toda una etapa intermedia. La Cueva era todavía un refugio para jazzeros y tocaban grupos que podían ser de rock pero que estaban imitando una onda extranjera. Estaba la semilla de una cosa, pero predominaba el jazz. Y de golpe vino una generación más joven. Al principio iban viejos, no futuros rockeros. Después, al final, tocaban Los Gatos, Tanguito... después de Los Beatniks. Un día apareció Moris, que venía de Villa Gesell, del Juan Sebastián Bar, con Los Beatniks... Y allí se hizo la presentación. Yo leí unas poesías, ellos hicieron un espectáculo que se le había ocurrido a Moris. Era como una fiesta, venía toda la gente y los periodistas, los de la noche de Buenos Aires. Aquello no era reviente, sino naufragar en la noche. Así fue como La Cueva inició otra etapa, con los cantos de protesta, con las idas a dormir a la Perla del Once y para mí fue justamente allí, en La Perla, donde comenzó todo.”

Fuente: Pipo Lernoud, en Miguel Grinberg, *La música progresiva argentina. Cómo vino la mano*, Buenos Aires, Convergencia, 1977.

un lado, y la contracultura, por el otro, fue una realidad de la segunda mitad de los '60 y comienzos de la década siguiente. Los escritores "nacionales y populares" no podían menos que simpatizar con el movimiento folclórico, que por entonces gozaba de gran popularidad tanto en las provincias como en la ciudad de Buenos Aires. Eran los años de la primera Mercedes Sosa, del surgimiento de Horacio Guarany y del Festival de Cosquín, mientras autores y compositores combinaban el nativismo romántico con cierta impronta político-social. Evidentemente, no era ése el lenguaje del rock.

¿Cómo era lo mejor de aquella "música joven" que crecía desde los espacios menos visibles de la vida musical argentina? ¿Qué escuchaban los jóvenes argentinos en las canciones del primer rock nacional? Sobre una estructura armónica y una concepción formal muy refinadas, el pop de Almendra indagaba en la ruptura musical provocada por Los Beatles a partir del álbum *Revolver* y *Sergeant Pepper's*, sin temerle a la opción de ciertos timbres y elementos del ámbito folclórico y tanguero: el bandoneón de Rodolfo Mederos en *Laura va*, así como los arreglos camarísticos de Rodolfo Alchourron, sugerían una síntesis histórica de notable originalidad. Poco antes, Litto Nebbia había recurrido a una secuencia armónica de su admirado Antonio Carlos Jobim para su emblemático *La balsa* (cuya autoría fue compartida con Tanguito), mientras Moris hacía de puente entre la balada jazzística y la canción urbana y Manal plasmaba en el formato de trío la savia del blues moderno.

El rock aspiraba a ser algo más que un estilo musical: se postulaba, con más música



Mercedes Sosa, participante del Festival de Cosquín en 1966.

que manifiestos, como una vital *lingua franca* de los jóvenes. En el caso argentino, aquella postulación empezó a definirse con claridad y fuerza sólo cuando los músicos se animaron a escribir y a cantar “en castellano”. Después de una primera etapa de reconocimiento de un espacio musical propio determinado por el eje anglosajón (el pionero conjunto uruguayo Los Shakers se había hecho eco del impacto de Los Beatles, pero sin atreverse a abandonar el idioma “original” del movimiento), se hizo imperiosa la apropiación de una lengua que, de ahora en más, ya no quedaría restringida a los mundos del tango y el folclore.

Con el tiempo, el rock abriría la lengua a su propio argot, dando así cuenta de su identidad como subcultura dentro de la cultura argentina. Aunque cuestionado por los sectores más cerrados de la sociedad argentina, y siempre mal visto por los agentes del control social, algunos aspectos de esta auténtica contracultura serían finalmente aceptados por el resto de los argentinos (una prueba de ello es la inclusión del argot rockero en los diccionarios de lunfardo). No obstante, la integración definitiva sólo llegaría después de la guerra de las Malvinas.

Censura y represión

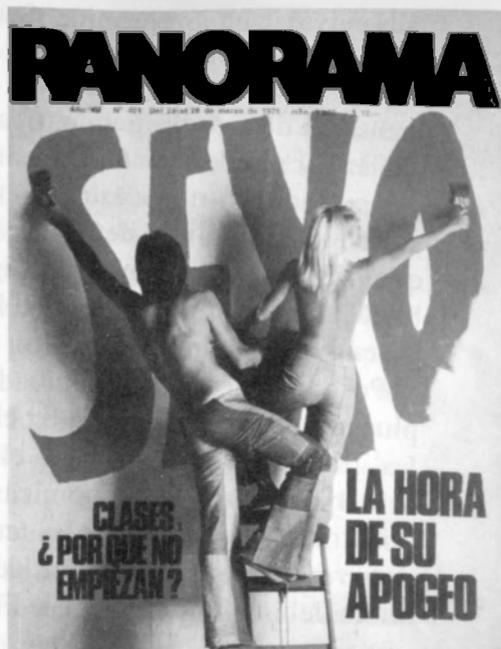
El viraje de la “inercia” a la “rebelión” se había producido en 1966, y no deja de llamar la atención de que la emergencia de una contracultura argentina haya coincidido con el golpe de Onganía y el comienzo de un período represivo. ¿Hubiesen sido muy diferentes los avatares de esta nueva expresión “joven” de no haber sido tan tormentoso el clima social y cultural? Sin pretender ensayar la interpretación contrafáctica, resulta evidente que el autoritarismo represivo de Onganía, alimentado por un moralismo de sesgo clerical, agudizó el carácter marginal de los “hippies argentinos”. Pero no sólo contra ellos se levantaron “el sistema” y el régimen imperante.

Desde los clientes exclusivos de la discoteca Mau Mau y otras *boîtes* hasta los novios sin recursos que vivían sus romances en la oscuridad de las plazas públicas, todos o casi todos los jóvenes estuvieron en la mira del comisario Margaride, el villano de la vida cotidiana argentina de los '60. Con más virulencia que antes, la censura amplió su radio de acción a la

vida privada de los argentinos.

En la lógica del censor, que no dudó en prohibir las funciones de la ópera *Bomarzo* en el Teatro Colón y cortar o directamente impedir la exhibición de una larga lista de filmes, la juventud pasó a ser una configuración sociocultural sospechosa. Para el gobierno, la juventud no era “sólo una palabra” (Bourdieu), ni un mero *actante* de discursos vagos. Eran los jóvenes los que atentaban contra la “sexualidad íntima, nuestra, no perversa”. Eran los jóvenes los que alentaban modos de vida reñidos con la moral “occidental y cristiana”. Eran los jóvenes, al fin y al cabo, los principales provocadores: desde la novela *Nanina* de Germán García (“osada obra de lenguaje impúdico”) hasta la biografía del Che Guevara escrita por Hugo Gambini (quien ya no era tan joven en 1969), la censura buscó sus “perlas” culturales entre la producción “moderna” que más y mejor sintonizaba con el clima de ideas de los '60.

La política y el sexo eran las temáticas que más irritaban al poder, si bien no las únicas. Se le temía a la supuesta “infiltración marxista” —si bien aún no con los ribetes paranoicos posteriores al '76— y toda exhibición corporal que no aceptara los límites de la moral burguesa era considerada obscena, cuando no pornográfica. Pero había otros signos que también molestaban. La ambigüedad sexual y la moda unisex, así como el uso de drogas y la costumbre gregaria de acampar en plazas y avenidas o celebrar festivales de rock en salas de cine y teatros pequeños, eran las marcas *hippies* que debían ser erradicadas de alguna u otra manera. Un filme menor de aquellos años, *El extraño del pelo largo*, trataba justamente del rechazo que el cabello y los códigos indumentarios causaban en una sociedad



Panorama, marzo de 1975.

aún muy pacata y reprimida. Ser joven —y, sobre todo, asumir esta situación biológica con un auténtico sentido identitario— era riesgoso. Después del '66, las razias policiales se incrementaron de manera geométrica. En la historia del rock nacional, la escena “en la cárcel” es muy frecuente. Y en la historia del periodismo no faltan las entradas del rock en la sección policial: “La policía detiene a catorce extraños de pelo largo que pretendían asistir a un peligroso festival de rock”. Lo publicaba *Crónica* hacia fines de los '60, pero ya era una muletilla en otros medios también.

Por cierto, las actividades del Instituto Di Tella fueron el plus ultra de la inmoralidad y el descaro. Aunque sus principales gestores asegurarían que el cierre de los centros artísticos se debió a razones económicas, es innegable que el hostigamiento de Onganía sobre las tendencias artísticas de signo moderno fue una presión difícil de soportar. Con la clausura definitiva del instituto de la calle Florida, un ciclo de la vida cultural argentina quedó atrás. Símbolo de una época, el Di Tella

había reunido el hálito de vanguardia y experimentación con las resonancias locales del pop, y sobre el final de su existencia esta conjunción se había profundizado con recitales de rock y las *Canciones de informalidad* de Schussheim, De la Vega y Monti. Este puente entre un arte de elite interesado en explorar otros medios y un arte popular capaz de incorporar procedimientos de la *alta cultura* representó en perfecta síntesis el espíritu de los '60 en la Argentina.

Pero no siempre la actividad generada por el Di Tella fue comprendida o aceptada por las ideologías político-culturales del país. El hecho de que se



Exposición en el Instituto Di Tella.

haya criticado al Di Tella con tanta fiereza desde la derecha así como desde la izquierda revelaba la fuerte tormenta ideológica en la que el país estaba entrando. Incluso el desplazamiento de algunos nombres destacados de la primera etapa de la calle Florida a una posición de mayor conciencia política (la obra colectiva *Tucumán arde*, de artistas porteños y rosarinos, fue el caso más claro de esa modulación) hablaba de una actitud crítica hacia la concepción que del arte y la realidad tenían los adalides del instituto. Ernesto Deira le diría a John King: “Felipe Noé y yo desconfiamos casi políticamente. Pensamos que el centro sirvió para ocultar y eventualmente retrasar un cierto desarrollo autónomo. El que no hacía la última moda no era artista. El centro era tan poderoso y atrayente que pautaba lo que era el arte”.

En un momento especial en las relaciones entre gremialismo y gobierno, con un clima social cada vez más candente (pronto llegaría el Cordobazo), muchos vieron en el experimentalismo del Di Tella y su sistema de consagración artística una mera distracción ante la realidad del país. Ser *moderno* a comienzos de los '60 había sido algo bueno, pero ya no lo era tanto a fines de la década. La voluntad revolucionaria no tenía mucho sentido del humor.

La cultura de los jóvenes no sería indiferente al clima político que se anunciaba: al ideario modernizador de la década se le iba a sumar el imperativo revolucionario, todo en el marco de un régimen militar que no por estar descomponiéndose dejaba de ofrecer muestras de autoritarismo. Y la violencia *foquista* haría el resto. Si en términos de historia política el secuestro y posterior asesinato de Aramburu marcaría un punto de inflexión, la realidad cultural se desplazaría a gran velocidad de un tiempo estético a un tiempo político. El fin de la inocencia ya estaba inscripto en ciertos gestos culturales de finales de los '60.

BAJO EL SIGNO DE LA POLÍTICA (1973-1976)

Euforia y utopía

En tiempos de Onganía, las persecuciones a los *modernos* y a la contracultura se materializaron en razias y detenciones arbitrarias, con esas largas trasnoches en la seccional más próxima. También la venda anacrónica que cubría los ojos de los consumidores culturales fue un rasgo característico del régimen. Si por un lado los argentinos parecían más abiertos al mundo que en ningún otro momento de su historia, la mojigatería de su gobierno pretendía situarlos en un estadio remoto de la vida civil y cultural. Como ha señalado Alberto Ciria, la censura de aquellos años es la punta del ovillo para entender las contradicciones y aparentes paradojas de la segunda mitad de los '60. Y quizá también para entender lo que vino después.

La transición militar hacia el retorno de Perón fue menos estricta en sus controles sobre la cultura de los jóvenes, y el emblemático y efímero '73 pareció ser el fin de la vieja Argentina represiva. Si hubo un año de expectativas juveniles, ése fue 1973. Expectativas en lo político, antes que nada, pero con algunos datos positivos en la actividad cultural. Ese año se estrenó, finalmente, *La hora de los hornos*, filme político de Fernando "Pino" Solanas que había invernado un lustro después de haber sido declarado "de exhibición prohibida" en 1969. Mientras, en las calles de Buenos Aires, las pinturas de inspiración muralista de Ricardo Carpani glorificaban los sectores populares y el arte en su conjunto se volvía político y comprometido.

El periodismo independiente cobró un vuelo inusitado, con el diario *La Opinión* en su mejor momento y la revista *Satiricón* haciendo humor punzante con la realidad social y política. *Satiricón* retomaba la senda trunca de *Tía Vicenta*, aunque desde una mirada más transgresora: sexo y política, los grandes tabúes de la Argentina posterior al '55, eran los temas dilectos de la publicación. En sus páginas se daban cruces un tanto insólitos (*insolencia* era la palabra) y provocativos cambios de roles. Por ejemplo, convivían el escritor Rodolfo Walsh (entrevistado) con el boxeador Ringo Bonavena (colaborador), y los más calientes fotogramas de Isabel Sarli esta-



La Opinión

DIARIO INDEPENDIENTE DE LA MARANA

Servicios noticiosos de Reuter-Latin, AFP, ANSA, EFE, DPA, IPS, Télam y corresponsales exclusivos

Año II N° 568 — Martes 13 de marzo de 1973 — \$ 1,00

Director: Jacobo Timerman



Lanusse dijo que la decisión popular será respetada y Balbin felicitó a la fórmula triunfante

Los candidatos del Frejuli. Héctor José Cámpora y Vicente Solano Lima, resultaron electos presidente y vicepresidente de la República

El veredicto popular será respetado, anunció anoche el presidente Alejandro Agustín Lanusse, al confirmar que según las cifras disponibles en el momento de su mensaje, las 22.15 había triunfado la fórmula del Frente Justicialista de Liberación. Los doctores Héctor J. Cámpora y Vicente Solano Lima se impresionaron con un porcentaje que sorprendió a la mayoría de los observadores políticos.

Con el discurso presidencial (ver página 24) quedaba cerrada la etapa de institucionalización que tuvo, en la jornada del domingo 11, un vistoso carácter de fiesta cívica por la cantidad de votantes que acudieron a las urnas y el escaso porcentaje de sufragios en blanco, uno de los menores que registra la historia política nacional.

La fórmula presidencial del FREJULI se impuso en todos los distritos del país, y en Capital Federal. — Írre a tradicionalmente difícil para esa parcialidad — obtuvo cómputos irreversibles. Las primeras especulaciones adjudicaban

ban catorce diputados por el ámbito metropolitanopolitano a la coalición justicialista.

En el resto del país, el 70 por ciento de las provincias tendrán que votar de nuevo, en el plazo no mayor de treinta días, porque los candidatos no lograron la mayoría que exige la ley. Por lo tanto, esos distritos serán sometidos al régimen de "ballotaje".

Los radicales, cuya elección resultó insatisfactoria para las expectativas de sus correligionarios, no consiguieron superar los porcentajes de su propio electorado, quedando muy retrasados respecto del binomio triunfador. Este fue justamente uno de los elementos citados por el jefe del Estado para determinar al "virtual triunfo" de Cámpora-Lima. El flamante presidente electo, a las 22.30, dio lectura ante la prensa y el grupo de partidarios reunido en la sede central del FREJULI del mensaje enviado por el líder de ese movimiento, Juan Domingo Perón, desde su actual residencia en la ciudad de España.

Reunión del general Betti con dos delegados del doctor Cámpora

En la tarde de ayer, los doctores Benito Llambí y Eduardo Paz concurren en nombre del Frente Justicialista de Liberación a la sede del Comando en Jefe del Ejército para reclamar por la lealtad del escrutinio.

Una gestión similar había sido realizada por ambos políticos en el mismo edificio, en la madrugada del lunes, al lanzarse la expectativa pública y la inquietud del comando peronista por dicha demora.

Al hacerse presente por segunda vez, Llambí y Paz solicitaron una audiencia con el jefe del Estado Mayor General del Ejército y comandante electoral general de división Alcides López Aufranc.

Por no recibidos, en cambio, por el jefe V (Política), general de brigada Luis A. Betti, acompañado por sus colaboradores más inmediatos.

Los delegados del Frente plantearon su inquietud por el tema del escrutinio y llevaron las cifras computadas en la sede central del FREJULI, para coexistir con la evaluación militar.

El general Betti expuso los motivos de la demora, que se dieron a conocer oficialmente, expresando que en modo alguno se debía a ninguna intención de obstaculizar el cumplimiento de los resultados del comicio ni alterar la evaluación militar.

A esta altura ya existía en el ámbito militar y gubernamental una apreciación completa del escrutinio previsto, restando sólo algunas etapas.

De acuerdo a ello, el Frente Justicialista habría obtenido el 49.07 por ciento de los votos para la elección presidencial y una proporción que oscilaba entre el 35 por ciento de la mayoría de las provincias.

Mensaje de Juan Domingo Perón

Desde la máxima mesa presidencial de un sufragio democrático, y en la oportunidad del Justicialismo a evitar conflictos, muy afortunadamente, mientras el doctor Héctor Cámpora formaba una fórmula capital verna exportaciones en tal sentido, a través de los medios de difusión, el propio Juan Domingo Perón, en su mensaje de institución al candidato presidencial del Frente, como iba a reponer violencia y retórica pasional, para entrar a la reconstrucción nacional.

El texto completo del mensaje es el siguiente:

"El pueblo argentino ha emprendido a su destino, y de acuerdo con las informaciones recibidas desde la sede del Movimiento Nacional Justicialista veo que lo ha hecho con toda plenitud de conciencia.

"La labor desarrollada por los computadores peronistas, merece el mayor de mis elogios y mi profunda satisfacción al comprobar que ante una situación delicada como la presente, han sabido comportarse a la altura de las circunstancias.

"El futuro de la patria depende de la única meta para todos los ciudadanos del país, enfocando todas nuestras energías en la urgente reconstrucción nacional y en tratar de eliminar, lo más rápidamente

posible, la necesidad de los sectores más humildes.

"No es solamente cuando llegan las elecciones y cuando son los recuentos de los votos en las urnas cuando hay que acercarse al pueblo, sino que en todo momento debe estar presente en el ánimo de nuestros gobernantes, un espíritu de comprensión y solidaridad para con nosotros que conforman el basamento de nuestra nacionalidad.

"Los integrantes del Frente Justicialista de Liberación, están plenamente identificados con el espíritu cristiano de nuestra doctrina justicialista, en la cual los derechos humanos tienen especial predilección, por encima de los intereses y de las pasiones personales.

"El ser humano considerado como ente individual, por la sola expresión de su vivencia como raza, tiene expresado en la dignidad de su propio existir, toda la potencialidad del espíritu divino demostrado en su forma humana. No podemos entonces, los demás hombres, por muy poderosos que pudiéramos sentirnos o por contar con el predominio de la fuerza irracional, convertirnos en amo omnipotentes de las demás expresiones humanas.

"Por ello, es que quiero dirigirme, en esta ocasión a electores y a elegidos, a par-

tidarios y a los adversarios, con el fin de convocarlos a todos para la realización de una labor conjunta, constructiva y solidaria, cuyo resultado será satisfactorio y beneficioso para todos por así en la medida que se actúan con grandeza y bondad.

"Del pasado, solamente debemos tomar la experiencia que tan duramente se ha impuesto en nuestros espíritus. Y para el futuro, contemos con la esperanza de progreso y felicidad que podamos garantizar con las obras fructíferas que realicemos en este presente.

"Todos los argentinos por igual, tenemos una tarea común que cumplir y debemos llevarla a cabo con verdadero espíritu patriótico, para no tener que avergonzarnos en el futuro ante nuestros descendientes.

"Los adversarios políticos del presente, deben convertirse en los mentores y realizadores del porvenir, porque tenemos una causa común y esta causa se llama... la patria.

"Y en esta alborada de liberación, voy a abrazar cordialmente a todos los argentinos y mi agradecimiento a quienes, pese a todas las dificultades existentes, supieron mantenerse unidos y fieles al ideal que ha impulsado toda mi vida."

Cómputos oficiales faltando 950 mesas sobre un total de 55.452

CAMPORA-SOLANO LIMA (Frente Justicialista de Liberación)	5.982.100	(49 %)
BALBIN GAMOND (Unión Cívica Radical)	2.584.257	(21,5 %)
MARRIQUE-MARTINEZ RAYMONDA (Alianza P. Federalista)	1.797.139	(14,7 %)
ALLENDE-SUELDO (Alianza Popular Revolucionaria)	869.975	(7,13 %)
MARTINEZ BRAVO (Alianza Republicana Federal)	332.557	(2,72 %)
MARTINEZ ONDARIS (Nueva Fuerza)	255.741	(2,09 %)
GHIGLI BALESTRA (Socialista Democrático)	112.273	(0,92 %)
CORRAL SCIAPPONE (Socialista de los Trabajadores)	76.555	(0,62 %)
RATTO SILVETTI (Frente de Izquierda Popular)	61.747	(0,50 %)

EN BLANCO 124.978, ANULADOS 43.551 RECURRIDOS: 34.386
Total mesas: 55.452 faltando 950

Tapa de La Opinión, 13-3-1973.

ban muy próximos a la exégesis del filme prohibido de Bernardo Bertolucci.

En realidad, todos los viejos y nuevos tabúes eran sometidos ahora a una despiadada crítica. Y esta crítica —que en *Satiricón* llegaba con la inteligente complicidad del humor— muchas veces derivaba de un paradigma que se suponía infalible: el análisis ideológico. Por entonces, dos periodistas del *staff* de *Satiricón*, Carlos Ulanovsky y Sylvina Walger, indagaban en el libro *TV Guía negra* acerca del mundo de la televisión. Lo hacían desde la metodología más citada en aquellos años: la sospecha ideológica. “La TV no solamente es un negocio, y un lucrativo negocio, sino que además es un poderoso aparato ideológico destinado a no permitir la menor fisura dentro del conjunto de normas y valores que rigen el orden social capitalista. Desde este punto de vista, la TV funciona como un hábil mantenedor del statu quo, que refuerza lo establecido mediante una programación mediocre cuya propuesta vital supone modelos de conducta que se erigen como los únicos aceptables y, por lo tanto, posibles.”

La aurora del '73 tenía un peligroso reverso, un fondo negro que, retrospectivamente, hoy se puede ver en términos dramáticos. La espiral de violencia empañaba la vida cultural de diversos modos, a la vez que derramaba adrenalina sobre los actores culturales. Se estaba generando un doble efecto de excitación y temor entre los jóvenes. En mayo de ese año, bombas incendiarias destruyeron la sala del Teatro Argentino, donde se estaba representando *Jesucristo Superstar*. La ópera-rock venía recibiendo amenazas desde su primer día de ensayo y era considerada por ciertos grupos ultramontanos como parte de un oscuro movimiento anticristiano. También en el '73 un grupo comando quemó 25 mil ejemplares del libro *El marxismo*, de Henri Lefebvre, editado por Eudeba, y fue secuestrado por orden judicial el filme *El último tango en París*, de Bernardo Bertolucci. Los mensajes eran claros, aunque los medios turbios.

De ahí en más, violencia y censura corrieron parejas. Mientras el Ministerio de Defensa se opuso a la exhibición de *La Patagonia rebelde*, de Héctor Olivera, y Miguel Tato era designado interventor en el Ente de Calificación Cinematográfica, la Triple A empujaba al exilio a algunos de los jóvenes más

talentosos de los '60: Norman Briski, Héctor Alterio, Nacha Guevara... La lista se fue incrementado entre el '74 y el '76. En un clima de intimidación y violencia, el cruce entre política y cultura resultaba cada vez más conflictivo.

En las letras del rock nacional, con su ética de la no violencia, la intemperancia del tiempo político irrumpía como tema preocupante (*Violencia en el parque* de Aquelarre; *Muerte en la catedral* de Litto Nebbia). Ya nadie pensaba en las provocaciones del Di Tella. La Argentina pop había quedado atrás.

Dilemas de la contracultura

Como en la década anterior, la contracultura creció reñida con casi todo: con los gobiernos, con los medios, con la vida universitaria, con los militantes políticos. Sin embargo, los códigos del rock —situados en el corazón mismo de la contracultura— cobraron mayor fuerza y presencia después de la epifanía de los '60. La “música joven” argentina ya no era un sarpuellido adolescente; ya no necesitaba tomar distancia de otras manifestaciones del ser joven, porque nadie podía confundir la música *progresiva* con la “complaciente”, como se empezó a denominar, desde el campo del *underground*, todo aquello que estaba o parecía estar manipulado por el mercado.

No obstante esta relación siempre tensa con el consumismo, la contracultura creció no sólo por la consolidación de una identidad y un tipo de relación particular con su público (directa, artesanal, de boca en boca, ritualista), sino también porque logró desplegar una determinada estrategia frente a las industrias culturales. Después de la etapa embrionaria de los '60, hubo más revistas, más libros y folletos, más afiches en la calle y, sobre todo, más discos. La cultura material de los jóvenes díscolos se volvió más voluminosa, más variada, más sólida.

De las guitarras eléctricas y los cancioneros para principiantes (con los infaltables acordes o tonos para guitarra sobre los versos) a ediciones limitadas de poesía *under*, la contracultura fue expandiéndose a partir de una red que, sin salir de cierta marginalidad, creció notablemente en los ámbitos urbanos. Se multiplicaron los eventos del *under*, desde los primeros festivales (B.A. Rock, Pinap, etc.) hasta las funciones de traspasnoche

del cine rockero (la proyección de *Woodstock* en un cine porteño se ritualizó como cita de honor durante años). Si bien la masividad del movimiento sólo se consolidaría en tiempos de la dictadura militar (60 mil personas en un recital en la Rural en 1980), ya entre fines de los '60 y comienzos de los '70 el recital y otras formas de participación fueron reconocidos en la trama urbana como señales emblemáticas de una contracultura que se recreaba permanentemente.

También la prensa cumplió su papel. Las revistas de la cultura joven, de la pionera *Pelo* a las nuevas *Mordisco* y ya en 1976 *Expreso Imaginario*, traducían la información del rock mundial —básicamente anglosajón— y la combinaban con notas locales, a la vez que introducían otros temas en la agenda joven. Estos medios ya no eran meros *fanzines* para adolescentes frenéticos: aspiraban a comunicar una amplia gama de temas, todos ellos articulados en torno a un concepto de contracultura o cultura alternativa.

¿Cómo se leía la cultura desde el rock? Así como Spinetta rescataba la obra de Artaud en un disco célebre, la prensa alternativa hacía otro tanto con los dibujos de Escher y Topor, el jazz de John Coltrane y Miles Davis, el cine de Bertolucci y Godard, la literatura de Alfred Jarry... y la ciencia ficción, relanzada en todo el mundo con *2001. Odisea del espacio*, el filme de Stanley Kubrick de 1971. En sincronía, las ediciones de Minotauro de los principales autores del género (Bradbury, Sturgeon, Dick) alimentaban la cultura literaria de miles de jóvenes y adolescentes que encontraban en esos textos ciertos elementos afines a la iconografía del rock *sinfónico* y *progresivo*.

Liberación y sonido

El almacenamiento de los nuevos sonidos fue la clave de aquella cultura de los márgenes: el sonido era, al fin y al cabo, más importante que la palabra escrita, ya que la oralidad se impuso sobre la escritura. A comienzos de los '70 se empezó a grabar con mayor frecuencia aquello que se consideraba auténtico rock (paradójicamente, en un momento de crisis mundial del petróleo y sus derivados). Desde 1972, conjuntos como Aquelarre y Pescado Rabioso (formados con los ex integrantes

de Almendra) desarrollaron una versión rioplatense del rock progresivo. Sui Generis, dúo acústico de impronta folk e impacto masivo, supo volcar en sus canciones escritas por Charly García los temores y las expectativas de los adolescentes, y su breve vida (1972-1975) cobraría retrospectivamente el significado de una triste despedida.

Uno de los músicos más creativos del período, Litto Nebbia, atravesó una etapa de exploración en el folclore argentino y latinoamericano, sin desdeñar la influencia del jazz y del tango moderno. En ese sentido, su disco *Melopea* (1974) cruzó con originalidad las principales cuestiones del momento musical. Más tarde surgirían diversos proyectos, algunos de una factura técnico-instrumental de gran calidad: Alas, Crucis, Alma y Vida... La música progresiva argentina se hizo más musical y comenzó a convocar a músicos que, en muchos casos, habían pasado por el conservatorio y la educación formal. Si los pioneros habían sido, en líneas generales, artistas intuitivos capaces de descubrir la música a medida que la realizaban, un pianista y compositor como Charly García provenía de las clases particulares de piano y llegaba al rock después de una iniciación clásica.

En un contexto musical fuertemente influenciado por la política y la cultura latinoamericanas, en el que la música de Los Jaivas (radicados en la localidad de Zárate, después del golpe de Pinochet) y las canciones de Violeta Parra eran tan populares como los brasileños Elis Regina, Vinicius de Moraes y Toquinho, la música *progresiva* argentina reformuló su identidad. Tal vez el primer proyecto de fusionar el rock con la música latinoamericana haya sido el de Arco Iris y su líder Gustavo Santaolalla. Fue entonces que una parte del rock *progresivo* reconoció en el horizonte cultural de Latinoamérica una posibilidad antes negada o de difícil realización: el postergado encuentro entre una cultura joven atenta al mundo y un “destino continental” apuntalado por el discurso de la liberación nacional y la lucha contra el imperialismo.

Liberación era la palabra clave. ¿Acaso no se llamaba Cine de Liberación el grupo de realizadores más transgresores del momento? Liberación suponía no sólo la emancipación económica y la resistencia política, sino también la utopía del mundo artístico y musical. La lucha de muchos rockeros —y de músicos de otros géneros— contra el *sistema* se daba en varios



Charly García, Nito Mestre, Juan Rodríguez, integrantes de Sui Generis junto con otras personas, 1974.

frentes. El discurso de una música independiente se dirigía contra las instituciones de la producción cultural: sociedad autoral, empresas discográficas, medios (principalmente los audiovisuales) que sólo difundían “música comercial”. Así se fue consolidando una moral de la contracultura: lo auténtico, lo verdadero, no pasaba por los medios masivos de comunicación. Lo auténtico era, por definición, alternativo. Quienes entraban en el *sistema*, “transaban”, acordaban una negociación siempre sospechosa. El pecado fáustico de la ideología del rock nacional era aceptar las reglas del mercado. No fue posible, sin embargo, resolver algunas contradicciones, como el hecho de que los principales discos de la época fueran editados en los dos o tres grandes sellos discográficos, sin que se pudiera lograr una producción independiente sólida y coherente.

La vieja tensión entre un arte comprometido y un arte exqui-

sito también llegaría, finalmente, al campo del rock y la contracultura. Las declaraciones de Litto Nebbia a la revista *Mordisco*, en 1974, presentaban con claridad los ejes de la discusión político-cultural de aquel tiempo. Nebbia no sólo defendía una música popular con *mensaje* (otra palabrita clave), sino que planteaba la necesidad de una revolución más profunda y a la vez cotidiana: nuevas reglas de juego entre músico y sociedad. “Si bien por un lado se ha elevado el nivel de cualquier grupo que aparece (un conjunto de reciente formación suena mucho mejor que años atrás), hay artistas que ofrecen una obra que podríamos llamar liberadora, porque además de los esfuerzos por dar artísticamente lo mejor que pueden a su público, tratan de terminar con los roles esquemáticos que son músico-ídolo vs. público-tonto. También están los que ofrecen un producto exclusivamente estetizante. Esta conducta no me parece que sirva a las nuevas generaciones que mucho más que las anteriores sufren la soledad inexorable que el mundo les presenta.”

No obstante las claras señales de acercamiento entre el deber político y el deber estético, los rituales de la contracultura y la praxis política siguieron sus respectivos caminos. La música que mayoritariamente escuchaban los centauros en rebeldía seguía viniendo de Inglaterra y los Estados Unidos. Aunque Spinetta apelara a un bandoneón para algún disco de Invisible o Santaolalla pensara en el pasado incaico y en la rítmica del Noroeste argentino, tanto el público como la crítica del rock llenaban sus oídos con rock sinfónico y otras vanguardias juveniles provenientes del eje cultural anglosajón.

Mal visto por casi todos, el rock nacional y su marco de referencia, la contracultura, sólo ganarían el respecto del pensamiento progresista mucho más tarde. Finalmente, cuando a partir de 1983 se empezó a trabajar en el triste inventario de los “años de plomo”, el rock nacional fue percibido con otros ojos, con otros oídos. Su redención social llegó en un momento de inflexión dramático, aún no del todo comprendido.

BIBLIOGRAFÍA

Ábalos, Ezequiel, *Historias del rock de acá. Primera generación*, Buenos Aires, Editorial AC, 1996.

Aguilar, Gonzalo, "Televisión y vida privada", en Devoto, Fernando, y Madero, Marta, *Historia de la vida privada en la Argentina. Tomo 3. La Argentina entre multitudes y soledades. De los años treinta a la actualidad*, Buenos Aires, Taurus, 1999.

Avellaneda, Andrés, *Censura, autoritarismo y cultura. Argentina 1960-1983*, Buenos Aires, CEAL, 1986.

Caron, Jean-Claude; Fabre, Daniel, y otros, *Historia de los jóvenes. II. La edad contemporánea*, Madrid, Taurus, 1996.

Castrillón, Ernesto, "Hippies a la criolla. Historia de la Cofradía de la Flor Solar", *Todo es Historia*, en Buenos Aires, mayo de 1998.

Ciria, Alberto, *Treinta años de política y cultura. Recuerdos y ensayos*, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1990.

Couselo, Jorge M., y otros, *Historia del cine argentino*, Buenos Aires, CEAL, 1984.

Criado, Enrique Martín, *Producir la juventud*, Madrid, Istmo, 1998.

Eco, Umberto, *Apocalípticos e integrados*, Barcelona, Lumen, 1968.

España, Claudio, y Manetti, Ricardo, "El cine argentino, una estética comunicacional: de la fractura a la síntesis", en Burucúa, José E., *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política*, Buenos Aires, Sudamericana, 1999.

Fernández Bitar, Marcelo, *Historia del rock en la Argentina*, Buenos Aires, Distal, 1993.

Frith, Simon, *Sociología del rock*, Madrid, Júcar, 1978.

Gibaja, Regina E., *El público de arte*, Buenos Aires, Eudeba-Instituto Di Tella, 1964.

Giberti, Eva, con Escardó, V.; Galende, L., e Invernizzi, H.: *Hijos del rock*, Buenos Aires, Losada, 1996.

Giunta, Andrea, "Las batallas de la vanguardia entre el peronismo y el desarrollismo", en Burucúa, José E., *op. cit.*

- Goldar, Ernesto, *Buenos Aires: vida cotidiana en la década del 50*, Buenos Aires, Plus Ultra, 1980.
- Grieco y Bavio, Alfredo, *Cómo fueron los '60*, Buenos Aires, Espasa Calpe, 1994.
- Grinberg, Miguel, *La música progresiva argentina. Cómo vino la mano*, Buenos Aires, Convergencia, 1977.
- King, John, *El Di Tella y el desarrollo cultural argentino en la década del sesenta*, Buenos Aires, Ediciones de Arte Gaglianone, 1985.
- Kostelanetz, Richard, *USA: ¿una revolución cultural?*, Buenos Aires, Rodolfo Alonso Editor, 1972.
- Kreimer, Juan Carlos, *Beatles & Co*, Buenos Aires, Galerna, 1968.
- , *¡¡¡Agarrate!!! Testimonio de la música joven en la Argentina*, Buenos Aires, Galerna, 1970.
- Longoni, Ana, y Mestman, Mariano, *Del Di Tella a Tucumán arde. Vanguardia artística y política en el '68 argentino*, Buenos Aires, El Cielo por Asalto, 2000.
- Margulis, Mario (ed.), *La juventud es más que una palabra. Ensayos sobre cultura y juventud*, Buenos Aires, Biblos, 1996.
- Marzullo, Osvaldo, y Muñoz, Pancho, *El rock en la Argentina*, Buenos Aires, Galerna, 1986.
- Masotta, Oscar, *La historieta en el mundo moderno*, Buenos Aires, Paidós, 1970.
- Muraro, Heriberto, *El poder de los medios de comunicación de masas*, CEAL, Buenos Aires, 1971.
- Nebbia, Litto, *10 años después*, Buenos Aires, Ediciones del Pájaro y el Cañón, 1979.
- Roszak, Theodore, *El nacimiento de una contracultura*, Barcelona, Kairós, 1970.
- Sagastizábal, Leandro, "Eudeba, la lejanía del pasado reciente", en *Todo es Historia*, Buenos Aires, octubre de 1990.
- Satas, Hugo R., "Los jóvenes en la historia del siglo XX", en Fingueret, Manuela, *Jóvenes en los '90. La imaginación lejos del poder*, Buenos Aires, Almagesto, 1993.

Schoo, Ernesto, "La nueva canción de los argentinos". en *Primera Plana*, Buenos Aires, 18/6/1968.

Sigal, Silvia. *Intelectuales y poder en la década del sesenta*, Buenos Aires, Puntosur, 1991.

Spinetto, Horacio, "Buenos Aires era un happening", en *Todo es Historia*, Buenos Aires, octubre de 1990.

Steimberg, Oscar, *Leyendo historietas*. Buenos Aires, Nueva Visión, 1977.

Terán, Oscar, *Nuestros años sesenta*, Buenos Aires, Puntosur, 1991.

Troncoso, Oscar, *Buenos Aires se divierte. La historia popular*, Buenos Aires, CEAL, 1971.

VV. AA., "Los '60. La cultura de la revolución", en *Tiempo Argentino*, Buenos Aires, 27/7/1986.

Walger, Sylvina, y Ulanovsky, Carlos. *TV Guía negra*, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1974.

Yonnet, Paul, *Juegos, modas y masas*, Barcelona, Gedisa, 1988.

VIII

*Protesta, rebelión y movilización:
de la resistencia a la lucha armada,
1955-1973*

por MÓNICA B. GORDILLO



Protesta, mayo de 1969.



La “Revolución Libertadora”, que derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón, pretendía terminar con una forma de hacer política y diseñar un nuevo modelo de “república posible” basada en la participación de los partidos que habían conformado la oposición al gobierno. Sin embargo, aunque se sostuviera la democracia en un sentido formal, los sucesivos gobiernos adolecerían de una ilegitimidad esencial que llevaría a los marginados del sistema a la utilización de canales extraparlamentarios y a la creación de nuevas redes por donde exteriorizar la protesta. Así, comenzaron a definirse prácticas sociales de acción directa al estar vedada para el partido mayoritario la mediación política.

Una situación de casi pleno empleo creó, a su vez, condiciones más favorables para el éxito de las reivindicaciones. A ello se sumaron, como factores de movilización, la frustración política en amplios sectores y la influencia de los diferentes movimientos de liberación nacional que surgían en el mundo en el contexto de la Guerra Fría. En este sentido, puede marcarse como

rasgo dominante de todo el período la permanente recurrencia a la acción colectiva y a la exteriorización de la protesta, que adquirió diferentes formas y contenidos según los momentos históricos específicos. Esas diferencias tienen que ver con los *marcos culturales* que en cada momento encuadraron las acciones, es decir, con las representaciones simbólicas y las interpretaciones colectivas acerca de los acontecimientos que condicionaron los modos de acción y llevaron a la utilización de distintos repertorios de confrontación, según los actores sociales involucrados y las oportunidades políticas abiertas para la exteriorización de la protesta.

Se pueden discriminar tres etapas dentro de este período en las que se observa una base común: la de la inestabilidad política y su imposibilidad de legitimar un modelo económico y social alternativo al del peronismo.

- 1) Desde 1956 a 1969 predominaron la resistencia y la protesta obreras que, sin embargo, fueron tomando diferentes formas y contenidos al mismo tiempo que se iban conformando nuevos actores provenientes fundamentalmente de los sectores juveniles.
- 2) Entre 1969 y fines de 1970 se produjo un momento explosivo. En ese corto lapso emergió lo acumulado en los años previos, estallando la rebelión popular y conformándose movimientos sociales de oposición al régimen que ensayaron nuevos repertorios de confrontación.
- 3) En el período que va de 1971 a 1973 se produjo el pasaje a la acción política, que adoptó diferentes formas y vías de expresión según los actores involucrados y las alternativas políticas que cada uno sostenía.

Sin embargo, es necesario destacar que en este capítulo no serán tratados todos los momentos con la misma profundidad, ya que el propósito principal es explicar el pasaje a la movilización y acción colectiva que tuvo lugar a fines de los '60 y comienzos de los '70, que adquirió la forma de rebeliones populares, movimientos contestatarios o movimientos políticos para la toma del poder, alternativas todas que se fueron conformando en el período anterior; de ahí la necesidad de reconstruir la génesis de lo que luego saldría abiertamente a la superficie.

El hilo que subyace este período es la mudanza de una cultura política de resistencia a otra de confrontación, donde se ensayaron diferentes alternativas caracterizadas por su intención de excluir/eliminar al adversario, en algunos casos simbólica y en otros hasta físicamente.

DE LA RESISTENCIA A LAS REBELIONES POPULARES

La “pura resistencia”: los “gorilas”, los “caños”, la revolución...

El gobierno militar que se instaló en 1955 quebrantó momentáneamente la estructura legal dentro de la cual habían venido funcionando las organizaciones sindicales, a la vez que intentó aniquilar todo vestigio de la ideología peronista tal como se puso de manifiesto con el decreto 3.855 de 1956, que disolvía el partido, inhabilitaba para ocupar cargos públicos a todos los dirigentes políticos y gremiales que los hubieran ejercido durante los gobiernos peronistas y prohibía el uso de todos los símbolos peronistas, incluidas las canciones, distintivos y consignas hasta el extremo de no nombrar a Perón o a Eva Perón de manera pública o privada.

Pero, contrariamente al efecto buscado, esto produjo un refuerzo de la identidad peronista alimentado por discursos y tácticas violentos que llamaban a resistir hasta que se hiciese efectivo el esperado y seguro retorno de Perón desde el exilio. Comenzó así un período de reconstitución de la identidad popular peronista en circunstancias muy diferentes de aquellas en las que se había consolidado, donde se puso en juego un intenso trabajo de representación, autorreconocimiento, clasificación y distinción frente a los valores que se intentaba imponer desde los sectores dominantes. En efecto, la idea del retorno sirvió como elemento aglutinante para la resistencia popular ya que, a partir de ella, se conformó el mito del “avión negro”, que era sostenido tanto por los partidarios como por los temerosos enemigos.

El imaginario del retorno servía, entonces, para justificar por parte del gobierno medidas extremadamente represivas

como el fusilamiento del general Valle y de otros seguidores el 9 de junio de 1956, acusados de preparar un golpe con el objetivo de traer a Perón de nuevo al poder. Al mismo tiempo, este imaginario sirvió para alentar diferentes prácticas violentas. Al comienzo, ellas estaban desorganizadas y eran llevadas a cabo por partidarios y bases políticas que se dieron una débil organización de comandos, generalmente barriales y sin mucha coordinación. Algunos trabajadores comenzaron también a participar de esas prácticas, a la vez que intentaban reestructurarse internamente y ganar a través de nuevos dirigentes los diferentes sindicatos.

De la resistencia individual o más espontánea que predominó en la primera mitad de 1956 se pasó a otros repertorios de confrontación como el de la preparación y colocación de bombas, los famosos “caños”, que requerían mayor organización. Esta práctica se encuadraba dentro de un marco cultural típico de la resistencia que recomendaba la aniquilación del otro, del enemigo, pero de una manera solapada, encubierta.

Arturo Frondizi llegó al poder en 1958 con el apoyo del voto peronista tras haber “pactado” con Perón el levantamiento de la proscripción y el restablecimiento de la legislación laboral que había sido dejada sin efecto durante el gobierno de la Revolución Libertadora. La etapa que se inició con Frondizi fue entonces de gran expectativa. Pero, luego del apoyo inicial al cumplir éste su promesa de restablecer la legislación laboral peronista, comenzaron a vislumbrarse signos negativos que llevaron a desvanecer el optimismo de



Entrada del frigorífico Lisandro de la Torre el día de su ocupación por los obreros, enero de 1959.



Frigorífico Lisandro de la Torre ocupado por sus obreros, 19-1-1959.

los trabajadores y a restablecer algunas prácticas de la etapa anterior, aunque ahora organizadas con mayor participación obrera al haberse reconstituido los sindicatos.

Un ejemplo importante de la acción obrera/sindical en esta etapa fue la huelga y ocupación del Frigorífico Nacional Lisandro de la Torre en enero de 1959. La operación militar de desalojo por dos mil soldados y cuatro tanques dio un saldo de 95 obreros detenidos, varios heridos y cinco mil cesantes. En el barrio de Mataderos la lucha se prolongó por varios días. Ante la continuación del conflicto los sindicatos y organizaciones gremiales peronistas como las 62 Organizaciones, que habían decretado un paro nacional, comenzaron a argumentar que se estaban creando las condiciones para un nuevo golpe y decidieron levantar el paro. Durante todo el gobierno de Frondizi se percibía esta tensión entre una combatividad obrera dirigida contra las medidas económicas y sociales del gobierno y el deseo de parte de las organizaciones sindicales de mantener las posiciones logradas. Al fin el sector mayoritario dentro del sindicalismo no estaba dispuesto a dejar de ser un

importante grupo de presión dentro del sistema establecido, un “factor de poder” con miras a recobrar el poder político cuando fuera oportuno.

Con relación a los marcos culturales que se conformaron en el período, puede considerarse que hacia fines de los '50 comenzaron a manifestarse los primeros indicios de una cultura contestataria que, nutrida de diferentes vertientes e imaginarios comunes, apostaba a la acción directa y adoptaba diversas formas según los actores y momentos específicos, hasta llegar luego en algunos sectores juveniles a posiciones insurreccionales. Una serie de factores se conjugaron para ello: la proscripción del peronismo, el exilio de Perón y la consiguiente inestabilidad del sistema político, la insatisfacción de los sectores intelectuales que habían apoyado la propuesta de Frondizi y luego se sintieron desilusionados. Hay que destacar también las influencias de los movimientos de liberación desarrollados en diferentes lugares del mundo, que tornaban posibles las salidas revolucionarias; la difusión del existencialismo, que encontró también amplia recepción con su “moral de las manos sucias”, y del compromiso en la acción, factores todos que llevaron a una reconsideración del peronismo y sus potencialidades.

A pesar de las profundas divisiones, la coyuntura nacional e internacional permitió a su vez afirmar con fuerza imaginarios comunes entre distintos sectores —tanto peronistas como no peronistas— que crearon los marcos para la acción. Un lugar común fue la aceptación de la necesidad del cambio de estructuras: se necesitaba modificar la estructura política, la frágil “democracia burguesa” que mantenía marginada a la fuerza política mayoritaria, contribuyendo con ello a perder confianza en el sistema democrático-representativo. También se puso énfasis sobre la necesidad de cambiar la estructura económica y social imponiendo un sistema donde los sectores populares participaran efectivamente en el gobierno. Esto encajaba directamente con otro imaginario común en la época, tanto de la izquierda como del nacionalismo de derecha, el de luchar contra el imperialismo personificado en los monopolios y en las grandes empresas extranjeras radicadas en el país, en especial a partir de 1955.

De este modo, afirmando un fuerte componente del peronis-

mo pero no exclusivo de él, en la década del 60 se afianzó el nacionalismo aunque con diferentes signos y objetivos según los sectores que lo sostuvieran, relacionado también con la idea de la “liberación nacional”. En efecto, en el discurso de distintos sectores se hacía referencia a ella, por lo general, con un doble sentido. Por un lado era la lucha contra el imperialismo, por una nación independiente encuadrada dentro de los países del Tercer Mundo, por una efectiva soberanía en sus relaciones con los demás países. Al mismo tiempo, implicaba la necesidad de afirmar el respeto y el bienestar de los sectores populares frente a los privilegiados, “los invasores y ocupantes internos”.

En el discurso peronista de la resistencia aparecen fuertes componentes de un lenguaje militarista que aludía permanentemente a la situación del país como la de un “territorio ocupado” y a los distintos gobiernos como representantes del “ejército de ocupación”. Entonces, la lucha contra esos gobiernos aparecía legitimada porque se estaba luchando por la patria y por liberarla de los invasores. De ahí el paso a la justificación de cualquier método de acción, incluida la vía armada, aparecía entre algunos sectores como un corolario lógico. Sin embargo, si bien la situación creada hacia fines de los '50 y comienzos de los '60 fue dibujando los primeros esbozos de esas alternativas, éstas —alentadas también como un efecto rebote de la Revolución Cubana— ocupaban todavía un lugar muy marginal.

Las divisiones planteadas dentro del peronismo se pusieron tempranamente en evidencia entre quienes querían mantener una línea de intransigencia y profundizar los contenidos revolucionarios y los que, una vez abierto el juego político con las elecciones de 1958, intentaron posicionarse dentro del sistema. Entre los primeros se destaca la línea de los “duros”, que reconocían el liderazgo de quien fue el primer delegado de Perón, John William Cooke. Después que Perón privilegió la táctica de apoyar a Frondizi, la importancia del sector más intransigente dentro del movimiento comenzó a declinar y con él también la figura de Cooke, a pesar de sus intentos por volver a recuperar protagonismo en la toma del frigorífico Lisandro de la Torre tratando de darle a ésta el carácter de huelga general insurreccional.



Juan Domingo Perón con John W. Cooke en la República Dominicana.

Una vez fracasadas y endurecidas las relaciones con el gobierno, Cooke alentó y participó en el primer intento de acción alternativa, el de la guerrilla rural peronista dirigida por el comandante Usturunco en Tucumán, entre septiembre de 1959 y enero de 1960. A mediados de ese año se había descubierto también otra célula guerrillera en la zona boscosa del límite con Catamarca, con un saldo de seis detenidos del autotitulado “Ejército de Liberación Nacional”, que pa-

recía tener conexiones importantes con Cuba. Estas agrupaciones, aunque minúsculas todavía, harían apariciones esporádicas en este período, marcando la temprana utilización de la táctica de la lucha armada para canalizar la insatisfacción de algunos sectores que, posteriormente, tomaría otras dimensiones.

La experiencia de la Revolución Cubana impactó también de lleno en el seno de la intelectualidad y de la izquierda no peronista. En ese sentido, el nacionalismo comenzó también a constituir un componente muy fuerte de la “nueva izquierda”, caracterizada por el alejamiento progresivo del marxismo ortodoxo como consecuencia de los profundos debates ideológicos generados por el enfrentamiento ruso-chino. Así, en líneas generales, las distintas agrupaciones de izquierda fueron definiéndose en torno a dos grandes ejes o líneas: la del Partido Comunista, que continuaba fiel a la Unión Soviética y había optado por la “vía pacífica al comunismo”, y la otra, que veía con simpatía los modelos cubano y chino y escogía la vía de la revolución como medio para llegar al poder.

Esa revolución —que según el modelo cubano— debía ser

continental y socialista sólo podía llevarse a cabo a través de la lucha armada, tema que se convirtió en el punto medular del enfrentamiento de Cuba con las organizaciones comunistas latinoamericanas y también con la Unión Soviética. A su vez, la alianza entre los intelectuales y los sectores campesinos era el supuesto básico de la teoría del “foco”, táctica que intentó Ernesto “Che” Guevara en Bolivia, por considerar que era el campesinado rural y no la clase obrera urbana el sector de la sociedad con mayor potencial revolucionario. Estos planteos, que atacaban frontalmente la ortodoxia marxista, intentaron tener en la Argentina una aplicación práctica cuando, con intervención del servicio de inteligencia cubana, se organizó en 1962 el foco de Salta dirigido por Ricardo Massetti, que pronto fue descubierto y desarmado. Fue así que luego de 1959 comenzaron a proliferar infinidad de agrupaciones constituidas fundamentalmente por jóvenes que trataban de fijar posiciones coherentes con los cambios que a nivel mundial y nacional se estaban operando.

En 1963 una nueva etapa se abrió en el país. Los militares,



Incendio de ómnibus en Pavón y Matheu, 1963.

después de derrocar a Frondizi en 1962 e instalar el gobierno interino de Guido, habían acordado la salida electoral aunque manteniendo la proscripción del partido peronista para las elecciones presidenciales y de gobernadores, lo que hizo posible el triunfo de la fórmula compuesta por Arturo Illia-Carlos Perette de la Unión Cívica Radical del Pueblo y con ello también se modificaría la estructura de las oportunidades políticas para la manifestación de la protesta.

El movimiento obrero como factor de poder

En efecto, la legitimidad de un gobierno que no representaba la voluntad mayoritaria, pues los votos en blanco en la elección presidencial de 1963 superaron las cifras alcanzadas por el partido triunfante, aparecía claramente cuestionada y creaba la necesidad por parte del gobierno de atraer al movimiento obrero con el fin de hacer posibles la recuperación y la estabilidad económica tras la crisis desatada el año anterior. Esto implicaba aceptar la apertura de ciertos canales por donde se pudieran expresar las reivindicaciones de un movimiento obrero que ya había recuperado su estructura sindical y los mecanismos de negociación colectiva. Pero, a su vez, la misma debilidad del gobierno y la cuestión pendiente de la proscripción del peronismo llevaron al movimiento obrero a buscar y encontrar fácilmente aliados influyentes para hacer efectivas sus demandas. Esa situación lo convirtió en un verdadero factor de poder, en protagonista principal y en la “columna vertebral” del movimiento peronista, eclipsando al ala política.

En esta etapa se superó el espontaneísmo que lo había caracterizado y el movimiento obrero organizado se convirtió en el actor principal que, si bien alentó la movilización, también recurrió a medidas de fuerza estrictamente planificadas tendientes a reforzar la disciplina sindical y la verticalidad y a frenar los movimientos de base. En líneas generales puede decirse que realizó una intensa actividad para instalar sus demandas en la esfera pública y para ocupar un espacio fundamental en el escenario político.

El repertorio de acciones utilizadas fue paradigmático de la forma que adoptó la acción colectiva: los planes de lucha de

la CGT, que incluyeron marchas al Congreso, movilizaciones en caravanas, ocupaciones de fábricas, cabildos abiertos, ridiculización del oponente, actos conmemorativos, entre otras medidas. Estos planes fueron llevados a cabo entre mayo de 1963 y el fin de 1964 (véase el capítulo III).

Otra variante de protesta, que, en realidad, aparecía como una forma política de resistencia encubierta o como un lenguaje escondido, fue la lucha por el control de la memoria tratando de ofrecer una visión alternativa del pasado. Ésta adoptaba la forma de rituales de recordación de las fechas más importantes del peronismo; por ejemplo, el 17 de octubre o “Día de la Lealtad”, cuya celebración pública había sido sistemáticamente prohibida desde 1955, o la del nacimiento o la muerte de Evita. Recién en 1963, a pocos días de asumido el gobierno de Illia, se permitió celebrarlas con actos públicos que incluyeron —en el caso del 17 de octubre— caravanas de motocicletas en distintos barrios, lanzamientos de bombas de estruendo y conmemoraciones en distintas plazas y puntos del país. En 1964 los actos presentaron similares características, con un lenguaje moderado que planteaba levantar las banderas de la “pacificación social”, de la “unidad nacional” y de la “felicidad para todo el pueblo”, que traería la redención argentina: el regreso del general Perón. Esto se relaciona con el intenso trabajo de representación desarrollado en el período para reafirmar la ortodoxia peronista, en el sentido de reafirmar los valores fundacionales del peronismo, frente a la heterodoxia que aparecía representada tanto en las diferentes vertientes de izquierda que estaban surgiendo como en los que querían romper con la verticalidad característica del movimiento. En ese sentido y como un contradiscurso de clase, se reforzaron los imaginarios criollistas que trataban de ligar las luchas llevadas a cabo por los obreros y sectores populares con las de los gauchos y montoneros en el pasado.

El año 1965 terminó con el cierre relativo de los canales de comunicación con el gobierno de Illia y, con ello, se fue creando el marco para alentar diversas alternativas: por un lado, la incorporación autónoma del movimiento obrero dentro del sistema político, ya fuera como un partido o una representación corporativa; por otro, una salida revolucionaria de izquierda —minoritaria todavía— y, finalmente, una salida autoritaria,

apoyada por los principales dirigentes sindicales que de alguna manera acordaron mantener los mecanismos para la presión corporativa, principal fuente de su poder, que se concretó el 28 de junio de 1966 cuando el general Onganía destituyó al presidente Illia.

Los sectores juveniles asumen compromisos

Otro actor que cobró fuerza fue el sector estudiantil, que supo aprovechar también el cambio operado en la estructura de las oportunidades políticas para expresar su protesta, asumiendo fundamentalmente una actitud de compromiso y solidaridad con los problemas que se vivían en el país y en el mundo. Esto fue posible porque con el gobierno de Illia funcionaron normalmente los canales para la participación en la actividad universitaria. En ese período se pusieron en práctica los presupuestos de la Reforma Universitaria, funcionando el gobierno tripartito, la provisión de cargos por concurso, la libertad de cátedra y la autonomía universitaria, al igual que los centros de estudiantes. En ese contexto, la principal reivindicación específica se concentró en un aumento del presupuesto universitario que en algunos momentos culminó en la toma de facultades en las principales universidades nacionales.

Pero la preocupación principal de los estudiantes comenzó a vincularse con la inscripción de su lucha dentro de otra más general que estaba librando sobre todo el movimiento obrero, donde comenzó a percibirse que, a pesar de la legalidad formal mantenida por el gobierno, éste carecía de representatividad y que por lo tanto era necesario apoyar las luchas populares, acompañando y orientando su dirección. Fue así como secundaron los planes de lucha de la CGT haciendo suyos muchos de sus puntos principales y, aunque no fue coordinado con los dirigentes sindicales, durante la etapa de la ocupación de fábricas también los estudiantes procedieron a la toma de las facultades como una muestra de solidaridad. En el mismo sentido tuvieron una intensa participación en los “cabildos abiertos” de 1964. En octubre de ese año se registró una serie de conflictos en distintas universidades, que culminaron con ocupaciones en La Plata, Posadas, Buenos Aires, Rosario y Córdoba.

Como puede apreciarse, la adhesión estudiantil a los obreros empezó a manifestarse con anterioridad al golpe de 1966. En Córdoba, por ejemplo, los estudiantes apoyaron casi todas las medidas de fuerza de uno de sus principales sindicatos, el SMATA. Éste nucleaba a los trabajadores de la industria automotriz, principal actividad económica de la ciudad, y así, los distintos centros de estudiantes salieron a la calle para demostrar su solidaridad participando en las marchas y movilizaciones que el SMATA realizó en el mes de mayo de 1966, ante la amenaza de ver reducidas sus jornadas de trabajo. Más tarde será el movimiento estudiantil uno de los primeros en reaccionar frente al gobierno de Onganía y en esa actitud tuvo tanto que ver el ataque perpetrado contra la autonomía universitaria como la experiencia previa de movilización y participación adquirida durante los años del gobierno de Illia.

Otra forma de acción era la desplegada por grupos, minoritarios todavía, que, recogiendo la experiencia de la resistencia, intentaron fortalecer la alternativa insurreccional. En esta línea se inscribieron tanto vertientes que provenían del peronismo como otras que se fueron desprendiendo de los partidos de izquierda, conformando las distintas variantes de la conocida como “nueva izquierda”. A comienzos de 1964 se detuvo a una célula definida como castrista en Orán (Salta) que, según se dijo, habría estado recibiendo entrenamiento militar. De los siete detenidos, tres residían en Córdoba y trabajaban en el comedor de la Federación Universitaria; luego se procedió a detener también a otro grupo con similares características en Icho Cruz, provincia de Córdoba. Estos hechos anticipan el papel fundamental que cumpliría esta ciudad hacia el final de la década, por confluir en ella un importante movimiento obrero, autónomo y combativo, un movimiento estudiantil comprometido en las luchas populares y sectores políticos cada vez más radicalizados.

Las cúpulas sindicales pierden poder: ¿cómo enfrentar a la dictadura?

Frente a la nueva coyuntura autoritaria creada por el golpe militar de junio 1966, ¿cómo se canalizó la acción colectiva?

Como reacción a las medidas del gobierno que trataban de limitar la autonomía de las universidades nacionales, las primeras reacciones provinieron del ámbito universitario y fueron protagonizadas por los estudiantes y algunos docentes que se manifestaron en contra de esas decisiones, llevando a cabo diferentes manifestaciones de repudio que tuvieron como resultado la intervención de casi todas las universidades. Una acción de mucha importancia por la dimensión trágica que adquirió y que aparece como un ejemplo de otras tantas que tuvieron lugar en otros puntos del país fue la que se registró en Córdoba en la segunda semana de septiembre y que la memoria popular computa como la primera víctima de la dictadura. Las principales agrupaciones estudiantiles habían decretado un paro para el 22 de agosto y estudiantes de la Agrupación Universitaria Integralista iniciaron una huelga de hambre en la puerta de la iglesia Cristo Obrero. Los disturbios continuaron con la toma del barrio Clínicas en la primera semana de septiembre, donde la participación no quedó limitada a los estudiantes sino que se amplió a los vecinos que contribuyeron a levantar barricadas. El 7 de septiembre, el estudiante de segundo año de Ingeniería y subdelegado en un departamento de la planta automotriz de IKA, Santiago Pampillón, fue herido de bala en el cráneo cuando participaba en una manifestación callejera, falleciendo cinco días más tarde. El hecho provocó gran conmoción por reunirse además en Pampillón la doble condición de estudiante-trabajador, por lo que la CGT Córdoba resolvió repudiar la agresión policial contra el estudiantado, disponiendo la realización de un paro general de una hora por turno y de un acto frente a la CGT para reclamar el cese de la violencia represiva y reafirmar el principio de una universidad abierta al pueblo. Luego de haber vivido la experiencia participativa que tuvo lugar durante el gobierno de Illia, el autoritarismo de Onganía impactó profundamente en los sectores estudiantiles que lo vivieron como un cercenamiento a las prácticas anteriores.

Fue así, y sobre todo luego de la conformación de la CGT de los Argentinos y el impacto del mayo francés durante 1968, que en las agrupaciones universitarias se abrió también un debate interno profundo en torno a la alternativa de reforma o revolución. A partir de la lucha por la recuperación de los cen-

Un sindicalismo de oposición

“La CGT de los Argentinos, la rebelde, la que carece de todos los recursos, exhorta también a todos los trabajadores de la Patria a no consentir más a los profesionales de la mentira y la intimidación. Hay una sola CGT histórica, es la de los trabajadores, la del pueblo, la de todos los argentinos. Es la CGT de los idealistas, la de los que quieren el triunfo de los valores verdaderamente humanos (...) Porque los otros, que se titulan sindicalistas y tienen autos de lujo, no pueden entender a las madres de Tucumán; los coleccionistas de cuadros y de perros no saben lo que es estar desocupado y cuyo único cuadro es la desesperación (...)”

Fuente: “CGT con la Patria y el Pueblo Argentino”, en *Informe DIL*, Nº 98, abril de 1968, p. 25.

tros de estudiantes, iniciada luego de 1966, comenzó a perfilarse la necesidad de un cambio del sistema y de la unidad con el resto de los sectores populares. Además, empezaron a proliferar agrupaciones estudiantiles que aparecían como núcleos de organizaciones políticas que trabajaban también en otros ámbitos, pues para entonces la lucha sólo circunscripta al ámbito universitario había comenzado a perder sentido. La tendencia general apuntó a no luchar sólo por el cogobierno sino directamente por la revolución, a la que se llegaría por diferentes vías pero que era vista como meta de casi todas las agrupaciones.

Es importante destacar que la CGT de los Argentinos comenzó a promover nuevas formas de protesta y de resolución de los conflictos que, en contraposición a la férrea disciplina y verticalidad que había caracterizado la representación del orden sostenida por las anteriores autoridades sindicales, apuntaban a la descentralización para jerarquizar el papel de las regionales y permitir una real participación y expresión de las bases. Esta situación llevó a que, incluso, varias seccionales se pronunciaran en contra de las decisiones adoptadas por sus dirigencias nacionales, como fue el caso en Córdoba del Sindicato de Luz y Fuerza, dirigido por Agustín Tosco y uno de los

principales bastiones de la CGT de los Argentinos. Además, esta central reforzó la vinculación con los estudiantes a través de la realización conjunta de una serie de actividades, tales como conferencias, mesas redondas y peñas.

El discurso de la CGT de los Argentinos alentó también la acción del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Este movimiento tuvo su punto de partida en el "*Mensaje de los 18 obispos para el Tercer Mundo*", que, con la dirección del obispo brasileño Helder Cámara, fue lanzado el 15 de agosto de 1967. En nuestro país 270 sacerdotes que adhirieron al mensaje realizaron su primer encuentro en Córdoba los días 1° y 2 de mayo de 1968. Este suceso marca el nacimiento formal del tercermundismo en el país. El compromiso de estos grupos cristianos frente a la sociedad los llevaba a luchar contra todo lo que oprimiera al hombre; de ahí que reaccionaran frente a las políticas autoritarias, y en su discurso comenzó a reforzarse la idea de la liberación nacional, entendida como

una lucha contra el capitalismo y los imperialismos.

En Tucumán algunos sacerdotes habían apoyado las marchas de hambre y ollas populares que se organizaron como consecuencia de los cierres y reestructuraciones de ingenios. La mayoría de ellos se sumó inmediatamente al movimiento (véase el capítulo IV). Córdoba se convirtió en uno de los principales centros urbanos donde los "sacerdotes del Tercer Mundo" comenzaron a desarrollar una intensa actividad en los barrios obreros y marginales. Esta acción no se limitaba a la mera prédica pastoral sino que buscaba un contacto más estrecho con los sectores desposeídos a través de la participación en acti-



Agustín Tosco.

vidades comunes. De esta manera, se fueron creando lazos muy fuertes de solidaridad y compromiso y se robustecía la idea de la necesidad de participación colectiva.

Esto último nos acerca a otro de los fenómenos que el autoritarismo de la Revolución Argentina y el ejemplo de otros países latinoamericanos terminaron de dar forma: la conformación del brazo armado en apoyo a la acción política en algunas agrupaciones de izquierda. Se ha mostrado que algunas células guerrilleras comenzaron a organizarse tempranamente. Sin embargo, sería recién a partir de 1967, cuando el gobierno de Onganía definió claramente su política y la acción armada empezó a tomar cuerpo entre algunos sectores como la única estrategia posible. Esta prédica, sumada al sindicalismo combativo liderado por Ongaro, llevó a los sectores del peronismo que habían apoyado la línea de Cooke a organizar su propio brazo armado, las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), que en septiembre de 1968 realizaron sus primeras acciones en la localidad tucumana de Taco Ralo. Este intento fue rápidamente desarticulado por las fuerzas de seguridad que detuvieron a varios de sus integrantes y desarmaron el “destacamento guerrillero 17 de octubre”.

Dentro de las agrupaciones de izquierda no peronistas, la acción del gobierno de Onganía precipitó también las definiciones. Así, por ejemplo, en 1967 un desprendimiento del Partido Comunista constituyó el PC-CNRR (Comité Nacional de Recuperación Revolucionaria), luego Partido Comunista Revolucionario (PCR). También ese año se constituyó el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuyo objetivo era confluir con las fuerzas del “Che” Guevara en Bolivia. En 1968 el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) realizó su cuarto congreso que desembocó en la división y formación de dos corrientes: PRT “El Combatiente”, conducido por Mario Roberto Santucho, que al año siguiente dio nacimiento al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), y PRT “La Verdad”, conducido por Nahuel Moreno, que luego confluiría en el Partido Socialista de los Trabajadores. Para entonces también se organizaron las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), a partir de grupos de militantes del PCR, que fueron los que realizaron la primera acción de guerrilla urbana el 5 de abril de 1969 al atacar un vivac perteneciente al

Regimiento I de Infantería Motorizada de Patricios en Campo de Mayo.

Estos hechos demuestran que la elección de la vía revolucionaria para la toma del poder estaba ya consolidada entre algunos sectores. Era sin embargo necesario encontrar la oportunidad, desde este punto de vista crear las “condiciones objetivas”, para poder concretar con éxito ese propósito. En este sentido puede decirse que el gobierno de Onganía actuó como el precipitador, como el momento en el que se dieron las condiciones para la construcción de una percepción de injusticia, que es necesaria para el pasaje a la acción. Pero eso solo no bastaba, hacía falta que la percepción individual o sectorial fuera encuadrada colectivamente. Las acciones y representaciones contra la dictadura, construidas por la CGT de los Argentinos y por los otros sectores, actuaron en ese sentido. Pero, a pesar del discurso más confrontacionista de estos sectores, el pasaje a la acción no se concretó mientras la mayoría del movimiento obrero creyó que podrían encontrarse canales para la negociación o para un cambio de actitud por parte del gobierno, que había prometido restablecer el mecanismo de la concertación para fines de 1968. Tendrían que aparecer detonantes que convirtieran la percepción de injusticia sectorial en injusticia colectiva para fortalecer una identidad común, otro de los componentes necesarios para la acción, un “nosotros” como totalidad, como “pueblo afectado”, contra un “ellos”, el “régimen opresor”. Esto ocurriría a comienzos de 1969.

LAS NUEVAS FORMAS DE LA PROTESTA OBRERA Y LA REBELIÓN POPULAR

El año 1969 marcó el inicio de la descomposición del régimen de la Revolución Argentina. Diferentes circunstancias se conjugaron para transformar la protesta obrera en rebelión popular y poner en escena nuevos repertorios de confrontación que adquirieron ese año la modalidad de insurrecciones urbanas; de ellas se destacan dos fundamentales y paradigmáticas: el Cordobazo y el Rosariazo.

Desde comienzos de año los ánimos comenzaron a caldearse en el sector obrero. El prometido restablecimiento del meca-

nismo de las convenciones colectivas para diciembre de 1968 no se concretó, lo que motivó una serie de manifestaciones de protesta. En ese marco general de descontento obrero, comenzaron a registrarse diferentes expresiones de conflictos surgidos de anteriores medidas del gobierno. Así, por ejemplo, en marzo se llevó a cabo una marcha desde el ingenio Bella Vista hacia la ciudad de San Miguel de Tucumán, encabezada por su cura párroco, para solicitar que se pagaran los jornales adeudados a los trabajadores. Al no encontrarse soluciones, en el mes de abril continuaron las movilizaciones encabezadas también por sacerdotes y delegaciones obreras, ante la grave situación de diez ingenios cerrados y la provincia vigilada por tropas de infantería y de la Policía Federal. A esas manifestaciones se sumó también una huelga de hambre realizada por doce estudiantes universitarios en la parroquia San Pío X en la ciudad de San Miguel de Tucumán. También en localidades del norte de Santa Fe se organizaron “marchas de hambre” desde Villa Ocampo, Villa Guillermina y otras, teniendo como meta final la capital provincial, con el objetivo de entrevistarse con el gobernador para petitionar el mantenimiento de fuentes de trabajo, tales como los talleres de reparación del ferrocarril en Villa Ocampo.

La mística del Cordobazo

“(...) El Cordobazo se convirtió en una figura romántica que estaba presente en todos los hechos, determinó una mística muy fuerte (...) que después va a determinar el holocausto de sangre de los sectores estudiantiles que iban a la muerte, también a matar, es cierto. Comienza a ser la idea romántica de la conciencia de la clase. En la conciencia individual de todos los que estábamos viviendo ese proceso, se viene a asentar: acá está lo que quiere la gente (...) Yo creo que el Cordobazo acelera eso, le pone plazos perentorios, ya no se podía demorar nada más y se aventuran, se sale a cosas increíbles, a acciones en que se arriesgaba todo, no sólo a nivel personal, sino que se arriesgaba todo como organización, y ahí podía desaparecer el grupo... hay una urgencia, una precipitación (...)”

Fuente: Testimonio de Luis, dirigente estudiantil en esa época.

El descontento popular fue creciendo y conformando algunos puntos neurálgicos en el interior del país. Tal fue el caso de Córdoba, que pasó a convertirse en el eje de la actividad de distintos sectores sociales. Desde el punto de vista político-sindical las tendencias más combativas habían encontrado allí un centro importante de apoyo. Esto se debió a las características de los sindicatos líderes de Córdoba que, desde fines de la década del 50 y como consecuencia de la radicación de Fiat e IKA, primeras fábricas automotrices instaladas en el país, fueron construyendo una particular tradición sindical. Ésta se caracterizó por su autonomía frente a las cúpulas sindicales nacionales, por su permanente recurrencia a las medidas de acción directa y por una fuerte conciencia sindical. Así, aunque el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) de Córdoba integraba una estructura sindical centralizada, de hecho disfrutaba de mucha independencia debido en gran parte al carácter descentralizado de los convenios colectivos en la industria automotriz. Ese procedimiento les permitía a las compañías automotrices multinacionales manejar un mercado inestable pero, al mismo tiempo, tornaba a los sindicatos del sector más dependientes del apoyo de sus bases para demostrar su poder, a la vez que exigía que su dirigencia estuviese más comprometida con las exigencias de éstas. Otro de los sindicatos líderes del período, Luz y Fuerza, gozaba también de gran autonomía por formar parte de una estructura gremial federativa que le permitía ejercer un control prácticamente completo sobre su presupuesto, así como sobre los convenios colectivos y servicios sociales. Además, la presencia singular durante esos años de su secretario general —Agustín Tosco—, dirigente de gran prestigio y profundas convicciones democráticas, fortaleció la práctica de una democracia sindical participativa y el establecimiento de una conducción sumamente sensible a las demandas de las bases.

Otras manifestaciones sociales y políticas también encontraron su lugar de expresión en Córdoba. El 11 y el 12 de enero los sectores militantes del movimiento sindical peronista y el ala política del peronismo revolucionario se reunieron en la localidad cordobesa de Unquillo para planear la siguiente etapa de lucha. A mediados de marzo, en los barrios populares de Bella Vista y Comercial se realizaron una serie de asambleas en los

centros parroquiales para protestar por el cierre de 130 centros de alfabetización de adultos que beneficiaban a 6.900 alumnos y se decidió continuar dictando clases en esos centros, al igual que en los que funcionaban en las cárceles. Influenciada por la situación imperante, la Delegación Regional de la CGT emitió un documento, la llamada “Declaración de Córdoba”, que exhortaba a la formación de un frente civil de oposición al régimen.

Ese mismo mes, el nuevo gobernador de Córdoba, Carlos Caballero, presentó un proyecto que pretendía crear un esquema corporativo, el Consejo Asesor Económico. A esto se sumó el aumento de los impuestos municipales y a la propiedad, que agravó el malestar de la clase media, profundamente afectada por la falta de libertades democráticas. Esas circunstancias fueron acrecentando la sensación de injusticia a la que se agregó el descontento existente entre los obreros y los estudiantes, que encontraron detonantes para la expresión del conflicto a comienzos de mayo. El 6 de ese mes, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) convocó a un paro de 24 horas para protestar contra el irresuelto problema de las “quitas zonales”, sistema por el cual los trabajadores de Córdoba cobraban menos que sus pares de Buenos Aires. El día 12, el gobierno nacional abolió el “sábado inglés”, establecido por una ley provincial de 1932 que otorgaba a los trabajadores de Córdoba el pago de una jornada completa los días sábados, en vez de la jornada real que era de cuatro horas. Esto llevó a una multitudinaria asamblea del SMATA que fue disuelta por la policía con el consiguiente enfrentamiento violento; esos actos fueron un ensayo general del Cordobazo, ya que ese día los trabajadores mecánicos consiguieron controlar el centro de la ciudad durante varias horas.

Las movilizaciones obreras coincidieron con la agitación de los estudiantes en todo el país, especialmente en las provincias. El 15 de mayo, en el marco de acciones de protesta por el cierre del comedor estudiantil, fue asesinado en Corrientes el estudiante de Medicina Juan José Cabral; luego, con las muertes de Adolfo Bello y Luis Norberto Blanco en Rosario, cuando participaban en la manifestación de repudio por lo sucedido en Corrientes, comenzó lo que algunos llamaron la “semana rabiosa”. A partir de ese momento los hechos se precipitaron uno tras otro: la marcha del silencio en Rosario y el paro general decretado por la Delegación Rosario para el 23 de mayo en

repudio por los actos de represión y muerte de los estudiantes, que produjeron varios enfrentamientos callejeros con la policía protagonizados especialmente por estudiantes. Este hecho fue denominado el “primer Rosariazo”. El 26 de mayo el barrio Clínicas de Córdoba, donde la mayoría de los residentes eran estudiantes, fue ocupado y, al día siguiente, Ongaro fue detenido al llegar en tren a Córdoba.

Mientras tanto las delegaciones del interior comenzaron a presionar a las dos centrales nacionales para que decretaran un paro nacional ante la grave situación que se estaba viviendo. Con tal motivo, el 26 de mayo tanto la CGT Azopardo como la de los Argentinos decidieron decretar un paro general en todo el país por 24 horas para el día viernes 30 de mayo. En Córdoba, los representantes de las dos CGT decidieron, en cambio, que fuera de 48 horas y adelantarlo al día 29 para remarcar la especial situación de descontento existente allí; además se decidió darle el carácter de “paro activo”, es decir, hacer abandono de los lugares de trabajo a partir de las 10 para movilizarse al centro y expresar su protesta.

El Cordobazo: los acontecimientos

El abandono de las grandes plantas industriales, que comenzó a las diez de la mañana del 29 de mayo, fue masivo. Así, desde los cuatro puntos de la ciudad comenzaron a marchar hacia el centro los trabajadores de IKA-Renault, Transax, Thompson Ramco, ILASA, División Planta Matrices (Perdriel), Fiat y de las numerosas empresas metalúrgicas y de otro tipo dispersas por la ciudad. Lo mismo ocurrió con los trabajadores públicos y de las distintas dependencias de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), donde el acatamiento a la medida fue total. Durante su paso, trabajadores de otras plantas, estudiantes y ciudadanos en general se sumaron a la marcha, hasta que la columna principal que venía desde la fábrica de IKA-Renault en Santa Isabel fue dispersada hacia los barrios adyacentes luego del primer enfrentamiento con la policía. Casi al llegar al centro en su marcha hacia el local de la CGT, la policía abrió fuego y mató al obrero de IKA-Renault Máximo Mena. Los trabajadores atacaron enton-

La lucha en las calles

“(...) Veíamos venir los caballos, así que ¡¡a correr todo el mundo para arriba!! Pero en el grupo había un muchacho, no sé si era de Luz y Fuerza, entonces cuando toda la manifestación corre, este hombre se queda y enfrenta a la policía montada con un palo. Entonces eso hace que la gente se vuelva, que los incentive y por supuesto, con los elementos que tenían en la mano, a los pedradones a la policía. Este acto heroico de ese tipo fue el motor. Fue la primera vez que vi caballos de la policía de espalda, disparar por la Maipú abajo; siempre los había visto de frente. El haber visto la retirada por primera vez dio fuerza y entonces la gente se reagrupa y seguimos (...) Vienen dos o tres patrulleros, se bajan con una confianza bárbara —se ve que no sabían cómo venía la mano—, pero ya estaba la guerra desatada, había que defender lugares y entonces ahí vi no a caballos sino a policías corriendo a buscar los patrulleros. Lo agarraron a uno y le rompieron la camisa y al casco lo traían como una bandera, como símbolo. Se tomó la esquina y se la cerramos (...)”

Fuente: Testimonio de Omar, estudiante.

ces al cordón policial desbandándolo, transformándose la movilización en una revuelta urbana espontánea en la cual participó prácticamente la totalidad de la comunidad cordobesa.

La noticia del asesinato de Mena se difundió rápidamente, sumándose a la protesta vecinos de clase media, quienes compartían la indignación colectiva, no sólo por la reciente brutalidad policial sino también por los tres años de autoritarismo vividos. Para las dos de la tarde la policía había sido totalmente desbordada y había tenido que replegarse en su central. Los dirigentes sindicales intentaron establecer cierto grado de control pero, para entonces, la rebelión había escapado de sus manos respondiendo al flujo y reflujo de la contienda callejera, sin tener en cuenta ningún plan estratégico superior. Los considerados símbolos del imperialismo y del régimen sufrieron duros ataques, se incendiaron las oficinas de Xerox, una concesionaria de Citroën y muchos otros negocios; se quemaron autos y se saqueó el Club de Suboficiales, con el fin de destruir los elementos allí existentes. No se registraron ac-



Enfrentamiento entre obreros cordobeses y la policía, 1969.

tos de pillaje, los manifestantes destruyeron pero no robaron.

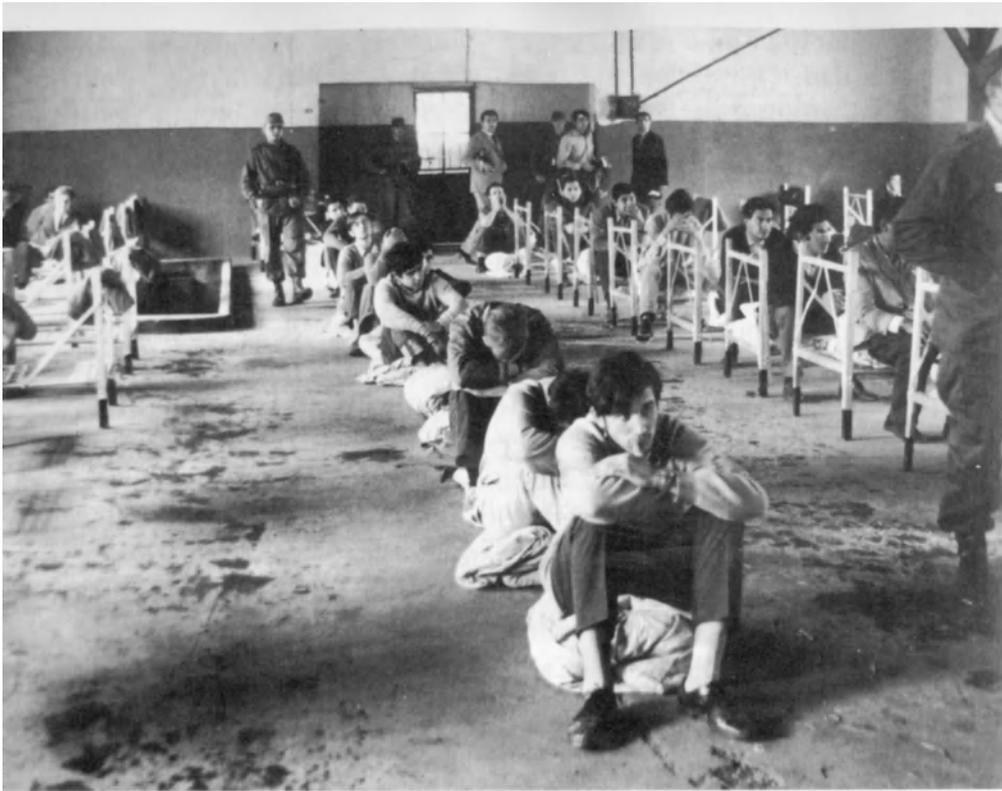
Al caer la tarde, la mayoría de los trabajadores se retiró hacia sus hogares, además varios dirigentes sindicales se mostraban recelosos de continuar participando en la protesta que ya no controlaban. Elpidio Torres, desde la sede de su sindicato, había perdido todo tipo de comunicación con Tosco y parecía que ahora el protagonismo había pasado a los estudiantes, trasladándose el principal foco de resistencia a los barrios estudiantiles, especialmente Alberdi y Clínicas. A la tarde intervino el Ejército, la aparición de algunos francotiradores en los techos agregó un tercer elemento al Cordobazo, el de haberse intentado una insurrección urbana por parte de algunos grupos más organizados con una finalidad más claramente política y, acaso, revolucionaria. La irrupción de esos grupos, no incluida en la planificación inicial de la protesta, es uno de los aspectos más controvertidos ya que el régimen atribuyó el Cordobazo a una conspiración minuciosamente organizada por la izquierda

revolucionaria, con el apoyo del comunismo internacional. En realidad, el componente insurreccional fue una faceta menor del Cordobazo si se lo compara con la protesta obrera y estudiantil o con la revuelta popular; sin embargo, no debe ser dejado totalmente a un lado porque habla de la existencia de un fenómeno que saldría claramente a la luz luego del Cordobazo.

En la madrugada del 30 de mayo, día del paro nacional convocado por la CGT, Córdoba era una ciudad tomada. Se oían disparos esporádicos y en el barrio Clínicas continuaba la resistencia. A pesar del toque de queda, ese día también se llevaron a cabo algunas marchas de protesta, se allanaron los principales sindicatos y fueron detenidos Torres, Tosco y otros dirigentes sindicales, imponiéndoseles penas de entre cuatro y diez años de prisión. Pasados los dos días de protesta el saldo de propiedades destruidas era considerable y la cifra oficial ascendía a doce muertos y noventa y tres heridos. El acontecimiento conmovió inmediatamente la esfera política nacional, el impopular gobernador Caballero tuvo que dejar el poder y la posición del régimen comenzó a ser seriamente cuestionada.



Marcha obrera y estudiantil durante el Cordobazo.



Detenidos durante el Cordobazo en el Tercer Cuerpo de Ejército esperan para ser juzgados por el Consejo de Guerra, junio de 1969.

El pos-Cordobazo: la conformación de un movimiento social de oposición al régimen

El Cordobazo cristalizó el cuestionamiento al régimen ya iniciado por diversos sectores de la sociedad. Además, pondría de manifiesto una crisis de autoridad en el interior de las diferentes organizaciones de la sociedad civil que coincidió, también, con la aparición de la juventud en la esfera pública como un actor colectivo dispuesto a romper con el pasado y llevar a cabo lo que entendían como la reparación moral que el país necesitaba. Este proceso, que se había venido conformando durante toda la década del 60, encontró en la brecha abierta por el Cordobazo el escenario para una redefinición desde abajo creando el marco, a su vez, para que de la resistencia que había caracterizado a la etapa anterior se pasara a la acción colectiva.

Comenzó así a tomar cuerpo un *ciclo de protesta* que serviría de base para la construcción de un movimiento social. En efecto, luego del Cordobazo se habría operado un cambio en la estructura de las oportunidades políticas que tornó vulnerable al sistema político para la emergencia de un movimiento social. La conformación de este movimiento implicó la utilización tanto de vehículos formales (las organizaciones ya constituidas) como informales, redes sociales nuevas y recursos provenientes de diferentes fuentes y aliados. Pero lo que lo hizo posible fue el enmarcar culturalmente la posibilidad de la acción, es decir, se construyeron socialmente los tres componentes básicos para la acción colectiva: la percepción de injusticia, el convencimiento de que era posible revertir esa situación a través de la acción y la construcción de una fuerte identidad, un “nosotros” capaz de promover los cambios.

Además de la percepción de injusticia y de la conformación de una identidad, hacía falta la oportunidad política para sostener el ciclo de protesta. La contundencia de las movilizaciones iniciadas mostró al gobierno la necesidad de modificar su orientación, instalando ciertas prioridades en su agenda con objeto de frenar el descontento popular. Tanto es así que, luego del Cordobazo, éste basó su política frente a los sindicatos en dos ejes principales: por un lado, conseguir la paulatina normalización de la CGT dividida en dos líneas antagónicas, a fin de obtener apoyo institucional para los planes del gobierno y, por otro, restablecer aunque en forma condicionada el mecanismo de la concertación colectiva para flexibilizar la posición de los sindicatos. Así se abrieron canales de acceso a la participación por donde expresar el descontento obrero, que actuaron como disparadores de ciertos movimientos de base en las empresas automotrices de Córdoba y en otros puntos del país.

Entre los sectores dominantes se acentuaron también las divisiones tras el impacto que significó la aparición pública de la organización guerrillera peronista Montoneros, con el secuestro y muerte del ex presidente general Pedro Eugenio Aramburu en junio de 1970, lo que condujo al reemplazo de Onganía por Levingston. Estos hechos sacudieron la estabilidad del bloque dominante creando una fuerte sensación de incertidumbre que llevó al nuevo presidente a revisar la orientación de la política económica y social, dándoseles mayor parti-

cipación a los distintos sectores sociales, fundamentalmente a los del trabajo para intentar frenar con ello la posible radicalización.

Otro aspecto importante por considerar en la creación de las oportunidades políticas se refiere a la adhesión de aliados influyentes que apuntalaron y dieron cuerpo a una retórica de cambio. Así, los movimientos de base que tuvieron lugar principalmente en Córdoba en el sector dinámico de la economía, pero también en otros puntos del país, contaron con el apoyo de otros sectores sociales, entre ellos el de intelectuales progresistas como abogados que, además de asesorar a la nueva dirigencia, iniciaron sistemáticas campañas de reclamos por la liberación de los presos políticos y sindicales. También ciertos párrocos enrolados en el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo brindaron no sólo apoyo material y espiritual a los trabajadores sino que instalaron su problemática entre otros sectores sociales. Otro aliado permanente fueron los estudiantes que colaboraron para la difusión de los movimientos y para darles un contenido más integral a las reivindicaciones.

Antes de seguir avanzando, y como una manifestación más de la conformación del ciclo de protesta a la que hemos hecho referencia, se hace necesario volver la atención sobre la importante rebelión que tuvo lugar en otra ciudad industrial del interior del país antes de finalizar 1969.

El Rosariaz

La huelga general nacional decretada por las dos CGT para el 27 de agosto de 1969 continúa el ciclo de protesta abierto iniciado en mayo. En ese contexto, también la huelga ferroviaria que desde Rosario se irradió al resto del país sería el detonante de la huelga general activa llevada a cabo en esa ciudad y su cordón industrial los días 16 y 17 de septiembre de 1969. Ésta coincidió con la ocupación de la fábrica que para entonces tenía lugar en la planta de Grandes Motores Diesel, de la empresa Fiat de Córdoba. El punto de partida de la huelga ferroviaria que se inició el 8 de septiembre en los talleres ferroviarios de Rosario, Pérez y Villa Diego —personal adherido a la Unión Ferroviaria, cuyo sindicato estaba intervenido— fue

la sanción aplicada a un empleado jerárquico, a la vez delegado gremial, que se negó a firmar los apercibimientos a trabajadores que habían acatado el paro del 27 de agosto. A esta medida se sumó el día siguiente el resto del personal adherido al otro sindicato ferroviario, La Fraternidad, y para el 10 la huelga se había extendido a las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, manteniéndose hasta el 27 de septiembre.

Frente a esa situación, el gobierno nacional convocó el 16 de septiembre al personal ferroviario que se encontraba en huelga para la prestación del “servicio civil de defensa”, quedando sometido a la justicia militar el personal que no se presentara. Para entonces, diferentes entidades sindicales, políticas, estudiantiles, se solidarizaron con los obreros; incluso la CGT de Córdoba declaró paro general y el gobierno provincial decidió decretar feriado para “prevenir inconvenientes” dado el peso simbólico que tenía el 16 de septiembre para los trabajadores. En la Capital Federal y en Rosario, las mujeres de los ferroviarios elevaron peticiones a las autoridades detallando la situación en la que se encontraban sus familias. El 16 de septiembre la CGT de Rosario decretó el paro activo por 38 horas, llamando a una movilización y posterior concentración frente al local de la CGT.

Los estudiantes se plegaron al paro, a pesar de que el día anterior las autoridades habían emitido un comunicado por el cual alertaban a la población, en virtud del estado de sitio, sobre la prohibición de toda manifestación. Luego de la experiencia del Cordobazo, las fuerzas policiales fueron reforzadas por Gendarmería Nacional y por contingentes especializados en la lucha antisubversiva y, desde temprano, se desplegaron no sólo por la zona céntrica sino también por los barrios donde se encontraban las principales fábricas y talleres, con objeto de impedir el ingreso de los manifestantes en la zona céntrica. Sin embargo, antes de las 10 de la mañana, ocuparon ese sector obreros pertenecientes a sedes sindicales con ubicación en el centro, como los de Obras Sanitarias, Luz y Fuerza y ferroviarios, entre otros, y también lograron llegar columnas provenientes de la zona sur y portuaria. En su desplazamiento fueron construyendo barricadas e incendiaron algunos autos y ómnibus para impedir el paso de los vehículos policiales, se atacaron comercios y se registraron enfrentamientos con la po-

licía con el saldo de un herido de bala. Algunas columnas que lograron llegar desde los barrios intentaron penetrar el cordón policial que rodeaba el centro sin éxito pero, al mismo tiempo, impedían también la salida de las fuerzas de represión.

De igual manera, en los barrios se construyeron barricadas a fin de impedir el ingreso de esas fuerzas. Recién a media tarde el centro fue desalojado y la lucha se desplazó hacia los barrios, sobre todo hacia el norte y el sur de la ciudad, principales zonas fabriles. Para entonces, la participación popular era muy notable. La zona norte quedó controlada por su población, se incendió la estación ferroviaria de Arroyito y se intentó quemar un tren cargado con bolsas de azúcar, igual proceder se siguió en otras estaciones ferroviarias. En la zona sur, murió un menor de 12 años herido de bala. Esa noche algunas columnas rompieron el cerco de seguridad, varias zonas quedaron sin luz y se bloquearon rutas provinciales y nacionales. El día 17 continuaron los ataques: varias plantas industriales, garitas, sucursales bancarias, camiones, maquinaria, etc., fueron quemados.

A medianoche del 17 de septiembre culminó la huelga general con movilización pero la lucha continuó en manos de los obreros ferroviarios, expandiéndose hacia el resto del país siguiendo las vías férreas. Así, entre el 17 y el 20 de septiembre se sucedieron una serie de hechos en distintos puntos de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Bahía Blanca y Tucumán, tales como atentados contra el personal jerárquico que cumplía tareas, descarrilamiento de trenes, atentados contra vagones, corte de energía de las señales, obstáculos en las vías, sabotajes en los talleres ferroviarios, atentados con explosivos en vías y boleterías, entre otros. Para entonces se decidió que el Ejército tomara en sus manos el asalto final para terminar con la rebelión. Se colocaron dos mil efectivos para la defensa de los objetivos ferroviarios, incluida la instalación de baterías antiaéreas. Varios detenidos pasaron a engrosar las listas de presos políticos y sindicales abiertas con el Cordobazo, pero el carácter más marcado de insurrección urbana que tuvo el Rosariazo insinuó ya los cambios que se estaban operando en el escenario político y que se definirían más claramente a comienzos de los '70.

La irrupción de las bases en las plantas fabriles y la expansión del ciclo de protesta

Si se consideran las estructuras utilizadas para la movilización, puede observarse también un cambio, aunque al comienzo no se subvirtieran abiertamente los mecanismos formales de canalización del conflicto contemplados dentro de la estructura sindical. Sin embargo, durante el desarrollo de la protesta, se fueron modificando los contenidos de las reivindicaciones hasta convertirse en un cuestionamiento a la dirigencia sindical. Eso fue lo que ocurrió, si, volviendo nuevamente a Córdoba, se considera la situación en sus sindicatos mecánicos luego del Cordobazo y, especialmente, en el marco abierto por la convocatoria a comisiones paritarias para la renovación de los convenios colectivos, donde comenzó a operarse lo que puede ser definido como un proceso de irrupción de las bases sobre los dirigentes. Como ejemplos más representativos habría que señalar los que tuvieron lugar a comienzos de 1970: la imposición de una nueva dirigencia en el SITRAC (Sindicato de Trabajadores de Fiat Concord) luego de la asamblea del 23 de marzo, donde se exigió la renuncia de la Comisión Directiva por acusársela de pro empresarial y se eligió una nueva. También en el SITRAM (Sindicato de Trabajadores de Fiat Materfer) hubo cambios de dirección, dando origen al sindicalismo “clasista” de Fiat, a partir de las ocupaciones de fábrica en la División Planta Matrices (Perdriel), integrada en la empresa IKA-Renault en mayo —donde se encontraba el personal más calificado e ideologizado dentro del SMATA—, y en la planta de Santa Isabel durante todo el mes de junio de 1970.

En todos los casos la movilización fue promovida por las bases o estructuras intermedias pero, luego, comenzaron a tejerse redes sociales más amplias donde se puso a disposición del movimiento de protesta una serie de recursos que excedían los de las organizaciones implicadas: sistemas de comunicación, cobertura en los medios, locales en las facultades para hacer conocer sus demandas, entre otros. Esto se evidenciaría claramente en la acción desplegada por la nueva dirigencia del SITRAC y del SITRAM que, desde una lucha inicial por hacer efectiva una verdadera representación sindical, exigieron la renuncia de las comisiones directivas anteriores, la democracia

interna y un convenio similar al del SMATA —al que la empresa Fiat sistemáticamente se había opuesto—, para ir agregando luego otros contenidos que la convertirían en uno de los polos aglutinadores de una alternativa política.

En efecto, las nuevas dirigencias del SITRAC y del SITRAM reconocidas recién en junio, luego de vencer tras las ocupaciones de las plantas en el mes de mayo la intransigencia empresarial y del gobierno que se negaba a hacerlo, se definieron opuestas a toda medida que implicara algún atisbo de burocratización, negándose incluso a integrar la combativa CGT regional. Sin embargo, la radicalización con que generalmente se asocia a este movimiento, sintetizada en la famosa frase “Ni golpe ni elección, revolución”, no estuvo presente desde sus orígenes sino que se fue definiendo sobre todo hacia el final del año '70 y más claramente en 1971 a partir del Viborazo de marzo de 1971.

A partir de los '70 se observaron entonces importantes cambios en los repertorios de confrontación. La experiencia acumulada por los trabajadores de los sindicatos líderes durante la década del 60 había sido la permanente movilización a través de las estructuras formales de los sindicatos, manteniendo una estricta disciplina sindical como medio de conseguir sus reivindicaciones. Pero la situación abierta luego del Cordobazo introdujo cambios en los que la disciplina y uniformidad anterior pasarían a ser sustituidas por una creciente demanda de autonomía y democracia de base, que se afirmó como un código común sobre todo entre los sectores juveniles. Lo novedoso entonces luego de 1969 fue que, recogiendo la experiencia previa de movilización y combatividad desplegada para hacer efectivas las demandas corporativas, se produjeron cambios en las formas de enfrentamiento y en los contenidos. Estas transformaciones se evidenciaban en la utilización de mecanismos más informales para la exteriorización de la protesta y en medidas de acción directa como la ocupación de fábrica con rehenes, que si bien formaba parte del acervo cultural de los trabajadores antes se había ejercitado con otro sentido. En efecto, esta práctica recogía experiencias previas como el plan de lucha lanzado por la CGT nacional en 1964 y la “gran huelga” de Fiat en 1965, pero, sobre todo en el primer caso, ésta había sido implementada desde las cúpulas sindicales según un

cronograma y planificación perfectamente establecidos, como demostración de fuerza para negociar pero, a la vez, controlando y evitando la iniciativa de los cuadros inferiores.

En cambio, a partir del Cordobazo, esta medida adquirió un carácter disruptivo para la forma convencional de negociación del conflicto pues la intención era llevar la disputa al centro de la producción, donde los trabajadores sin intermediarios, es decir, sin la mediación del sindicato, debían encontrar las soluciones disponiendo como elementos de presión de su fuerza de trabajo y de la apropiación momentánea de las herramientas y el espacio de la producción. Con estas medidas, que generalmente incluían la toma de rehenes y acciones violentas como amenazas con explosivos, se subvertían el principio de la exclusiva autoridad y propiedad empresarial en las plantas y, también como ya se ha dicho, la modalidad convencional de solución de los conflictos fabriles al desconocerse las autoridades sindicales constituidas, para pasar en algunos casos a cuestionar el orden general.

Relacionado con lo anterior, otro cambio importante operado durante el desarrollo del movimiento fue el de la apropiación de nuevos espacios, como la comunidad fabril, que buscaba implicar a diferentes sectores: organizaciones de la vecindad, parroquias, unidades básicas y de fomento, entre otros. Se intentó también proyectar los movimientos al centro del debate intelectual y social, buscando atraer la atención de los medios de comunicación y con la asistencia de los militantes a asambleas estudiantiles que tuvieron lugar en diferentes facultades, estrechándose vínculos con otros sectores sociales.

Otra característica nueva del repertorio de confrontación fue la búsqueda de trascender lo particular a través de medidas novedosas que atrajesen la atención de los medios y que, tanto a través de su táctica como de su contenido, implicaran a todos. Tal fue el caso de la forma de lucha escogida por el SITRAC para exigir la reincorporación de delegados despedidos: una huelga de hambre en la parroquia de Ferreyra, donde estaban ubicadas las plantas de Fiat, los días de Nochebuena y Navidad de 1970. La utilización de esa medida disruptiva, con alto contenido simbólico y moral, tuvo amplia repercusión en la opinión pública, contó con la adhesión de los sectores más diversos y provocó también un importante cruce discursivo en el

intento de explicar y representar la identidad de los trabajadores y del movimiento. Si una huelga de hambre en esa fecha tenía de por sí un efecto ejemplificador, mucho más impacto tendría por haberse llevado a cabo en la parroquia de Ferreyra. Estos trabajadores “clasistas”, acusados por algunos de ser marxistas, elegían imágenes con un alto contenido cristiano para sintetizar su mensaje y, a la vez, entre otras muchas manifestaciones de solidaridad, recibían la adhesión —por primera vez pública— de tres organizaciones armadas: las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros.

El ciclo de protesta no quedó relegado a las principales ciudades industriales; por el contrario, entre octubre y noviembre de 1970 también tuvieron lugar dos importantes movimientos de protesta en Tucumán y Catamarca, el primero protagonizado principalmente por los estudiantes a los que se sumaron los obreros, y el segundo por agentes estatales y el pueblo en general, que repudiaron la política del gobierno provincial.

Nuevos actores ocupan el espacio público: las organizaciones armadas

Si bien la protesta social y la guerrilla coincidieron en el tiempo como fenómenos del pos-Cordobazo, es necesario diferenciarlos y no ver en la primera la génesis de la segunda. Se ha señalado antes que la opción por la vía armada se configuró tempranamente en la Argentina, producto de la particular cultura política en la que el adversario político fue reforzando cada vez más las características de enemigo y la debilidad del sistema de partidos desvalorizaba la democracia representativa. En ese marco vimos que el gobierno de Onganía apareció como el precipitador para que una particular forma de acción directa tomara cuerpo, acentuándose el proceso de conformación de organizaciones armadas provenientes de diferentes vertientes político-ideológicas. Sin embargo, lo novedoso del pos-Cordobazo fue que éstas ocuparon el espacio público presentándose claramente como una alternativa política más para el acceso al poder, sobre todo para los sectores juveniles. En efecto, si bien la idea de la violencia como camino de transformación social o política

antecede a los sucesos de mayo del '69, el proceso contestatario desatado allí tornó verosímiles varios de los argumentos que los grupos revolucionarios, peronistas o no, sostenían en relación con la transformación social y política, volviéndolos creíbles para amplios sectores. Así, la violencia —aunque con diferentes formas— comenzó a tematizarse como una opción posible mientras diferentes actores se iban sumando al movimiento social y alimentaban el ciclo de protesta.

Dentro de las organizaciones armadas de raíz marxista, el ERP y las FAL, surgidas antes de 1969, se convirtieron en los principales referentes luego del Cordobazo, buscando ganar espacios en los sindicatos a través de la creación de células revolucionarias en las fábricas. Pero en el año '70 entraría en escena la más importante organización armada de la Argentina por el caudal de personas que movilizó: la organización de la izquierda peronista Montoneros. Varios de sus jóvenes fundadores provenían de grupos nacionalistas católicos, muchos de ellos incluso habían militado en la agrupación nacionalista de derecha Tacuara en los '60, pero luego de expandirse el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo tuvieron un acercamiento a los sectores desposeídos sobre todo por la influencia del sacerdote Carlos Mugica y los escritos de Juan García Elorrio publicados en la revista *Cristianismo y Revolución*.

Su primera aparición pública tuvo un alto contenido simbólico: al cumplirse un año del Cordobazo —fecha coincidente con la del Día del Ejército— secuestraron a quien se identificaba como el primer “verdugo” de la resistencia peronista por el fusilamiento del general Valle en junio de 1956 y por la expatriación del cadáver de Eva Perón: el teniente general Pedro Eugenio Aramburu. Quienes participaron en el secuestro (Fernando Abal Medina y Emilio Ángel Maza), vestidos con uniformes militares y amparándose en sus conocimientos militares como liceístas, se presentaron ante Aramburu ofreciéndose como custodias. Tres días después fue asesinado luego de ser sometido a un juicio revolucionario. Fue un hecho muy arriesgado ya que entonces la infraestructura de Montoneros era mínima: contaba sólo con doce personas con importantes conexiones en Córdoba. La consecuencia inmediata en la estructura de poder fue la remoción de Onganía diez días después del secuestro y su reemplazo por Levingston.



Sigla del ERP pintada en Córdoba durante las huelgas de 1971.

En cuanto a las definiciones ideológicas, Montoneros no hizo diferencias al comienzo entre los sectores que luchaban meramente por el retorno de Perón al poder y los que buscaban una transformación socialista del país, la patria peronista como “patria socialista”. Había en ellos un culto a la acción sin precisar previamente su objetivo final. En su pensamiento se subordinaba la lucha de clases a las luchas populares nacionales, hecho que atrajo a gran número de jóvenes de clase media. No ocurrió lo mismo con los obreros industriales que, por lo general, los rechazaron, ya sea por asumir algunos sectores —como los de Córdoba— posiciones más radicales o por las tendencias pragmáticas y conciliadoras de gran parte del sindicalismo peronista, para quienes las estrategias armadas aparecían como ajenas a su experiencia y necesidades de trabajadores. El aliento que, sin descuidar otras estrategias, Perón dio a Montoneros y a otras agrupaciones tales como la Juventud Pe-

ronista (JP), la Juventud Universitaria Peronista (JUP), la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), que comenzaron a formar la Tendencia Revolucionaria del peronismo, los convenció de que su particular visión de la “patria socialista” podría conseguirse con el retorno del líder. Dentro del sector revolucionario, los que apostaron a la opción obrera fueron conocidos como “alternativistas” y conformaron el Peronismo de Base para actuar a nivel de las fábricas.

Durante 1971, la otra organización armada más activa fue el ERP, que en mayo secuestró a Stanley Sylvester, cónsul británico honorario y director de la planta envasadora de carnes Swift en Rosario, que debió repartir 50.000 dólares en ropas y alimentos a los pobres con el fin de que lo liberaran. La otra operación importante del ERP fue el secuestro del director general de Fiat Concord, Oberdan Sallustro, en Córdoba en marzo de 1972, con objeto de que se reincorporaran los obreros despedidos al disolverse el SITRAC y se liberaran los guerrilleros y huelguistas encarcelados; el gobierno prohibió el pago

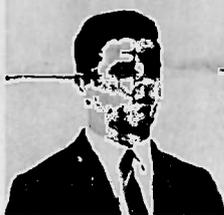


De izquierda a derecha, Mario Roberto Santucho, Benito Urteaga y Enrique Gorriarán Merlo, conductores del ERP.

POR EL SECUESTRO DEL SEÑOR TENIENTE GENERAL D. PEDRO EUGENIO ARAMBURU SE REQUIERE LA CAPTURA DE:



ESTHER NORMA ARROSTITO
alias "Irma", argentina, 30 años de edad,
casada. Cabello blanco, 1.62 mts. de estatura.
C. I. No. 4714121 P. F. - L. C. No. 3376-293.



MARIO EDUARDO FIRMENICH
alias "Manuel", argentino, 22 años de edad,
soltero. Cabello blanco, 1.60 mts. de estatura.
C. I. No. 6072824 P. F. - L. E. No. 7794-188.



FERNANDO LUIS ABAL MEDINA
alias "Fernando", argentino, 23 años de edad,
soltero. Cabello blanco, 1.85 mts. de estatura, del
gado. C. I. No. 5376317 P. F. - L. E. No. 4532-175.

DENUNCIELOS!

A la POLICIA FEDERAL o al organismo policial más próximo en todo el país.

RAJIOYO AP-RIENOS AIRESE N LIO 14 FICHE DISTRI
 EN; POR LA POLICIA, DONDE SE REQUIERE LA CAPTUR. DE
 LOS PR. PROPIOS DEL SECUESTRO DEL T.E. CHAL. ARAM
 BURU. (AP)

Afiche distribuido por la Policía Federal tras el secuestro del teniente general Aramburu.

del rescate y Sallustro fue muerto por los secuestradores al llegar la policía al lugar donde estaba cautivo.

La opción por la vía armada se reforzó también con la acción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), cuyo origen se remontaba a 1966, cuando unas cuantas personas se unieron con la esperanza de convertirse en el apéndice argentino del foco boliviano del "Che" Guevara. Su muerte condujo al derrumbe del proyecto pero, conducidas por Carlos Enrique Olmedo, iniciaron la guerrilla urbana en 1969. Al intentar salir de su aislamiento político, el giro hacia la lucha urbana fue acompañado de la peronización de las FAR, proceso que se consolidaría hacia 1971, para fusionarse finalmente con Montoneros a fines de 1972.

En cuanto al repertorio de confrontación utilizado por los grupos guerrilleros, es necesario destacar que más que buscar el enfrentamiento directo con el ejército o la policía, sus acciones aparecían como ejemplos de propaganda armada que buscaban ganarse la simpatía popular y también hacerse de recur-

sos. Trataron de hacer un uso mínimo de la violencia ofensiva que tenía blancos bien determinados, como representantes del régimen o, sobre todo en el caso del ERP, empresarios en conflicto con sus obreros, sin realizar actos terroristas al azar. Los secuestros también se utilizaron para obtener recursos para el mantenimiento de la organización o para ser distribuidos en villas de emergencia.

LA TRANSFORMACIÓN DEL CICLO DE PROTESTA OBRERA. LA HORA DE LAS DEFINICIONES POLÍTICAS

El año 1971 marcó la transformación de la protesta obrera, que adquirió contenido político y buscó trascender los límites locales para encarar un movimiento nacional. Puede decirse



Ocupación de la fábrica Fiat Concord en 1971.

que se produjo una rearticulación de la crisis, una reabsorción de la crisis social por los agentes políticos, sobre todo del campo opositor. La presión que venían ejerciendo distintos sectores de la sociedad tuvo que ser asumida por el gobierno de la Revolución Argentina y, nuevamente como en 1969, lo acontecido en Córdoba fue crucial para decidir el cambio de actitud del gobierno. Luego del segundo Cordobazo o Viborazo Levingston fue reemplazado por Lanusse, quien desde esa ciudad el 1º de mayo lanzó el Gran Acuerdo Nacional (GAN) prometiendo la convocatoria a elecciones en el corto plazo. Ya en noviembre de 1970 representantes de los principales partidos políticos se habían reunido en un encuentro que se conoció como La Hora del Pueblo para exigir la salida electoral y un cambio sustancial del modelo económico-social. Sin embargo y a pesar de que, como hemos visto, ya habían aparecido en escena las organizaciones armadas, fue necesaria una contundente protesta social, a la que se sumaron aquéllas, para convencer al gobierno de la conveniencia de esa salida. Es que en el Viborazo convergieron quienes aparecían como los principales exponentes del cuestionamiento al régimen: los trabajadores de los sindicatos líderes y representantes de las organizaciones armadas unidos en lo que, de no frenarse, podría abrir el camino para una insurrección general.

El segundo Cordobazo o Viborazo: la caída de los gobiernos provincial y nacional

Los problemas comenzaron a plantearse a partir de la ocupación de las plantas de Fiat que tuvo lugar el 14 de enero de 1971 como reacción frente al despido de siete obreros, algunos de ellos delegados, y que llevó a la empresa a solicitar la intervención del Ejército para desocupar la fábrica. Los trabajadores tomaron a dos funcionarios de la empresa como rehenes y la crisis de Fiat se extendió por toda la ciudad cuando la totalidad de los trabajadores mecánicos convocaron a una huelga de solidaridad para el día siguiente. La mediación del gobernador de Córdoba, Bernardo Bas, impidió que la ciudad fuera ocupada militarmente disponiéndose la conciliación obligatoria, pero la actitud de los obreros de no dejarse amedrentar por las



Huelga en Córdoba en 1971.

amenazas y negarse a abandonar la planta hasta que la patronal cedió fue valorada como un “triunfo frente a la empresa imperialista”. Pero más que el fin del conflicto, la huelga de enero fue el primero de una serie de hechos que culminarían en la segunda gran protesta obrera y levantamiento popular de Córdoba en menos de dos años. El 29 de enero SITRAC y SITRAM presentaron una propuesta de convenio según los lineamientos del negociado por el SMATA. Pero, a pesar de que el resultado de la conciliación obligatoria por el conflicto de enero reconoció las reivindicaciones de los obreros, la empresa se negaba a negociar con los trabajadores de Córdoba, argumentando que las negociaciones debían realizarse en Buenos Aires. Esa situación conflictiva coincidió con un momento político particularmente sensible en Córdoba.

El 1º de marzo Levingston designó a José Camilo Uriburu, hijo de una familia aristocrática y representante de la derecha católica, como gobernador de Córdoba en reemplazo del más contemporizador Bernardo Bas. Ese nombramiento se hizo en medio de una serie de movilizaciones llevadas a cabo por dife-

rentes sindicatos de Córdoba y cuando la CGT regional estaba programando un paro general para el 12 de marzo. En ese clima, el nuevo gobernador anunció en un discurso en la localidad cordobesa de Leones que “Dios le había encomendado la misión de cortarle la cabeza a la víbora venenosa que anida en Córdoba”.

La respuesta del movimiento obrero cordobés fue programar una acción conjunta de todos los sindicatos, incluidos los de Fiat, para el día 12. Sin embargo, no lograron ponerse de acuerdo en las medidas que se debían adoptar; mientras la CGT y Luz y Fuerza proponían ocupaciones de los lugares de trabajo, el SITRAC y el SITRAM preferían una marcha al centro con concentración, es decir, la misma estrategia utilizada en el Cordobazo, a la que los demás sindicatos se oponían argumentando que habría una fuerte represión. Cuando la segunda moción fue vencida, se acordó primero hacer las tomas y luego marchar al centro. Pero el día 12 los trabajadores de Fiat, en vez de ocupar las plantas, decidieron abandonarlas y realizar una manifestación, marchando hacia los barrios de las cercanías donde los estaban esperando unidades policiales enviadas para disolver la concentración. La policía disparó sobre los trabajadores y mató a un obrero, provocando —como había

Relato del entierro del obrero Adolfo Cepeda, 14 de marzo de 1971

“Durante seis o siete kilómetros, el cortejo, formado por unas cuatro mil personas, ha venido llevando el ataúd a pulso. Sobre él puede verse, por entre los cientos de cabezas de la barrera humana, una bandera del ERP junto a la argentina (...) Rodeando la gran cruz, que desde la parte superior de una loma domina el cementerio, se han ubicado carteles con consignas: A UN COMBATIENTE CAÍDO NO SE LO LLORA, SE LO REEMPLAZA EN LA LUCHA. Parado sobre el pedestal de la cruz, Páez, dirigente del Sitram, único orador del acto, llama a ‘convertir el dolor en odio, en odio y combate contra los explotadores. Ha muerto un hijo de la clase obrera y debemos jurar vengarlo’. Los aplausos alteran la paz del cementerio.”

Fuente: Oscar Anzorena, *Tiempo de violencia y utopía*.

ocurrido en el Cordobazo— la ira colectiva, que transformó la manifestación en una protesta de masas. Durante todo el día hubo enfrentamientos con la policía y el 14 de marzo unos diez mil cordobeses acompañaron el cortejo fúnebre de Adolfo Cepeda.

Los trabajadores de Fiat abandonaron las plantas el lunes 15 de marzo con la intención de realizar una concentración masiva en el centro, pero errores en la coordinación hicieron que ésta no fuera organizada y que fueran fundamentalmente los trabajadores del SITRAC y del SITRAM y los de la planta de Industrias Mecánicas del Estado (IME), históricamente aislados del movimiento obrero cordobés, los que constituyeron los contingentes obreros más grandes en esa oportunidad. Luego de una breve concentración en el centro, los obreros se dispersaron por los barrios, varios para apoyar la ocupación que los del Sindicato de Luz y Fuerza estaban llevando a cabo en la usina de Villa Revol. Poco después se unieron a ellos estudiantes y ciudadanos comunes y en las primeras horas de la tarde la ciudad estaba una vez más sumergida en una ola de destrucción mayor incluso que la del primer Cordobazo, en términos de daños a la propiedad y en pérdida de vidas. El fracaso de los sindicatos en la coordinación de la protesta aseguró la veloz represión, especialmente por la llegada el día 16 desde Buenos Aires de una brigada antiguerrillera especialmente entrenada. El 17 se pidió la renuncia de Uriburu y, ante la nueva huelga general decretada por la CGT para el 18 de marzo, la ciudad fue ocupada militarmente y antes de fin de mes el presidente Levingston fue reemplazado por Lanusse. A diferencia del primer Cordobazo, el segundo tuvo un carácter mucho más obrero que popular, acompañado por la clara presencia de los nuevos actores políticos del momento, las organizaciones armadas.

Las definiciones políticas

Luego del lanzamiento del GAN, el gobierno combinó la apertura por la promesa electoral con la represión de los que no se integraran en ese esquema, procediéndose así a la detención de varios dirigentes del SITRAC-SITRAM acusados de

subversión. Agustín Tosco fue enviado a una cárcel del sur el 29 de abril y recién fue liberado a fines de 1972. Esta doble actitud provocó que a partir de entonces la lucha se planteara en términos políticos y obligó a definir las estrategias que se utilizarían. Con sus diferencias y matices, los distintos actores plantearon la necesidad de un cambio político. Las cúpulas sindicales que buscaron ocupar un lugar dentro de la nueva reorganización del movimiento peronista y otros sectores como el sindicalismo "combativo" de Córdoba se inclinaron más hacia un proyecto de socialismo nacional que uniera a los diferentes sectores del campo popular sin negar la posibilidad del canal de acceso "democrático".

Ahora bien, para explicar el pasaje del movimiento social a la acción política fue necesario que se dieran ciertas oportunidades políticas y tuvieran lugar una apertura y cambios en la agenda política. Esto ocurrió con el lanzamiento del Gran Acuerdo Nacional y la promesa de prontas elecciones sin proscripciones. Ante esta instancia las estrategias debieron redefinirse, comenzando a movilizarse recursos predominantemente políticos, en especial tras las medidas dadas por el gobierno: el 2 de abril, diecisiete días después del Viborazo, se declararon rehabilitados los partidos políticos y el 21 de junio se entregó a Lanusse el proyecto de ley que reglamentaría su actividad. En septiembre se reinició la afiliación en el justicialismo con una serie de actos simbólicos.

Sin embargo, estas medidas se daban en un escenario muy diferente del de años anteriores. Se habían producido algunos cambios en las formas de la acción colectiva: la definición de nuevas formas de confrontación y la utilización de canales informales para exteriorizar la protesta. La experiencia pasada dejó profundas huellas en marcos culturales que moldearon las estrategias escogidas. Por ejemplo, en la CGT local se creó la Comisión de Solidaridad, que inició una serie de recitales populares a beneficio de los familiares de los presos gremiales, políticos y estudiantiles y de los trabajadores de Fiat, a la vez que continuaba su lucha por un convenio que reconociera sus demandas, trataban de que su acción trascendiera el ámbito fabril. El objetivo de marcar la diferencia en la lucha llevada a cabo en Córdoba, que ya se definía no sólo contra la burocracia sino también contra el régimen, se evidenció en el interior

del mismo movimiento peronista. En el Plenario Nacional de Gremios Combativos, donde se habían reactualizado los programas obreros de La Falda, Huerta Grande y del 1º de Mayo de la CGT de los Argentinos, se resolvió emprender abiertamente la lucha contra el gobierno de Lanusse y en un acto posterior, en junio en el Luna Park, la delegación de Córdoba se presentó portando una bandera nacional de guerra atada a una rama de árbol.

En ese sentido, el sindicalismo peronista de Córdoba sufrió una permanente tensión entre, por un lado, mantener un proyecto como el esgrimido en el Plenario de Gremios Combativos, coherente con la experiencia de movilización vivida a partir del Cordobazo y, por otra parte, las exigencias de subordinarse a un plan político general decidido por Perón y los dirigentes nacionales. Esa tensión, producto de la particular experiencia anterior, fue decisiva en el papel desempeñado por los sindicatos de Córdoba para imponer una línea de izquierda en el partido —a pesar del peso que todavía mantenía la ortodoxia dentro de él y que se pondría de manifiesto en acontecimientos posteriores—, que se materializó en 1972 con el triunfo de la candidatura de Ricardo Obregón Cano y del dirigente de la UTA, Atilio López, para los cargos de gobernador y vicegobernador en las elecciones de 1973.

Dentro del espectro de posibilidades abiertas para las definiciones políticas, algunos sectores más radicalizados de los trabajadores de Fiat llegaron a plantear una salida revolucionaria. Sin embargo, esa alternativa no estuvo presente desde el origen en el “clasismo” de Fiat sino que puede ser considerada también como producto del proceso de movilización, de tomar parte en la acción dentro de una experiencia sindical particular, que había mantenido aislados a estos trabajadores de los organismos sindicales durante la década anterior pero no de los símbolos de la rebelión presentes en la cultura política cordobesa. Puede decirse que estos trabajadores recapturaron esos símbolos y los dotaron de un particular sentido al compás de lo que fue sucediendo también en otros sectores sociales que se plegaron al movimiento. En la opción “antiburocrática” escogida por el SITRAC y el SITRAM, que valoró negativamente hasta la propuesta de Agustín Tosco de conformar un frente popular con los sectores progresistas, se priorizó prote-

ger una identidad alternativa, de purismo obrero, frente a toda consideración estratégica, haciendo que el movimiento se volcara sobre sí mismo sin tomar demasiado en cuenta la identidad mayoritariamente peronista de los trabajadores.

Además, ésta aparecía ahora sólo como una entre las variadas y diferentes alternativas que se esgrimieron en la caldeada y movilizada Córdoba. Los diversos sectores comenzaron a dar forma a sus planes políticos y para algunos de ellos la radicalización que había servido para promover la acción colectiva podía, ahora, tornarse una amenaza. El peronismo sindical de Córdoba, sobre todo en su vertiente legalista, mantuvo la combatividad apuntalando y consiguiendo, como ya señalamos, el triunfo del ala política más de izquierda dentro del partido, pero no estaba dispuesto a apoyar alternativas que cuestionaran al peronismo como movimiento político representativo de los intereses de los trabajadores.

A la vez, hacia mediados de 1971, la transformación de la protesta en acción política significó también la primera declinación del ciclo de protesta obrera. Los datos ofrecidos por Brennan sobre la cantidad de paros y de horas perdidas en el complejo de IKA-Renault muestran una importante reducción de los conflictos durante el período 1971-1972. En esto habría incidido el hecho de que la confrontación comenzara a librarse preferentemente en la arena política y que, tras no aceptar los trabajadores de Fiat las propuestas de la empresa sobre el convenio de trabajo, fueran intervenidas militarmente las plantas y se procediera a retirar la personería gremial del SITRAC y del SITRAM y a expulsar a sus comisiones directivas y cuerpos de delegados en octubre de 1971. Estas medidas que limitaron la posibilidad de la protesta obrera no abortaron, sin embargo, la lucha política que a través de otros canales seguirían librando estos trabajadores.

El año 1972 no presentó exteriorizaciones importantes de protesta obrera, concentrándose las energías en la lucha política. En uno de los sindicatos más importantes de Córdoba, el SMATA, y como un ejemplo de la radicalización que sobrevino al Cordobazo, ganó las elecciones en el gremio en abril de 1972 un militante del PCR. René Salamanca, de la Lista Marrón, luego de catorce años de conducción peronista. En ese nuevo marco, los obreros de Fiat bregaron por el reconoci-

miento de su afiliación al ahora “clasista” SMATA de Salamanca, apoyados por una serie de plebiscitos en las plantas que así lo ratificaban, mientras se desarrollaban los apremios electorales. Sin embargo, luego de arduas tratativas, a fines de 1972 se adjudicó a la UOM la representación del personal de Fiat; las esperanzas de un cambio en esa situación fueron finalmente perdidas cuando el tercer gobierno peronista en 1973 no sólo ratificó esa decisión sino que emprendió una sistemática campaña para restablecer el verticalismo y aplacar todo intento disidente en la combativa Córdoba.

El régimen en retirada: puebladas y represión

En el contexto preelectoral de 1972 se combinó la lucha política llevada a cabo por los diferentes actores con la represión utilizada por el gobierno para sofocar las manifestaciones de rebelión popular y también con la escalada de violencia en ascenso desencadenada por las organizaciones armadas, algunas de ellas porque desconocían la vía electoral de acceso al poder y otras, como Montoneros, porque significaba una medida de refuerzo y de amenaza por si el gobierno no cumplía con sus promesas.

En efecto, las acciones de la guerrilla no se habían detenido y éstas, en cierta manera, aparecían también como definiciones políticas. La mayoría de las organizaciones no aceptaba la salida electoral como el mecanismo adecuado para el acceso al poder porque apostaban a la insurrección popular para garantizar sus objetivos o bien presuponían que la entrega del poder sería condicionada y con restricciones como lo había sido en otras oportunidades. Éste era el caso en especial de Montoneros, que había rechazado el GAN como una trampa del régimen. A pesar de los esfuerzos llevados a cabo por el sector político del movimiento justicialista, Montoneros se mantuvo, al menos hasta fines de 1972, en una posición intransigente. En esto tuvo que ver también la estrategia desplegada por el propio Perón que, mientras alentaba las conversaciones de los políticos, hacía también lo propio con las acciones de los sectores revolucionarios, como una forma de jaquear por todos los flancos al régimen.

Para mediados de 1972 la popularidad de Montoneros había crecido notablemente y puede considerarse ese momento como el más álgido en cuanto al apoyo encontrado en las masas, sobre todo a través de las estructuras de la Juventud Peronista. En junio se realizó un proceso de unificación de sus diversos grupos en una estructura nacional encabezada por Rodolfo Galimberti, quien se desempeñaba desde hacía unos meses y por designación de Perón como representante de este sector en el Consejo Superior Justicialista. Esto hacía que, más allá del número que efectivamente integraba los cuadros de la organización armada, el apoyo brindado por la juventud y otros sectores sociales parecía convertirlo en un incipiente fenómeno de masas.

En noviembre de 1972, luego de diecisiete años de exilio, Perón regresó al país y terminó de concretar la formación de un frente electoral encabezado por la fórmula Héctor Cámpora-Vicente Solano Lima, ante la imposibilidad de postularse él mismo como candidato. En realidad todos sabían que, como cantaba el pueblo, esto significaba “Cámpora al gobierno, Perón al poder” y con este anunciado triunfo parecía cerrarse la larga agonía abierta en 1955. Para entonces sólo algunos grupos radicalizados se oponían a participar de la salida electoral, aunque ésta no fue valorada de igual manera por todos los sectores. Para muchos representaba un fin en sí mismo, para otros era el primer paso para el establecimiento posterior de la patria socialista. En el largo proceso abierto con la destitución de Perón muchos costos sociales se habían pagado, sólo en el período 1966-1973 unas cien personas habían sido muertas y quinientas fueron encarceladas por razones políticas. Sin embargo, el esperanzado retorno, como se verá, no traería la paz social. Por el contrario, los antagonismos, el autoritarismo y la intolerancia presentes en la sociedad y en su cultura política conducirían a una espiral creciente de violencia en el intento por definir a quiénes correspondía ser los artífices del nuevo proyecto de país por construir, una vez liberados —al menos provisoriamente— de la tutela militar. Sin embargo, la “patria socialista” no sería posible y un nuevo golpe —el más terrible de la historia argentina— cerró definitivamente el ciclo que se había abierto en 1955 y con él todos los proyectos de construcción de un orden superador, de inclusión para todos y que permitiera superar las antinomias del pasado.

BIBLIOGRAFÍA

Amaral, Samuel, y Plotkin, Mariano Ben (comps.), *Perón del exilio al poder*, Buenos Aires, Cántaro, 1993.

Anzorena, Oscar, *Tiempo de violencia y utopía (1966-1976)*, Buenos Aires, Contrapunto, 1988.

Balve, Beba, y Balve, Beatriz, *El '69. Huelga política de masas. Rosariazo-Cordobazo-Rosariazo*, Buenos Aires, Contrapunto, 1989.

Brennan, James Paul, *El Cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba, 1955-1976*, Buenos Aires, Sudamericana, 1996.

———, y Gordillo, Mónica B., "Protesta obrera, rebelión popular e insurrección urbana en la Argentina: el Cordobazo", en *Estudios*, N° 4, revista del CEA de la UNC, Córdoba, julio-diciembre de 1994, pp. 51-74.

Ceballos, Carlos, *Los estudiantes universitarios y la política (1955-1970)*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, Biblioteca Política N° 103, 1985.

Crenzel, Emilio, *El Tucumanazo*, Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, 1997.

Cueva, Cecilia de la, y Sribano, Adrián, "Catamarcazo: protesta y acción colectiva en los años '70", ponencia presentada al XXI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), San Pablo, Brasil, 1997.

Gillespie, Richard, *Soldados de Perón. Los Montoneros*, Buenos Aires, Grijalbo, 1978.

Gordillo, Mónica B., "Los prolegómenos del Cordobazo: los sindicatos líderes de Córdoba dentro de la estructura de poder sindical", en *Desarrollo Económico*, vol. 31, N° 122, julio-septiembre de 1991.

———, *Córdoba en los '60: la experiencia del sindicalismo combativo*, Córdoba, Dirección General de Publicaciones de la UNC, 1996.

———, "Cultura y formas políticas de resistencia de los trabajadores peronistas en los '60", en *Cuadernos de Historia. Serie Economía y Sociedad*, Córdoba, Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades UNC, A. I, N° 1, noviembre de 1997, pp. 47-84.

———, "Movimientos sociales e identidades colectivas: repensando el ciclo de protesta obrera cordobés de 1969-1971", en *Desarrollo Económico*, vol. 39, N° 155, octubre-diciembre de 1999, pp. 385-408.

James, Daniel, *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina. 1946-1976*, Buenos Aires, Sudamericana, 1990.

Ollier, María Matilde, *El fenómeno insurreccional y la cultura política (1969-1973)*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, Biblioteca Política Nº 145, 1986.

Salas, Ernesto, *La resistencia peronista: la toma del frigorífico Lisandro de la Torre*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, Biblioteca Política Nº 297 y 298, 1990.

Tarrow, Sidney, *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, Madrid, Alianza, 1997.

Terán, Oscar, *Nuestros años sesenta*, Buenos Aires, Puntosur, 1991.

IX



El populismo imposible y sus actores,
1973-1976

por MARISTELLA SVAMPA



Aspecto de la Plaza de Mayo durante la asunción de la fórmula Perón-Perón, octubre
1973.



Entre 1973 y 1976 la Argentina vivió uno de los períodos más controvertidos y complejos de su historia reciente, aquel que muestra el trágico pasaje de una sociedad movilizada, caracterizada por una firme voluntad de cambio, aunque recorrida por la inquietud social, el autoritarismo y la violencia política, a una sociedad desarticulada, sumergida en una crisis plural, a la vez social y política.

Hablando rigurosamente, el ciclo de movilización se abre en 1969, con el Cordobazo, la protesta social más importante realizada contra el gobierno militar de Onganía, y se cierra en 1976, con el golpe de Estado militar que desplaza el gobierno de Isabel Perón. Sin embargo, el período que va de 1973 a 1976 presenta una especificidad propia, pues encarna como pocos un punto de máxima condensación de tensiones y contradicciones, ilustradas de manera acabada por el desencuentro que se produce entre la sociedad civil movilizada y el líder recién vuelto del exilio; por la imposibilidad de implementar con éxito el modelo populista del "pacto social"

así como de encapsular todo ese movimiento social dispar dentro de los tradicionales moldes nacionales y populares; en fin, por la progresiva lógica de exclusión que se va difundiendo en la sociedad argentina y que alcanzaría verdaderos rasgos demenciales durante la última dictadura militar. Por último, la época expresa también el clímax de un *ethos* específico, consustancial a la acción de los actores centrales de la sociedad movilizadora de los años setenta, procedentes de las clases medias y de las clases trabajadoras.

El período que nos ocupa registra tres momentos de inflexión insoslayables, marcados por las presidencias constitucionales del período: el primero, el de la breve presidencia de Héctor J. Cámpora, entre el 25 de mayo y el 12 de julio de 1973, corresponde al momento de la movilización generalizada y triunfalista de las fuerzas sociales que asocian el regreso de Perón con la posibilidad de introducir cambios mayores. Aunque los sectores movilizadores no coinciden en los modelos de cambio, todos ellos se alimentan de una contracultura que impugna el régimen político así como los modelos sociales y los estilos culturales vigentes. En síntesis, este primer momento coloca en el centro de la escena la imagen de *una sociedad movilizadora para el cambio* y tiene por actores principales a la juventud, a sectores del sindicalismo combativo y a intelectuales ligados a la modernización desarrollista.

El segundo momento se extiende desde el mandato provisional de Raúl Lastiri, una vez concretada la renuncia de Cámpora, en julio de 1973, hasta la muerte de Juan D. Perón, el 1^o de julio de 1974. Esta fase confronta más claramente a los diferentes actores con *las contradicciones propias del populismo en el poder. La imagen dominante del período es la de la guerra interna: peronistas versus peronistas*. El árbitro de este dramático juego es el propio Perón. Un primer balance de este proceso da cuenta cabal de la imposibilidad de implementar el modelo nacional-popular, tanto en el frente político como en el económico. Su análisis nos permitirá preguntarnos acerca de las dificultades de la institucionalización de las fuerzas sociales movilizadas en una época en la cual el peronismo ocupa la casi totalidad del espacio político argentino. Veremos también cómo luego de la muerte de Perón resulta notorio el cierre de los canales institucionales a partir de los cuales se expresaban importantes actores sociales del período.

El tercer momento corresponde a la etapa de *la agonía y disolución del modelo populista*, durante la gestión de Isabel Perón, luego de la desaparición física del líder y de la rápida desarticulación de las fuerzas sociales anteriormente movilizadas (julio de 1974-marzo de 1976). La imagen fuerte del período es *la crisis plural, política, social y económica*. Importa señalar entonces quiénes son los actores políticos y sociales que cobran centralidad en este contexto: la acción gravitante del *sindicalismo* peronista tradicional y de sectores de extrema derecha comandados por el ministro de Bienestar Social, José López Rega; la progresiva vacancia de autoridad, la opción por el militarismo por parte de la *guerrilla*; por último, dar cuenta del avance de los *militares* hacia el poder, acompañado de una estrategia de “relegitimación” a partir del combate contra la “subversión”.

Pese a que cada momento posee rasgos específicos, atravesado por lógicas diferentes y una diversidad de actores sociales y políticos, el análisis de esas diferencias no puede hacer la economía del estudio del marco común de referencia que estructura la conducta de los actores, a saber: la crisis y el colapso del modelo populista.

La hora de la juventud maravillosa

Durante décadas, uno de los rasgos más resaltantes de la Argentina fue la división entre el sistema de poder y la sociedad civil. Esta brecha fue acentuándose hacia fines de los años sesenta, durante la Revolución Argentina, encabezada por el general Onganía, un ensayo corporativo en el cual el autoritarismo y la represión política iban acompañados por un notorio proceso de modernización, tanto económico como cultural.

La modernización cultural tuvo como actor central a las clases medias urbanas y abarcó numerosos aspectos de la vida cotidiana que incluían desde nuevos hábitos de consumo especialmente orientados al sector juvenil, así como el cuestionamiento de la moral sexual y familiar tradicional, el nuevo rol de la mujer y la divulgación del psicoanálisis, hasta aquellas dimensiones asociadas a las vanguardias y la experimentación artística (véase el capítulo VII).

Pronto la apertura cultural iría articulándose con la exigencia del compromiso político, invadiendo no sólo la discusión política sino también la producción académica, literaria, artística y musical. Determinados hitos políticos, como la descolonización de los países del Tercer Mundo y, más cercanamente, la Revolución Cubana (1959), fueron instalando en el terreno de lo fáctico el debate en torno de la revolución, contribuyendo así al proceso de radicalización ideológica que se profundizaría durante los gobiernos militares que se sucedieron entre 1966 y 1973 (véase el capítulo I).

Hacia el final de la experiencia militar, en un clima enrarecido por la violencia política y por los rumores de un posible golpe de Estado, que tendría por objeto impedir la candidatura de Perón, en julio de 1972 éste organizó con otros partidos el FRECILINA (Frente Cívico de Liberación Nacional), el que fue ampliado un poco más tarde y se convirtió en el FREJULI (Frente Justicialista de Liberación). Por último, aunque Lanusse intervino para garantizar que Perón no sería proscripto, decidió establecer la llamada "cláusula de residencia", que prohibía expresamente la candidatura de aquellos ciudadanos que no estuvieran en el país antes del 25 de agosto de ese año, así como inhibía a funcionarios del gobierno con aspiraciones electorales que no renunciaran a sus cargos antes de esa misma fecha. En consecuencia, la cláusula excluía tanto a Perón como al propio Lanusse. Para el primero implicaba la obligación de nombrar un candidato-vicario; para el segundo, conllevaba la renuncia definitiva a sus conocidas pretensiones presidenciales.

Otro de los factores importantes de esta difícil transición fue la estrategia política adoptada por Perón, quien no vaciló en utilizar la creciente amenaza de la guerrilla urbana en su pulseada política con las Fuerzas Armadas y, más específicamente, contra Lanusse. Así, su lenguaje guerrillero se convirtió en un recurso disuasivo eficaz frente a unas Fuerzas Armadas educadas en la doctrina de la seguridad nacional y siempre reacios a la alternancia del poder, al tiempo que terminó por situar al propio Perón como la única alternativa capaz de garantizar la paz social amenazada. Fue por eso que, pese a los pedidos del gobierno militar, Perón no sólo no condenó explícitamente a las organizaciones armadas, sino que hizo todo lo posible por alentar su accionar.

En esta línea se sitúa una larga entrevista concedida en 1971 al grupo Cine de Liberación, que tendría gran influencia en la juventud del período. Allí Perón realizaba un llamamiento explícito a la juventud, planteando la necesidad de la “actualización doctrinaria” y el “trasvasamiento generacional” en el movimiento justicialista. Asimismo, en ese reportaje caracterizaba a las organizaciones armadas como “formaciones especiales”, concediéndoles el comando táctico en el teatro de operaciones y reservándose para sí mismo el rol de la conducción estratégica. Por último, Perón enunciaba tres vías para la lucha: la guerra revolucionaria, la insurrección y la normalización institucional. “La guerra revolucionaria”, deslizada a manera de clara advertencia contra el *establishment* militar, “era quizás un camino si no había otro camino”.

En realidad, la justificación de “la violencia popular” se hallaba expandida en vastos sectores progresistas de la sociedad, tuvo su punto de cristalización en el Cordobazo y luego se reforzó por la respuesta represiva del gobierno militar. En efecto, la profundización de la represión política y social no hizo más que confirmar que la violencia era un recurso válido, y quizás el único posible, contra un régimen autoritario y de más en más ilegítimo. Esta aceptación se ve reflejada por los resul-

Llamamiento de Perón a la juventud

“Ellos siempre piensan y titubean por falta de experiencia, yo siempre les digo que le metan nomás, ¿por qué? Porque peor que nosotros, los viejos, no lo van a hacer. Vea el mundo que les dejamos. Por macanas que hagan, peor que nosotros, los viejos, no lo van a hacer (...) Se van a equivocar, sí, bueno. Pero nosotros también nos hemos equivocado en muchas cosas, lo importante es que sepan bien dónde hay que navegar. Siempre poner el punto hacia los grandes objetivos; si eso se hace, el futuro está asegurado. El hecho de que en este momento el peronismo sea más fuerte que antes está indicando que el Movimiento Peronista es un movimiento del futuro.”

Fuente: J. D. Perón, *Actualización política y doctrinaria para la toma del poder* (entrevista realizada por el grupo Cine de Liberación, 1971).



El obispo de Neuquén, Jaime de Nevares, oficia misa en un barrio obrero junto a Carlos Mugica, 1971.

tados de una encuesta realizada por IPSA en noviembre de 1971, que daban cuenta de que el 45% de la población bonaerense justificaba la violencia guerrillera, mientras que en Rosario el porcentaje era del 51% y en Córdoba alcanzaba al 53%. En suma, la apelación a la “violencia desde abajo” encontraba una clara resonancia en diferentes sectores de la sociedad argentina, cubriendo un amplio arco de acciones que iba desde la protesta social hasta las espectaculares acciones guerrilleras.

Hacia fines de 1972 el encuentro entre una sociedad movilizadada y el líder proscripto tuvo un nuevo giro, marcado por la peronización del heterogéneo campo de las izquierdas. Este conjunto reunía diferentes ramas del sindicalismo, vastos sectores del mundo intelectual y artístico —muchos de los cuales habían alimentado férreas convicciones antiperonistas hasta

hacía poco tiempo—, amplias franjas de la juventud, sectores social-cristianos, como el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo, y gran parte de la nueva guerrilla urbana. En efecto, ¡cuántos intelectuales de izquierda podrían suscribir las expresiones vertidas por el escritor Julio Cortázar, antiperonista en los '50, filoperonista en los '70, quien había proferido con reciente convicción que el FREJULI era un “movimiento visceral de todo el pueblo argentino hacia el reencuentro consigo mismo”! ¡Cuántos jóvenes había que sólo conocían el peronismo desde las entrañas mismas del antiperonismo y que en esa hora pugnaban por ser los primeros en vitorear al líder en nombre de una utopía situada en la ambigua intersección entre la Patria socialista y la Patria peronista! Todos reclamaban el retorno de Perón como condición necesaria para cualquier transformación social y política, y aun aquellos sectores que no tenían ningún interés en “peronizarse” consideraban que sólo su regreso haría posible la pacificación nacional.

Y aun cuando nadie tuviera muy en claro cuáles serían las estrategias institucionales que adoptaría el líder, el horizonte político argentino indicaba una única alternativa: sólo el retorno de Perón podía salvar al país del caos en el cual tendía a sumergirse. En el lenguaje enfático de la época, Perón se había convertido en “el Hombre”: expresión en la que convergían de manera elocuente una apelación mayúscula a la masculinidad con la figura carismática del Mesías. En suma, todo indicaba que Perón era el único líder capaz de aglutinar una gran parte del espectro de las fuerzas progresistas y revolucionarias, donde convergían posiciones cristianas, nacionalistas y de izquierda.

La juventud hacia la militancia política revolucionaria

El ciclo de movilización abierto por el Cordobazo había lanzado a los jóvenes a la arena de la protesta. En 1971, poco después del secuestro y la muerte de Aramburu, la agrupación Montoneros implementaría una estrategia política dirigida a la captación y encuadramiento de la juventud que habría de tener hondas consecuencias. Así, la agrupación, que en sus recientes comienzos no sobrepasaba la veintena de militantes, se convirtió en la organización político-militar hegemónica dentro del

colectivo de la guerrilla peronista (FAP, FAR y Descamisados).

Atento a dicho proceso, ese mismo año, Perón decidió incorporar en el Consejo Nacional Justicialista a Rodolfo Galimberti y Francisco Julián Licastro, ex teniente del Ejército, como representantes de la rama juvenil. Pero fue Galimberti, que llegó a Montoneros desde la Juventud Argentina para la Emancipación Nacional (JAEN), quien asumió su representación virtual ante Perón, constituyéndose en una de las piezas clave a la hora de la convocatoria y organización de la Juventud Peronista.

El proceso se desarrolló de manera vertiginosa. En noviembre de 1972 se organizó el primer acto de unidad de la Juventud Peronista en el Club Defensores de Cambaceres de Ensenada. En junio de ese mismo año se realizó un nuevo acto en la Federación de Box, en el cual estuvieron presentes las diferentes corrientes de la JP. La asistencia de unas diez mil personas puso de manifiesto el rápido crecimiento, así como el claro predominio de la línea montonera. El único dirigente político nacional que concurrió en carácter de orador fue Héctor Cámpora, el delegado de Perón, quien anunció "el fin del sistema demoliberal, burgués, capitalista". Un mes más tarde, dicha estrategia daría sus primeros frutos a través de la formación de las JP Regionales, una estructura organizativa de superficie, coordinada por Montoneros, que habría de tener un gran protagonismo en la vida política de los años siguientes.

Así, lo propio del período es esta singular e intensa experiencia de articulación político-ideológica entre una sociedad movilizadora, sobre todo en sus sectores juveniles, y una agrupación armada. Gracias a la mediación de la Juventud Peronista, este vertiginoso proceso convertiría a Montoneros, aun de manera fugaz, en una de las organizaciones de masa más poderosas del continente. La época coincidió con la ampliación del compromiso militante que, de estar circunscripto al activismo estudiantil, pasó a volcarse a los barrios y a las villas. Los repertorios de acción abarcaban desde las tradicionales manifestaciones populares hasta la violencia guerrillera, pasando por la guerra de consignas y las pintadas. De modo que la experiencia política de los militantes juveniles fue desarrollándose dentro de estructuras bastante organizadas, generalmente cerradas, siempre jerárquicas. Su formación política fue fuerte-

mente desigual, caracterizada por un discurso saturado de referencias a la palabra del líder, sobre todo a las cartas, declaraciones y libros más recientes. En suma, la acción política de los militantes juveniles se forjó al calor de las movilizaciones, en el enfrentamiento con la dictadura, pero, sobre todo, por contraposición con los “viejos” militantes sindicales, identificados con el aparato burocrático y las estrategias de negociación y presión vandoristas.

La “montonerización” ocurrida entre 1972 y 1973 (la época del “engorde”) se tradujo, a su vez, en una política de afiliación masiva al Partido Justicialista. Se abrieron locales partidarios, se multiplicaron las unidades básicas, se intensificaron las movilizaciones barriales y villeras, en fin, se lanzó también la campaña “Luche y vuelve” a través de las pintadas. Se formó un frente de masas, sintetizado en la denominada “Tendencia Revolucionaria”, que incluía, además de la JP, el Movimiento de Villeros Peronistas (MVP), la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), la Juventud Universitaria Peronista (JUP), la Agrupación Evita de la Rama Femenina (AE) y el Movimiento de Inquilinos Peronistas (MIP).

Uno de los hechos más resonantes del período fue la masacre de Trelew, acaecida en agosto de 1972. Ésta ocurrió luego de que los presos políticos confinados en el penal de Rawson, entre los cuales se contaban importantes líderes de las organizaciones armadas de izquierda, y en el marco de un vasto operativo montado por las FAR y el ERP, tomaron la cárcel y veinticinco de ellos lograron escapar hasta el aeropuerto de Trelew. Sólo seis, todos altos dirigentes de las organizaciones armadas, pudieron abordar un avión comercial previamente tomado que sería desviado hacia Chile. El resto fue atrapado y una semana después, arguyendo un intento de fuga, dieciséis de ellos fueron asesinados en la base naval Almirante Zar en la cual habían sido alojados. Sólo tres sobrevivieron milagrosamente a las heridas. El episodio generó un gran malestar en la opinión pública y el recuerdo de la masacre, bajo la figura del martirio, fue una de las banderas de lucha más sentidas durante la campaña electoral liderada por los sectores movilizados. Así, a las fuertes consignas que levantaba la JP, entre las cuales se destacaba, como hecho fundador, la reivindicación de la ejecución de Aramburu (“Duro, duro, duro, éstos son los Montoneros que mataron a

Aramburu”), se unió la promesa de vengar a los muertos de Trelew, alimentando la lista de los (jóvenes) mártires del movimiento, encabezada por el general Juan J. Valle.

En noviembre de 1972 Perón designó como secretario general en la estructura del Comando del MNJ a Juan Abal Medina, hermano de Fernando, uno de los fundadores y primeros caídos de Montoneros. Aunque Abal Medina era un partidario de la vía institucionalista y no tenía una relación orgánica con la agrupación armada, su solo nombramiento aportaba un nuevo gesto de reconocimiento simbólico del líder a la lucha entablada por Montoneros.

El 17 de noviembre Perón regresó luego de diecisiete años de ausencia. Durante su breve estadía (veintisiete días), la residencia de Gaspar Campos, en Vicente López, fue lugar de incesantes peregrinaciones y desfiles de peronistas, entre los que se destacaron las largas columnas de la Juventud Peronista,



Acto en Atlanta en el primer aniversario de los muertos en Trelew, 22-8-1973.

cerca de 100.000 militantes. El protagonismo de la juventud se acentuaría aún más durante la campaña electoral de 1973, como respuesta a la orden de “ganar la calle” que había lanzado la Secretaría de Prensa, en manos de la Tendencia. Tocaría a la JP, luego de un primer rechazo a la candidatura de la fórmula Cámpora-Solano Lima, acuñar también la célebre consigna “Cámpora al gobierno, Perón al poder”. Finalmente, durante la campaña, se aceptarían los vínculos privilegiados de la juventud con el delegado y candidato Héctor Cámpora, apodado “el Tío”.

Ahora bien, el breve gobierno de Cámpora se caracterizaría por el recrudecimiento de la violencia y por la acritud de los debates en torno de las diferentes concepciones del peronismo, sea la experiencia del gobierno nacional-popular, sea la de una vía “revolucionaria”, o para decirlo con vocablos de la época: la opción entre la “Patria peronista” o la “Patria socialista”.

EL PRIMER MOMENTO: LA CONSAGRACIÓN DE LA JUVENTUD

El 11 de marzo de 1973 votaron 12 millones de ciudadanos, entre los que se incluían 3 millones de nuevos votantes. La fórmula del FREJULI obtuvo el 49,6%; la UCR, el 21,29%. A pesar de no haber alcanzado el 50% de los votos, la UCR reconoció la legitimidad del triunfo y no hubo segunda vuelta para la fórmula presidencial. Sí la hubo en quince provincias, y también en Capital Federal, donde se impuso la UCR y Fernando de la Rúa ganó una banca de senador.

El triunfo electoral se festejó en todo el país. Antes de la medianoche de ese “día peronista”, se levantó la prohibición de las manifestaciones, lo que produjo el retiro de los efectivos policiales. Una marea de manifestantes desembocó en la sede del comando de campaña, en la calles Oro y Santa Fe de la Capital, donde estaba apostado Cámpora, bajo un póster de Perón, escoltado por Juan Abal Medina y el dirigente metalúrgico Lorenzo Miguel. Una miríada de cánticos festivos y agresivas consignas de lucha convergían en una sola voz.

Sin embargo, no todos los días serían tan peronistas como éste para la “gloriosa Juventud”, que había llegado al clímax



Héctor J. Cámpora en un acto durante la campaña electoral.

de su consagración política. Sólo un mes después de las elecciones tuvo que soportar una de sus primeras amputaciones: en el acto fundacional de la UES, Galimberti, acompañado por Abal Medina, pronunció un discurso incendiario llamando a la creación de milicias populares. La arenga se produjo en un momento en el cual las acciones guerrilleras habían recrudescido: copamiento del ERP en la Central Atómica de Atucha; la toma de Villa Allende, en Córdoba, por parte de las FAR; secuestros y ejecuciones de miembros de las Fuerzas Armadas realizados por el ERP y por Montoneros. La ira de Perón no

tardó en caer sobre los jóvenes dirigentes: tanto Galimberti como Abal Medina fueron conminados a presentarse en Madrid, donde se realizó una suerte de cónclave en el cual participaron representantes de las diferentes ramas del peronismo, entre ellos la ortodoxa Norma Kennedy, por la rama femenina, y el coronel Osinde (quien tendría una siniestra responsabilidad en los trágicos sucesos acaecidos meses después en Ezeiza), que terminó con la degradación de Galimberti. El hecho también signaría el comienzo del destierro político del entonces secretario general del MNJ, Abal Medina, quien recibiría la orden de “no innovar” hasta la llegada de Perón al país.

El 25 de mayo de 1973 fue un día de jubiloso desborde. Asistieron a la ceremonia de asunción de Cámpora una cohorte de representantes de gobiernos latinoamericanos, entre los cuales se destacaban el presidente chileno Salvador Allende y su par cubano, Osvaldo Dorticós, fervorosamente saludados por la multitud a través de cánticos y consignas de lucha. Luego de que Cámpora recibiera la banda presidencial, en vez del

Himno Nacional, se entonaron las estrofas de la Marcha peronista. El nuevo presidente pronunció un duro discurso en el cual proclamó llegada “la hora de Perón”, así como rindió homenaje a la “juventud maravillosa” que, “en los momentos decisivos, supo responder a la violencia con la violencia y oponerse, con la decisión y el coraje de las más vibrantes epopeyas nacionales, a la pasión ciega y enfermiza de una oligarquía delirante. Cómo no ha de pertenecer también a esa juventud este triunfo”, se preguntaba el presidente electo, “si lo dio todo—familia, amigos, hacienda, hasta la vida— por el ideal de una Patria Justicialista. Si no hubiese sido por ella, tal vez la agonía del régimen se habría prolongado”.

La jornada festiva estuvo salpicada por algunas refriegas con la policía y otros incidentes de neto corte simbólico. Así, el secretario de Estado de los Estados Unidos, William Rogers, no pudo presenciar el acto de asunción del mando, porque una multitud que coreaba consignas antiimperialistas le impidió llegar hasta la sede del poder. Los miembros de la Junta Militar tuvieron que abandonar el lugar en helicóptero. Una pintada escrita en aerosol adornaba una de las paredes de la Casa Rosada, a la que alguien había rebautizado “Casa Montonera”. No sólo la histórica Plaza de Mayo, sino también el mismísimo Salón Blanco se llenaron de jóvenes con camisetas floridas y desabotonadas, vestidos de blue jeans y camperas, con los dedos abiertos en “V”. En medio de un confuso episodio, Juan Carlos Dante Gullo, uno de los delegados regionales y dirigente de la JP, tomó a su cargo la seguridad del acto. Los siete delegados de las regionales de la JP aparecieron en los célebres balcones junto con Cámpora, saludando a la multitud que no cesaba de vitorear la consigna: “Se van, se van y nunca volverán”. Al anochecer, el foco de atención se trasladó hasta la cárcel de Villa Devoto, donde se hallaban gran parte de los presos políticos de la dictadura, la mayoría ligados a organizaciones armadas de izquierda. Acompañados por una cada vez más nutrida multitud, se exigía su liberación. Luego de apresuradas negociaciones, Cámpora resolvió firmar el indulto presidencial otorgando la amnistía general a los presos políticos, que sería aprobada dos días después por el Parlamento.

Este hecho, conocido con el nombre de Devotazo, al cual el senador peronista Vicente Saadi no vaciló en caracterizar como

“una segunda toma de La Bastilla”, merece algunas aclaraciones. Por un lado, el Devotazo asumió el carácter de un hecho irresistible, una expresión de la fuerza de las cosas, natural corolario de un proceso histórico-social. Por el otro, legitimó, sin grandes distinciones, todas aquellas formas de resistencia desarrolladas en contra de la dictadura. Desde esta perspectiva, conllevaba la justificación de la violencia de la guerrilla como respuesta a la violencia del Estado. Por último, para las Fuerzas Armadas y otros sectores de la derecha, no sólo ponía en evidencia la orientación ideológica del gobierno recién asumido, sino que los confrontaba a las futuras consecuencias de la liberación de los principales dirigentes de las organizaciones armadas que venían constituyéndose en los últimos años.

Mientras tanto, un clima de fiesta, plagado de declaraciones

ampulosas y enfáticos juramentos, perfumaba la primavera camporista y colocaba en el centro de la acción épica a la Juventud Peronista, la que aparecía, según palabras de Cámpora, como *vanguardia de defensa del pueblo argentino*. Una muestra de este sentimiento aparece en las declaraciones del triunfante candidato a vicegobernador de Córdoba, Atilio López: “Yo quiero señalar concretamente esta noche, donde ya mi pueblo de Córdoba, la clase trabajadora, nuestra gloriosa juventud, la vieja guardia peronista y todo el pueblo me han consagrado vicegobernador: yo, como hombre del movimiento obrero, ya que no vengo a pedir ni vengo a plantear



La cárcel de Villa Devoto en vísperas de la liberación de los presos políticos en mayo de 1973.

la necesidad del voto, *vengo a comprometerme ante mi pueblo para decir que si no sé cumplir, esa gloriosa juventud sepa ajusticiarme*". En este período, los peronistas ligados al ala izquierda asocian la juventud a una gesta heroica, y son pocos los que entrevén el horizonte oscuro que los acecha. Basta recordar que el propio Atilio López, quien provenía de las filas del combativo sindicalismo cordobés, sería asesinado más tarde por los escuadrones de extrema derecha, la Triple A, comandada por el ministro López Rega desde su despacho en Bienestar Social.

Entre el movimiento y la institución

La composición del gabinete que acompañaría a Cámpora daba cuenta del conglomerado de organizaciones y tendencias heteróclitas que caracterizaba al movimiento: el Ministerio de Trabajo era ocupado por José Otero, sindicalista y hombre de la UOM; el peronismo histórico estaba representado por dos hombres de centro: Antonio Benítez en Justicia y Jorge Taiana en Educación. El sillón del Ministerio de Economía fue ocupado por José Ber Gelbard, paradigma de la CGE y responsable de implementar el "pacto social". El joven Esteban Righi, estrecho colaborador de Cámpora y allegado a la JP, ocupó el Ministerio del Interior, mientras que Juan Carlos Puig, también cercano a la Tendencia, se haría cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por último, el sibilino y cada vez más influyente secretario personal de Perón, José López Rega, asumió el Ministerio de Bienestar Social.

Por estatuto, la distribución de los cargos preveía un 25% para cada rama del partido (la política, la sindical, la femenina y la juvenil). Sin embargo, la JP, que nunca dejó de vivir con cierta incomodidad y hasta contradicción la disputa por la distribución del poder, sólo obtuvo el 18%. Dos gobernadores de las provincias más importantes, Oscar Bidegain, en Buenos Aires, y Ricardo Obregón Cano, en Córdoba, tenían afinidades con la Tendencia. También era el caso de un bloque de diputados nacionales, entre los cuales se encontraba Nilda Garré. Por otro lado, el campo de la cultura y, más claramente, el ámbito universitario, aparecían como claramente hegemonizados por la Tendencia.

Recordemos también que, además de las leyes antirrepresivas que sancionó apresuradamente el Parlamento, otros hechos marcarían la coloración ideológica inicial del gobierno, como el discurso del ministro de Interior, Esteban Righi, a la Policía Federal, éste redefinió los deberes del cuerpo, exclamando que “el pueblo ya no es más el enemigo sino el gran protagonista”, o aquel otro del embajador Vázquez frente al Foro de las Naciones Unidas, anunciando los nuevos lineamientos tercermundistas de la política internacional.

Pero, pese a la modulación radical que se percibe en los momentos políticos iniciales, pese al vínculo privilegiado que la Juventud había desarrollado con el presidente vicario, el gobierno camporista estaba lejos de proyectar un escenario único en resonancia con estos actores. En efecto, más allá de la puja inevitable por los espacios de poder, el gran debate que comienza a instalarse en esa época, multiplicando las escenas de conflicto, *es la demanda de institucionalización del movimiento*, planteada primero con hesitaciones desde el seno del gobierno camporista, expresada cada vez con mayor firmeza por el propio Perón, exigida, en fin, por la realidad misma de las alianzas económicas establecidas. En suma, de lo que se trataba, a pesar de las oscilaciones iniciales, era de plegar la acción de los actores involucrados a las determinaciones del gobierno recién asumido, en última instancia, a la voluntad del propio Perón.

La demanda de institucionalización atravesaba tres escenas: la propiamente económica, donde jugaban su disputa los actores corporativos; la política, en la cual se trataba de definir la relación con las organizaciones armadas peronistas; por último, la específicamente social, que daba cuenta de una sociedad movilizada cuya participación desbordaba claramente los canales previstos por la institucionalización.

La primera gran escena coloca en el centro de las preocupaciones del gobierno nada menos que la posibilidad misma de aplicación del modelo populista, a través de la figura de la concertación social. En efecto, no hay que olvidar que, desde sus orígenes, el modelo nacional-popular implicaba una determinada forma de intervención del Estado, regulador de los mecanismos de redistribución del ingreso nacional entre, por un lado, trabajadores representados por los sindicatos y, por otro

lado, los sectores empresariales. Aludía entonces, y antes que nada, a una alianza de clases, sólo realizable dentro del marco de un “pacto social”. Éste había sido el modelo que Perón había implementado con éxito durante sus dos primeros mandatos y no eran pocos los que guardaban un recuerdo idealizado de la época. Pero el paso del tiempo acusaba diferencias notorias entre ambas épocas: si hacia 1950 la participación del sector asalariado en el ingreso nacional había alcanzado su punto máximo con el 46,52%; en 1971, ésta ya se había reducido al 38%. A esto hay que añadir que los límites de las posibilidades redistributivas de este modelo habían ido operándose en un contexto histórico en el cual, paradójicamente, los sindicatos habían desempeñado un rol importante. Luego de la caída del peronismo, éstos habían extendido sus esferas de representación, convirtiéndose en un poderoso actor político y social, cuyo peso en la puja distributiva habría de ser, en muchos casos, independiente de la coyuntura económica.

El “pacto social”, suscripto por la CGT, la CGE y el gobierno, establecía el congelamiento de precios y la suspensión de negociaciones colectivas durante dos años, así como el reajuste de tarifas públicas y sólo un aumento del 20% en los salarios. Para lograr su concreción, Perón había tenido que desplegar toda su capacidad de presión e influencia sobre las huestes sindicales, sobre todo a través del leal secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci. Sumemos a esto que el incremento salarial había defraudado las amplias expectativas de la clase trabajadora, mayoritariamente peronista. En fin, los hechos posteriores, signados tanto por el aumento de la conflictividad social en un contexto de puja intersectorial como por la desaparición física del líder y el recrudecimiento de la violencia, terminarían por sellar el fracaso del pacto populista.

En segundo lugar, la vía de la normalización institucional, identificada de ahora en más con el gobierno electo, evocaba un núcleo irresuelto en la compleja relación entre las organizaciones armadas peronistas y Perón. Una vía que aquéllas no terminaban de rechazar del todo, aunque fuera relativizada tanto en los hechos como en las declaraciones. Así, un día antes de la asunción del gobierno, las FAR y Montoneros habían dado a conocer un documento conjunto que separaba el “gobierno” del “poder”, manifestando su apoyo al gobierno elec-

to, pero afirmando la continuidad de la lucha armada. El 13 de junio, Cámpora recibiría a los principales dirigentes de las organizaciones armadas peronistas. La reunión no tenía otro fin que exigir el acatamiento al nuevo orden, lo cual conllevaba, en primer término, la aceptación del “pacto social” propuesto por el ministro Gelbard, pieza fundamental del gobierno populista. De esta manera, por primera vez, las organizaciones armadas peronistas experimentarían la obligación de ajustarse a los moldes nacional-populares que disponía el gobierno, aceptación tan renuente y suspicaz como la que desplegarían los actores corporativos del período, especialmente la CGT.

Lejos de confiar en la conducción “burguesa” de Perón y en el carácter policlasista que ofrecía el Movimiento Nacional Justicialista, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), organización armada de origen trotskista procedente del PRT, continuaría desarrollando acciones, aunque se encargaría de aclarar que no llevaría a cabo ataques “a las instituciones gubernamentales ni contra ningún miembro del gobierno del presidente Cámpora”.

Pero la cuestión de la “normalización institucional” debió afrontar un nuevo y tercer flanco de conflicto, más de orden social que político, que remitía a la amplia movilización social que había seguido casi de inmediato a la transmisión del mando, produciendo —como ha señalado Flavián Nievas— un rápido desborde de los canales institucionales existentes. Este proceso de movilización es ilustrado de manera paradigmática por las “tomas”, hechos de acción directa que llevaron a la ocupación de hospitales, escuelas, universidades, varias comunas del interior, diarios, canales de televisión, organismos oficiales, fábricas, inquilinatos, entre otros. Estas acciones no respondían a una conducción unificada e involucraban actores de variado tipo, desde individuos desarraigados hasta funcionarios de gobierno, desde activistas y simpatizantes del ala izquierda hasta, en algunos casos, militantes de la derecha peronista. Muchas eran realizadas en nombre de la lucha “anticontinuista”; otras, con el objetivo de desarrollar propaganda armada. La movilización alcanzó picos de verdadera insurrección; así, entre el 4 y el 15 de junio se produjeron casi 500 tomas de distinto tipo en todo el país y se han calculado unas 2.000 para el período de referencia.

Las tomas fueron muy difundidas por los órganos de prensa, muchos de los cuales no ocultaban el desagrado que les provocaba la inacción del gobierno. Aunque el ministro Righi había calificado a esos hechos como “saludables”, al considerarlos como efecto de la descompresión política, es claro que la situación habría de generar ambivalencias que prontamente se convirtieron en dilemas insostenibles. Las tomas marcaron entonces un primer punto de conflicto y, a la vez, de separación entre el peronismo en el poder y la sociedad movilizada. Por un lado, los actores intervinientes en las tomas coincidían en afirmar que el gobierno popular abría un nuevo período histórico. Así, sucedía que muchas de las ocupaciones se realizaban en nombre del gobierno popular y, en numerosos casos, con la genuina intención de fortalecerlo. Por otro lado, a través de ellas, comenzaban a advertirse notorias discrepancias acerca del contenido y del sentido que había que dar a la etapa que se abría. Diferencias percibidas con claridad, ya que muchos de los protagonistas de estos eventos, desde el ala izquierda, no podían traducirlas en términos claramente programáticos e institucionales. Por su parte, como hemos dicho, el gobierno, aun buscando a tientas la vía de la institucionalización, tenía un claro programa que era además una doctrina: el pacto social.

Los grandes actores corporativos no tardaron en manifestar su disconformidad respecto de las tomas. Por supuesto que la “tolerancia complaciente” del gobierno contribuyó a generalizar la imagen de descontrol y caos social que prontamente habría de reprocharse a la gestión de Cámpora. Tanto desde la izquierda como desde la derecha no serían pocos los que verían reforzada su convicción de que se hallaban frente una “situación prerrevolucionaria”. Sin embargo, la movilización fue desactivada. No es casual que la presión por terminar con la fase de efervescencia popular fuera mayor aquellos días en que se definía la firma del pacto social. Finalmente, el 14 de junio, el todavía secretario general del MNJ, Juan Abal Medina, utilizando la Cadena Nacional de Radiodifusión, exhortó a poner fin a las tomas. Dos días más tarde, la JP apoyaría el pedido, a través de un documento avalado por todas las regionales.

En suma, el rápido proceso de efervescencia ligado a las tomas, así como su forzada desactivación, constituyen sin duda

uno de los hechos centrales del período y tienden a marcar un nuevo movimiento, de separación en este caso, en la dinámica de la relación entre un sistema político en recomposición y la sociedad civil movilizadora.

El retorno de Perón

Con el peronismo en el gobierno, el operativo de retorno del líder estaba en marcha. Fue puesto en manos de una comisión especial en la cual operaban personajes oscuros de la derecha peronista como los ya nombrados Osinde y Norma Kennedy, además del propio secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci. También estaban Lorenzo Miguel y Juan Abal Medina, aunque estos últimos tuvieron escasa participación. Por otro lado, estos preparativos hicieron cada vez más notoria la múltiple influencia del secretario de Perón y ministro de Bienestar Social, José López Rega. Ya en los últimos meses de la estancia de Perón en Madrid, la hegemonía de este personaje rasputinesco se había tornado indiscutible.

La JP y las agrupaciones armadas peronistas fueron marginadas de la organización del acto de recibimiento que se realizaría en Ezeiza. Pese a ello, sumergidos en una obsesión estadística que pronto se estrellaría contra la propia voluntad del líder, la conducción de Montoneros y de la JP colocó todo su empeño en la movilización de las bases, confiando en que esta demostración de fuerza les daría el lugar que les correspondía en el movimiento. Fue, sin lugar a dudas, la mayor concentración de la historia política argentina. Más de dos millones de personas, entre las cuales se encontraban interminables columnas de la JP, marcharon hasta el aeropuerto de Ezeiza, pero el encuentro gozoso con el líder no tendría lugar. Desde el palco, donde todavía podían verse algunos artistas, grupos de extrema derecha, que portaban armas largas y estaban bajo las órdenes de Osinde y Rucci, comenzaron a disparar contra la multitud. Pronto se desató la tragedia y la gente, en medio del terror y el desconcierto, comenzó a dispersarse y a retroceder, buscando amparo entre los árboles o en los edificios allende el aeropuerto. Las estadísticas finales dan cuenta de trece muertos y trescientos ochenta heridos. Algunos asistentes fueron



Manifestantes se dirigen a Ezeiza en ocasión del regreso de Perón, 20-6-1973.

atrapados y torturados en el Hotel Internacional por grupos que, por su accionar e ideología, anticipaban la Triple A. Finalmente, el avión que transportaba a Perón aterrizó en el aeródromo de Morón.

Al día siguiente, un Perón “desencarnado” pronunciaría un contundente discurso en el cual, omitiendo cualquier referencia directa a los hechos de Ezeiza, realizaba un llamado a “volver al orden legal y constitucional, como única garantía de libertad y de justicia”.

Detengamos el relato un instante porque la inflexión es de magnitud. En la práctica política del líder, el Movimiento Nacional Justicialista era, sobre todo, el arte de la contradicción discursiva. En efecto, con el correr de los años y las generaciones, el discurso de Perón fue transformándose en una especie de libro sagrado en cuyas páginas siempre era posible hallar, para una misma pregunta, dos sentencias diferentes, generalmente contradictorias entre sí. Tanto la izquierda como la de-

recha del movimiento habían sabido explotar esta característica propia del discurso populista, para autentificar sus posiciones y proceder a la descalificación del otro. Sin embargo, hasta ese momento, la Juventud no se había visto obligada a realizar una sobreinterpretación de sus palabras; sólo se había limitado a glosar una parte del discurso del líder, aunque a veces buscara explicitar lo que la palabra sugería o tratara de unir lo que otros separaban, amplificando los nexos entre los temas que atravesaban los debates de la época, como aquél entre “el socialismo” y “lo nacional”.

Lo novedoso aquí es que Perón, un día después de su retorno definitivo, se despojó de toda ambigüedad y estableció un corte, cuya sustancia difería sensiblemente de aquel que esperaban los sectores juveniles y las organizaciones armadas peronistas. Y por mucho que éstos tardaran en reconocer las consecuencias del final del doble discurso, una cascada de hechos, cada vez más convalidados por las diáfanos palabras de Perón,



Palco del acto en Ezeiza, 20-6-1973.

Perón impugna a los sectores radicalizados, 21 de junio de 1973

“No hay nuevos rótulos que califiquen a nuestra doctrina ni a nuestra ideología. Somos lo que las veinte verdades peronistas dicen. No es gritando ‘la vida por Perón’ que se hace Patria, sino manteniendo el credo por el cual luchamos.

“Los viejos peronistas lo sabemos. Tampoco lo ignoran nuestros muchachos que levantan banderas revolucionarias. Los que pretextan lo inconfesable, aunque cubran sus falsos designios con gritos engañosos o se empeñen en peleas descabelladas, no pueden engañar a nadie (...)

“Los que ingenuamente piensan que pueden copar nuestro Movimiento o tomar el poder que el Pueblo ha reconquistado, se equivocan (...)

“A los enemigos embozados, encubiertos o disimulados les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia suelen hacer tronar el escarmiento.”

Fuente: J. D. Perón, *Discursos y mensajes del teniente general J. D. Perón, junio a octubre de 1973*, Presidencia de la Nación, Secretaría de Prensa y Difusión.

se encargaría de desmentir el tortuoso ejercicio de sobreinterpretación al cual se verían librados.

Por otro lado, con Perón presente en el país, pronto el gobierno de Cámpora se tornaría insostenible. A los sucesivos desaires del líder, se agregarían las crecientes presiones provenientes del sector que lideraba López Rega. La crisis desembocaría con la renuncia de Cámpora y del vicepresidente Vicente Solano Lima, el 12 de julio. Una maniobra poco prolija habilitó a Raúl Lastiri, entonces presidente de la Cámara de Diputados y yerno de López Rega, a reemplazar a Cámpora. La transición estaba en marcha. Pronto Perón volvería a calzarse nuevamente la banda presidencial.

EL SEGUNDO MOMENTO: PERONISTAS VERSUS PERONISTAS

Perón y el sindicalismo: la recomposición de un vínculo perdurable

El acceso de Perón al gobierno volvería a colocar en manos del líder la posibilidad de recomponer el perdurable vínculo con el actor sindical y de redefinir la relación con los díscolos representantes de la juventud y las organizaciones guerrilleras. De manera concreta, el gobierno abría la vía para la consolidación de un equilibrio más firme y estable entre el peronismo y los otros actores en juego. Veamos en primer lugar su relación con el poder sindical, para luego abordar los lazos con los sectores de izquierda.

Durante el exilio, la relación con el sindicalismo no había estado exenta de conflictos ni de amenazas de heterodoxias. La gestión verticalista del líder se había encaminado a la construcción de un equilibrio tensional, que apuntaba al disciplinamiento de los sindicatos, afirmados como “poder social”, tan proclive a las negociaciones informales a espaldas del propio Perón y, al mismo tiempo, a la convivencia *non sancta* con los gobiernos de facto. No por casualidad Perón había decidido incentivar la acción de las vanguardias armadas, sus “formaciones especiales”, enfatizando la necesidad del trasvasamiento generacional. Fue en este contexto, marcado por relaciones de poder inestables, donde la figura del enemigo interno comenzó a tomar niveles inusitados de virulencia. El asesinato del propio Vandor, llevado a cabo por Montoneros en 1970, pero instigado por Perón, aparece así como una de las tantas expresiones de esta dialéctica perversa que marcó la gestión del liderazgo de Perón durante el exilio.

Ahora bien, a diferencia de otros actores de la época, los sindicalistas contaban con una experiencia histórica más que suficiente como para entender cabalmente algunas de las consecuencias del pasaje de Perón desde la oposición al gobierno. Por otro lado, éstos eran conscientes de las implicancias que en términos redistributivos traería una política de concertación social, poco favorable para los sectores populares.

Sin embargo, la redefinición del vínculo no suponía exclusi-



El presidente Juan D. Perón junto a los dirigentes sindicales Adelino Romero, Lorenzo Miguel y Casildo Herreras, agosto de 1977.

vamente un llamado al sacrificio, el que, en todo caso, se realizaba menos en nombre del modelo nacional-popular que de la disciplina y la lealtad, las dos virtudes cardinales del justicialismo, pues el regreso definitivo de Perón estuvo marcado por un viraje en la política interna del movimiento. En el plano simbólico, pronto se destacó el reconocimiento de Perón hacia los “viejos peronistas”, a quienes había denostado hasta hacía poco tiempo y que de ahora en más no cesaría de elogiar, contraponiéndolos respecto de la “muchachada apresurada”. También aparecía en la reafirmación de la clase trabajadora organizada como “columna vertebral del movimiento”. En suma, este giro hacia la derecha, anunciado en los últimos meses, fue interpretado por los sectores del sindicalismo burocrático como una expresión de la voluntad del líder de *volver a poner las cosas en su lugar*.

Por otra parte, la burocracia sindical mantenía graves conflictos con las corrientes del sindicalismo combativo que, en nombre del basismo y de la autonomía sindical, fomentaban formas de acción clasistas. Este tipo de sindicalismo era representado de manera ejemplar por los cordobeses Agustín Tosco (Sindicato de Luz y Fuerza) y René Salamanca (SMATA). En este frente de conflicto, Perón, que no compartía la tolerancia que había caracterizado al gobierno de Cámpora, se dispuso a apoyar a la ortodoxia sindical, para lo cual impuso una política de control y represión de los conflictos intrasindicales. Expresión de esto fue la nueva Ley de Asociaciones Profesionales (ley 14.455), aprobada en enero de 1974, que aseguraba el monopolio de la representación a las estructuras de mayor agregación, en detrimento de aquellas descentralizadas, de implantación local e independientes de la conducción de la CGT. Más simple, el encuadramiento del sindicalismo peronista, suerte de revalidación de la antigua alianza, se tradujo en beneficios tangibles de diverso orden.

Pero la esperada firma del pacto social no se tradujo en una disminución de la conflictividad social. Si las demandas de aumento salarial decrecieron, todavía quedaban vigentes otras reivindicaciones que portaban sobre las condiciones de trabajo y la democratización sindical. Por otro lado, pese a que Perón había anunciado la ejecución de un Plan Trienal y afirmaba haber controlado la inflación, en los primeros meses de 1974 el pacto social sufrió un primer revés cuando los empresarios renunciaron a absorber el costo de la inflación importada por la crisis internacional del petróleo. A esta falta de confianza en el modelo instrumentado, se sumó el reclamo de los sindicatos que, presionados por las bases frente a la caída del salario real, exigieron un aumento salarial en relación con el incremento de los precios. En marzo de 1974, Perón llamó a una Gran Paritaria, en la cual actuó como mediador, debido al desacuerdo existente entre las organizaciones sindicales y el empresariado. Los sindicatos obtuvieron así un aumento salarial del 13%, pero los empresarios hicieron caso omiso del límite expresamente autorizado por el ministerio y trasladaron el incremento salarial a los precios. Además, la economía populista era asolada no sólo por la inflación y la creciente puja intersectorial, sino también por el desabastecimiento de productos básicos y el desarrollo del mercado negro.

El último discurso público de Perón, pronunciado el 12 de junio, debe haber sonado a amarga despedida en los oídos de la dirigencia sindical, atenazada cada vez más entre el dilema de la lealtad y las demandas de un sindicalismo reivindicativo. En su tradicional lenguaje de guerra, Perón los trató de “minorías irresponsables”, acusándolos de “sabotear la reconstrucción nacional”, de no respetar el acuerdo, pese a haber concertado en dos oportunidades (en junio del 73 y, con la Gran Paritaria, en marzo del 74). Por último, el 17 de junio, en una alocución mantenida en Casa de Gobierno, Perón exhortó nuevamente a los representantes de la CGT a no romper el pacto social y prometió el pago de un aguinaldo completo para julio de ese año.

El cerco a la izquierda: las palabras y los hechos

Las dificultades que tuvo que afrontar el tercer gobierno de Perón se desplegaban en más de una escena. Una vez lograda la concertación social, desactivada la ola de ocupaciones y asegurada la transición en manos de Lastiri, el propio Perón se encargaría de imprimir un giro radical a su relación con los representantes de la Tendencia. Así, el discurso en torno a la necesidad de la “institucionalización” estaba orientado en gran parte contra el ala rebelde del movimiento. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la posición asumida por el líder implicaba un viraje mayor, pues por primera vez en la historia del movimiento justicialista, antes que proponer una integración, que sabía de antemano forzada, Perón apuntaba a la abierta exclusión de toda una corriente interna.

Este desencuentro con el líder sería, para muchos militantes de izquierda, política y existencialmente, dramático. En realidad, la primera gran tragedia del peronismo se jugó aquí, entre estos militantes desgarrados entre su adhesión a Perón, que contradecía abiertamente sus aspiraciones y renegaba de ellos, y la voluntad siempre actual de radicalizar el peronismo. La historia de este desencuentro puede seguirse paso a paso a través de los discursos del propio Perón: primero aparecen las advertencias, deslizadas en tono edificante; luego una incontenible serie de descalificaciones (“idiotas útiles”, “infiltrados”) acompañada del efectivo proceso de exclusión de la izquierda

peronista del espacio político. Por último, sobrevino la abierta y escandalosa ruptura.

El primer discurso de Perón, luego de los sucesos de Ezeiza, estampó con todas las letras el reconocimiento a las organizaciones sindicales y a los viejos militantes peronistas. Por vez primera, Perón situó también a la izquierda peronista en el lugar de “enemigos embozados, encubiertos o disimulados”. Por último, se encargó de aclarar la verdadera concepción del justicialismo: “Somos lo que las 20 verdades justicialistas dicen”.

A esta primera redefinición del campo político-ideológico, las fuerzas nucleadas en la Tendencia habrían de responder, en primer lugar, con la *teoría del cerco*, suerte de lectura conspirativa que pretendía no responsabilizar al líder, colocando el centro de las verdaderas decisiones fuera de éste. La teoría del cerco ofrecía dos versiones que, aunque complementarias, deben ser diferenciadas: la primera era la versión “mágica”, que



José López Rega entrega juguetes en Olivos, 6-1-1974.

El distanciamiento montonero

“Ayer éramos los ‘muchachos’ y éramos saludados por el Jefe del Movimiento con emoción por nuestra lucha, se honraban nuestros muertos y ahora, por ser como Perón dijo que tenían que ser los peronistas, por advertir que la lucha aún no ha terminado, que no tenemos todo el poder, que hay que trabajar para conseguirlo, que hay que organizarse y no ceder, por eso ahora nos señalan que hay otros partidos ‘socialistas’. ¿Por qué no nos dijeron antes, cuando peleábamos, que nos pasaríamos a otro partido? ¿Dónde estaban estos que nos tirotean y que preparan los atentados para eliminarnos cuando había que pelear contra Lanusse?”

Fuente: Dardo Cabo, *El Descamisado*, 12-2-1974.

identificaba al “entorno” y más precisamente al “brujo López Rega” como el verdadero responsable de las desacertadas decisiones que iría adoptando Perón. La segunda era la versión “ideológica”, que señalaba como último responsable de los acontecimientos al imperialismo, en consonancia con el “cerco internacional” de militares recientemente instalados en países limítrofes. Esta última lectura de que el cerco se venía tendiendo sobre diferentes naciones latinoamericanas cobraría mayor fuerza después de la caída de Allende en Chile, ocurrida en septiembre de 1973.

Los hechos se fueron sucediendo con celeridad. Un mes después de la masacre de Ezeiza, Montoneros organizó una movilización hasta la residencia de Gaspar Campos, donde se alojaba Perón. Esa marcha, en la cual participaron unos 80 mil jóvenes de la JP, se proponía algo más que el restablecimiento de los canales de comunicación directos con el líder (romper “el cerco”). En realidad, a través de una demostración palmaria del poder de movilización, el objetivo final no era otro que el de presionar a Perón y recuperar así una posición de fuerza. Un Perón sonriente se encargó de recibir sólo a cuatro de los dirigentes de la JP, luego de desairarlos en Gaspar Campos, y obligarlos a marchar hasta la residencia de Olivos. Perón posó para las fotos y se comprometió a mantener un contacto directo y fluido con la JP. Sin embargo, aun antes de finalizada la

desconcentración, los dirigentes de la JP se enteraron por la agencia oficial Télam de que el mismísimo López Rega acababa de ser designado como mediador entre Perón y la Juventud.

No obstante, como lo avalan ciertos “documentos de coyuntura” de las organizaciones peronistas, el desencuentro con Perón suscitó una interpretación más realista y crítica del proceso político en curso, en la cual se subrayaba el “carácter mágico” y la inexistencia del cerco. Este reconocimiento los llevaría a afirmar que “Perón nos ofrece como prenda de negociación. Sus negociaciones para lograr la unidad nacional y sus negociaciones con el imperialismo tienen como elemento de entrega, de ‘buena voluntad’, a nosotros”.

Por último, todos los esfuerzos interpretativos se vieron acompañados por *la afirmación de la legitimidad y del carácter peronista de las acciones de la Tendencia*. Dicho de otro modo, de las declaraciones y de las demostraciones de fuerza resulta claro que no habría renuncia ni podía haber expulsión. En fin, la inminencia de la ruptura aceleró el proceso de las identificaciones a partir del cual la Tendencia, especialmente a través de Montoneros, buscaría presentarse como el auténtico representante del pueblo.

El 23 de septiembre la fórmula que llevaba a Perón como presidente y a su esposa Isabel como vicepresidenta obtuvo el 62% de los votos. Dos días después, el grupo Montoneros ase-

Discurso de Mario Firmenich en la cancha de Atlanta, 11 de marzo de 1974

“Habría que discutir qué es el peronismo, a ver si se puede echar a alguien del peronismo. Porque puede suceder que nadie pueda entrar al peronismo, pero irse es un poco más difícil. Lo que ocurre es que el peronismo no es un simple partido liberal, ni un sindicato; es el Movimiento que, como tal, está más allá del sistema. Es un movimiento que es el pueblo mismo, con su identidad política, es el nacionalismo popular, que es necesariamente revolucionario y ha sido consecuentemente revolucionario.”

Fuente: R. Baschetti, *Documentos, 1973-1976*, vol. 1, p. 560
(destacado en el texto).

sinó a Rucci, secretario general de la CGT, asestando así un duro golpe al propio Perón, en lo que no podía ser leído sino como una suerte de “chantaje político”. Al decir del poeta Juan Gelman, fue como “tirarle un cadáver a Perón sobre la mesa”...

En octubre de ese mismo año también se llevó a cabo el Operativo Dorrego, una acción civil entablada por las Fuerzas Armadas, encabezadas por el general Jorge Carcagno, junto con la JP y Montoneros, en favor de sectores perjudicados por las inundaciones. El hecho sirvió para reavivar —fugazmente— las expectativas de una posible alianza entre el pueblo y el Ejército. Sin embargo, como sostiene Rouquié, luego de la asunción de Perón, el general Carcagno, representante del “profesionalismo comprometido”, sería reemplazado por aquellas posiciones identificadas con el “profesionalismo neutral”.

El viraje de Perón tendría su correlato en una acelerada purga ideológica, que marcaría el eclipse de la Tendencia en varios frentes, comenzando por el ala político-institucional. Esto ocurriría durante el agitado verano de 1974. Los primeros afectados fueron los diputados peronistas ligados a la Tendencia, quienes se vieron obligados a renunciar a sus bancas, después de mantener una tensa conversación con Perón, en la que manifestaron su rechazo a tres medidas que propiciaba la Cámara de Diputados (también condenadas por la JP): la ya citada Ley de Asociaciones Profesionales; la Ley de Prescindibilidad, cuya amplia aplicación permitía convertirla en un arma de disciplinamiento político, y la ley de reforma del Código Penal, que denunciaban por su carácter indiscriminado, pues diluía peligrosamente la frontera entre el delito y el accionar de cualquier organización no reconocida legalmente. Pese a la renuncia, dichos diputados fueron expulsados del Movimiento Peronista.

El 20 de enero de 1974, un importante hecho de violencia vino a operar un nuevo giro, cuando el ERP atacó el Regimiento de Azul, y terminó con la vida, entre otros, del jefe de la unidad militar. Perón, vestido con uniforme militar, se encargó de repudiar el hecho, al tiempo que aprovechó el golpe para responsabilizar al gobernador bonaerense Oscar Bidegain, a quien acusó de haber asumido una actitud desaprensiva. Bidegain fue desplazado y en su lugar quedó el vicegoberna-



Obregón Cano durante una conferencia de prensa, 1974.

dor, un hombre del riñón del sindicalismo vandonista, Victorio Calabró. El hecho sirvió también para endurecer la posición del gobierno en relación con el conjunto de leyes represivas que estaban siendo tratadas por el Parlamento, al tiempo que dio la posibilidad a Perón de iniciar una política de reconciliación con el Ejército. No había pasado un mes cuando el jefe de la policía cordobesa, teniente coronel Navarro, se rebeló contra el poder civil y derrocó al gobernador Obregón Cano. A pesar de que las autoridades nacionales condenaron el Navarrazo, la intervención federal que finalmente le siguió no buscó restituir en sus fun-

ciones a los gobernantes desplazados.

La purga también alcanzó tempranamente a la Universidad de Buenos Aires, considerada un bastión de la izquierda peronista, cuando en octubre de 1973 el ministro de Educación Jorge Taiana pidió la renuncia del rector Rodolfo Puiggrós, uno de los representantes históricos del revisionismo populista de izquierda.

En suma, el ala política era desplazada de los puestos de gobierno, reduciendo de manera significativa los frentes de lucha. Mientras tanto, la agrupación Montoneros, que había logrado integrar otras organizaciones armadas peronistas, buscaba evitar la confirmación de la ruptura, renovando a través de las declaraciones su compromiso con el movimiento peronista. Finalmente, el 11 de marzo, en un acto realizado en Atlanta, la conducción nacional de Montoneros caracterizó *“la traición del gobierno”* en dos planos, el político (ilustrado por la remoción de los gobernadores afines) y el económico (el pacto social). Por último, convocó a los militantes a un encuentro con el líder para el 1º de mayo. “Allí debemos llenar la Plaza

—decía Firmenich— para decirle al general lo que pensamos, todo lo que discutimos continuamente en nuestros lugares de trabajo. Todo el esfuerzo de reencauzamiento de este proceso, y así seguiremos siendo fieles a nuestra consigna de que viviremos *libres o muertos pero jamás esclavos*, y que con todo lo que significa gritaremos hasta el final *¡Perón o Muerte! ¡Viva la Patria!*”

Volvamos un instante sobre la significación que tuvo para Montoneros y, de manera más general, para la Juventud Peronista esta apelación al diálogo como último recurso antes de la ruptura final. Es innegable que el “diálogo directo” entre el líder y las masas constituía uno de los núcleos centrales del imaginario peronista, pues remitía al hito fundador del movimiento, el 17 de octubre de 1945, cuando las masas reunidas en la Plaza de Mayo reclamaron la vuelta del coronel de los trabajadores, sellando en un corto diálogo lo que sería sin duda el inicio de una alianza perdurable. El calendario peronista instituyó luego la fiesta del 1º de mayo como la fecha en que el pueblo y el líder “dialogaban” y renovaban así su compromiso. Sin embargo, el diálogo había sido también uno de los ejes del imaginario de la relación con Eva Perón, modelo ejemplar de la izquierda peronista. ¿Acaso, entre los militantes, alguien podía olvidar aquel largo, sufrido y dialogado acto de renunciamiento de Evita a la vicepresidencia en 1951, que no tuvo como escenario central la Plaza de Mayo, sino un palco levantado por la CGT en la avenida 9 de Julio? Así, su sola evocación traía al recuerdo de que, en la historia del peronismo, no todos los “diálogos” habían alcanzado la forma ritualizada de un reencuentro feliz entre el líder y las masas.

Ahora bien, en los '70, la reivindicación del diálogo como modalidad fundacional del vínculo entre Perón y el pueblo encontraba afinidad con una serie de prácticas constitutivas de la experiencia política de la JP, como lo muestran paradigmáticamente los actos políticos de la época, en los cuales era habitual que los oradores fueran interrumpidos por algún participante o por la multitud para corear una consigna determinada. La revista *El Descamisado*, el órgano de Montoneros, se había encargado de ilustrar lo esencial de la dinámica de relación, utilizando la estructura del “diálogo” a la hora de reproducir los discursos de sus dirigentes.

Esto aparece asociado también a la centralidad que la Tendencia otorgaba a las movilizaciones populares, reforzada por la “obsesión estadística” que atraviesa la época, como si el triunfo de una estrategia política dependiera, en gran parte, de la cantidad de columnas movilizadas. En otros términos, el papel ejercido por la Tendencia en las movilizaciones potenció aquella imagen de poderío en la cual convergían recursivamente el afán de protagonismo y la arrogancia juvenil. Ensordecidos por el cántico de sus propias consignas, no quisieron o no pudieron interpretar uno de los apotegmas centrales del ideario peronista, que el propio Perón desarrolló en los cursos que dictó en la Escuela Superior Peronista en 1949 y que fue repetido hasta el hartazgo en los tempranos setenta: “Las masas no valen ni por el número ni por la capacidad de sus componentes: valen por la clase de dirigentes que tienen a su frente”.

El encuentro decisivo tendría lugar el 1º de mayo en la histórica plaza, ocasión en la cual el pueblo, representado por la JP y Montoneros, “dialogaría” con el líder. Ese día, las pancartas de Montoneros ocuparon los lugares estratégicos frente a los balcones de la Casa Rosada. El cortejo que acompañaba a Perón, entre los que se destacaban su esposa Isabel y el ministro de Bienestar Social, fue recibido con hostilidad por la multitudinaria juventud, estimada en unas cincuenta mil personas, que comenzó a corear: “Qué pasa, qué pasa, General/ que está lleno de gorilas/ el gobierno popular”; “Se va acabar, se va a acabar/ la burocracia sindical”. En uno de los discursos más breves que se le conocen, un Perón desencajado tildó a la multitud vociferante de “imberbes” y “estúpidos”. Como respuesta, las columnas de la JP comenzaron a abandonar la plaza al canto de “Conformes, conformes, General/ conformes los gorilas, el pueblo va a luchar” y “Aserrín, aserrán/ es el pueblo que se va”. El desencuentro marcó la consumación de la ruptura. Sucedió en la histórica plaza, ahí donde Montoneros, como afirman Sigal y Verón, “buscó articular la palabra pero Perón no escuchó sino gritos”.

Poco después, Montoneros registró un desprendimiento importante, la autodenominada JP Lealtad, que postulaba el acatamiento al líder. El 25 de mayo de 1974 Perón disolvía por decreto la rama juvenil del Partido Justicialista.

La cultura, entre la “y” y la “o”

El viraje derechista del gobierno iba inficionando todos los niveles. En abril de 1974, Perón designó al comisario Alberto Villar al frente de la Policía Federal. Un mes más tarde, se otorgó al ministro López Rega, entonces cabo, el grado máximo de la fuerza, el de comisario general, saltando doce grados en el escalafón. Así, el breve gobierno de Perón abrió el camino para la generalización de una serie de procedimientos autoritarios que irían desde el cierre de publicaciones políticas y culturales de izquierda hasta la abierta censura en los medios de comunicación y la confección de listas negras dentro del ámbito artístico, una de las características más notorias del gobierno isabelino. Esos procedimientos que combinaban, de manera singular, la acción policial con la parapolicial de los grupos de extrema derecha, enquistados en el gobierno, aparecían ligados al núcleo de poder del ministro de Bienestar Social.

En el campo de la cultura, el giro a la derecha comenzó a traducirse en inquietantes señales. Época en la cual una profusión de manifestaciones proyectaban en el centro del debate ideológico las posibles articulaciones entre la “Patria Socialista” y la “Patria Peronista”, colocando el acento en la distancia instalada entre la conjunción (la “y”) y la oposición (la “o”).

A fin de ilustrar el “clima de época”, pasaremos revista al diario *La Opinión*, dirigido por el periodista Jacobo Timerman, quien supo combinar de manera magistral el oportunismo político con el eclecticismo cultural-ideológico. Una breve ojeada sobre el caliente mes de enero de 1974 refleja la centralidad que los temas ligados a “lo social” y “lo nacional” tenían en la cultura de la época. Así, el 3 de enero de 1974 *La Opinión* anunciaba el estreno de *Ceremonia*, “una insólita realización argentina” de Néstor Lescovich, donde “el ojo impúdico de la cámara” registraba a marginales en distintas situaciones, que habían aceptado ser filmados a cambio de algo de comida y de vino. El Teatro Municipal General San Martín programó en la sala Lugones un ciclo “de corte humanista y cristiano como contribución a la reconstrucción del ser nacional”, con la proyección de filmes como *Don Segundo Sombra*, de Manuel Antín; *Güemes*, de Leopoldo Torre Nilsson, y *Juan Moreira*, de Leonardo Favio.

Ese mismo año se proyectarían más de treinta filmes de pronunciado corte político-ideológico, entre ellos, *La hora de los hornos*, de Fernando Solanas y Octavio Getino (que sería visto por unos 300 mil espectadores, entre 1968 y 1973); *Operación Masacre*, basado en el libro de Rodolfo Walsh; *Voto más fusil*, del chileno Helvio Soto; *Estado de sitio*, de Costa-Gavras, y *Amor y anarquía*, de Lina Wertmüller.

Uno de los artículos centrales del suplemento cultural de *La Opinión*, del 13 de enero, estaba dedicado al tema “la guerra de las consignas”. Firmado por Alberto Szpunberg, allí se afirmaba que “la consigna justa tiene la fuerza del grito —de dolor o de victoria— y simultáneamente la estrictez de una orden”. El autor recordaba también que “la P encimada sobre la V bastaron para identificar y expresar a millones de argentinos” las diferentes ofertas ideológicas existentes en la época. En la misma página, el ensayista Ernesto Goldar anunciaba un libro sobre “la descolonización ideológica”, donde respondía a la cuestión de “si se puede ser peronista y marxista o hay que ser peronista o marxista”. Un tal R. Ferrero explicaba en un libro sin sello editorial que, aun en sus manifestaciones de izquierda, el sionismo estaba supeditado al imperialismo. En la misma página, a la derecha, se publicitaban dos libros de Perón. En fin, editorial Corregidor anunciaba la salida del que sería el primer libro de Osvaldo Soriano, *Triste, solitario y final*. En la contratapa del suplemento de cultura de *La Opinión* se reproducía un artículo del Herbert Marcuse, cuya obra aparecía indisociablemente ligada a la revuelta que había conmovido los cimientos políticos y culturales de la sociedad francesa en mayo de 1968. El título, “Para terminar con el capitalismo”, era más que elocuente.

El diario de esa semana consignaba también que el 8 de enero la policía había secuestrado libros de autores argentinos y detenido a varios librereros y empleados de la calle Corrientes. Sin contar con una orden judicial que autorizara el allanamiento, el mismo había sido llevado a cabo por la “sección de Moralidad” de la Policía Federal, que dirigía el comisario Luis Margaride, el mismo que había ocupado ese cargo en los tiempos de Onganía. Pero no sólo sorprendía la ausencia de instancias legales o los residuos autoritarios que el gobierno había “heredado”. Este nuevo atentado contra la libertad de expre-

sión recordaba, sospechosamente, aquel otro realizado contra el Teatro Argentino, cuando se ensayaba la versión teatral del filme *Jesucristo Superstar*, controvertida recreación artística de la vida de Jesús. El 31 de diciembre de 1973, recordaba siempre el mismo diario, seis sujetos habían sido aprehendidos mientras trataban de entrar en las oficinas de Cinema Internacional, distribuidora del citado filme, a la cual denunciaban como un producto de “una confabulación judía”.

En tono de sorna, en un sugestivo artículo aparecido por esos mismos días en *La Opinión*, Aída Bortnik reflexionaba sobre la proliferación de revistas políticas, deslizando que aquellas de extrema derecha, como *Cabildo* y *El Caudillo* (que pronto serían vinculadas al accionar parapolicial de la Triple A), habían conseguido una repercusión inesperada entre aquellos que la consumían “como publicación humorística”...

EL TERCER MOMENTO: LA DISOLUCIÓN ISABELINA

Juan Domingo Perón murió el 1º de julio de 1974. Durante treinta años, su liderazgo marcó la historia política argentina con un fuerte sello personalista. Su muerte no podía sino causar una honda conmoción en todo el país. A la hora de despedir sus restos mortales, Ricardo Balbín, el máximo dirigente de la UCR y eterno rival del Justicialismo, manifestó con sentido dolor: “Este viejo adversario hoy despide a un amigo. Y ahora, frente a los compromisos que tienen que contraerse para el futuro, porque quería el futuro, porque vino a morir para el futuro, yo le digo, señora presidenta de la República, los partidos políticos argentinos estarán a su lado en nombre de su esposo muerto para servir a la permanencia de las instituciones argentinas, que usted simboliza en esta hora”.

Las palabras de Balbín aparecían como el corolario lógico de una política conciliatoria que desde principios de los años '70 Perón había venido desarrollando “hacia fuera”. En efecto, a diferencia de sus dos primeros gobiernos, caracterizados por una política basada en la acentuación de los antagonismos, en esta oportunidad Perón había buscado apoyo institucional, sobre todo en el líder de la UCR. Dicha política se había plasmado en la frase “para un argentino, no hay nada mejor que otro

argentino”, que había corregido y reemplazado a aquella máxima célebre “para un peronista no hay nada mejor que otro peronista”.

Los motivos del acercamiento entre Perón y Balbín no eran ajenos al momento que atravesaba el movimiento justicialista, cuyas divisiones amenazaban con quebrar el frágil equilibrio tensional impuesto y apenas controlado por el propio Perón. En este sentido, el consumado líder era consciente de cuán oportuno y valioso podía ser el apoyo de aliados externos. Sin embargo, pese a que Perón y Balbín coincidían en la demanda de normalización del sistema político argentino, ambos diferían sensiblemente en su concepción de la acción política. Balbín era un hombre fiel a las clásicas formas de representación partidaria y, por ende, a los límites impuestos por las estructuras. En cambio, Perón era un líder populista, acostum-



Velatorio de Juan D. Perón, julio de 1974.

brado a una modalidad específica de ejercicio del poder, caracterizada por el equilibrio tensional. En labios de Perón, la demanda de gobernabilidad significaba, como no podían desconocerlo los diferentes componentes del movimiento peronista, en última instancia, el pliegue de los actores a la voluntad del líder.

Además, nadie ignoraba el alcance devastador que podía tener la escalada de la violencia en el interior del peronismo, ya que éste ocupaba la casi totalidad de campo político argentino. En fin, la oportuna reconciliación llegó a alimentar la idea de que Perón compartiera la fórmula presidencial con Balbín para las elecciones de septiembre de 1973, hecho que quizás hubiese coadyuvado al fortalecimiento del desvalido sistema institucional argentino. Sin embargo, Perón impuso a su segunda esposa como candidata a la vicepresidencia, reservando para sí el papel de garante del frágil orden instituido.

Por otro lado, pese a una breve gestión que convalidó el rol de la derecha, tanto como marcó la ruptura con la izquierda, Perón terminó por nombrar como único heredero, en su último discurso, al “pueblo”. Tras su muerte, nada ni nadie podría detener la lucha desatada en las diferentes escenas, a fin de apropiarse del poder y arrogarse de ese modo el monopolio de la representación del “pueblo”.

Isabel Perón asumió la jefatura del Estado, entrando así al libro de los récords, al convertirse en la primera mujer en el mundo en ejercer constitucionalmente el mandato supremo de un país. El panorama que se abría frente a ella aparecía cargado de incertidumbre. Un rápido balance de la inconclusa gestión de Perón arrojaba un cúmulo de asignaturas pendientes, entre las que se contaba el pacto social, cada vez más tambaleante, en un clima de creciente conflictividad social y violencia política. El gobierno de Isabel acentuó estas líneas, al tiempo que impulsó una inflexión importante en términos político-económicos. En efecto, su política apuntó a la consolidación de un proyecto ultramontano, que preveía no sólo la exterminación total del ala izquierdista sino también la disolución del modelo nacional-popular, mediante la subordinación del histórico actor del modelo peronista, el poder sindical.

La figura que encarnó uno de los proyectos de la extrema derecha, José López Rega, fue uno de los personajes más oscu-



La presidenta Isabel Martínez de Perón con Jorge Rafael Videla.

ros y siniestros de la política argentina de todos los tiempos. Durante años, alternó sus funciones de policía, de la que sólo llegó a tener el grado de cabo, con una dedicación cada vez mayor a las ciencias ocultas. En 1965, tuvo su primer encuentro con Isabel Perón, en ocasión del viaje que ésta realizara a la Argentina como mensajera de Perón. Poco después, el “Brujo”, o simplemente “Lopecito”, como lo apodaba socarronamente Perón, desembarcó en Madrid, en la quinta Puerta de Hierro, acumulando funciones cada vez más influyentes, desde el rol de mayordomo hasta el de secretario personal. “El Rasputín de las Pampas” supo aprovechar los espacios que el propio liderazgo de Perón le fue cediendo en el exilio, cuyo personalismo apareció potenciado a la hora de su declive físico. En efecto, si algo caracterizó a López Rega fue su habilidad para construir una suerte de poder detrás de un núcleo de poder ya personalizado.

Durante el gobierno de Isabel Perón, López Rega —convertido en virtual primer ministro, después de que su cargo como secretario presidencial adquirió, por decreto de principios de 1975, rango ministerial— no vaciló en utilizar metodologías propias del terrorismo de Estado. Él fue el creador y sostenedor de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), organización clandestina en la cual actuaban elementos policiales y parapoliciales, cuyo objetivo era la eliminación física de sus adversarios a través del asesinato político. Para esos días, *El Caudillo*, órgano vinculado a la Triple A, exclamaba que “el mejor enemigo es el enemigo muerto”. La primera aparición pública de la Triple A tuvo lugar en noviembre de 1973, cuando una bomba estalló en el auto del senador por la UCR, Hipólito Solari Irigoyen, quien sobrevivió pese a las graves heridas. Su modus operandi incluía el asesinato selectivo o masivo, la colocación de bombas a locales partidarios, la amenaza pública de muerte a través de la divulgación de listas. Sus víctimas fueron militantes, políticos, intelectuales, artistas, sindicalistas, periodistas, entre ellos el diputado peronista Rodolfo Ortega Peña, el sacerdote tercermundista Carlos Mugica, el intelectual Silvio Frondizi, hermano del ex presidente, o el anteriormente vicegobernador de Córdoba, Atilio López. Según cifras de la CONADEP, la Triple A fue responsable de 19 homicidios en 1973, 50 en 1974 y 359 en 1975.

El período trajo consigo el golpe de gracia para la izquierda peronista. Así, en una última tentativa por salir de su creciente aislamiento, sectores allegados a la Tendencia impulsaron la apertura de un frente político a través de la creación del Partido Auténtico, que participó de las elecciones provinciales en Misiones. Sin embargo, poco después de su conformación, los representantes del Partido Auténtico fueron expulsados del Movimiento Justicialista. En el orden sindical, la política de Isabel supuso también altos niveles de represión, como lo prueba el conflicto protagonizado por la seccional metalúrgica de Villa Constitución, encabezada por Alberto Piccinini, a raíz de las huelgas desatadas en tres fábricas importantes, Acindar, Marathon y Metcon. Este conflicto, cuyas dimensiones superaban ampliamente la cuestión intrasindical, sería resuelto por la intervención de las fuerzas policiales en 1975, a la que seguiría una cruenta represión y el encarcelamiento de los principales dirigentes.

Por otro lado, el autoritarismo gubernamental apuntó al cierre de los canales institucionales a través del ejercicio sistemático de la censura, cuyo blanco predilecto fueron los medios de comunicación. La depuración ideológica alcanzó los claustros académicos, mediante el nombramiento de Alberto Ottalagano como interventor en la Universidad de Buenos Aires. En defensa del verdadero justicialismo, este personaje octogenario y admirador de Hitler asumió una cruzada en “contra del marxismo”.

En definitiva, en su avanzada represiva, la extrema derecha apuntaba a ampliar su poder, desequilibrando las relaciones existentes en el interior del régimen populista. Pero a esa altura de los acontecimientos, su mayor adversario no era la izquierda política o cultural, la que, sin mayores posibilidades de desarrollar actividades legales, se hallaba cada vez más



Acto sindical presidido por René Salamanca, Alberto Piccinini y Agustín Tosco, 1974.

acorrallada entre la opción del repliegue o el lanzamiento a la lucha armada. El gran adversario que restaba en pie era el sindicalismo peronista, la histórica columna vertebral, otro de los beneficiados por las nuevas condiciones políticas.

Nuevas querellas internas

Desde el comienzo del tercer gobierno justicialista, los sindicatos peronistas conducidos por los representantes “duros” de las 62 Organizaciones habían obtenido una serie de triunfos que volvieron a confirmar todo su poder. Además de neutralizar los conflictos intrasindicales, mediante la exclusión de los dirigentes del sindicalismo antiburocrático y de izquierda, apoyaron el desplazamiento de los últimos gobernadores ligados a la Tendencia, como Alberto Martínez Baca en Mendoza, Jorge Cepernic en Santa Cruz y Miguel Ragone en Salta.

Después de la muerte de Perón, la cúpula sindical peronista decidió también arremeter contra el autor del pacto social, el ministro de Economía, José Ber Gelbard, socavando su debilitada autoridad. Los avatares de esta confrontación pusieron en evidencia, como señala Juan Carlos Torre, “hasta dónde podía llegar el sindicalismo peronista en la lucha interna por el poder”. Para ello, no vaciló en desconocer uno de los ejes centrales del programa reformista, pese a que poco tiempo después le tocaría defenderlo, en el momento de enfrentar la sorpresiva embestida oficial encabezada por López Rega.

Así, a la hora de profundizar un plan económico, Gelbard se quedó sin fuertes apoyos políticos. La situación se tornó insostenible cuando el ministro encaró una nueva fase del programa económico, que incluía la reglamentación de las inversiones extranjeras, una parcial nacionalización del comercio exterior y una ley agraria, que apuntaba a lograr un incremento de la productividad en el campo. El detonante que causó su definitivo alejamiento fue la prematura divulgación del anteproyecto de ley agraria, que dictaminaba en uno de sus puntos la pérdida del dominio de las tierras incultas o improductivas. Como era de esperar, este proyecto de ley contó con el repudio de la Sociedad Rural, que no vaciló en hablar de proyecto de “expropiación”, al tiempo que obtuvo un primer respaldo de la CGT.

Sin embargo, de manera sorpresiva, a mediados de octubre de 1975, la CGT declaró que apoyaba la iniciativa oficial, pero no avalaba el anteproyecto difundido por la prensa. Sin el apoyo de los sindicatos, el proyecto de Gelbard quedaba a merced de las presiones de los grandes propietarios. Finalmente, el proyecto fue abandonado y hacia fines de ese mismo mes Gelbard presentó la renuncia, luego del anuncio de la presidenta de una nueva convocatoria a paritarias. Alfredo Gómez Morales, un prestigioso economista proveniente de las filas del peronismo histórico, lo reemplazaría.

El último conflicto intraperonista enfrentó a los gremialistas con la figura todopoderosa de José López Rega. Ciertamente es que las fricciones habían comenzado desde el día mismo de la muerte de Perón, momento en el cual el ministro y consejero blanqueó su condición de protagonista estelar, desdibujando el papel de los peronistas históricos. Agreguemos a esto que en diciembre de 1974 los sindicalistas recibieron con estupor el anuncio de la repatriación de los restos de Evita, en una operación ejecutada íntegramente por López Rega. Este hecho ilustra cómo López Rega y su séquito iban apropiándose de la simbología peronista para dotarse de una legitimidad que, en rigor, razonaban los sindicalistas, les pertenecía sólo a ellos. La desconfianza era, sin embargo, recíproca, pues a lo largo del exilio Isabel y López Rega habían sido testigos privilegiados de las hesitaciones de los sindicalistas. En otro orden, López Rega nunca había ocultado su ambición por controlar los fondos de las poderosas obras sociales sindicales. Ahora bien, pese a las tensiones iniciales, los gremialistas, de la mano de las 62 Organizaciones conducidas por Lorenzo Miguel, se encargaron de dar claras muestras de lealtad al gobierno de “la Señora”.

Mientras tanto, durante 1975 la situación económica continuó degradándose. El ministro Gómez Morales, luego de arduas negociaciones con los sindicatos, estableció un incremento salarial del 38% para hacer frente a la devaluación y la suba de los precios. Sin embargo, el aumento no fue convalidado y Gómez Morales terminó siendo reemplazado por Celestino Rodrigo, conspicuo miembro del entorno presidencial. Pese a su brevedad, la gestión de Rodrigo marcó una fuerte inflexión. En efecto, éste aplicó drásticas medidas de ajuste

que implicaron una devaluación del 100% y un aumento brutal de las tarifas de los principales servicios públicos que, en algunos casos, llegó al 200%.

El plan económico impulsado por Rodrigo era sumamente ambicioso pues implicaba una reorientación económica fundamental que ponía fin a la política económica nacionalista y reformista, característica del peronismo, para dar paso a una política de estabilización y ajuste. El giro radical operado en la economía traducía el esfuerzo del círculo lopezreguista por concretar una nueva alianza con los poderosos grupos económicos, excluyendo a los grandes sindicatos de la CGT. A fin de garantizar su respaldo, López Rega y la presidenta se habían acercado también a las jerarquías militares.

El Rodrigazo, suerte de primer golpe hiperinflacionario en la historia del país, no pudo menos que provocar una sorpresa generalizada en la opinión pública. Por su parte, desconcertados tanto por la rapidez como por el carácter drástico de las decisiones, los líderes sindicales se encargaron de denunciar que el plan propuesto era ajeno al modelo de la concertación social que pregona la tradición peronista, al tiempo que iniciaron las tratativas habituales para obtener un reajuste salarial. Luego de varios forcejeos, obtuvieron un aumento medio del 160%. El 24 de junio, Lorenzo Miguel convocó a los trabajadores metalúrgicos a una concentración en Plaza de Mayo. Con el motivo aparente de “agradecer” a la presidenta el aumento, su fin no era otro que obligar a ésta a la homologación de las paritarias. Sin embargo, rumores posteriores comenzaron a poner en cuestión la convalidación del aumento. El estado de tensión e incertidumbre se prolongó unas semanas, pese a que el 27 de junio la CGT realizó el llamado a una gran marcha en contra del ajuste. Sin embargo, la reacción espontánea de las bases desbordó las estructuras sindicales y, frente a un país paralizado, la CGT resolvió cruzar el Rubicón y convocó así a un paro general de 48 horas, para el 7 y el 8 de julio. Nunca antes la CGT había decretado una huelga general con un gobierno peronista.

La multitud reunida en Plaza de Mayo pidió las cabezas de Rodrigo y de López Rega. Obligado a dimitir, López Rega, ministro récord del período, con 768 días en el poder, partió rumbo al exterior, en misión diplomática. Recién el 20 de di-



Personal bancario se moviliza durante el Rodrigazo, 2-7-1975.

ciembre de 1975 el gobierno pediría su captura internacional. Finalmente López Rega regresaría al país el 13 de marzo de 1986, luego de ser detenido por el FBI en el aeropuerto de Miami. Moriría en la cárcel, antes de que se dictara la sentencia judicial en su contra.

Volviendo al teatro de los hechos, recordemos que, pese a que los sindicalistas habían buscado eludir la confrontación con el gobierno de Isabel, ésta finalmente se tornó insoslayable. En su afán por mantener la lealtad aun en medio del cuestionamiento, los sindicalistas articularían una versión atenuada de la teoría del cerco: “La señora —dirían entonces— está mal aconsejada”...

Después de la renuncia de López Rega, el gobierno de Isabel buscó apoyarse en la ortodoxia sindical y el peronismo político. Pero en medio del agravamiento de la situación económica y de la escalada de violencia política, continuaría por poco tiempo más su marcha errática. Así, el modelo nacional-popular naufragaba, no sólo devorado por el agravamiento de las

constricciones externas sino, sobre todo, a raíz de las luchas que se habían desatado en el interior del movimiento. Fracturadas las alianzas sociales que lo habían hecho posible, carente de un liderazgo que asegurara su rehabilitación, la suerte parecía estar definitivamente sellada. Pronto, la soledad de Isabel evidenciaría el vacío de poder. La escena se aprestaba a ser ocupada por otros actores.

De la deriva de las organizaciones armadas al terrorismo militar

El país iba desliziéndose cada vez más por una pendiente incontrolable de violencia, de la cual eran responsables los grupos de extrema derecha, activados desde el gobierno, así como las agrupaciones armadas de izquierda. Las estadísticas muestran que sólo durante el año 1975 la cantidad de asesinatos políticos, debido tanto a la represión ilegal como a la violencia guerrillera, alcanzó la cifra de 860 personas.

Desde la izquierda, una de las características del período es que las principales organizaciones armadas, ERP y Montoneros, fueron subordinando la estrategia política a la lógica militar. Tanto la significativa reducción del espacio de la política institucional como la primacía de una lógica militarista tuvieron graves consecuencias, pues crearon nuevas oportunidades para el regreso y la religitimación de las Fuerzas Armadas.

Quizá donde este proceso de militarización se expresa con mayor nitidez es en Montoneros, que se había convertido en un breve lapso en una de las organizaciones de masas más poderosas del continente. Una vez consumada la ruptura con el gobierno peronista, la agrupación incrementó sus acciones armadas mediante secuestros extorsivos (como el de los hermanos Born, realizado en septiembre de 1974, que reportaría la cifra de 64 millones de dólares), así como a través de la eliminación física de sus enemigos políticos. En suma, Montoneros fue produciendo estructuras de organización con características de ejército regular (compañías, pelotones), de manera que, una vez establecida la prioridad de estos aparatos, el compromiso obligaba a sus seguidores, por encima de sus niveles iniciales de compromiso, a convertirse en milicianos. Por último, en

septiembre de 1975, en un gesto político inusual, la cúpula de Montoneros decidió su autoproscrición del marco de la legalidad, anunciando su voluntario pase a la clandestinidad. Poco después, la organización fue declarada ilegal por el gobierno constitucional de Isabel Perón.

La política de superficie del ERP fue considerablemente menos intensa que la de Montoneros, pese a que en el campo político contaba con el Frente Antiimperialista por el Socialismo (FAS) y en el gremial con el Movimiento Sindical de Bases (MSB), al tiempo que realizaba una labor progandística a través de periódicos como *Estrella Roja*, *Nuevo Hombre* y también a través del diario *El Mundo*. Liderado por el mítico guerrillero Mario Roberto Santucho, el ERP planteaba la “guerra social revolucionaria” en dos frentes. Por un lado, desde 1974 sus acciones militares apuntaban directamente al Ejército. Ya



Jorge Born durante su secuestro por Montoneros.

hemos consignado que en enero de 1974 el ERP dispuso el ataque a la guarnición militar de Azul, hecho que tuvo importantes consecuencias políticas. La acción militar tenía tanto el propósito de conseguir armamento para la guerrilla rural como el de probar a los trabajadores la capacidad de la organización para liderar la guerra revolucionaria.

Por último, el ataque también se proponía provocar al gobierno, a fin de generar en éste una respuesta que pusiera al descubierto la verdadera naturaleza represiva del régimen peronista como defensor de las Fuerzas Armadas. Tal como esperaba Santucho, el gesto realizado por Perón abrió la puerta para una reconciliación con el Ejército argentino, al tiempo que privó a la izquierda de un aliado importante, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Oscar Bidegain, quien mantenía fluidos vínculos con la Tendencia. En definitiva, por la vía armada, el objetivo del ERP apuntaba a la agudización y del estallido de las contradicciones existentes en diferentes contextos y escenas. Las consecuencias de esta orientación dieron cuenta de una creciente y rápida unidimensionalización de las escenas, en provecho de una lógica militar, situación que no tardaría en verse multiplicada en una serie incontrolada de efectos perversos.

Fue también en 1974 que el ERP decidió abrir un frente de guerrilla rural en la provincia de Tucumán. A raíz de ello, en mayo de 1975, el Poder Ejecutivo ordenó por decreto la intervención del Ejército en esa provincia, con el fin de “neutralizar y/o aniquilar” a las fuerzas guerrilleras que allí actuaban. Esta intervención militar tuvo como eje la represión clandestina, que pronto comenzó a cobrar las siniestras formas de la desaparición y la tortura, tácticas inspiradas en los manuales de contrainsurgencia difundidos por el Departamento de Estado norteamericano. La conducción del ERP respondió a esta estrategia de represión clandestina exigiendo el trato de un ejército enemigo, de acuerdo con las convenciones internacionales. Así, con el propósito de forzar a las Fuerzas Armadas al respeto de las reglas bélicas internacionales, el ERP inició una política de represalia, adoptando la determinación de no tomar prisioneros vivos hasta tanto el Ejército no lo hiciera. Sin embargo, en diciembre de ese año, luego del asesinato accidental de una niña, abandonó dicha política. Ese mismo mes de 1975,

en un vasto operativo, el ERP llevó a cabo el intento de copamiento del regimiento de Monte Chingolo, que culminó en el aniquilamiento de gran parte de las fuerzas guerrilleras intervinientes.

Por otro lado, las acciones cada vez más espectaculares de la guerrilla urbana, progresivamente orientadas contra las fuerzas militares, así como la emergencia de un foco de guerrilla rural en Tucumán, brindaron la posibilidad que el Ejército buscaba desde hacía un tiempo: recuperar su papel como salvador de la Patria y aplicar de manera discrecional las tácticas de contrainsurgencia. Así, la ejecución del Operativo Independencia tuvo por eje una estrategia de propaganda y de información destinada a la opinión pública, en la cual se distorsionaba deliberadamente el número de enfrentamientos, las bajas y los guerrilleros involucrados. Comandado por el general Acdel Vilas primero, luego por el general Antonio D. Bussi, el Ejército argentino desembarcó con un contingente estimado en unos 4.000 hombres, a fin de derrotar “en una guerra” a un ejército guerrillero que apenas si llegó a contar con 160 milicianos.

A esto hay que agregar que el poder decisorio de las Fuerzas Armadas se vio acrecentado en la última etapa del debilitado gobierno de Isabel, caracterizada por un creciente vacío de poder, pese al apoyo del sindicalismo ortodoxo.

El golpe de Estado llegaría el 24 de marzo de 1976. Después de esa fecha nada sería como antes. Se abriría así un período completamente nuevo y uno de los más nefastos de la historia argentina, en el cual la represión política y el terror casi demencial irían acompañados por una fuerte reorientación económica. Sus consecuencias multiformes se harían visibles en la década siguiente, tanto a nivel de la estructura social como en la conciencia política de los argentinos.

El *ethos* de los setenta

En nuestro país, gran parte de los militantes políticos ingresaron a la política entre 1959 y 1969, esto es, al amparo de la Revolución Cubana y al calor de la movilización iniciada por el Cordobazo. En sólo diez años el horizonte de los posibles históricos pareció ampliarse aceleradamente. En ese contexto,

la violencia se fue dotando de una eficacia mayor, pues ya no emergía como algo eventual, ritualizado en el activismo o en las “riñas” entre patotas sindicales, sino como el eje de una práctica organizada y sistemática para la toma del poder. Más aún, bajo un régimen autoritario y represivo, la violencia aparecía cargada con un suplemento de legitimidad. Era la “violencia desde abajo”, una respuesta a la “violencia de Estado”. En otros términos, la posibilidad del *cambio revolucionario* formaba parte del sentido común de importantes sectores progresistas de la sociedad argentina.

Pero había también otras formas de acción y movilización que se articulaban con la afirmación de la necesidad del cambio revolucionario: las manifestaciones, las pintadas, la acción barrial, la militancia en las villas. Combinados, estos repertorios de acción fueron definiendo los marcos sociales y culturales a partir de los cuales toda una nueva generación de militantes se dotó de una identidad política.

El *ethos* de los '70 se caracterizó entonces por la desconfianza en las vías reformistas y el desprecio por el sistema partidocrático, en suma, por el compromiso revolucionario. Su encarnación más acabada fue la figura del militante político, definido por una “mística” revolucionaria, vale decir, por un compromiso que se postulaba como permanente y radical.

Ahora bien, en términos de militancia, el *ethos* de los '70 tuvo dos inflexiones mayores. La primera, específicamente “movimientista”, fue ilustrada por el multifacético frente bautizado con el nombre de la Tendencia, conducido por Montoneros; frente que, como hemos visto, desbordaba ampliamente el marco propio del sistema democrático-populista y amenazaba la estabilidad del régimen recién instaurado. Nada ejemplifica mejor este talante movimientista que las “tomas” realizadas durante la corta primavera camporista, época en la cual coincidieron *el máximo grado de movilización con la máxima aspiración al cambio*.

La segunda inflexión, propiamente “militarista”, fue encarnada, de manera paradigmática, por la organización Montoneros. Lo peculiar de esta lógica de acción “militar” no es que suponía la exclusión del adversario, sino más bien que fue alimentada por una determinada concepción y práctica de la política, asentada ella misma sobre una interpretación específica

de la historia argentina. Esta lectura afirmaba la existencia de dos líneas antagónicas que recorrían la historia argentina, cristalizadas durante largo tiempo por la oposición peronismo/antiperonismo. La continuidad de la historia desde la época de la fundación de la república moderna aparecía como un hilo conductor, por lo cual cada etapa, cada lucha, encontraba su superación dialéctica en momentos posteriores. Pero, sobre todo, la lucha, a medida que se hacía más violenta, iba desnudando a los verdaderos protagonistas al tiempo que implicaba una mejor visualización de los objetivos. Por otro lado, este dispositivo binario fue potenciado por la visión marxista de la época, como lo muestra la tesis de la agudización de las contradicciones. Finalmente, a medida que los actores políticos ligados a la Tendencia eran marginados de la escena política por el propio Perón, o sus militantes asesinados por comandos de extrema derecha, la conducción de Montoneros iba profundizando las implicaciones de este dispositivo binario. La violencia, definida como necesaria, vista como irreductible, alcanzaría entonces momentos de verdadero paroxismo.

Por otra parte, el progresivo enclaustramiento de Montoneros en una lógica terrorista no hizo sino acentuar su alejamiento de aquellas masas que decía representar. El recorrido posterior de la organización, sobrevenida con el exilio de sus líderes máximos, sus sucesivas escisiones, su contraofensiva suicida, sus delirios mesiánicos, confirmaría de manera especialmente sórdida y patética los efectos perversos de esta lógica de acción.

Pero, de manera ejemplar, este dispositivo ideológico binario también subyacía en las consignas políticas de la época, las que pasaron a ocupar un lugar fundamental en la contracultura de los setenta. El hecho no es casual, pues las consignas tenían la capacidad de articular en unas pocas ideas-fuerza las ofertas ideológicas del período, al tiempo que podían expresarlas en la forma de oposiciones irreductibles o de enunciados dicotómicos. De esta manera, cuestiones referidas a la “liberación nacional”, la “revolución”, el “socialismo”, la “dependencia”, la construcción del “hombre nuevo”, fueron nutriendo los ejes de cualquier discusión ideológica, facilitando el rápido desliz hacia una lógica lineal y el reduccionismo político.

Sin embargo, por encima de la existencia de un dispositivo

binario poderosamente reductor, la deriva militarista en la que incurrieron las dos máximas organizaciones guerrilleras, Montoneros y ERP, no puede ni debe ser asimilada a la lógica del terror militar instituido desde el Estado. Así, nada más falso que la hipótesis de “los dos demonios”, tan difundida durante los años '80. Una vez más, hay que subrayar el rol que cumplió la “guerra” desarrollada contra las huestes del ERP en Tucumán. Apelando al recurso del sobredimensionamiento del enemigo, la “guerra” fue efectivamente inventada, convertida en un laboratorio que pondría a prueba el modelo represivo, basado en la detención, el secuestro ilegal, la tortura y la desaparición. Los primeros campos clandestinos de detención fueron creados en Tucumán, en el contexto de la guerra contra la guerrilla, la que a fines de 1975 ya estaba militarmente derrotada. Así, el modelo no sólo sorteó exitosamente el ensayo de laboratorio, sino que, una vez desplazado el débil gobierno de Isabel Perón, se hizo susceptible de una generalización inmediata desde el control absoluto de los resortes del Estado.

Por otro lado, el pasaje de la dimensión movimientista a su inflexión militarista no puede comprenderse sin referencia a la guerra que se libraba en el interior de las diferentes escenas del poder: las sucesivas purgas internas, el incremento de la violencia, en fin, la represión desmedida y el caos económico que envolvieron el período que va de 1973 a 1976, contribuyeron a multiplicar tanto el desencanto como el creciente temor, obligando a vastos sectores anteriormente movilizados al repliegue y la desertión. La fase isabelina del gobierno señala sin duda la gran decepción, así como anticipa el terror militar. Lejos estamos ya de aquella época en la cual un porcentaje importante de la población justificaba la violencia de la guerrilla como herramienta legítima frente a un régimen autoritario. Lejos también del lenguaje triunfalista que acompañó las masivas manifestaciones, antes y durante la primavera camporista. Lejos del fervor revolucionario que proyectó la articulación de una parte de las clases medias movilizadas con las clases trabajadoras peronistas.

Finalmente, nada sería más errado que intentar reducir el *ethos* de los '70 a través de su sola faz oscura o buscar comprenderlo desde la perspectiva ideológica de otras épocas, como han pretendido hacer ciertos ensayos que cuestionan el

déficit político de los '70 desde posiciones que asumen la defensa del régimen democrático, revalorizado a partir de los '80. Sólo la comprensión y, a la vez, el distanciamiento crítico pueden devolvernos las claves de una época que está menos marcada por el déficit político y más, mucho más, por la creencia en el cambio, a la vez que por la afirmación de la violencia como herramienta de lucha y transformación social. Más simple, una época caracterizada por el exceso de pasión política.

Agradezco la minuciosa lectura crítica realizada por Eduardo Anguita, Cristina García, Claudia Lozano y Fernanda Salgado. Asimismo deseo agradecer la generosidad de Roberto Baschetti, quien puso a mi disposición su vasta colección de documentos y libros sobre la época. Nuestra inspiración inicial se nutrió de un artículo, escrito tempranamente en 1979 por J. C. Portantiero, titulado "De la crisis del país popular a la reorganización del país burgués".

BIBLIOGRAFÍA

- Anguita, Eduardo, y Caparros, Martín, *La voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina, 1973-1976*, vol. II, Buenos Aires, Norma, 1997.
- Anzorena, Oscar R., *Tiempo de violencia y utopía. Del golpe de Onganía al golpe de Videla*, Buenos Aires, Ed. del Pensamiento Nacional, 1998.
- Baschetti, Roberto (comp.), *Documentos, 1973-1976*, 2 vol., Buenos Aires, Ed. de la Campana, 1999.
- Bonasso, Miguel, *El presidente que no fue*, Buenos Aires, Planeta, 1997.
- Diario *La Opinión*, 1974.
- Di Tella, Guido, *Perón-Perón, 1973-1976*, Buenos Aires, Hyspamérica, 1983.
- Gillespie, Richard, *Soldados de Perón. Los Montoneros*, Buenos Aires, Grijalbo, 1982.
- James, Daniel, *Resistencia e integración*, Buenos Aires, Sudamericana, 1990.
- Martuccelli, Darío, y Svampa, Maristella, *La plaza vacía. Las transformaciones del peronismo*, Buenos Aires, Losada, 1997.
- Nievas, Flavián. "Cámpora: primavera-otoño. Las tomas", en Pucciarelli, Alfredo (ed.), *La primacía de la política*, Buenos Aires, Eudeba, pp. 351-393, 1999.
- Perón, Juan Domingo, *1974: Discursos completos*, 4 vol., Buenos Aires, Megafón, 1988.
- , *Actualización política y doctrinaria para la toma del poder*, Buenos Aires, Pevuel, s. f.
- , *Conducción política*, Buenos Aires, Freeland, 1971.
- , *Tercera posición y unidad latinoamericana*, Buenos Aires, Biblos, 1985.
- Portantiero, Juan Carlos, "De la crisis del país popular a la reorganización del país burgués", en *Cuadernos en marcha, Argentina, la gran frustración*, segunda época, año 1, N° 2, México, 1979.
- Riz, Liliana de, *La política en suspenso, 1966-1976*, Buenos Aires, Paidós, 2000.

Rouquié, Alain, "Hegemonía militar, Estado y dominación social", en Rouquié, Alain (comp.), *Argentina hoy*, México, Siglo XXI, 1982.

Seoane, María, *Todo o nada. La historia secreta y la historia pública del jefe guerrillero Mario Roberto Santucho*, Buenos Aires, Planeta, 1992.

Sigal, Silvia, y Verón, Eliseo, *Perón o muerte. Los fundamentos discursivos del fenómeno peronista*, Buenos Aires, Legasa, 1986.

Todo es Historia, Veinte años, Anuario, N° 240, 1987.

———, *El Brujo*, N° 375, 1998.

———, *Cultura y Sociedad en los '60*, N° 280, 1990.

Torre, Juan Carlos, *Los sindicatos en el gobierno, 1973-1976*, Buenos Aires, CEAL, 1989.

Torti, María Cristina, "Protesta social y 'Nueva Izquierda' en la Argentina del Gran Acuerdo Nacional", en Pucciarelli, Alfredo (ed.), *La primacía de la política*, Buenos Aires, Eudeba, pp. 205- 231, 1999.

Verbitsky, Horacio, *Ezeiza*, Buenos Aires, Contrapunto, 1986.

Vincens, L., *Lopezreguismo y justicialismo*, Buenos Aires, El Cid, 1983.

NUEVA HISTORIA ARGENTINA

TOMO 1: Los pueblos originarios y la conquista

Período: Prehispánico (hasta 1516)

Dirección de tomo: Myriam Tarragó

TOMO 2: La sociedad colonial

Período: Colonial (1516-1806)

Dirección de tomo: Enrique Tandeter

TOMO 3: Revolución, República, Confederación

Período: De la Independencia a Caseros (1806-1852)

Dirección de tomo: Noemí Goldman

TOMO 4: Liberalismo, Estado y orden burgués

Período: De la Organización Nacional (1852-1880)

Dirección de tomo: Marta Bonaudo

TOMO 5: El progreso, la modernización y sus límites

Período: De la hegemonía conservadora (1880-1916)

Dirección de tomo: Mirta Zaida Lobato

TOMO 6: Democracia, conflicto social y renovación de ideas

Período: De entreguerras I: Los gobiernos radicales (1916-1930)

Dirección de tomo: Ricardo Falcón

TOMO 7: Crisis económica, avance del Estado e incertidumbre política

Período: De entreguerras II: La década de 1930 (1930-1943)

Dirección de tomo: Alejandro Cattaruzza

TOMO 8: Los años peronistas

Período: Del peronismo (1943-1955)

Dirección de tomo: Juan Carlos Torre

TOMO 9: Violencia, proscripción y autoritarismo

Período: De la Revolución Libertadora al derrocamiento de María E. M. de Perón (1955-1976)

Dirección de tomo: Daniel James

TOMO 10: Dictadura y democracia

Período: Del Proceso de Reorganización Nacional al gobierno de Menem (1976-1999)

Dirección de tomo: Juan Suriano

TOMOS ESPECIALES

Arte, sociedad y política. Dirección de los dos tomos: José Emilio Burucúa
Atlas Histórico Argentino. Dirección de tomo: Mirta Zaida Lobato - Juan Suriano

Esta edición de 2.000 ejemplares
se terminó de imprimir en
Cosmos Offset S.R.L.,
Coronel García 442, Avellaneda, Bs. As.,
en el mes de agosto de 2007.

Este volumen de la Nueva Historia Argentina comprende el proceso histórico que se desarrolla entre la caída del gobierno de Juan Domingo Perón en 1955 y el golpe militar de 1976. El libro proporciona al lector un conocimiento general y, a la vez, profundo de un período rico y complejo cruzado por diversos problemas que se intervinieron permanentemente. En el nivel económico, fue característica la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo que intentó superar los límites del modelo populista. En el plano político, la meta principal fue la instauración de un régimen democrático que se basó hasta 1973 en la exclusión y la marginación del peronismo. En lo social, el período resaltó por la presencia de varios elementos, como el aumento de la población de las grandes ciudades, particularmente de Buenos Aires, a consecuencia de las migraciones internas y de los países limítrofes, y el incremento de la conflictividad social tanto en la zona litoral como en distintas provincias del interior del país. En el plano cultural, el dato más relevante fue la emergencia de una cultura juvenil que más allá de la formación de nuevos gustos en la moda, la música y el cine estuvo marcada por una fuerte impronta de rebelión.

Sin duda, los lectores encontrarán en este libro una nueva visión del pasado basada en recientes investigaciones referidas al sistema político, a la formación de la burocracia sindical, a la protesta social y política, a los proyectos de desarrollo regional, a la modernización cultural y a los contrastes de los procesos de urbanización.



ISBN 10: 950-07-2344-1
ISBN 13: 978-950-07-2344-2



9 789500 723442

Impreso en la Argentina
www.sudamericanalibros.com.ar